





ORIGEN Y DESARROLLO  
DEL PARLAMENTARISMO BRITÁNICO  
Y SUS DINÁMICAS EN CANADÁ

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE  
COORDINACIÓN DE HUMANIDADES

# **ORIGEN Y DESARROLLO DEL PARLAMENTARISMO BRITÁNICO Y SUS DINÁMICAS EN CANADÁ**

Oliver Santín Peña

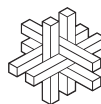


**UNAM**

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
Centro de Investigaciones sobre América del Norte

---

México, 2018



**CISAN**

Primera edición, diciembre de 2018

D.R. © 2018 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
Ciudad Universitaria, deleg. Coyoacán,  
C. P. 04510, Ciudad de México

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE  
Torre II de Humanidades, pisos 1, 7, 9 y 10  
Ciudad Universitaria, 04510, Ciudad de México  
Tels.: (55) 5623 0000 al 09  
<http://www.cisan.unam.mx>  
[cisan@unam.mx](mailto:cisan@unam.mx)

ISBN 978-607-30-1175-4

Diseño de la portada: Patricia Pérez Ramírez

Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio conocido o por conocerse, sin el consentimiento por escrito de los legítimos titulares de los derechos.

Impreso en México / Printed in Mexico

*A Lupita, Iker y Nora Livier  
por coincidir y reincidir.*





## ÍNDICE

Introducción.....	13
Orígenes del parlamentarismo inglés y su relación con la Corona .....	19
El parlamentarismo en Gran Bretaña y la formalización de sus partidos políticos .....	45
El parlamentarismo británico a partir del siglo xx.....	67
Orígenes, antecedentes y características parlamentarias en Escocia ...	99
Orígenes, antecedentes y características parlamentarias en Irlanda ....	117
El caso de Irlanda del Norte .....	149
Orígenes, antecedentes y características parlamentarias en Gales .....	167
El régimen parlamentario canadiense y sus características.....	181
Orígenes parlamentarios y partidos políticos en Canadá .....	187
Funcionamiento del sistema bicameral: el Senado y la Cámara de los Comunes .....	204
Principales acciones parlamentarias durante la gestión del primer ministro Stephen Harper: prórrogas, coaliciones y alianzas partidistas.....	227
Conclusiones.....	245
Bibliografía .....	251
Índice analítico.....	275



El mundo de la elegancia no es un mundo grande [...]  
Pero lo malo de él es que es un mundo envuelto en demasiado algodón  
y no puede oír el rumor de los mundos más grandes,  
y tampoco puede ver cómo rotan alrededor del Sol.  
Es un mundo aislado y su crecimiento es a veces insano por la falta de aire.

CHARLES DICKENS, *Casa desolada*, 1853.



## INTRODUCCIÓN

Puede considerarse que el parlamentarismo es un sistema antiguo que surge de la necesidad humana por encontrar espacios de discusión e intercambio de ideas para solucionar problemáticas comunes. Así, la capacidad de una comunidad para elegir a su representante implicó desde el principio un llamado a ser escuchados por el gobernante y, al mismo tiempo, un freno a sus excesos.

Los orígenes del parlamentarismo, tal y como lo conocemos ahora, datan del siglo XIII a partir de la promulgación de la *Carta Magna* de 1215, que es precisamente cuando la Corona inglesa comienza a ceder de forma obligada una serie de atribuciones públicas a sus súbditos, quienes como representantes electos de sus pares eran los encargados de defender los intereses de sus comunidades frente al monarca. Si bien es cierto que el soberano o soberana británico se encuentra en la cúspide política como jefe de Estado, el paso de los siglos otorgó al Parlamento y a su líder, el primer ministro, el sitio predominante como tomadores de decisiones. Lo anterior, amparándose en el ejercicio silencioso y oficioso de las leyes inglesas y británicas, que son resultado de tradiciones anglosajonas surgidas del derecho consuetudinario<sup>1</sup> y del *Common Law*.<sup>2</sup>

De tal modo, a través de las prácticas parlamentarias la Corona inglesa fue acotando su poder en beneficio de la aristocracia feudal y de la creciente burguesía local. Ya en el siglo XIV, específicamente en 1340, el sistema bicameral fue fundado tras concentrar en una sola cámara a obispos y altos barones, mientras que en la otra se agrupó a los caballeros de los condados y a

<sup>1</sup> El derecho consuetudinario se va creando a través de los usos y costumbres. Su característica es la ausencia de normas jurídicas escritas específicas, tal y como sucede en Gran Bretaña.

<sup>2</sup> El *Common Law* es un referente jurídico que orienta la dirección de futuras sentencias mediante precedentes registrados en casos iguales o similares.

los burgueses de las villas. A diferencia de la primera cámara, estos últimos se consideraban a sí mismos como los únicos capaces de representar los intereses de los ciudadanos con derecho a votar. Dichos cuerpos legislativos fueron conocidos en Inglaterra a partir de 1544 como la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes.

Es preciso decir que las prácticas parlamentarias inglesas funcionaron sin grandes dificultades entre la Corona y su Parlamento durante los siglos XIV, XV y XVI, ya que al no ser apremiantes las necesidades económicas, el monarca no se vio en la necesidad de solicitar mayores recursos a los comunes como los representantes del pueblo; empero, tras la reforma protestante de Inglaterra en el siglo XVI fue preciso consolidar ejércitos permanentes e incrementar también la influencia británica en sus nuevos territorios en América. Tales elementos obligaron a regular con mayor rigor la interacción entre la Corona y el Parlamento, y de manera particular con la Cámara de los Comunes.

Durante el siglo XVII se consolidó cada vez más el parlamentarismo anglosajón,<sup>3</sup> al grado de someter las rentas del propio soberano a la aprobación de la Cámara de los Comunes, organismo que también comenzó a destinar partidas presupuestales a la nación sin intervención real, pues esta Cámara era la única facultada para legislar en materia hacendaria. Dicha prerrogativa, originada en el siglo XIII, fue posible ya que de esta Cámara surgían los representantes de la burguesía, cuya actividad económica fue convirtiéndolos en actores indispensables para que la Corona se allegara recursos frescos para su erario.

Ya con la aparición de los partidos políticos en el Parlamento británico entre los siglos XVIII y XIX —*tories* y *whigs*—, el sistema bipartidista anglosajón fue tomando forma, pues ambos grupos utilizan su influencia electoral para ganarse la gracia del soberano o incluso para someterlo a sus intereses. Es precisamente durante tal periodo que la práctica parlamentaria británica se fortalece con los partidos políticos como protagonistas. Al mismo tiempo, exporta el modelo a sus dominios y colonias, las cuales de este modo alcanzan su autogestión, misma que se instaura sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX.

<sup>3</sup> El término anglosajón se utilizará en este libro para referirse a los descendientes de las tribus bárbaras que conquistaron el territorio actualmente británico en los siglos V y VI, después de la caída del Imperio romano de Occidente. A partir de ese momento los anglos y los sajones impusieron de forma gradual sus lenguas, religiones y tradiciones culturales sobre las estructuras construidas por los romanos desde el siglo I.

Conviene señalar que para mediados del XIX las posesiones del Imperio británico se dividían en tres grupos. En el primero estaban *los dominios*, cuyas principales características eran que mantenían un estatus autónomo y se encontraban poblados y dominados por colonos británicos y sus descendientes. A esta categoría pertenecían Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica e Irlanda. El segundo grupo era el de *las colonias*, a las cuales controlaba desde Londres un secretario de Estado que fungía como responsable ante el Parlamento; de él dependían los funcionarios británicos enviados a dichas tierras para administrarlas. Entre ellas podían contarse las islas de las Antillas en América, Guinea, Ceilán y África oriental. El tercer conjunto estaba conformado por la India y las *zonas de influencia*, sitios en que la autoridad suprema era el virrey y en donde por debajo de éste se ubicaba un Parlamento local dividido en dos cámaras. Dentro de las zonas de influencia destacaban Egipto e Irak, cuyo sistema político procuró echar a andar un parlamentarismo que solía funcionar a través de la concentración del poder y la negociación con ciertos grupos políticos y religiosos locales (Chastenet, 1947: 170-178).

Fue de esta forma como el imperio de los usos y costumbres constitucionales británicos se expandió y, al mismo tiempo, amoldó a las necesidades presentes en sus cercanas y remotas posesiones en todo el mundo, garantizándose con ello su éxito, debido sobre todo a la flexibilidad de las leyes anglosajonas.

A partir de tales antecedentes, los súbditos del dominio canadiense adaptaron el constitucionalismo británico a sus propias necesidades y lo llevaron a la práctica parlamentaria en su joven país. Esto lo hicieron con la certidumbre de que el sistema puesto en marcha contaba ya, al menos, con cinco siglos de funcionamiento en la madre patria. Cabe añadir que esta adopción del sistema político británico de asambleas locales comenzó a instaurarse en su territorio desde el inicio de sus primeros asentamientos permanentes en el siglo XVII.

Por ello no debe extrañar que una vez reconocido el estatus de Canadá como ente político autónomo en 1867, su primer ministro inaugural, John A. MacDonald, afirmara en sesión real con la reina Victoria lo siguiente: “Declaro de la forma más solemne y enfática nuestra convicción de plegarnos bajo el manto de la soberanía de su Majestad y de su familia para siempre” (Tidridge, 2011: 42).<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Todas las traducciones del inglés al español de las citas textuales de esta obra fueron realizadas por el autor.

A partir de ese momento, el parlamentarismo canadiense fue desarrollando sus propios procedimientos, pero, a diferencia de Gran Bretaña, en su momento decidiría —al igual que los dominios de Nueva Zelanda y Australia— impulsar la creación de una Constitución escrita con apartados específicos que es conocida como la *British North American Act* (BNA). Estas constituciones escritas han sido el común denominador en los países anglosajones que previamente fueron dominios o colonias británicas. La razón para establecer mecanismos constituyentes escritos en dichas naciones parecería obedecer a la falta de experiencia y de referentes directos para la solución de conflictos, tal y como sí sucede en Gran Bretaña, en donde, como ya se señaló, los usos y costumbres a lo largo de los siglos se han encargado de adaptar y de resolver problemáticas con antelación, generando así patrones de conducta jurídica, política y social.

Pese a ello, el sistema político canadiense ha logrado adoptar diversas dinámicas del *Common Law* y del derecho consuetudinario a su realidad, toda vez que la BNA permitió incorporar nuevos elementos locales para facilitar su operación a través de reformas constitucionales. Tales cambios podían originarse, ya fuera en convenciones constituyentes sin constancia escrita, en transformaciones en las prácticas políticas, en decisiones judiciales interpretadas desde el texto constitucional, o bien, en nuevas regulaciones en la práctica de gobierno. “El resultado de esos cambios informales fue la evolución de Canadá hacia una independencia que los padres fundadores de la federación continental apenas reconocerían” (Russell, 2010: 23).

Por otra parte, resulta oportuno señalar que desde que la Corona otorgó en 1867 su beneplácito para el surgimiento de Canadá como una comunidad autónoma, dos grupos homogéneos se perfilaron para dominar el recién creado Parlamento canadiense: los conservadores y los liberales. Los primeros, con ramificaciones ideológicas *tories* del Parlamento británico, antepusieron los intereses de la Corona e impulsaban una mayor cercanía con Inglaterra. Los segundos privilegiaban, al igual que sus homólogos británicos *whigs*, la libre empresa y los intereses de sus representados, al mismo tiempo que pugaban por un mayor acercamiento económico y comercial con Estados Unidos.

Con el paso de las décadas estos dos partidos han controlado completamente la Cámara de los Comunes. al ganar uno u el otro las cuarenta y dos elecciones federales realizadas de 1867 a 2015. En veintiocho elecciones salieron victoriosos los liberales y en dieciocho los conservadores. Asimismo,



sólo en dos ocasiones un partido diferente ha ocupado el sitio de primera oposición en los Comunes, en 1993 y 2011.

Lo anterior genera una concentración de poder particularmente especial entre ambos partidos hegemónicos, pues han logrado desarrollar un duopolio político a través de una serie de mecánicas que frenan la implementación de prácticas parlamentarias y de gestión más democráticas. Esto coloca al modelo canadiense como el paradigma político más ortodoxo y conservador del espectro Westminster,<sup>5</sup> si se lo compara con sus equivalentes en Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte, cuyas estructuras de gobierno son más flexibles. Debe añadirse que tales casos resultan esenciales para entender los orígenes y distintas operaciones del parlamentarismo británico contemporáneo, así como sus huellas y reflejos en el sistema político canadiense.

En este sentido, el ejercicio de revisión e interpretación de los antecedentes parlamentarios en Gran Bretaña, desde sus orígenes hasta la primera mitad de la segunda década del siglo XXI, tiene como finalidad exponer el fascinante desarrollo que ha experimentado el sistema parlamentario anglosajón en el viejo mundo, así como la complejidad que de él emana. Si bien es cierto que la parsimonia parlamentaria contemporánea que puede observarse en países que siguen el modelo Westminster parecería ser un ejercicio anacrónico y ufano en pleno siglo XXI, lo cierto es que sus instituciones y procedimientos obedecen a razones muy complejas y antiguas que requieren su reproducción sistemática, pues sólo así pueden tenerse presentes los orígenes y las grandes dificultades que entrañó la victoria de este sistema democrático representativo sobre los absolutismos medievales que privilegiaban el personalismo y, al mismo tiempo, atentaban en contra de la libertad del individuo.

A continuación se identificarán no sólo los orígenes del parlamentarismo contemporáneo, sino que también se interpretarán muchos de sus complejos procedimientos actuales, mismos que dan paso a una forma de gobierno muy particular en el mundo Westminster, el cual busca sobre todo lograr condiciones de gobernabilidad y estabilidad de la nación en total armonía con la Corona.

<sup>5</sup> El término “Westminster”, o “sistema Westminster”, se utiliza regularmente de manera popular para referirse al parlamentarismo de origen anglosajón, pero también para identificarlo como una forma de gobierno puesta en marcha desde finales del siglo XIII en Inglaterra. Este sistema adopta popularmente su nombre por el Palacio de Westminster, conjunto de edificios que ha albergado la sede del Parlamento británico durante siglos.



## ORÍGENES DEL PARLAMENTARISMO INGLÉS Y SU RELACIÓN CON LA CORONA

El parlamentarismo anglosajón y la Constitución inglesa son dos elementos tan antiguos como indispensables para comprender el funcionamiento parlamentario moderno, no sólo de Canadá sino de todos los países cuyos orígenes políticos, sociales y culturales provienen de Gran Bretaña, como son los casos también de Australia y Nueva Zelanda. Dicho referente parlamentario constitucional inglés tiene sus orígenes más visibles durante el reinado de Henry II Plantagenet, de 1154 a 1189, justamente cuando la estructura medieval inglesa comienza a desarrollar mecanismos más eficaces de gobierno con el objetivo de dotar al soberano de una serie de herramientas centrífugas con la finalidad de delegar algunas acciones de gobierno en sus súbditos más cercanos. Entre estas medidas se incluyó la creación de una serie de escalafones de poder con competencias específicas.

En este esquema pueden enumerarse: el *Magnum Concilium* o Gran Consejo. En él se concentraban los hombres de mayor influencia del Reino: arzobispos, obispos, abades, condes y grandes barones. Sus tareas involucraban la impartición de justicia, así como la creación de nuevas leyes, es decir, en general asistían al monarca en los asuntos de mayor relevancia; por su parte, en el *Commune Concilium* o Consejo General (o Ayuntamiento)<sup>1</sup> se concentraban los burgueses, mercaderes y artesanos bajo la figura de vasallos de la Corona. Este grupo se ocupaba en una parte central en la captación de recursos vía impuestos cuando el soberano lo requería; la *Curia Regis* —o los tribunales— estaba integrada por familiares directos del monarca y asesores de éstos; su principal función era detectar y evitar actos de corrupción y fraudes en la acción de gobierno. Los *sheriffs* o alguaciles eran oficiales de gobierno que se erigían como responsables de los condados, y en nombre

<sup>1</sup> El *Commune Concilium* es mencionado en distintos textos antiguos como “Consejo General” o como “Ayuntamiento”.

del rey administraban su jurisdicción en las áreas económica, política y judicial. A diferencia de los miembros de las otras cadenas de poder, los *sheriffs* sólo podían ostentar el cargo durante un año (Blackstone, 1832).

De esta manera, fue a partir de la segunda mitad del siglo XII cuando Henry II Plantagenet comenzó a poner en marcha una estructura de poder sin precedentes, con la meta de asignar funciones específicas de gobierno y delegar así competencias y responsabilidades en sus vasallos. A partir de esa estructura el sistema inglés instauró de manera involuntaria sus principios parlamentarios y de gobierno; lo hizo mediante la operación autónoma de individuos cercanos a la monarquía, cuya principal tarea consistía en resolver problemáticas locales y regionales con el fin de evitar que el monarca distrajera su atención en temas secundarios.

Sus hijos y sucesores, Richard I, quien reinó de 1189 a 1199, y John I de Inglaterra, que ejerció el poder monárquico de 1199 a 1216, pretendieron ignorar las directrices de gobierno trazadas por su padre, y en un intento por reforzar su dominio mediante el uso de prácticas autoritarias y despóticas en contra de la nobleza inglesa, llevaron sus reinados a extremos no tolerados por sus súbditos, sobre todo John I. Por tal razón, los súbditos de este último le pedían flexibilizar su autoridad mediante la disminución de tributos, el reconocimiento de derechos y posesiones heredadas por los hijos menores de edad de nobles fallecidos, el fin de las confiscaciones de tierras en disputa entre herederos, la cancelación de la venta en matrimonio de viudas e hijas de barones muertos para despojarlas de sus propiedades y tierras, así como que se cumpliera con el servicio militar de cada feudo con el enrolamiento de hombres jóvenes y no ya con dinero pagado a la Corona. Cabe añadir que todas esas prácticas fueron posibles gracias a que John I fue limitando el poder de acción de su Gran Consejo, de su Consejo General y de los tribunales, lo que sin duda reforzó su estilo autocrático, ya que la suya era la voz misma de la ley (Ackroyd, 2011: 165-166).

De esta forma, ante la vulnerabilidad de los intereses de la nobleza inglesa frente a los designios de su monarca, un grupo de barones apoyados por el rey de Francia, Philippe II, decidieron levantarse en armas en contra de John I y marchar hacia Londres para asaltar y tomar la ciudad. Esta campaña militar fue un éxito para los rebeldes, pues lograrían derrotar a las fuerzas leales al monarca en mayo de 1215. Por ello, luego de perder Londres, el rey de Inglaterra no tuvo mayor opción que negociar con sus barones

para que desocuparan la ciudad y renovaran su lealtad a la Corona (Ackroyd, 2011: 170-171).

Dicha negociación implicó el otorgamiento de concesiones y el reconocimiento de derechos a los barones en detrimento de los privilegios de que habían gozado los monarcas ingleses hasta ese momento. Tal convenio exigió al rey cumplir con la división administrativa y judicial puesta en marcha por su padre, Henry II Plantagenet, por medio de la cual el poder se repartía entre sus vasallos de mayor rango. El producto de esta negociación y concesión obligada del rey John I a sus barones insurrectos es la conocida Carta Magna, firmada en junio de 1215. Lo más trascendente de este documento es que estableció una serie de medidas que acotaron el poder del monarca a través de un principio constitucional que garantizó amplios derechos y libertades a todos sus súbditos, e incluso lo sometió a ellos de manera puntual.

De tal forma, la Carta Magna de 1215 es un acuerdo de sometimiento del rey John I a sus barones sublevados, a quienes apoyó una autoridad extranjera, en este caso el rey de Francia, Philippe II. En sus sesenta y tres cláusulas dominan los temas de carácter feudal, que alcanzan mayor trascendencia dado que debilitan el poder de la Corona. Por ejemplo, las cláusulas II, III, IV, V y VI garantizan las herencias a todos los descendientes de condes o barones, eliminando *de facto* la potestad del soberano para adquirir dichas tierras. Las cláusulas VII y VIII eliminaban la venta en matrimonio de la viuda e hijas del barón fallecido y les garantizaba a estas últimas sus propiedades mientras no se casaran otra vez, en cuyo caso el nuevo barón o conde debía llegar a un acuerdo frente al monarca. Las cláusulas IX, X y XI desaparecían los embargos a deudores o fiadores que llevaban a cabo los *sheriffs* en representación del rey, hasta que no se ejecutara un levantamiento y se realizara un nuevo cálculo de pago del deudor.

La cláusula XII anulaba el derecho de escudo o *escutage*<sup>2</sup> si éste no era sometido previamente al Consejo General o Ayuntamiento que, como ya se mencionó, era el lugar en donde se concentraban los burgueses y los artesanos, cuya influencia fue en ascenso debido a su capacidad económica.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> El *escutage* era un derecho que el monarca feudal ejercía sobre sus vasallos para obligarlos a seguirlo a la guerra y cargar con los gastos de dicha campaña.

<sup>3</sup> Para una revisión completa del documento con sus sesenta y tres cláusulas, véase UK Parliament (2016a).

En lo que corresponde a las cláusulas xx, xxi, xxii y xxiv, desaparecían la capacidad del monarca para que sus representantes juzgaran por faltas leves o graves a individuos en todos los rincones del Reino; en su lugar, serían los habitantes honorables de las propias comunidades quienes decidirían su destino. La xxvii extinguió las facultades de la Corona para tomar en propiedad los bienes de hombres intestados y determinó que los mismos fueran distribuidos entre sus parientes más cercanos. Las cláusulas xlvi, xlvií y xlviiii establecieron la devolución inmediata de tierras, bosques y ríos adjudicados indebidamente por la Corona en detrimento de barones y pobladores de esas tierras. En los casos específicos en que la propiedad no fuera clara, tendría que realizarse una investigación por doce caballeros del mismo condado para determinar al verdadero propietario, ya fuera la Corona o el barón demandante.

La lii instituyó que todas las posesiones, tierras, castillos, libertades o derechos que hubiesen sido privados por mandato del rey fueran restaurados a sus originales propietarios; la lv mandaba que todas las multas injustas o ilegales impuestas por el monarca fueran conmutadas o sometidas a un consejo de barones de todo el país; la lix estableció de manera clara que el monarca inglés debería tratar a su par escocés tal y como se trataba a cualquier barón inglés; la lxi instauró la convocatoria para la elección de veinticinco barones para que fungieran como garantes de lo firmado y sesionaran de manera regular. Éstos determinarían sanciones y embargos a la propia Corona cuando ésta actuara de manera inapropiada; una vez reparado el agravio, los mismos barones se comprometían a obedecer al monarca en turno tal y como antes.

Es claro que todas estas cláusulas del siglo xiii tuvieron un gran impacto, pues disminuyeron el poder de la monarquía autocrática inglesa tras someterla al escrutinio de la nobleza y de la burguesía. Ahora bien, las cláusulas con implicaciones más profundas y de mayor alcance en el futuro fueron las siguientes: la xiii, que garantizaba las libertades y costumbres en todas las ciudades, aldeas, villas y puertos, lo que la convierte en la primera referencia en la historia inglesa que garantiza la libertad de los individuos; la xiv, que determinó que el Ayuntamiento tendría el poder de intervenir en los repartos de subsidios y del derecho de escudo. En dicho Consejo, integrado por burgueses y artesanos, podían incluirse también barones y obispos del Reino, para así, entre todos, determinar el presupuesto por ejercer. Éste es sin duda el antecedente más claro de la que posteriormente sería conocida como Cámara de los Comunes.

La cláusula XL garantizaba que la Corona no intervendría más para impedir a alguna persona el acceso a la justicia o al derecho; con ello se delegaba a la propia comunidad la libertad de su impartición; la LX certificaba que la Corona no participaría en el ejercicio de las costumbres y libertades del pueblo, lo que dio paso y fortaleció el libre desarrollo del derecho consuetudinario inglés que, como se ha mencionado, es el resultado de los usos y costumbres y no se encuentra escrito en normas jurídicas promulgadas. Al respecto, quizá la cláusula más importante sea la última, es decir, la LXIII, pues establece que todos los súbditos del Reino posean las mismas libertades, derechos y concesiones de manera libre y pacífica para ellos y sus descendientes, pues ésa era precisamente la mejor herencia posible.

Es por todo esto que la Carta Magna ha sido considerada una parte sustancial de lo que se conoce actualmente como la Constitución inglesa, pues de manera explícita coloca la libertad de los individuos y sus derechos como elementos fundamentales en la vida social. Con el paso de los siglos, tales prerrogativas se han incrustado de manera sólida y natural en el discurso y en la práctica política británica. Así pues, la Carta Magna de 1215 es una parte esencial de la Constitución británica; sin embargo, es necesario reiterar que la antigua Constitución inglesa es en realidad un *corpus* inexistente. En otras palabras:

La Constitución antiquísima forma cuerpo con la historia del pueblo inglés; es su historia misma, vista en su aspecto político. Estudiarla es necesariamente apelar ante todo al pasado [...]. Difícil es definir exactamente, en una fecha precisa, no ya la Constitución, sino la práctica constitucional británica; aún no se ha secado la tinta, cuando esa práctica se ve modificada en algunos puntos. Ese carácter inaprehensible de la Constitución británica es lo que le da su pasmosa flexibilidad; apenas hay transformación social a la que no pueda adaptarse ni situación política a la que no pueda hacer frente. En la mayoría de los demás pueblos, las instituciones políticas presentan un aspecto de cosa sobreimpuesta; entre los británicos aparecen como orgánicas, dadas con el mismo título que la opacidad de las brumas o que el verdor de los céspedes (Chastenet, 1947: 11).

Fue tal el alcance de la Carta Magna que John I decidió emprender una nueva campaña militar en contra de los barones; lo hizo poco después de la firma del documento; no obstante, moriría al año siguiente, dando paso al reinado de su hijo, Henry III, quien de 1216 a 1272 decidió respetar lo acordado en la carta firmada por su padre, ya que buena parte de su atención se

centró en reconquistar territorios perdidos en Francia por su antecesor, aunque fracasó en cada uno de sus intentos. Esto lo obligó a firmar un acuerdo con el monarca francés Louis IX, en el que renunciaba a cualquier esfuerzo futuro de reconquistar dichas tierras. Todo ello fue debilitándolo en Inglaterra, generándose nuevas revueltas de muchos de los barones, las cuales serían sofocadas finalmente por su hijo y sucesor Edward I (Ackroyd, 2011: 189).

Edward I, en el poder de 1272 a 1307, dedicó buena parte de su reinado a reformar la administración real y adaptarla a lo establecido en la Carta Magna de 1215, para extender las libertades y derechos de sus feudos y asegurar así la lealtad de sus barones y nobles. Una vez fortalecida su autoridad en Inglaterra emprendió sendas campañas militares en contra de Gales y Escocia para someterlos a la voluntad inglesa. Esto último generó la necesidad de mayores recursos, vía impuestos, que fueron discutidos y negociados en el Consejo General con sus barones, caballeros de las villas y burgueses. Precisamente tal apremio por los recursos ocasionó que las reuniones entre Edward I y sus súbditos tomaran cauces más constitucionales, al ajustarse a las normas establecidas en la Carta Magna.

De esta forma, los ayuntamientos adoptaron poco a poco el nombre de asambleas o conferencias de Parlamento. Conforme avanzaban las reuniones con sus súbditos, Edward I buscó regularizarlas con el fin de mantener un contacto permanente con los burgueses y caballeros, pues le quedaba claro que tales asambleas eran el mecanismo propicio para allegarse recursos frescos de manera más fluida y así acrecentar el erario para cumplir con los fines más ambiciosos de su reinado. En este marco, en 1295 el rey decidió convocar a una asamblea conocida por los historiadores como “Parlamento modelo”.

Su impacto más sobresaliente fue que las asambleas subsecuentes serían conocidas en todo el territorio como “reuniones de Parlamento”. Su celebración estimuló la elección de los representantes más influyentes y brillantes de las villas, pues ellos debían ser los más capaces para defender los intereses de sus comunidades de cara al soberano, pero también frente a los barones y los altos jerarcas de la Iglesia. De acuerdo con la convocatoria de Edward I, estos parlamentos quedarían conformados por dos arzobispos, dieciocho obispos, setenta y siete sacerdotes, siete condes, cuarenta y un barones, setenta y cuatro caballeros de condados y ciento setenta y dos burgueses de las villas; en total trescientos noventa y uno, más el monarca (Chastenet, 1947: 21).



Lo más trascendente de este llamado al Parlamento es que se convocó a dos caballeros por condado y a dos burgueses por villa, sentándose así las bases para la representatividad futura de la Cámara de los Comunes.

Posteriores levantamientos escoceses, como el liderado por William Wallace de 1297 a 1305, o el de Robert Bruce a partir de 1306 en contra de la autoridad inglesa, llevaron a Edward I a centrar su atención en el sometimiento de sus vasallos insurrectos; sin embargo, estas campañas le costarían la vida, pues en una de ellas contraería una enfermedad y sucumbiría en 1307. De inmediato fue coronado su hijo Edward II.

Este último, en el poder de 1307 a 1327, enfrentó una serie de graves problemáticas desde el principio de su mandato, ya que al carecer de la experiencia política y militar de su padre se vio obligado a negociar con los escoceses y con Robert Bruce, lo que al final provocaría la independencia escocesa de Inglaterra, que se mantendría hasta la unificación de ambos reinos casi cuatro siglos después. En materia parlamentaria, los barones, caballeros y burgueses ejercieron una presión constante en contra de su reinado, sometiénolo y negándose de manera reiterada a las peticiones tributarias para financiar sus campañas militares en contra de Francia y Escocia. Lo anterior debilitó, sin duda, política y militarmente al soberano (Ackroyd, 2011: 240-241), lo cual al mismo tiempo fortaleció cada vez más al Parlamento.

Esta limitada influencia de Edward II en el Parlamento lo llevó a intentar ejercer un reinado más autócrata, pero las garantías firmadas por su bisabuelo en la Carta Magna limitaron sus aspiraciones debido a la fuerza que iba adquiriendo el ejercicio parlamentario, sobre todo por la influencia económica de los burgueses de las villas. Así, después de una serie de acontecimientos políticos adversos, Edward II, presionado por los barones insurrectos —y por su esposa, Isabel de Francia—, abdicaría en favor de su hijo Edward III, nieto de Philippe IV, rey de Francia. Este hecho ha sido considerado una manifestación clara de la madurez y de la fuerza que alcanzaron paulatinamente el Parlamento y sus integrantes frente al monarca, pues fueron estos últimos quienes impulsaron, con una precisión sorprendente, el complejo proceso de deposición obligada del soberano saliente (Edward II) y la coronación y presentación del entrante (Edward III) ante la instancia legislativa (Maddicott, 2013: 359).

Edward III, quien reinó en Inglaterra de 1327 a 1377, muy pronto mostró mayores aptitudes que su padre, y a los diecisiete años encabezaría una in-

surrección exitosa en contra del gobernante *de facto*, Roger Mortimer, quien como consorte de su madre, Isabel de Francia, pretendió ejercer el poder aprovechando la corta edad del nuevo monarca. Después de una serie de campañas militares en contra de Escocia y Francia, así como de alianzas con Portugal, fue necesaria una mayor tributación para sufragar los gastos de la Corona; sin embargo, el Parlamento limitó la respuesta a las solicitudes del rey.

Ante ello, Edward III decidió establecer contactos más cercanos con el Parlamento y asegurar una comunicación más eficiente y constante con sus miembros. El objetivo fue mantener informados de manera permanente a sus vasallos acerca de las necesidades que enfrentaba el Reino tanto al interior como en el exterior. Por esa situación, determinó que el Parlamento completo debía reunirse cada vez que el monarca lo requiriese, lo cual desde ese momento ocurrió con mayor frecuencia; no obstante, al final de su reinado y debido a acusaciones de corrupción contra sus allegados, Edward III dejó de convocar a reuniones parlamentarias, generando molestia entre sus súbditos.

Su gestión fue particularmente importante, pues durante su largo reinado de cincuenta años, Edward III diseñó importantes innovaciones parlamentarias que siguen vigentes. De este modo, en 1339, consciente de las diferencias de los arzobispos, obispos y los altos barones con los caballeros de los condados y los burgueses de las villas, el monarca decidió separar ambos grupos en dos cámaras distintas: la de los Lores para los primeros y la de los Comunes para los segundos. De hecho, desde 1332 caballeros y burgueses ya habían sido colocados juntos en el Parlamento, pues sus intereses solían ser los mismos en los debates. Fue por eso precisamente que a partir de ese momento se les comenzó a identificar como los Comunes, o *commons*.<sup>4</sup> A raíz de tal separación, los Comunes y los Lores sesionaron en cámaras diferentes de la Abadía de Westminster, que desde 1257 se convirtió en la sede del ejercicio parlamentario inglés, a partir del primer gran concilio convocado por Henry III.<sup>5</sup>

Con su decisión, Edward III fundó el sistema bicameral, dejando a la alta jerarquía religiosa y a los altos barones en la cúspide. Los primeros fueron conocidos como Lores espirituales y los segundos como Lores temporales; estos últimos tenían la capacidad de heredar el cargo a sus descendientes,

<sup>4</sup> Fechas y datos obtenidos de UK Parliament (2016a).

<sup>5</sup> Para mayor información, véase Westminster Abbey Founded 960 (2016).

condición que se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo xx. Los Lores fueron asignados al gran *hall* de la Abadía de Westminster, mientras que a los Comunes se les asignó la sala capitular de los monjes de la misma abadía, y posteriormente la capilla de San Esteban. En realidad, pese a que los Comunes eran los que generaban la producción y la riqueza en el territorio, fue la Cámara de los Lores la que concentró desde el principio los debates acerca de las peticiones tributarias de la Corona, así como sobre los grandes asuntos de interés general.

Lo anterior mermó la capacidad de negociación de los caballeros y burgueses en el Pleno, ya que al quedar excluidos de las deliberaciones les correspondía sólo recibir los resultados de los pactos alcanzados por los Lores, que en los hechos eran ya compromisos suscritos entre los nobles y la Corona. En consecuencia, a los Comunes únicamente se les notificaban los acuerdos para su aprobación, y sólo si éstos eran percibidos como violatorios a las leyes inglesas se sometían entonces a votación en su Cámara.

Puede señalarse que Edward III buscó excluir, o al menos disminuir la influencia de los Comunes en las discusiones tributarias para la obtención de recursos para la Corona, ya que el Parlamento se había consolidado, durante casi un siglo, como un espacio de debate abierto con capacidad para rechazar las solicitudes impositivas del reinado sin grandes consecuencias para el gremio de caballeros y burgueses. De esta manera, la decisión de colocar a la alta nobleza y a las cúpulas religiosas en un sitio y separarlas de los Comunes —que las superaban en número, aunque no en influencia política— dio paso a la creación de los dos pilares parlamentarios ingleses.

Al final de su reinado, Edward III enfrentó el malestar de la Cámara de los Comunes, pues su exclusión derivaba en la inconformidad de sus representantes con derecho a votar en aldeas y villas. Por tal situación, dicha Cámara decidió elegir un “portavoz”, o *spokeman*, ante el rey para expresar sus posiciones frente a los importantes asuntos que se discutían en la Cámara de los Lores, pero también para defender y representar los propios. El rey accedió a esta petición, y aceptó que Sir Peter de la Mare se erigiese como el primer *spokeman* de la Cámara de los Comunes frente al soberano inglés. Al año siguiente la misma Cámara eligió a Thomas Hungerford como el primer portavoz en ser llamado “altavoz”, o *speaker*, de la Cámara de los Comunes. A partir de ese momento el *speaker* se convirtió en el precursor de lo que se llegaría a conocer como presidente de la Cámara de los Comunes, cuya labor no es

ser el líder de los Comunes, sino más bien actuar como su representante frente al monarca.<sup>6</sup> Cabe agregar que esta figura de presidente o *speaker* de la Cámara baja se mantiene en los parlamentos cuyo análisis abordaremos en este libro.

Tras la muerte de Edward III, su nieto Richard II, quien reinó de 1377 a 1399, asumió el trono tras un periodo de fortalecimiento de Inglaterra frente a sus tradicionales contendientes escoceses y franceses, al tiempo en que el constitucionalismo inglés y su parlamentarismo fueron sentando sus bases de manera sólida por todo el país. De hecho, en el momento de asumir el poder, la Cámara de los Comunes acababa de procesar a varios nobles de alto rango por corrupción en sus funciones públicas, sometiénolos a un proceso conocido a partir de entonces como *impeachment*, o acusación, el cual fue un procedimiento particularmente activo durante el reinado de Richard II.

El nuevo monarca se vio obligado a enfrentar una fuerte disidencia al interior del país, ya que una parte muy influyente de la nobleza, así como considerables sectores campesinos, se expresaron abiertamente en su contra por razones económicas debido a las guerras emprendidas por sus antecesores. En tal sentido, las amenazas frente a una potencial invasión francesa con motivo de la Guerra de los Cien Años,<sup>7</sup> iniciada por su padre, lo llevaron a solicitar un incremento de impuestos al Parlamento para preparar la defensa de Inglaterra. Como respuesta, el órgano legislativo exigió la dimisión del canciller enviado por la Corona para hacer tal petición como condición para aceptar el pedimento. Ésta fue una acción parlamentaria sin precedentes, pues tuvo el objetivo de reafirmar su autoridad frente a la Corona. Ese Parlamento pasaría a la historia inglesa como el *Wonderfull Parliament* de 1386 (Ackroyd, 2011: 289-290).

Con motivo de este desencuentro entre el rey y el Parlamento, la alta nobleza inglesa se dividió entre los leales al primero y los defensores del segundo. Entre estos últimos destacaban Thomas de Woodstock; duque de Gloucester; Thomas de Beauchamp, conde de Warwick; Henry Bolingbroke, conde de Derby,<sup>8</sup> y Thomas de Mowbray, conde de Nottingham. Por su parte, de entre las filas de los altos barones insurrectos sin duda sobresalía John de

<sup>6</sup> Un mayor desarrollo de este tema puede verse en UK Parliament (2016b).

<sup>7</sup> Este conflicto armado entre Inglaterra y Francia duró incluso más de cien años, de enero de 1337 a octubre de 1453. Cabe mencionar que pese a su extensión temporal esta guerra tuvo periodos de larga inactividad. El motivo principal fueron las reclamaciones inglesas por posesiones en territorio francés que databan del siglo XII. Al final, las milicias inglesas se retiraron de Francia sin cumplir sus objetivos. Para mayor información, véase Williams E. Burns (2010: 79-80).

<sup>8</sup> Quien posteriormente usurparía el trono como Henry IV, iniciando así el reinado de la Casa Lancaster.

Gaunt, primer duque de Lancaster, cuarto hijo de Henry III y tío del rey.<sup>9</sup> Así, después de una serie de combates militares adversos a Richard II, por fin fue sometido en 1388 y sus barones leales condenados a muerte o al destierro por el propio Parlamento. A este último se lo conoce como el *Merciless Parliament* o Parlamento despiadado.<sup>10</sup>

A partir de este conflicto, Richard II buscó evitar nuevas confrontaciones con el Parlamento y concentró buena parte de su atención en establecer acuerdos de paz con Francia. También emprendió de forma exitosa una campaña militar en Irlanda para apoyar a los señores feudales que luchaban en contra de las fuerzas irlandesas que desconocían la autoridad inglesa. Esta campaña militar permitió a Richard II retomar la fuerza necesaria para arremeter en contra de los barones que se levantaron para derrocarlo y que provocaron la muerte de sus más allegados tras las deliberaciones del “Parlamento despiadado”. De esta forma, y después de una campaña veloz y selectiva, Richard II fue eliminando la disidencia al interior de su Reino, confiscando posesiones y riquezas de los nobles traidores a su causa y repartiéndolas entre sus seguidores y leales en una acción que transgredía abiertamente lo establecido por la Carta Magna. Cabe agregar que dicha purga excluyó a su tío John de Gaunt, primer duque de Lancaster, y a su hijo Henry Bolingbroke, conde de Derby, quienes en apariencia apoyaron las decisiones del monarca.

De este modo, en una acción inesperada y valiéndose del poder que había logrado concentrar luego de eliminar a los barones que se rebelaron contra él pocos años antes, Richard II decidió someter el Parlamento a sus designios, y en un acto simbólico doblegó a Lores y Comunes, obligándolos a prestar juramento en la Abadía de Westminster. En este acto los parlamentarios se comprometían a respetar las ordenanzas y los juicios emitidos por la Corona o de lo contrario sufrirían las consecuencias de su traición.<sup>11</sup> Durante

<sup>9</sup> Este noble se convertiría posteriormente en el patriarca de un nuevo linaje real inglés conocido como la Casa Lancaster, que después de una serie de guerras internas y alianzas terminaría uniéndose a la Casa de York; descendientes directos de la Casa Plantagenet —de la cual los monarcas más recordados son, precisamente, Henry II Plantagenet, John I, Henry III, Edward III y el propio Richard II—. A su vez, los descendientes de ambas casas dieron paso a la poderosa dinastía de la Casa Tudor, que reinaría en Inglaterra de 1485 a 1553, con tres monarcas; Henry VII, Henry VIII y Edward VI (Ackroyd, 2011).

<sup>10</sup> Información obtenida de UK Parliament (2016b).

<sup>11</sup> “Richard II (1367-1400), king of England and lord of Ireland, and duke of Aquitaine, was born in the abbey of St André at Bordeaux on the feast of the Epiphany, 6 January 1367” (*Oxford Dictionary of National Biography*, 2016a).

sus últimos años de reinado, Richard II controló no sólo las decisiones del Parlamento, sino que a través de sus barones leales decidió retomar la práctica medieval de juzgar a los acusados de todos los niveles mediante sus enviados personales, y no más bajo las cláusulas de la Carta Magna. Al mismo tiempo, decidía de manera personal sobre el destino de las fortunas y las familias de los barones ejecutados.

Todos estos acontecimientos crearon una imagen de Richard II como un rey tirano. A lo anterior debe agregarse que la falta de herederos al trono provocó que las demás casas consanguíneas anhelaran sucederlo. El ejemplo más claro era la Casa Lancaster; por ello, tras la muerte de su tío John de Gaunt, primer duque de Lancaster, Richard II decidió exiliar en Francia a su primo Henry Bolingbroke, conde de Derby, e hijo del duque de Lancaster. Fue un intento por eliminar la amenaza que representaba ese linaje para su reinado.

Sin embargo, aprovechando una nueva campaña militar del monarca en Irlanda, Henry Bolingbroke encabezó una expedición con cientos de seguidores desde Francia para reclamar el trono inglés, tras acusar a Richard II de tiranía y de no respetar la Carta Magna elaborada por sus antepasados comunes casi dos siglos atrás. De esta forma, fue sumando a su causa a miles de seguidores, entre nobles, altos barones, ministros de la Iglesia, caballeros, burgueses y campesinos, además de ejecutar a su paso a todos los concejales leales al rey.

Luego de conocer el regreso de su primo a Inglaterra, Richard II marchó hacia Londres, aunque poco a poco los barones aún leales fueron abandonándolo, pues era claro que el Parlamento se encontraba del lado de Henry Bolingbroke, por lo que la caída del monarca era sólo cuestión de tiempo. Así, tras pactar un encuentro con su primo rebelde, el rey no tuvo mayor alternativa que llegar a la ciudad. Luego de detener al rey, Bolingbroke convocó a una Asamblea parlamentaria a finales de septiembre de 1399 con la intención de destituirlo por violar las leyes y considerarlo no apto para gobernar (Parmele, 2016: 27-28). Desde luego, debe considerarse que esta convocatoria la hizo con la seguridad de que el Parlamento, sobre todo la Cámara de los Comunes, lo apoyaba, pues sus poderes habían sido suspendidos de facto por primera vez en casi dos siglos.

Lo más trascendente de esta crisis sucesoria fue que pudo gestarse gracias al apoyo del Parlamento inglés, en particular de la Cámara de los Comunes, ya que precisamente este sector había sido el más afectado por las

prácticas autócratas del monarca, tras ser sometido a las directrices establecidas desde la Corona y, además, amenazado si se declaraba en su contra.

Fue así como la asamblea del Parlamento, convocada a finales de 1399 por Henry Bolingbroke, de la Casa Lancaster, depuso al rey Richard II, propiciando al mismo tiempo el ascenso y reconocimiento del propio Bolingbroke como el nuevo monarca de Inglaterra. A partir de ese momento sería conocido como Henry IV, y reinaría de 1399 a 1413. Este hecho significó que el Parlamento inglés se erigía de nuevo como un actor determinante para otorgar legitimidad a un sucesor a la Corona. Ello dejaba constancia del poderío e influencia política que había alcanzado el ejercicio parlamentario inglés después de casi dos siglos de funcionamiento.

Ya durante los periodos de los monarcas surgidos de la Casa Lancaster y de la Casa York, de 1399 a 1485, la práctica parlamentaria otorgó legitimidad a los reyes, al mismo tiempo en que éstos respetaron y ampliaron cada vez más los poderes de la Cámara de los Comunes como la instancia representante de los burgueses. En tal sentido, a partir de 1407 Henry IV reconoció el derecho exclusivo de esa Cámara como la única responsable de discutir y aprobar todas las concesiones económicas al monarca, derecho que por cierto se mantiene. Precisamente durante esta etapa la Cámara de los Comunes consolidó su poder e influencia política, una vez que los burgueses y caballeros de las villas comenzaron a elaborar leyes para presentarlas al monarca a través de los lores de la Cámara alta. Estas propuestas de ley, conocidas en inglés hasta nuestros días como *bills*, no podían ser enmendadas —ni por los Lores ni por el monarca— sin el consentimiento expreso de la Cámara de los Comunes. Sólo así estos nuevos estatutos podrían convertirse en nuevas leyes, o *acts*.<sup>12</sup>

Para mediados del siglo xv la Cámara de los Comunes logró allegarse el control de los ingresos provenientes de particulares para el monarca y, al mismo tiempo, se posicionó como negociadora de las nuevas leyes ante los Lores y el rey. Este último, consciente del poder alcanzado por los Comunes, tuvo que aceptar las condiciones impuestas por la Cámara para reafirmar su propia autoridad frente al Reino. De hecho, tal y como lo señala Chastenet, la Cámara de los Comunes era la que en realidad representaba a los contribuyentes del Reino, y por eso se tomó como costumbre dirigirse a ella para

<sup>12</sup> Para profundizar en el proceso propiamente legislativo, véase UK Parliament (2016c).

cualquier pedimento. Con el paso de los siglos ese uso se convirtió en regla, la cual se encuentra inscrita en todas las constituciones bicamerales de la actualidad (Chastenet, 1947: 27).

Posteriormente, con el ascenso de la poderosa Casa Tudor de 1485 a 1553,<sup>13</sup> las circunstancias políticas dieron un respiro a los monarcas ingleses frente al Parlamento, sobre todo gracias a la llegada de recursos económicos frescos para la Corona procedentes de la confiscación de los bienes de la Iglesia católica tras la conversión de Inglaterra al protestantismo. Así, la figura del rey destronó de manera definitiva a la del papa en Roma, convirtiéndolo en la cabeza de la Iglesia de Inglaterra (Parmele, 2016: 34). Todo este proceso coincidió en 1536 con la incorporación de Gales a la autoridad inglesa, al igual que de Irlanda en 1541, lo cual permitió incidir de manera directa en las decisiones de los parlamentos internos de ambos territorios, así como administrar sus recursos y riquezas.

Como una expresión más del poderío de la Corona inglesa durante la etapa de los Tudor —tras la elevación de Henry VIII como máximo jerarca de la Iglesia en Inglaterra— se prohibió a obispos y sacerdotes tener relación alguna con la Curia romana, tipificándola como delito de traición al monarca. Al mismo tiempo, en 1539, con el aval parlamentario Inglaterra suprimió los monasterios de todo su territorio.<sup>14</sup> En cuanto a la función de los representantes de la Iglesia católica en el Parlamento, en el siglo XVI se decidió la expulsión de todos ellos, excepto los obispos —previo juramento de fidelidad al rey—, quienes continuarían como lores temporales. Así, dichos obispos integrarían la Cámara de los Lores junto con los duques, marqueses, condes, vizcondes y barones, cuya característica principal era el carácter hereditario de sus encargos en dicha instancia legislativa.<sup>15</sup>

Esta característica de poco apremio económico de la Corona inglesa frente al Parlamento permitió que el reinado de los Tudor experimentara pocos conflictos entre ambos, pues en realidad sus tres monarcas no se vieron en la necesidad de pedir grandes favores a la Cámara de los Comunes ni

<sup>13</sup> Esta dinastía proviene de la mezcla de las casas York y Lancaster. Su primer monarca, Henry VII (1485 a 1509), descendía del tercer hijo de Edward III de Plantagenet (1312-1377). Su hijo y nieto lo sucedieron en el poder con los nombres de Henry VIII (1509 a 1547) y Edward VI (1547 a 1553).

<sup>14</sup> Sobre la supresión de los monasterios en territorio inglés, consúltese UK Parliament (2017a).

<sup>15</sup> Para mayor información acerca de la composición histórica de la Cámara alta en Inglaterra, véase UK Parliament (2016d),



mucho menos de comprometer su continuidad sosteniendo relaciones complicadas con el Parlamento inglés.

Sin embargo, el conflicto religioso entre católicos y protestantes ocasionó el ascenso al poder de la católica Mary I (1553 a 1558), quien para usurpar la Corona mandaría ejecutar a la reina protestante Jane Grey, la legítima heredera del trono. De inmediato, Mary I convocó al Parlamento y, con su aprobación, reinstaló los privilegios así como la antigua posición de la religión católica y de la Curia romana. Su reinado se centró en reintroducir el catolicismo en todo el territorio, castigando a los renuentes con la pena destinada a la herejía, además de que los pedimentos al Parlamento fueron sobre todo de carácter político y religioso; no obstante, tras su fallecimiento, su hermana y sucesora Elizabeth I, quien reinaría de 1558 a 1603, se apoyó en el Parlamento para reintegrar el poder a la religión protestante, lo cual significó reforzar su posición como máxima jerarca de la Iglesia anglicana.

Durante su largo reinado de poco más de cuarenta y cuatro años, Elizabeth I distendió los conflictos religiosos mediante la derogación de las leyes impuestas por su hermana y la eliminación de los excesos religiosos. Un ejemplo de estos últimos fue la propuesta de los puritanos, quienes reconocían sólo la potestad de Dios y no la de la Curia de Roma ni la de la jerarquía protestante anglicana del monarca como representante máximo de la Iglesia; no obstante, es cierto que la autoridad de la reina fue constantemente cuestionada por la Cámara de los Comunes, ya que no tenía clara su línea sucesoria al no estar casada ni haber concebido hijos. Esta situación dejó al Reino en la incertidumbre ante las posibles crisis futuras.

A lo largo del mandato de Elizabeth I el Parlamento gozó de plena libertad de expresión, lo que colocó a los representantes del pueblo en la obligación de hablar en público acerca de todos los temas de interés general, incluidos aquellos que eran menester exclusivo de la reina, como su soltería y la ausencia de hijos. Por ello, durante su reinado en el Parlamento se insistió en que no existía ninguna persona privada y que todos eran personas públicas (*Oxford Dictionary of National Biography*, 2016b). Esta actitud fortaleció la libertad de expresión, sobre todo en la Cámara de los Comunes, añadiéndose así nuevos niveles de intromisión incluso en la vida personal de los monarcas.

Tal y como la Cámara de los Comunes inglesa lo previó, tras la muerte de la reina una serie de aspirantes a sucederla surgieron de todos los rincones del país, imponiéndose al final la Casa Estuardo, de origen escocés, cuyo

rey James I fungiría como soberano de Inglaterra de 1603 a 1625.<sup>16</sup> Muy pronto el monarca escocés —descendiente de Henry VII de la Casa Tudor— enfrentó múltiples discrepancias con la Cámara de los Comunes, sobre todo por la problemática que entrañaba la unión de los dos reinos, así como por las prácticas parlamentarias disímboles. En este sentido, el estilo escocés era más efectivo y de periodos breves, mientras que el inglés era más burocrático, parsimonioso y de periodos extensos para deliberar. Asimismo, la exigencia de los comunes ingleses de excluir a los escoceses de la Corte del soberano generó conflictos con la Corona, situación que se manifestó en las negativas constantes a recaudar nuevos impuestos para el Reino. Ante el elevado nivel de encono generado entre ambos grupos, James I decidió disolver el Parlamento de manera unilateral en 1614 y gobernar sin él hasta 1621.

Es un hecho que unir las coronas de Escocia e Inglaterra alejó el peligro de una guerra en la isla, al tiempo que debilitó la influencia de Francia en Escocia, su tradicional aliado. Lo anterior permitió a James I gobernar en paz y prescindir de nuevos impuestos, logrando incluso gobernar sin el Parlamento; sin embargo, las inundaciones de muchas cosechas y la disminución del comercio provocaron que su gobierno recurriera de nueva cuenta al órgano legislativo para solicitar el establecimiento de nuevas cargas fiscales, y para ello lo convocó en 1621. En este ejercicio, la Cámara de los Comunes aprobó algunos incrementos impositivos, pero también pretendió asumir atribuciones conferidas de manera exclusiva al monarca, como los posicionamientos de guerra contra España o arreglar matrimonios de sus súbditos para servir como alianzas internacionales. Éstas fueron decisiones que el rey James I reprobó, por lo que optó por disolver el Parlamento de nuevo y no volver a convocarlo hasta su muerte (*Oxford Dictionary of National Biography*, 2016c). El encono entre el monarca y la Cámara de los Comunes puso en evidencia que las costumbres escocesas e inglesas guardaban sus diferencias, además de que era claro que los siglos de operación parlamentaria de Inglaterra no podían adaptarse a los nuevos estilos más ejecutivos traídos por la Casa Estuardo desde Escocia.

Su hijo y sucesor Charles I, que encabezó la Corona inglesa de 1625 a 1649, heredó el desagrado de su padre hacia el Parlamento y en particular por la Cámara de los Comunes, ya que una vez expuestas las divergencias

<sup>16</sup> Debe señalarse que este monarca poseía dos títulos reales: James I de Inglaterra y James VI de Escocia.

entre ambos —debido a las limitaciones tributarias impuestas por el órgano legislativo inglés para mantener una serie de campañas militares en contra de Francia y España— Charles I decidió prescindir de la Legislatura y abrogar sus facultades para solicitar nuevos impuestos. Como respuesta, en 1629 la Cámara de los Comunes emitió dos resoluciones en donde afirmaba que nadie más podría requerir impuestos sin la aprobación parlamentaria, y que todo aquel que los pagase sería tratado como traidor (Chastenet, 1947: 28).

Ante ello, el monarca ordenó detener y encarcelar a algunos de los líderes de la Cámara de los Comunes; sin embargo, al no contar con los recursos económicos suficientes para emprender campaña militar alguna, no tuvo mayor alternativa que pactar la paz con España y Francia. Como revancha, Charles I prescindió del Parlamento para gobernar durante once años, de 1629 a 1640. Esta decisión fue dejando sin recursos a la Corona, pues los contribuyentes se negaron a desobedecer las resoluciones de sus representantes.

Posteriormente, una serie de levantamientos armados y de conflictos religiosos en Escocia obligó a Charles I a convocar a Asamblea parlamentaria en 1640, pues eran necesarios recursos económicos frescos para someter a la insurrección. Sin mayor alternativa, el rey convocó al Parlamento ese año, para un ejercicio que fue conocido como el “Parlamento corto”. En éste, la Cámara de los Comunes pidió al soberano resarcir públicamente los daños después de once años de mantenerlo cerrado, además de reconocerle al órgano legislador su facultad única para pedir impuestos. Dichas condiciones fueron rechazadas por el monarca y de inmediato lo disolvió sin llegar a ningún arreglo.

Empero, la crisis en Escocia fue creciendo hasta que fue necesario un acuerdo entre el monarca y el Parlamento para conjurar el levantamiento escocés. Así, se pactó volver a convocar al órgano legislativo en un ejercicio que ha sido conocido en Inglaterra como el “Parlamento largo”, ya que se mandató que el ejercicio parlamentario sólo podría ser disuelto por el acuerdo entre Comunes y Lores, y no más por el monarca en turno. Por ello, su duración fue de veinte años, es decir, fue un Parlamento permanente cuyo principal resultado fue el sometimiento del monarca a las peticiones de la Cámara de los Comunes, ya que Charles I se encontraba desesperado por allegarse recursos económicos para la guerra que se avecinaba con Escocia. Aunado a lo anterior, en Irlanda comenzaron a gestarse también una serie de levantamientos armados en donde varios poblados protestantes fueron atacados por creyentes católicos, generándose importantes olas migratorias de miles

de colonos protestantes en búsqueda de refugio y protección por parte de las autoridades inglesas (Parmele, 2016: 89-90).

No obstante la situación precaria para el Reino, el Parlamento decidía qué temas eran prioritarios para el país y cuáles simplemente eran secundarios. Ante esta realidad, Charles I estimó que no debía tolerarse una tiranía legislativa que, además, permitiría la anarquía religiosa, pues no le consentía emprender acciones determinantes para someter las insurrecciones religiosas en Escocia e Irlanda (*Oxford Dictionary of National Biography*, 2016d). De este modo, ignorando al Parlamento, exigiéndole impuestos a sus súbditos y con recursos limitados, el rey decidió realizar una larga campaña militar para someter a los insurrectos en los territorios escocés e irlandés, en un episodio conocido como la Guerra en los Tres Reinos. Es conveniente señalar que durante esta guerra, acaecida entre 1641 y 1642, Charles I nunca abandonó tierras inglesas.

La consecuencia de esta campaña militar fue el estallido de un nuevo conflicto interno en Inglaterra conocido como la Guerra Civil, de 1641 a 1646. En este conflicto se abrió un nuevo frente para el monarca, pues los leales al Parlamento se levantaron en armas en su contra, aprovechando los diversos frentes militares que ya tenía que combatir. De manera gradual, los seguidores de la Legislatura, por ser quienes contaban con recursos económicos constantes, fueron ganándole terreno al rey, quien no tuvo mayor alternativa que someterse militarmente a los nobles insurrectos leales al órgano legislativo y convertirse en su prisionero. Desde su cautiverio, Charles I organizó un nuevo levantamiento en contra del Parlamento inglés, aliado con miles de escoceses e irlandeses, pero el comandante en jefe del Ejército de Inglaterra, Oliver Cromwell, logró desmembrar ese intento (Ackroyd, 2014: 301-302).

De este modo el Ejército, bajo el mando de Oliver Cromwell, y el Parlamento, decidieron juzgar y ejecutar en 1649 al monarca, con el argumento de que era responsable del derramamiento de sangre del pueblo inglés por no haber respetado los límites establecidos en la Constitución. Además, se lo acusó de violar su compromiso de proteger a las personas y sus libertades; también de hacer la guerra al Parlamento, que era el organismo representante de la gente.<sup>17</sup> Tras estos acontecimientos, la Legislatura gobernó por los siguientes cuatro años.

<sup>17</sup> Véase también el *Oxford Dictionary of National Biography* (2016d), sobre todo la sección “Endgame and Atonement: December 1648 and January 1649”.

Es necesario precisar que la ejecución del rey Charles I fue, sin duda alguna, la muestra más evidente del poder alcanzado por el Parlamento inglés después de cuatro siglos de operación y construcción de usos y costumbres burocráticos para dirigir los destinos del país. Después de su decapitación, Inglaterra entraría en un periodo de gobierno bajo el “Parlamento de Grupa”; sin cabeza de Estado, que abarcó de 1649 a 1653; sin embargo, la falta de un jefe de Estado hizo imperar el caos y tuvo como consecuencia la carencia de acuerdos parlamentarios legítimos en el nuevo gobierno, situación que provocó la conformación de un gobierno militar autocrático encabezado por el puritano Oliver Cromwell (1653-1658) y, posteriormente, por su hijo Richard Cromwell (1658-1659).

Ambos personajes, amparados en la figura de *Lords Protectors*, disolverían por completo el Parlamento, asumiendo con ello un total y absoluto poder en todo el país en un periodo que se conoce como el *Interregnum*. El argumento de Oliver Cromwell para explicar esta usurpación del poder fue responsabilizar de todo al órgano legislativo, pues a su juicio las inquietudes políticas parlamentarias habían terminado por contaminar a la nación entera, inquietándola ante las amenazas de invasión externas y frente a las rebeliones internas. Por ello, no había más remedio que eliminar la Legislatura con Dios como testigo (Ackroyd, 2014: 350).

Sin embargo, tras la muerte de Oliver Cromwell en 1658 y dada la poca habilidad mostrada por su hijo Richard para controlar al Ejército, un grupo de barones y antiguos comunes del Parlamento buscaron restaurar el linaje de la Casa Estuardo. Para ello ofrecieron al hijo del monarca decapitado pocos años antes —por cierto por el mismo Parlamento— devolverle la Corona, con la condición de respetar lo establecido en la Carta Magna de 1215, así como los usos y costumbres burocrático-administrativos adquiridos con el paso del tiempo. Fue así como Charles II (1660-1685) fue nombrado rey de Inglaterra, y con la ayuda económica del rey de Francia, Louis XIV, logró asumir el poder y gobernar sin grandes dificultades con el apoyo parlamentario. Cabe señalar que durante los años de Guerra Civil y el *Interregnum*, Charles II vivió en Francia bajo el amparo y protección de la Corona francesa, cuya alianza en esos momentos era absoluta debido a los acontecimientos en Inglaterra.

A la muerte del monarca, heredó el trono su hermano James II (1685-1688), quien por ser católico provocó nuevos problemas religiosos con la Igle-

sia protestante, al grado de que perdió la capacidad de gobernar, pues la gran mayoría de los nobles y miembros del Parlamento eran protestantes anglicanos. Ante esta realidad y después de múltiples conflictos, que incluyeron la suspensión o ejecución de leyes por autoridad regia, la recaudación de impuestos sin autorización del Parlamento, los nombramientos unilaterales de comunes y lores, y el mantenimiento de un ejército permanente en tiempos de paz, James II decidió abdicar de la Corona y escapar a Francia con la ayuda de su primo, el monarca francés Louis XIV. Este proceso fue conocido como la Revolución de 1688, pues de este suceso se desprende la Declaración de Derechos de 1689, conocida en inglés como *Bill of Rights*.

Esta *Bill of Rights* es un texto constitucional que se añade a otros ya existentes, como la propia Carta Magna de 1215, y se centra en identificar y establecer una serie de reglas sobre diversos temas hasta ese momento indefinidos y que causaban litigio entre la Corona y el Parlamento. Las nuevas leyes beneficiaban desde luego las prerrogativas parlamentarias. Tal declaración establece la absoluta prohibición de que el monarca recaude impuestos por sí mismo, y además lo compromete de manera obligada a convocar de manera frecuente a la Legislatura. También este documento designó como sucesores legítimos al trono de Inglaterra al matrimonio de Mary II y William III, ambos nietos directos de Charles I, de la Casa Estuardo. Asimismo, determinaba que en caso de no tener descendientes, la sucesora sería la hermana de la reina, Anna de Dinamarca, la hija de James II de Inglaterra y VII de Escocia. En suma, esta *Bill of Rights* estableció que la autoridad del Parlamento permanecería y sería ley para siempre en el Reino, con los propios lores y comunes como sus garantes, al mismo tiempo en que liberaba para siempre del “papismo” a todo el territorio.<sup>18</sup>

Una vez establecida la autoridad del Parlamento sobre el monarca en turno, el reinado de Mary II (1689-1694) y de William III (1689-1702) se desarrolló sin mayores sobresaltos entre los monarcas y el Parlamento. Incluso, el hecho de que este último adquiriera en sus dos cámaras la costumbre de no aprobar subsidios ni tampoco la conformación de ejércitos por más de un año hizo que fuera obligatorio para los monarcas convocarlo por lo menos anualmente, con lo que se sentaron las bases para consolidar una continuidad permanente del parlamentarismo inglés. Cabe añadir que en 1694 el Parla-

<sup>18</sup> Para mayor información y para consultar el documento completo, véase Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas (2016).

mento estableció que cada legislatura tendría una duración de tres años en sus cargos para los comunes (Aguirre, 2001: 16), definiéndose así una temporalidad específica para el encargo ante el pueblo que los elegía.

Puede señalarse que la abdicación de James II en 1688 representó el sometimiento pleno de la Corona inglesa y escocesa hacia el Parlamento como órgano de representación del pueblo pues, como se ha visto, las diferencias habían alcanzado altos niveles de encono que derivaron incluso en la decapitación de Charles I en 1649 y después en un golpe militar encabezado por Oliver Cromwell en 1653, quien disolvería el Parlamento. Todos estos acontecimientos provocaron que Inglaterra se quedara sin monarcas durante un lapso cercano a los nueve años, ello después de una continuidad casi ininterrumpida de ocho siglos.<sup>19</sup>

Lo anterior ocasionó un cambio de enfoque entre los monarcas posteriores, ya que en definitiva fueron conscientes del enorme poder que había alcanzado finalmente su Parlamento, cuyas bases más antiguas, debe recordarse, las creó Henry II Plantagenet en el siglo XII para apoyar la administración de su Reino. De ahí precisamente se desprende la idea de que las instituciones inglesas, y posteriormente británicas, como veremos, son productos particulares de su historia y de sus múltiples documentos constitutivos.

Así pues, a la muerte de Mary II en 1694, y posteriormente de William III en 1702 —sin descendientes de por medio y de acuerdo con lo mandatado por el Parlamento— la hermana menor de la reina, Anna de Dinamarca, asumió el trono como reina de Inglaterra de 1702 a 1707. Su reinado sería recordado por dos sucesos. En primer lugar, fue la última reina de Inglaterra, y en segundo sitio, porque durante su periodo tomaron forma las fracciones políticas del Parlamento inglés, las cuales si bien fueron conformando bloques durante los reinados de sus sucesores, no sería sino a partir de inicios del siglo XVIII cuando *tories* y *whigs* aparecieron abiertamente en escena como protagonistas en el debate parlamentario (Burns, 2010: 128-130).

A decir verdad, previo al establecimiento de los dos bloques partidistas existieron representantes que se mostraban más cercanos a los objetivos del monarca, y otros que defendían la independencia parlamentaria y los intereses de los contribuyentes. A los segundos se los conoció como *whigs*, en su

<sup>19</sup> Es conveniente señalar que el monarca considerado como el primer rey de Inglaterra lo fue Alfredo “El Grande”, quien enfrentó con éxito las constantes invasiones danesas a partir del año 871. Su reinado abarcó de 871 a 899 (Ackroyd, 2011: 64-68),

mayoría acaudalados potentados protestantes burgueses que promovían la iniciativa privada y controlaban el comercio marítimo; fundamentalmente impulsaban los derechos del pueblo sobre los del monarca. Este grupo parlamentario es el que dominó la política inglesa durante los largos años de conflictos entre el Parlamento y la Corona, que culminarían en la decapitación de Charles I en 1649. Por otra parte, los *tories* regularmente eran aristócratas con mayor cercanía a los monarcas y a sus intereses, reconocían la autoridad suprema de la Iglesia anglicana y, por ende, al rey como su cabeza. En general buscaban no contravenir de manera abierta a la autoridad regia; no obstante, en las épocas más convulsas de Inglaterra apoyaron a los *whigs* en sus demandas de mayor independencia y reconocimiento de atribuciones del Parlamento.

En lo que corresponde a la primera parte del reinado de Anna, la Asamblea parlamentaria centró su atención en concretar la unificación de Escocia e Inglaterra tal y como la había mandatado su antecesor en el trono, William III, poco antes de morir; sin embargo, el Parlamento escocés no se encontraba convencido. Fundamentalmente, este proyecto buscaba unificar ambos órganos legislativos, ubicándolos físicamente en el Palacio de Westminster, sede del Parlamento inglés. La idea principal era que de cualquier manera los monarcas ingleses eran al mismo tiempo soberanos de Escocia desde la llegada de la Casa Estuardo al poder en 1603, con James I de Inglaterra y VI de Escocia. De acuerdo con lo anterior, resultaba evidente que ambos reinos ya habían compartido monarca durante un siglo de manera paralela, pero con diferentes parlamentos.

Pese a ello, temas como la homologación en el pago de impuestos, las inversiones en las colonias de ultramar, la tolerancia religiosa y la designación de sucesores al Reino sin consultar al Parlamento escocés fueron asuntos difíciles de zanjar en un primer momento. De esta forma, la mayoría inglesa de *whigs* que dominaba el Parlamento inglés fue la encargada de negociar con sus contrapartes de Escocia los asuntos más problemáticos para alcanzar la unificación. En este sentido, después de varios años de preparación la reina Anna emitió y ratificó la Ley de Alienación o *Alien Act*, de 1705,<sup>20</sup> en la que se proponían nuevos estatutos o *bills*, o de lo contrario se sometería a Escocia a una serie de sanciones políticas y económicas. Tales estatutos proponían la conformación de un Parlamento único para los dos reinos con igualdad

<sup>20</sup> Para mayor información sobre este documento, véase BBC (2016).



de derechos y libre comercio. Asimismo, se impulsaba que Escocia accediera a que la Casa Hanover —asentada en Alemania— tuviera el derecho de suceder a la reina Anna en caso de que ésta no pudiera concebir hijos y continuar el linaje de la Casa Estuardo como monarcas ingleses y escoceses.

Cabe señalar que con dicho estatuto el Parlamento buscaba prevenir cualquier conflicto sucesorio para ocupar el trono, ya que la reina Anna tuvo diecisiete embarazos, pero entre abortos y enfermedades congénitas, sólo uno de sus vástagos sobrepasó la edad de diez años, pero murió por complicaciones de salud luego de padecer hidrocefalia desde su nacimiento. Cabe añadir que fue precisamente por ello que el órgano legislativo inglés escogió a la Casa Hanover en Alemania para sucederla, pues al ser descendientes del rey James I de Inglaterra y VI de Escocia, formaban parte de una línea sucesoria al trono. Al mismo tiempo, por proceder de un país alejado y sin bases de apoyo local, el Parlamento era consciente de que no tendría problemas para gobernar pues, en efecto, serían extranjeros administrando una nación de la cual, incluso, muchos ni siquiera dominaban la lengua.

Por consiguiente, los años 1705 y 1706 fueron de intensas negociaciones entre ingleses y escoceses para concretar la unión de los dos reinos en uno solo. El principal problema era la sensación de pérdida de soberanía por parte de los escoceses, ya que después de cientos de años de resistencia, héroes militares y guerras para mantenerse independientes de Inglaterra, la realidad los estaba atando a sus históricos antagonistas gracias a los lazos consanguíneos de sus monarcas, que al final terminaron siendo uno solo. Además, las amenazas inglesas de prohibir importaciones escocesas a su territorio se convirtieron en un asunto que preocupó bastante a las elites escocesas y a su Parlamento, asentado en Edimburgo.

De este modo, para los escoceses resultó fundamental asegurar las rutas comerciales y el comercio abierto de sus productos en los territorios coloniales de Inglaterra en todo el mundo, algo que los ingleses no querían aceptar. Por otra parte, los ciudadanos de Escocia manifestaron sus reservas para permitir que una casa extranjera, como la Hanover, gobernara su territorio, situación anhelada por sus contrapartes para mantener el control sobre los futuros monarcas (UK Parliament, 2016e). Al final, ambos temas fueron superados y aceptados por las dos partes, de manera que en abril de 1706 los parlamentaristas ingleses presentaron a sus contrapartes escoceses una propuesta final que señalaba: “Los dos reinos de Inglaterra y Escocia estarán

unidos para siempre en un nuevo reino llamado Gran Bretaña; ese Reino Unido de la Gran Bretaña estará representado por un mismo Parlamento y la sucesión monárquica de la Gran Bretaña se conferirá a la Casa de Hanover” (UK Parliament, 2016e).

Finalmente, la propuesta fue aprobada por los parlamentarios escoceses y de inmediato comenzaron a gestarse los acuerdos en torno al establecimiento de una bandera, moneda, pesos y medidas comunes. Es importante señalar que se acordó respetar el derecho escocés a mantener su religión protestante presbiteriana, sus estilos de educación y su marco jurídico más ejecutivo y menos burocrático que el inglés.

Posteriormente, los parlamentos de Westminster en Inglaterra y el de Edimburgo en Escocia aprobaron por separado, en julio de 1706, los veinticinco artículos propuestos. Después la Ley fue presentada a la reina Anna, quien otorgó la aprobación real a través de su firma. El documento titulado *Act of Union 1707* o Ley de Unión de 1707 establecía que la conjunción de Inglaterra y Escocia en un solo Reino entraría en vigor el 1° de mayo de 1707. A partir de ese momento surgiría el Reino de la Gran Bretaña como ente político unificado que contaría con un Parlamento único asentado en el Palacio de Westminster (Harris, 2009: 170).

De esos veinticinco artículos sobresalen los tres primeros, pues aluden de manera directa a la Constitución. En ellos se establece el nombre oficial del Reino, así como la unión de las banderas de San Jorge, de Inglaterra, con una cruz horizontal roja sobre fondo blanco, y la bandera de San Andrés, de Escocia, con una cruz blanca diagonal sobre fondo azul. Juntas formarían la nueva insignia del Reino Unido de la Gran Bretaña. Asimismo, se instituye que la Corona de la Gran Bretaña sería otorgada a la Casa Hanover y a sus herederos, y que a partir de ese momento ningún católico podría ocupar el trono británico. También se estipuló que toda la población del Reino, sin excepción, estaría representada en el nuevo Parlamento británico.<sup>21</sup>

Este documento mandató que los ciudadanos escoceses tendrían los mismos derechos que sus pares ingleses en el Reino, y que las joyas de la anterior Corona escocesa permanecerían en su territorio. Un apartado trascendente es el XXII, pues en él se establece que el número de representantes escoceses en el nuevo Parlamento británico sería de 45 comunes, sumándose

<sup>21</sup> Para una revisión completa del texto en sus veinticinco artículos, véase UK Parliament (2016f).

a los 486 ingleses y a los 27 galeses, para conformar una primera Cámara de los Comunes con 558 miembros (Chastenet, 1947: 57). De manera paralela, se instauró que dieciséis asientos serían destinados a los lores escoceses, para integrarse a la Cámara de los Lores británica, que en esos momentos contaba con poco más de doscientos lores (Jones y Farrell, 2009: 149-150).

De este modo, Anna de Dinamarca pasó de ser la última reina de Inglaterra a convertirse en la primera monarca de Gran Bretaña durante el lapso de 1707 a 1714. Es importante añadir que los ejercicios parlamentarios durante sus siete años como reina británica no mostraron ninguna empatía de la Corona hacia la Cámara de los Comunes, ya que los conflictos permanentes entre las fracciones *tories* y *whigs* hicieron que la soberana desconfiara de ambas, pues los dos grupos acudían a ella con acusaciones sobre sus rivales de complotar en contra de la Corona. Por esa razón, el primer reinado de Gran Bretaña se caracterizó por un distanciamiento muy marcado de la reina con su Parlamento. Incluso podría afirmarse que Anna se aisló voluntariamente de las fracciones políticas y de sus representantes (*Oxford Dictionary of National Biography*, 2016e).

Lo anterior confirmó no sólo que la Corona había perdido el poder de antaño sobre su Reino, sino que se erigió como una figura ornamental a la cual acudían periódicamente los políticos sólo para legitimar sus propias acciones legislativas. Conforme avanzó el primer reinado británico la salud de la monarca fue menguando, al grado de que algunos miembros de su familia pretendieron desconocer el derecho que otorgó el Parlamento a la Casa Hanover para sucederla; sin embargo, pese a sus reservas respecto de las fracciones políticas, Anna decidió apoyar la Ley de Unión en su apartado II, que autorizaba a la Casa Hanover llegar de Alemania a coronarse tras su muerte. Para consolidar su postura, Anna procuró la salida de sus parientes más cercanos del territorio de Gran Bretaña y les decretó la prohibición de regresar hasta que la nueva casa alemana asumiera el trono británico. Tal fue el caso de su medio hermano católico James, quien tuvo que autoexiliarse en Francia (*Oxford Dictionary of National Biography*, 2016e).

El periodo parlamentario británico durante los años 1707 a 1714 fue de constantes pugnas entre los comunes ingleses y escoceses, sobre todo por los impuestos establecidos para los segundos con el fin de homologarlos a los que pagaban sus contrapartes en Inglaterra; no obstante, la negativa de Escocia generó puntos de desencuentro que llegaron a amenazar la unión

del Reino, pues se propuso inclusive la disolución de la Gran Bretaña. Esto abría la posibilidad para una guerra civil, ya que James Francis Edward, príncipe de Gales, y medio hermano de la reina, alentó desde Francia esta posición entre diversos sectores escoceses influyentes, quienes clamaban por la continuación de la Casa Estuardo como los monarcas británicos. Ante ello, la reina ordenó la detención inmediata de su medio hermano —en caso de que éste pisara territorio británico en cualquier punto—, además de que detuvo y reprimió duramente a sus seguidores. Sólo de esta manera el movimiento en favor de la Casa Estuardo pudo ser sofocado, dejándole el camino libre a la Casa Hanover.

Poco después de este conflicto, la reina Anna fallecería dejando el trono vacante en agosto de 1714. De inmediato el Parlamento británico proclamó a George I (1714-1727), de la Casa Hanover, como el legítimo rey de Gran Bretaña, pese a que éste aún se encontraba en territorio alemán. George I era bisnieto de James I de Inglaterra y VI de Escocia; su llegada significó, en los hechos, el triunfo absoluto del parlamentarismo sobre la tradición jerárquica de las monarquías inglesa y escocesa, ya que el ascenso de la Casa Hanover simbolizó que los futuros monarcas ocuparían el sitio de observadores y aavales de las decisiones y acuerdos políticos alcanzados en las cámaras. Lo anterior dio paso, en el siglo XIX, a la consolidación de los partidos políticos británicos como protagonistas de la vida pública en Gran Bretaña, en la cual los *whigs* tenderían a limitar el poder de la Corona, mientras que los *tories* intentarían hacer lo mismo con el del pueblo (Parmele, 2016: 59).

## EL PARLAMENTARISMO EN GRAN BRETAÑA Y LA FORMALIZACIÓN DE SUS PARTIDOS POLÍTICOS

La llegada de la Casa Hanover al trono británico permitió un crecimiento, desarrollo y autonomía del Parlamento sin precedentes. De hecho, el primer monarca de ascendencia alemana, George I, dividía su tiempo en estancias tanto en territorio inglés como en tierras alemanas, lo que facilitó a Comunes y Lores el manejo del poder sin restricción alguna. Esta situación, en donde el monarca se erigía como la figura legitimadora de las leyes propuestas y aprobadas por las cámaras, coadyuvó en buena medida a la independencia de los parlamentarios británicos, lo cual finalmente, en 1721, ocasionó la necesaria designación de Sir Robert Walpole —de la fracción de los *whigs*— como el primer ministro inaugural de Gran Bretaña.

El papel del primer ministro heredaba las atribuciones conferidas desde el siglo XVII a los lores encargados del Tesoro, y de manera particular al gran lord del Tesoro. Este grupo fue el encargado de administrar los recursos provenientes de los impuestos, razón por la cual ejercieron una influencia especial sobre los miembros de sus respectivas agrupaciones. Esta condición elevó a dicha figura, durante los siglos XVII y XVIII, a la condición de líderes *de facto* de sus respectivos gremios políticos. Fue de esta manera como el gran lord del Tesoro se convirtió, a partir de los usos y costumbres ingleses, en el primer ministro.<sup>1</sup>

El siglo XVIII experimentó un dominio avasallante de la fracción *whig*, en buena medida como producto del repliegue absoluto de los últimos reducidos de la Casa Estuardo tras la derrota militar de 1746 del príncipe Charles Edward Estuardo, nombrado por sus seguidores como Charles III de Inglaterra

<sup>1</sup> En la actualidad la figura del primer ministro mantiene en su poder las atribuciones conferidas a la oficina del Tesoro. Es decir, la oficina del primer ministro es la entidad responsable de presentar la propuesta de ejercicio presupuestal cada inicio de labores legislativas ante el Parlamento. Aquella debe aprobarse con la votación mayoritaria de los Comunes, pues en caso contrario, el gobierno entra en crisis y puede ser depuesto por los opositores. Esta dinámica se replica en todos los sistemas parlamentarios contemporáneos de origen anglosajón.

y de Escocia. Charles Edward nació en Roma, era católico y fue conocido como el joven pretendiente al trono. Era nieto del rey James II, quien había abdicado después de la Revolución de 1688, y sobrino directo de la reina Anna. En términos consanguíneos era en realidad el primero en la línea sucesoria como heredero al trono después de la muerte de su tía.

Todos estos elementos generaron un fuerte movimiento que apoyó al joven pretendiente para regresar a los Estuardo al trono. Es oportuno señalar que Charles Edward contó con el respaldo parcial de la Corona francesa y con el de los grandes clanes de las tierras altas escocesas, además del de distintos comunes *tories* escoceses en el Parlamento, quienes no habían quedado convencidos de que una casa alemana ascendiera al trono británico. De la misma forma, la Iglesia episcopal de Escocia manifestó su simpatía hacia el príncipe Charles Edward, ya que el movimiento presbiteriano, de corte más protestante y anglicano, había ganado espacios entre la población de esa nación desde la Revolución de 1688.

No obstante los apoyos, este *movimiento* militar conocido como “jacobista” fue derrotado en la batalla de Culloden, en el norte de Escocia, por las fuerzas británicas. Tras la brutal represión y venganza británicas en contra de la población leal a los Estuardo en territorio escocés, el joven pretendiente se vio obligado a huir de nuevo a Francia, y moriría a los setenta y siete años en su exilio en Roma. Nunca más la Casa Estuardo volvería a ambicionar la Corona británica ni a amenazar la continuidad de la Casa Hanover en sus distintas versiones.

Fue precisamente durante esta última campaña de los Estuardo cuando el primer ministro Sir Robert Walpole fortaleció su posición como cabeza política de la Gran Bretaña, al dominar por completo al monarca de origen alemán, George I, y encabezar las gestiones para derrotar a los insurrectos escoceses, todo ello amparado en los cuantiosos recursos británicos que administraba como lord del Tesoro y como primer ministro. Asimismo, su liderazgo ayudó a fortalecer la posición de los *whigs* en la arena política, pues el descrédito de los *tories* por sumarse algunos de ellos a la causa Estuardo provocó falta de unidad entre la oposición, produciéndose así el dominio *whig* en el Parlamento durante una parte considerable del siglo XVIII.

Durante esta etapa, George I estableció que los periodos parlamentarios serían de siete años con sesiones anuales, lo cual permitió a los políticos adquirir mayor experiencia en los cargos y, al mismo tiempo, trajo consigo una cesión de atribuciones y facultades de parte del monarca. Cabe añadir

que la victoria en contra del movimiento jacobista fortaleció considerablemente a los *whigs* como fracción política en el Parlamento, pues ciertamente habían logrado concretar la sucesión de la Casa Hanover al trono, cortando con ello la línea sucesoria de los Estuardo que tantos conflictos había generado, sobre todo por su renuencia sistemática a acatar las leyes promulgadas desde el Parlamento. Por su parte, los *tories* fueron percibidos socialmente como la fracción derrotada en la pugna entre los Estuardo y los Hanover, no obstante que la mayoría de sus miembros en la Legislatura no se habían expresado abiertamente en favor de dicha casa (Burns, 2010: 129).

De esta manera, el conflicto sucesorio terminó por convertir al soberano en turno en un ente incapaz de ejercer influencia alguna en la política británica, alejándose en forma definitiva del ejercicio del poder y centrando su atención, sobre todo, en los intereses del Reino en sus posesiones, colonias y dominios en el extranjero. En lo que corresponde a la fracción *whig*, ésta se encargó de monopolizar el poder al concentrar en su seno el nombramiento de los ministros, siempre ajustándose a las directrices marcadas desde su liderazgo. De este modo, en la mayor parte del siglo XVIII se experimentó la formalización del Parlamento en sus dos cámaras, así como la sumisión definitiva del monarca a las decisiones que emanaran de ese organismo.

Esta característica del sistema parlamentario británico fue consolidándose con el paso de los años durante el reinado de George I, de su hijo George II y de su nieto George III. Es conveniente señalar que durante los reinados de George I y George II, los *tories* fueron excluidos de las dinámicas de poder, pues la numerosa clientela electoral *whig* desconfiaba de ellos por su supuesta deslealtad al monarca; no obstante, esta fracción política fue capaz de reinventarse e incrementar sus adeptos para finales del siglo XVIII, apoyándose en sectores descontentos con la forma de gobernar de los *whigs*, así lograron allegarse amplios sectores electorales escoceses e ingleses fieles a las iglesias presbiteriana y anglicana, respectivamente, las cuales reconocen y privilegian la autoridad divina del monarca por encima de los políticos.

De esta forma, los *tories* se transformaron en defensores de los derechos de los soberanos de la Casa Hanover, ganándose así no sólo la gracia de la Corona sino también de los electores cansados de la clase política y sus deliberaciones oligárquicas. Por ello, la fracción *tory* elaboró un documento público que expresaba su punto de vista y adhesión a la Casa Real y a sus monarcas. Este documento dictaba: “El rey debe reinar y gobernar. ¿Por qué habría de obedecer

a las órdenes de un gabinete de unas cuantas grandes familias, de un Parlamento que no representa al país? A él es, por el contrario, a quien toca convertirse en campeón de sus súbditos contra los oligarcas” (Chastenet, 1947: 53).

Esta posición permitió a los *tories* ganar terreno amparados en su líder William Pitt, quien a partir de 1783 asumiría las atribuciones de primer ministro. Como era de esperarse, el monarca George III recibió con agrado esta postura *tory* y decidió hacer uso de una de sus escasas facultades, privilegiando la entrada de *tories* a la Cámara de los Lores, sobre todo para salvaguardar los intereses de la Casa Real. Este dominio *tory* en el Parlamento, en sus dos cámaras, logró extenderse hasta finales de la tercera década del siglo XIX, obligando a los *whigs* a reformular su posición frente a los electores, asumiéndose entonces como los legítimos defensores de la democracia y de los derechos de los ciudadanos sobre cualquier intento absolutista.

De esta manera, el imaginario político de ambas agrupaciones fue tomando forma como organizaciones bien identificadas y diferenciadas entre sí. De un lado quedaron los *tories* como promotores de los derechos del monarca y de la Iglesia anglicana que lo reconoce como el máximo jerarca, además de que rechaza a la clase política opositora por considerarla corrupta e incapaz. Mientras tanto, en el otro extremo quedaban los *whigs* como defensores de la libertad de expresión, la democracia y los derechos de los ciudadanos británicos consagrados en su Constitución.

Es precisamente durante este lapso cuando se produjo la integración de Irlanda al Reino, durante el gobierno que encabezó el primer ministro William Pitt; ello después de que el Parlamento con mayoría *tory* decidiera unir a dicho país bajo la tutela británica, sobre todo para controlar los constantes conflictos civiles y militares irlandeses.

Tal decisión significó abolir el Parlamento irlandés, que había funcionado desde el siglo XIII de forma independiente, al tiempo en que se pretendía someter a la mayoría católica irlandesa al interior de un nuevo reino de mayoría protestante. En este proyecto se otorgarían a Irlanda treinta y dos lores y cien comunes, todos ellos no católicos, quienes se integrarían a sus pares ingleses, escoceses y galeses en el Palacio de Westminster.<sup>2</sup> Esta acción fue amparada por un nuevo instrumento, conocido como Ley de Unión entre Gran Bretaña e Irlanda, que entraría en vigor el 1° de enero de 1801. A partir

<sup>2</sup> Es importante señalar que los 100 comunes irlandeses se sumaban a los 45 escoceses, a los 486 ingleses y a los 27 galeses para conformar una cámara con 658 miembros.



de ese momento surgiría la figura política del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda (UK Parliament, 2016g).

Con esta nueva figura, el gobierno británico *tory* fortaleció su posición al incorporar más súbditos al soberano y allegarse mayores recursos económicos para reforzar su expansión imperial por todo el mundo, situación que se veía comprometida con el triunfo de la Revolución francesa y el avance de su milicia encabezada por Napoleón Bonaparte.

En lo que corresponde al funcionamiento del Parlamento, cabe añadir que fue durante la etapa de William Pitt —en las dos primeras décadas del siglo XIX— cuando las fracciones evolucionaron hacia la conformación de partidos políticos, una vez que los seguidores del primer ministro se agruparon en torno suyo y apoyaron sus decisiones, mientras que la otra fracción se convirtió en una oposición constante y sistemática.

Lo anterior hizo necesaria una reforma en el sistema electoral británico, pues las condiciones sociales y políticas de los siglos previos habían cambiado, modificándose así los intereses de la nación. Como un ejemplo habría que considerar que si bien los Comunes habían reforzado su presencia en el Parlamento, también se encontraron frente a nuevos desafíos, sobre todo una vez que los poblados y ciudades importantes ya habían cambiado su estatus económico y, por ende, su influencia en la arena política, de tal modo que pequeños poblados medievales como Old Sarum podían todavía mantener dos representantes en el Parlamento, mientras que otras ciudades en pleno crecimiento, como Manchester, con más de cien mil habitantes, no contaban con representante alguno (Chastenet, 1947: 56).

Lo anterior generó una serie de reformas a lo largo del siglo XIX, de manera particular en 1832, 1867 y 1884, por medio de las cuales el ajuste de poblaciones con representación real significó el incremento del número de ciudadanos con derecho a votar.<sup>3</sup> Esto sin duda aseguró la transición del viejo modelo medieval parlamentario a uno moderno de representación proporcional. Es aquí precisamente en donde cobran una importancia central los partidos políticos, pues al extenderse el número de votantes potenciales, las campañas electorales se vieron en la necesidad de construir el soporte ideológico y económico de una estructura partidista capaz de superar a los adversarios. Justo en ese momento fue cuando el sistema político británico terminó

<sup>3</sup> En este caso sólo los hombres adultos propietarios, ya fuera en centros rurales o en urbanos.

siendo dominado por el poder de los partidos políticos, agrupados en torno a un patriarca o líder parlamentario, quien determinaba el rumbo de su partido y sus plataformas.

De manera paralela fueron creciendo las bases electorales de los protagonistas en la arena política, pues los seguidores de uno u otro bando encontraron las afinidades suficientes para orientar su voto a nivel local, con la esperanza de que tuviera impacto a nivel nacional cuando se designara al primer ministro.

Es muy importante subrayar que fue en este momento cuando el sistema electoral británico adoptó la práctica de “el ganador toma todo” (*winner-takes-all single-member districts*), modificando el viejo modelo de la representación plurinominal que buscaba una mayor pluralidad y representatividad de los electores. Ahora bien, si en el anterior esquema medieval de representación plurinominal se facilitó una mayor representatividad, también se estimuló la falta de disciplina partidista, pues los comunes podían privilegiar los intereses de sus representados en lugar de aquéllos de la fracción política más afín. Es decir, se podía pertenecer a la fracción *whig* o *tory*, pero no por ello someterse a sus directrices verticales, ya que se carecía de una dirigencia tangible en el escenario parlamentario, más allá de los objetivos que como clase política esgrimían frente al monarca en turno.

Aunado a lo anterior, este sistema del “ganador toma todo” estimuló el predominio de dos fracciones políticas a nivel nacional, ya que los grupos políticos locales no estaban en condiciones de hacer llegar su mensaje a los nuevos electores debido a las erogaciones económicas que ello significaba. Es por ello que durante el siglo XIX pertenecer a una franquicia partidista otorgaba al representante en la Cámara de los Comunes el estatus de miembro oficial de un proyecto político nacional y, al mismo tiempo, la legitimidad de su cargo como representante de toda su circunscripción, sin importar que el porcentaje de votos a su favor fuera menor al 50 por ciento. Esto último era una característica del viejo sistema electoral-parlamentario británico, ya que para cualquier candidato obtener una mayoría simple entre varios contendientes —ya fuera del 30 o del 40 por ciento— era suficiente para encabezar su circunscripción electoral. Lo descrito es una característica general del sistema “el ganador toma todo”.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Resulta necesario precisar que el sistema electoral parlamentario “el ganador toma todo” (*winner-takes-all single-member districts*) es también conocido en la actualidad como *single-member plurality*

En este sentido, fue en el marco del sistema parlamentario británico que *whigs* (posteriormente liberales) y *tories* (conservadores) consolidaron su papel como entes políticos dominantes, adoptando el sistema electoral del “ganador toma todo”, también conocido en la actualidad como *the simple majority* o *first past the post*, que favorece únicamente al partido que obtiene más votos por distrito electoral sin importar su porcentaje.

Lo anterior genera un efecto conocido como Ley Duverger, en honor al sociólogo francés Maurice Duverger, quien durante la segunda mitad del siglo xx desarrolló, entre otras cosas, una serie de principios en donde describía las características de este sistema electoral mayoritario y su tendencia a beneficiar el bipartidismo. Al respecto, Grofman, Bowler y Blais señalan:

Los motores teóricos de la Ley Duverger pueden dividirse en dos vertientes, la mecánica y la psicológica. La vertiente mecánica es el efecto de convertir votos electorales en asientos. En elecciones distritales donde se elige a un solo miembro, los partidos pequeños tienden a ser eliminados de forma mecánica, simplemente porque la operación del sistema electoral les niega asientos. En particular, si las elecciones se desarrollan en distritos donde se elige a un solo miembro, entonces sólo un partido (el más grande en ese distrito) podrá ganar asientos en el distrito. Los partidos más grandes recibirán mayores cuotas de asientos que de votos, sobrerrepresentándolos [...]. La vertiente psicológica se centra en la reacción mental de los votantes y de las elites en sus expectativas acerca del sistema electoral. Al darse cuenta de que la tercera opción u otros partidos menores tienen pocas posibilidades de ganar, los seguidores que de otro modo votarían por partidos pequeños se moverán hacia la opción que consideran más viable entre los dos partidos dominantes [y con posibilidades reales de ganar...]. Bajo la Ley Duverger los ricos se hacen más ricos (Grofman, Blais y Bowler, 2009: 3).

Dicho lo anterior, puede retomarse el caso británico durante el siglo xix, pues era de esperar que las reformas electorales al interior de los partidos en ese periodo les permitieran preparar cuadros políticos locales para poder designar ellos mismos a los candidatos para contender en las elecciones. Lo expuesto menguó nuevamente la influencia de la aristocracia británica instalada cómodamente en la Cámara de los Comunes, justo en momentos en que comenzaron a tener mayor peso los aspectos industriales, comerciales y financieros (Salmon, 2009: 267). Ello reforzó además que los votantes tu-

---

o, más comúnmente, *first past the post*. Estos términos podemos traducirlos como “pluralidad uninominal” o “el primero que pase el poste”. Cabe añadir que este sistema sigue vigente en Gran Bretaña y en Canadá, lo cual se retomará más adelante.

vieran la certeza de que el líder del partido por el que votaban pudiera ser el potencial primer ministro del Reino. De esta forma, el sistema electoral británico nació en un esquema abiertamente bipartidista que antepuso, en definitiva, los intereses nacionales y populares a los objetivos y ambiciones privados de la vieja aristocracia parlamentaria, que de manera exitosa había logrado separar a la Corona de las decisiones de poder del Reino.

Precisamente por ese hecho los primeros cuatro monarcas de la Casa Hanover, los George I, II, III y IV —que reinaron de 1714 a 1830—, tuvieron un papel muy limitado en las decisiones internas, no obstante las potestades que mantenían en la Cámara de los Lores, que poco a poco fue convirtiéndose en uno de los últimos reductos de la nobleza británica. Lo anterior obedecía a que esta Cámara seguía manteniendo el estatus vitalicio de la mayoría de sus miembros, y tenía en el monarca en turno al responsable de avalar o nombrar a los nuevos integrantes. Por ello, la presencia de los partidos políticos tuvo poca influencia en los Lores hasta ya bien entrado el siglo xx.

Todas estas circunstancias hicieron posible la metamorfosis de la fracción *tory* hacia el Partido Conservador en 1834, y de la fracción *whig* en el Partido Liberal en 1859. En lo que corresponde al primero, fue durante el liderazgo de Sir Robert Peel cuando esta agrupación se conformaría como la organización política que se conoce en la actualidad; él fue el encargado de dar forma a, e instaurar la disciplina en, la nueva estructura partidista para alcanzar nuevos logros electorales en los años siguientes. Peel fungiría como primer ministro de Gran Bretaña en dos periodos, de 1834 a 1835 y de 1841 a 1846. Asimismo, durante su conducción se formalizó la figura del líder de la oposición al interior del Parlamento, la que a la postre se convertiría en el interlocutor oficial para cuestionar las acciones de gobierno (Government UK, 2016a). Esta función la encabezaría el propio Peel de 1835 a 1841, al ser oficialmente el “líder de la muy leal oposición del gobierno de su majestad”, término que se mantiene hasta la actualidad.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Es necesario señalar que la figura de líder de la oposición o “The Leader of Her Majesty’s Most Loyal Opposition” existía en el Parlamento británico desde principios del siglo xix, al aglutinar a seguidores ocasionales de distintas fracciones o regiones en asuntos específicos, quienes podían integrarse o no de acuerdo con sus intereses. Lo trascendente del liderazgo de Sir Robert Peel fue que durante su etapa como líder de la oposición (1835 a 1841) inició con una práctica sistemática y permanente de crítica al gobierno en turno al frente de un partido político uniforme y disciplinado bajo su mando, dando paso, de este modo, a lo que se conoce como la primera oposición al gobierno en el sistema parlamentario contemporáneo.

En lo que corresponde al Partido Liberal británico, éste se fundó en 1859 ante la necesidad de unificar a los opositores de los conservadores. El problema de unir a las fracciones opositoras al gobierno *tory* era que éstas se componían de grupos poco homogéneos entre sí, ya que la oposición solía agrupar a varios tipos de *whigs*: aristócratas, industriales, comerciantes, burgueses y miembros de una clase media ascendente cuya influencia venía incrementándose. Aunado a lo anterior, debían incorporarse a este nuevo partido los llamados “radicales reformistas”, cuya base comenzaba a crecer y a exigir una serie de reformas parlamentarias para ensanchar la representación de las clases menos favorecidas. Por ello, a diferencia de los conservadores, que en general compartían identidad, ideología e intereses, el proceso de transformación de los *whigs* en políticos liberales organizados fue un asunto que debió esperar veinticinco años más que sus antagonistas.

Pese a ello, y debido al empuje de nuevas figuras políticas que impulsaban una mayor liberalización de los derechos de los ciudadanos y una mayor inclusión de temas sociales en la agenda política británica, en 1859 las distintas fracciones *whig* se unieron para formar un nuevo partido político, el Partido Liberal, cuyo primer líder en funciones fue Henry John Temple, tercer vizconde de Palmerston quien, si bien heredó la tradición y la estructura *whig*, tenía orígenes aristócratas que no le permitieron llevar a cabo reformas profundas en el partido. Finalmente, este cambio llegaría años después con William Ewart Gladstone, quien como líder del Partido Liberal de 1865 a 1875 y de 1880 a 1894 encabezaría una serie de reformas y políticas orientadas a definir la ideología liberal británica en el siglo XIX.

Esa visión incluía privilegiar temas como educación básica, salud, vivienda digna para los trabajadores, tolerancia religiosa, libre comercio, organización sindical, voto secreto, entre otros asuntos. Gladstone llegaría a ser conocido por su abierta animadversión a la aristocracia victoriana y a la misma reina Victoria. Fungiría como primer ministro durante cuatro periodos: de 1868 a 1874, de 1880 a 1885, en 1886, y de 1892 a 1894. También fue líder de la oposición de 1874 a 1880 y de 1886 a 1892 (Government UK, 2016b).

Es también importante añadir que en esta etapa de conformación de los partidos políticos durante el siglo XIX en Gran Bretaña, la Corona, representada por George IV y William IV, fue testigo de los debates y del avance de la Cámara de los Comunes frente a la de los Loes. Al mismo tiempo, sus reinados tuvieron contactos permanentes con los primeros ministros y líderes

de la oposición de ambos bandos políticos, que buscaban sobre todo ganar su gracia y aprobación para los acuerdos discutidos en ambas cámaras; sin embargo, como se ha señalado, la gracia del soberano solía centrar su atención en la Cámara de los Lorens, pues ahí permanecía la vieja aristocracia británica agazapada frente al avance de las nuevas clases sociales.

Puede afirmarse incluso que ante la vulnerabilidad de sus funciones —tras siglos de confrontación con el Parlamento—, el siglo XIX sirvió para colocar la figura del monarca en turno como una entidad de elevada estatura moral, la cual no solía inmiscuirse en los asuntos de los políticos del país, pues esta clase gobernante frecuentemente era menospreciada por buena parte de la sociedad debido a sus escándalos y acusaciones mutuas de corrupción. Fue así como a partir de las primeras décadas del XIX la actitud mundana de los políticos contrastó con la presencia digna del monarca.

Este nuevo papel del monarca británico en turno tuvo en la reina Victoria (1837-1901) —última representante de la Casa Hanover— a su máxima exponente, pues su carácter imperturbable, resignación y buenos modos fueron adoptados como moda y estilo de vida por la aristocracia británica, en un periodo histórico conocido como época victoriana.<sup>6</sup> Durante esta etapa de cambios culturales, políticos, industriales y científicos, Gran Bretaña tuvo su mayor alcance en materia de extensión imperial en territorios de América del Norte, África, Medio Oriente, Asia y Oceanía.

Debe señalarse que la presencia de la reina Victoria en la vida pública británica fue muy limitada e incluso en diversos momentos expresó animadversión por los liberales y sus ideas. Dicha actitud estimuló las opiniones de carácter republicano en el Reino y simultáneamente sirvió como aglutinadora de nuevos proyectos constitucionales para la mejora de las clases bajas. Este avance de la corriente progresista británica y de las ideas de justicia social empujadas por los liberales en la Cámara de los Comunes fue parte de una profunda contradicción histórica, política, social y económica de Gran Bretaña, pues al mismo tiempo en que las ideas reformistas avanzaban a paso firme por todo el Reino, la estricta moral victoriana —dirigida por la propia reina— ganaba espacio como estilo de vida. Lo anterior, a pe-

<sup>6</sup> Es importante señalar que la moral victoriana y sus contradicciones sociales, políticas y jurídicas fueron expuestas de forma magistral por el escritor Charles Dickens en libros como *David Copperfield* (1850) o su obra maestra, *Bleak House* (Casa desolada) (1853), entre otros.

sar de que vivió su largo reinado confinada en sus residencias reales, y limitada, sobre todo, a iniciar de vez en cuando los periodos parlamentarios.

Precisamente por ello esta etapa histórica y política en Gran Bretaña resulta de especial relevancia, pues en dicho lapso se consolidaron las mecánicas del parlamentarismo contemporáneo. Cabe añadir que este funcionamiento se gestó, como se ha mencionado, en medio de profundas contradicciones que requirieron soluciones y reformas bien cimentadas, sobre todo para hacer posible la viabilidad y prevalencia del sistema político británico. Entre estas nuevas dinámicas que fueron tomando renovados impulsos y formas durante el transcurso del siglo XIX sobresalen:

1. *La oficialización del papel del “portavoz” o “speaker” de la Cámara de los Comunes.* El *speaker* se ha desempeñado también como el presidente de los Comunes. Si bien la existencia de los primeros portavoces se remonta a los siglos XII y XIII, fue con el fortalecimiento de los partidos políticos en el XIX que su figura asume las características y la mística que posee en la actualidad. El *speaker* o presidente asume sus funciones renunciando de manera paralela a su filiación partidista original, que es aceptada por su partido a cambio de ejercer su cargo con total imparcialidad. Es importante señalar que el *speaker* gana su asiento como un común más y entra en funciones cada inicio de periodo legislativo después de las elecciones generales para designar primer ministro. Su asiento es el único que no tiene contendiente en su circunscripción electoral, al presentarse como un candidato especial para ser reelecto como portavoz de la Cámara de los Comunes.

Cabe agregar que de acuerdo con las tradiciones británicas, en un primer momento el *speaker* rechaza el nombramiento en su intervención inaugural en el nuevo Parlamento, y entonces debe ser persuadido con leves empujones por sus compañeros de la Cámara para aceptar el cargo. Esta curiosa costumbre obedece a que siglos atrás el *speaker* solía llevar malas noticias y anunciar el rechazo a las propuestas presupuestarias del soberano en turno y, por ende, era el primero en recibir los efectos de su ira. En este sentido, debe señalarse que no pocos *speakers* terminaron asesinados o decapitados en funciones, tanto por órdenes del soberano como por decisión del Parlamento en su conjunto, cuando fueron considerados como traidores.

Las principales responsabilidades del *speaker* desde el siglo XIX son: sentarse al centro y de frente a las dos bancadas de la Cámara de los Comunes; mantener el orden en dicha Cámara durante sus discusiones; dar la palabra a los diputados; ser el representante oficial de todos los comunes frente a la Cámara de los Lores y ante las distintas comisiones de la misma Cámara de los Comunes; determinar qué enmiendas a una moción o proyectos de ley serán discutidas; tener la potestad de suspender comunes (o diputados) si éstos no guardan el respeto que la Cámara merece (UK Parliament, 2016h). En la actualidad, en momentos de rispidez, gritos o arrebatos de palabra en los debates, los diputados se dirigen al *speaker*, en su calidad de presidente de la Cámara, para que inste al orden y llame la atención de manera firme a los comunes transgresores en la discusión.

Un dato importante que no debe pasarse por alto es que el *speaker* no vota en las sesiones del Parlamento y sólo puede hacerlo en caso de empate. En este sentido, su voto suele orientarse hacia el rechazo a las propuestas legislativas que suponen falta de acuerdo. Cabe agregar que también debe atender sus responsabilidades como representante de sus electores; por ello, se nombra una comisión permanente de otros tres diputados *speakers*, quienes tienen la función de relevarlo en debates largos para permitirle cumplir con sus obligaciones como diputado en su circunscripción.

2. *La formalización del gabinete de gobierno mediante el control ministerial de los asuntos públicos.* Los gabinetes de gobierno británicos fueron consolidándose al mismo tiempo en que los partidos políticos tomaron el control de la Cámara de los Comunes durante el XIX. Fue a partir de ese momento cuando el primer ministro tuvo la oportunidad de organizar la agenda nacional al tomar el control de los asuntos del Reino; esto, claro está, a través de operaciones y rutinas de carácter institucional, y siempre apoyándose en su partido político. Sólo así, mediante el reforzamiento de una agenda de carácter público, el gobierno —encabezado por el primer ministro— fue capaz de organizar asuntos de interés general; ello, mediante distintos ministerios dirigidos por comunes nombrados por él mismo. Este ejercicio dio paso finalmente al nacimiento de los gabinetes de gobierno, liberándole tiempo al primer



ministro para que pudiese concentrar su atención en sus centenarias atribuciones, como organizar y administrar la economía y el presupuesto, la defensa del Reino y la salvaguarda de sus intereses en el exterior. Todo lo anterior, desde luego, con la anuencia del monarca en turno y de su Cámara de los Lores.

Debe añadirse que la consolidación del gabinete fue desplazando el protagonismo e importancia de los comunes privados,<sup>7</sup> ya que los objetivos personales o regionales cedieron ante el empuje de las agendas partidistas. Todo ello minimizó gradualmente la influencia de los comunes privados, que en su individualidad se vieron imposibilitados de empujar intereses de carácter particular. Esto último reafirmó la tendencia de los comunes para incorporarse a algún partido político afín, sobre todo con la meta de asegurar su posición, hacer escuchar su voz e incluir temas para su discusión en el gabinete ministerial. Justo es afirmar que hacia finales del siglo XIX dicha institución ya había asumido el control de toda la Cámara de los Comunes.

Todos estos cambios se dieron al mismo tiempo en que la Cámara de los Comunes debió multiplicar sus funciones para discutir y resolver una mayor cantidad de pendientes, entre los que sobresalían proveer de infraestructura y servicios asociados a la creciente urbanización e industrialización que experimentaba Gran Bretaña en ese lapso. Entre los temas que solían discutirse y repartirse en el gabinete sobresalían: construcción de nuevos recintos industriales, caminos, vías ferroviarias, canales, cárceles, puertos, puentes, así como estaciones y suministro de gas, agua y luz (Salmon, 2009: 255). Debe agregarse que igualmente se incluían nuevas problemáticas por resolver, como vivienda, educación y salud en las zonas urbanas.

<sup>7</sup> Durante el siglo XIX, los comunes “de carácter privado” pierden vigencia al ser electos por comunidades más extensas y no solamente gracias al patrocinio de algún particular. Con ello, los comunes o diputados multiplicaron sus responsabilidades hacia más electores y no sólo frente a su patrocinador. Es oportuno señalar que desde el origen de los primeros parlamentos ingleses, la figura de los *private members* o miembros privados se concentró en salvaguardar los intereses de los grandes barones burgueses o aristócratas, a los cuales representaban y debían su cargo. Ya con la aparición y fortalecimiento de los partidos políticos y de los gabinetes de gobierno, esta figura de los comunes privados pierde importancia, pues dejan de ser efectivos para sus patrocinadores, ya que su cargo depende de la preferencia de muchos más electores.

3. *El carácter público de los debates parlamentarios*. La relación estrecha entre el *común* y los ciudadanos se encontraba vetada hasta mediados del siglo XIX, pues se restringía la entrada de extraños al recinto de la Cámara de los Comunes, y no sólo eso, también se prohibía la publicación de sus procedimientos para llegar a acuerdos y reformas. Todo esto permitió la secrecía o discrecionalidad de la forma en que se llegaba a los acuerdos, facilitando la corrupción; sin embargo, las reformas de 1832 promovieron una mayor visibilidad del diputado en relación con la ciudadanía, sobre todo por la variedad de temas que el *speaker* y el gabinete se vieron en la necesidad de poner a discusión.

De esta forma, las demandas de los electores fueron incrementándose al interior de la Cámara de los Comunes, al igual que su necesidad de conocer la forma en que se abordaban. Por esa razón, comenzaron a surgir periódicos especializados en temas parlamentarios, que llegaron a tener más de dos millones de lectores. Para lograr algo así, se destinó un espacio particular en la Cámara con el fin de permitir a los periodistas tomar nota de los debates y facilitar su difusión masiva (Salmon, 2009: 261). Esta demanda de información propició también la propagación de discursos impresos de algunos comunes con temas de interés público, cuya meta era alcanzar popularidad personal, y con ello nuevos seguidores a sus causas partidistas.

Lo anterior estimuló el carácter teatral y de actitud declamatoria muy elaborada en las discusiones parlamentarias británicas durante la era victoriana, colocando muchas veces a algunos comunes como celebridades públicas a seguir. Toda esa situación reconfiguró la forma de hacer política, debido a que las decisiones y discusiones en el Parlamento habían dejado de ser privadas para convertirse en plataformas de carácter e interés públicos, lo que sin duda permitió el nacimiento de un culto político inédito hacia los partidos, sus líderes y sus proyectos, todo lo cual facilitó la adhesión de nuevas bases electorales en el corto y mediano plazos.

Por ello, el carácter público de los temas parlamentarios se colocó como un elemento intrínseco de la democracia británica, excluyendo así la vieja práctica de llegar a acuerdos y elaborar reformas en secrecía por los parlamentarios. Todo lo anterior dio paso a la transparencia de la política parlamentaria como un sello distintivo de este estilo de go-

bierno, no solamente en Gran Bretaña, sino en todas sus colonias, dominios y zonas de influencia en el siglo XIX.

Ahora bien, si se considera que la conformación de los partidos políticos, el surgimiento de la figura del primer ministro, el fortalecimiento del *speaker*, el nacimiento del gabinete, la apertura del Parlamento y la difusión pública de sus debates son temas fundamentales del desarrollo del parlamentarismo británico en el siglo XIX, es necesario señalar también cuáles fueron las dinámicas emanadas de su viejo parlamentarismo que siguen dándole forma a las estructuras políticas anglosajonas en los siglos posteriores. En este sentido, temas como la identificación de poderes en los sistemas parlamentarios, los discursos del trono y sus propuestas presupuestarias cada inicio de labores legislativas, así como los distintos tipos de gobierno que surgen del sistema político parlamentario, son asuntos que bien merecen un señalamiento en la parte final de este apartado.

En primer lugar, nuestras cavilaciones deben dirigirse a identificar la división de poderes en el sistema legislativo británico, ya que, como se ha visto, fue el conflicto constante entre la Corona y el Parlamento durante el lento transcurso de los siglos lo que terminó por separar al monarca del Poder Legislativo y, de forma paralela, de elevar la figura del primer ministro como cabeza ejecutiva del Estado; no obstante, debe tenerse claro que lo anterior no contraviene que el monarca en turno figure en y ejecute actos de alto protocolo como jefe de Estado y monarca de toda la Gran Bretaña,<sup>8</sup> sus antiguos dominios,<sup>9</sup> territorios de ultramar<sup>10</sup> y dependencias de la Corona.<sup>11</sup>

Por ello precisamente Jacques Chastenet afirma que es difícil precisar el momento exacto de esta separación de atribuciones, no tanto mediante la instauración de la Constitución o la imposición de sus leyes en fechas precisas, sino por el ejercicio constante e inherente en la búsqueda de soluciones efectivas frente a problemas diversos. De hecho agrega: “[...] el ceremonial parlamentario no impide ninguna innovación, no está hecho para eso, pero

<sup>8</sup> Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

<sup>9</sup> Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

<sup>10</sup> Estos territorios se definen como aquéllos bajo el mando y soberanía del Reino Unido y se componen de diecisiete jurisdicciones, entre las que destacan Bermudas, las islas Caimán, las islas Farkland (islas Malvinas), Gibraltar o los territorios británicos en la Antártida, entre otros.

<sup>11</sup> Isla de Man, Bailías de Jersey y Guernsey.

la innovación más osada la asienta sobre un peñasco muy viejo y firmísimo y con eso mismo la consolida” (Chastenet, 1947: 12).

Por ello, desde los tiempos de Henry II Plantagenet en el siglo XII, hasta el largo reinado de Victoria en el XIX, la evolución sistémica del parlamentarismo anglosajón por más de setecientos años descentralizó el poder y lo dividió en ramificaciones que terminaron por otorgar al Parlamento, en su Cámara baja, una capacidad de acción, independencia y concentración de poder inusitadas.

Sin embargo, paradójicamente esa independencia y ese poder requieren legitimarse por medio de la figura del monarca en turno, quien debe inaugurar cada periodo legislativo con un discurso a los parlamentarios en ambas cámaras. Este particular hábito, retomado por distintos modelos de gobierno,<sup>12</sup> es conocido en la cultura política anglosajona como el Discurso del Trono (*Speech from the Throne* o *Throne Speech*). En éste, el monarca —o su representante real—<sup>13</sup> dirige un mensaje al país ante la presencia de comunes y lores, en el cual señala las direcciones por seguir en las materias política y económica. El propio Chastenet retrata este tipo de usos de forma singular: “En cuanto a la Excelentísima Majestad del Rey, cuyo gracioso discurso es necesario para poner en movimiento la maquinaria parlamentaria, y cuyo gracioso asentimiento hace la obra de esa maquinaria un producto acabado, no es hoy más que un mascarón de proa en el tajamar de un navío cuyo *governalle* empuñan otros” (Chastenet, 1947: 12).

Así, el Discurso del Trono ha evolucionado desde sus primeras referencias en el siglo XII hasta llegar a convertirse en un elemento indispensable del protocolo para poner en marcha las labores legislativas tras la apertura del Parlamento, ya sea por elecciones generales o debido a prórrogas parlamentarias establecidas con la anuencia de la propia Corona. Es muy importante considerar que con el paso de los años el Discurso del Trono se transformó en una acción protocolaria para presentar y aprobar el ejercicio presupuesta-

<sup>12</sup> Debe señalarse que esta práctica se desarrolla en distintos países en formas particulares, siendo una de las más conocidas el tradicional mensaje del “estado de la nación” que el presidente de Estados Unidos dirige al país a principios de cada año ante senadores y miembros de la Cámara de Representantes.

<sup>13</sup> Dicho representante puede ser el lord canceller (Lord High Chancellor of Great Britain o Lord Chancellor) en Gran Bretaña; el gobernador general como representante directo de la Corona en los antiguos dominios; el gobernador en los territorios de ultramar, y el teniente gobernador en las dependencias del Reino Unido.

rio del gobierno.<sup>14</sup> Para ello, dicho gobierno requiere la aprobación de una mayoría en la Cámara de los Comunes. Una negativa a la propuesta presupuestaria significa, en los hechos, el rechazo al gobierno que presenta el documento en voz del monarca o su representante y, por ende, una convocatoria a nuevas elecciones. Desde luego, hay que agregar que tales comicios sólo pueden realizarse con el consentimiento expreso de la Corona.<sup>15</sup>

En lo que corresponde a las funciones parlamentarias del primer ministro, es preciso recordar que el propio surgimiento y la fortaleza de los partidos políticos en Gran Bretaña durante el siglo XIX fueron elementos que permitieron al titular del Poder Ejecutivo fungir como líder del partido en el poder y al mismo tiempo como cabeza del Poder Legislativo. Lo anterior es posible gracias a que, precisamente, es el Legislativo el que elige a dicho líder como primer ministro. A partir de ese momento, tal personaje ocupa su asiento como un diputado más en la Cámara de los Comunes, con todos los derechos y obligaciones de participar en las discusiones legislativas. Como es de esperarse, el cúmulo de sus correligionarios suele respaldar, proteger y seguir las directrices de su líder como parte de su disciplina partidista; de lo contrario, el primer ministro no sólo podría perder el control del Poder Legislativo, sino también su credibilidad como líder del partido que lo postula, poniendo incluso en riesgo la continuidad de su gobierno como titular del Poder Ejecutivo. Debe señalarse que si bien en realidad este tipo de revueltas en contra del primer ministro no son raras, tampoco llegan a derribar gobiernos (Rhodes, Wanna y Weller, 2011: 198-201).

Por otra parte, en lo que atañe a los tipos de gobierno en el esquema parlamentario británico, debe mencionarse que existen tres formas en las que se puede asumir el poder con el apoyo del Parlamento. La primera es el gobierno de mayoría. En este esquema, el partido que logre la mayor cantidad de escaños en la Cámara de los Comunes es el que elige a su líder partidista como primer ministro.

<sup>14</sup> Este proyecto y documento lo elaboran directamente el primer ministro y su oficina, por tratarse del encargado directo de los fondos hacendarios y de su destino, lo cual ya se señaló en su oportunidad.

<sup>15</sup> Es oportuno remarcar que los usos, costumbres y hábitos políticos británicos dan la pauta para encontrar soluciones frente a diferentes problemáticas. Por ello, para evitar conflictos embarazosos ante el monarca, los Comunes lograron desarrollar, desde el siglo XVII, una serie de ejercicios y cabildos previos para alcanzar consensos y permitir la presentación del Discurso del Trono sin contratiempos; sin embargo, cuando el consenso no es posible, el gobierno opta por convocar a nuevas elecciones generales, antes de verse expuesto a ser rechazado por la mayoría opositora en sus planes de gobierno frente al monarca o su representante en el Parlamento.

De acuerdo con esta estructura se busca obtener el 50 por ciento más uno de los distritos electorales. Sus efectos inmediatos son, en primer lugar, la consolidación de una tendencia que fortalece a los dos partidos con mayor infraestructura y, en segundo término, el decidido apoyo a la conformación de gobiernos de mayoría de un solo partido para lograr la gobernabilidad (Kam, 2009: 23).

Otra forma de gobierno bajo el sistema parlamentario es el de minoría. Bajo esta figura, el partido que obtenga el mayor número de asientos en la Cámara de los Comunes, siempre y cuando sea menor al 50 por ciento, es el que elige a su líder como primer ministro. La principal dificultad de esta opción radica en que dicho gobierno se enfrenta a una mayoría opositora, la cual suele manifestarse bastante dispuesta a obstaculizar la acción del partido gobernante. Lo anterior crea la necesidad de que este último busque alianzas con alguna minoría parlamentaria para garantizar así la continuidad de su gestión. Por esta razón, las disidencias del mismo partido al interior de los gobiernos de minoría suelen ser de alto riesgo si no logran sofocarse a tiempo (Kam, 2009: 46).

La tercera opción de gobierno según el esquema parlamentario británico es la del gobierno de coalición. Esta figura estimula la cooperación entre diferentes actores políticos partidistas, abriendo espacios para nuevas opciones, ya que alguna de las dos fuerzas dominantes debe ampliar e incluir en su agenda programas de otras agrupaciones para lograr su apoyo y sus votos en la Cámara de los Comunes. De esta forma, el líder del partido que logra convencer a otros diputados de votar a su favor es el que al final podría obtener el cargo de primer ministro. Ello gracias a que logró sumar el 50 por ciento más uno de los sufragios del Parlamento, sin importar que los mismos provengan de más de un partido político, además del que encabeza el propio candidato.

Este esquema de gobierno en realidad puede considerarse más democrático, pues otorga espacios de acción gubernamental a minorías políticas que de otra forma jamás podrían ser contempladas como serios contendientes al poder; no obstante, la duración de este tipo de gobiernos no suele ser extensa, ya que los conflictos al interior de los partidos que conforman la coalición, aunados a la presión del que encabeza la primera oposición, regularmente son elementos que juegan en contra para el partido gobernante. Asimismo, debe considerarse que los sectores más tradicionalistas suponen

que los gobiernos de coalición no son capaces de tomar decisiones difíciles, además de que se cree que los países con representación proporcional no necesariamente son tan efectivos en materia económica. Éste es sin duda un elemento distintivo del sistema parlamentario que desde el siglo xx es mejor conocido como Westminster (Seidle, 2010: 516).

En este punto es necesario recordar que el desarrollo del parlamentarismo británico adoptó en el siglo xx un nuevo concepto conocido mundialmente como sistema Westminster, al cual hemos aludido de manera constante en este libro y que suele ser un elemento común de referencia para la vida política de Australia y Nueva Zelanda. En Canadá y Sudáfrica se habla de la herencia Westminster para referirse a sus sistemas de gobierno; en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte se ha llegado a utilizar como una abreviatura del sistema gubernamental. Por lo tanto, la mención de los gobiernos con herencia británica —considerando a Inglaterra como madre del parlamentarismo— y el término Westminster son utilizados como sinónimos (Rhodes, Wanna y Weller, 2011: 1-4).

En términos históricos, el concepto Westminster fue oficializado en 1931 por la Corona británica al otorgar mayor autonomía en materia de política exterior a los miembros del Imperio. De esta forma, el documento avalado por la Corona estipuló que los dominios de Australia, Terranova, Sudáfrica, el Estado libre de Irlanda, Nueva Zelanda y Canadá deberían nombrar, mediante sus respectivos primeros ministros, a un gobernador general como representante del monarca. Lo más trascendente del Estatuto de Westminster fue que dotó de igualdad y capacidad de autogobierno a sus dominios, no obstante que naciones como Canadá y Nueva Zelanda ya habían recibido la venia real para ser comunidades autónomas desde el siglo xix. Desde ese momento, ambos países estuvieron en posibilidades de elegir a sus comunes y, por ende, a sus primeros ministros sin intervención directa de la metrópoli (Tidridge, 2011: 46).

Por ello el siglo xix es fundamental para entender los elementos que convergieron para dar forma al actual sistema parlamentario británico y a sus instituciones. De hecho, el propio sistema electoral emanado de este tipo de gobierno encontró en los partidos políticos las herramientas adecuadas para asegurar su subsistencia. Justo es señalar además que este sistema de elección de representantes fue modificando la propia mecánica política del Reino una vez que se consolidó, en el siglo xx, un esquema que convirtió a los

asientos parlamentarios en distritos específicos, creándose al mismo tiempo una serie de efectos mecánicos que dificultaron la llegada de actores ajenos a los círculos de poder representados en los partidos hegemónicos, es decir, el Liberal y el Conservador.

Por eso resulta muy oportuno retomar las afirmaciones de Maurice Duverger en el sentido de que “[...] el carácter bipartidista del sistema inglés no está sujeto a dudas” (Duverger, 2014: 236), sobre todo porque en los países británicos, o cuya procedencia institucional y política sea británica, se ha logrado desarrollar un sistema de dos partidos hegemónicos durante gran parte de su historia.<sup>16</sup> Este dominio de dos entes políticos poderosos ha llevado al sistema electoral parlamentario en el siglo xx a convertir los distritos electorales en escaños parlamentarios, excluyendo de forma mecánica y “natural” a terceros en discordia. En otras palabras, en un sistema como el británico-anglosajón, los distritos electorales ponen en disputa solamente un asiento por distrito, y regularmente resultan vencedores los partidos grandes, pues son los únicos que disponen de recursos y bases sólidas para competir con eficiencia, a diferencia de las fuerzas emergentes. Este sistema es conocido en inglés como *single member district elections*, algo que podría traducirse como pluralidad electoral distrital de un solo miembro o simplemente como “sistema uninominal”.

Otros especialistas en el tema también sostienen que tal pluralidad electoral por distritos con un solo representante estimula sobre todo la competencia entre dos partidos, ya que disminuye las posibilidades de influencia de agrupaciones políticas pequeñas o recién surgidas de forma “mecánica, simplemente porque la operación del sistema electoral les niega asientos” (Grofman, Blais y Bowler, 2009: 2). Es decir, el sistema parlamentario Westminster facilita que los partidos grandes reciban una mayor cantidad de asientos que de votos, estimulando su sobrerrepresentación. Lo anterior sucede al mismo tiempo en que los pequeños reciben una menor proporción de asientos que de sufragios, lo que reduce su representación real (Grofman, Blais y Bowler, 2009: 3).

El politólogo francés Maurice Duverger realiza una clara explicación del sistema político británico al señalar que el jefe de Estado desempeña un

<sup>16</sup> El propio Duverger alude al fin del Partido Liberal inglés en los años veinte del siglo xx, justo cuando los laboristas ocuparon su sitio como principal agrupación partidista antagónica del Partido Conservador, lo que significó una renovación del carácter dual del sistema bipartidista británico, cuyo caso abordaremos en el capítulo siguiente.



papel muy secundario en el sistema parlamentario, es decir, el rey reina pero no gobierna. Para Duverger resulta impresionante la oposición en la estructura del Parlamento y su bicameralismo; se nota que la Cámara de los Lores no tiene ya muchos poderes y que su influencia es casi exclusivamente moral; que el gabinete tiene capacidad de disolver el Parlamento pero no lo hace porque un solo partido es el que posee el gobierno en su totalidad y no puede por ello autocensurarse, que el sistema parlamentario es un gran motor con frenos efectivos: que un gabinete homogéneo y poderoso dispone de una mayoría estable y coherente, y que allí, en el Parlamento, sólo dos partidos se reparten, en la práctica, los asientos parlamentarios, uno de los cuales asegura la totalidad del gobierno y el otro se limita a expresar de manera libre las críticas de toda la oposición (Duverger, 2014: 234-235).

De esta forma, si bien se han señalado varios elementos en juego, estas últimas referencias identificadas por Duverger permitieron a Gran Bretaña culminar el siglo XIX con un Parlamento fuerte que logró ajustarse gradualmente a las nuevas necesidades que demandaba su añejo sistema político, fundado sobre bases monárquicas y aristocráticas varios siglos atrás. Ello dio paso a una nación moderna e imperial repleta de leyes, pero discreta en su aplicación. Lo anterior consolidó una Cámara de los Comunes cada vez más fuerte y segura de su propio poder, permitiéndole al Reino encarar exitosamente los amargos desafíos que acompañarían buena parte del siglo XX.



## **EL PARLAMENTARISMO BRITÁNICO A PARTIR DEL SIGLO XX**

Como se ha visto, la llegada del siglo xx trajo no sólo una serie de adecuaciones en la dinámica política y parlamentaria de Gran Bretaña, sino también el fin de la Casa Hanover con la muerte de la reina Victoria en 1901. La sucedió Edward VII (1901-1910), hijo de Victoria y del príncipe alemán Alberto de Saxe-Coburg y Gotha, quien compartía raíces familiares con diversas casas reales europeas. Al ascender al trono como hijo de la última reina de la Casa Hanover, Edward VII tomó el título de su padre, inaugurando con ello el dominio de una nueva casa como emblema de la Corona británica: la Casa Saxe-Coburg y Gotha.

A partir del ascenso de Edward VII, los conservadores y liberales se alternaron el control de la Cámara de los Comunes, concentrando buena parte de su atención en el fortalecimiento de las mecánicas políticas y económicas puestas en marcha el siglo anterior. Del mismo modo, las crecientes demandas sociales en materia de apoyos al Estado de bienestar fueron elementos que generaron pugna entre la Cámara de los Comunes y la de los Lores, ya que estos últimos, amparados en el apoyo del soberano, decidieron vetar dicho tema en las discusiones parlamentarias, frenando con ello cualquier intento de reformas sociales.

Tal situación generó que el respaldo social a los liberales se incrementara a partir de 1905 durante casi dos décadas y recayó en las personas de Sir Henry Campbell-Bannerman, Herbert Henry Asquith y David Lloyd George, quienes desde el cargo de primer ministro tomarían como bandera política el apoyo a las clases trabajadoras. De esta manera, con el ascenso de Campbell, y gracias a su mayoría parlamentaria, se elaboraron una serie de reformas sociales y legislativas que permitían una mayor atención y dar celeridad a los asuntos de carácter popular. El personaje que estuvo detrás de la elaboración de este nuevo plan con alcances sociales y dirigido a eliminar la pobreza

fue el diputado David Lloyd George, el más famoso de los radicales británicos del siglo xx (Government UK, 2016c).

Sin embargo, pese a que la reforma —conocida en Gran Bretaña como *People's Budget*— fue presentada en 1909 y aprobada por la Cámara de los Comunes al año siguiente, la Cámara de los Lores decidió vetarla nuevamente, atribuyéndose un ejercicio que tenía cientos de años de no llevarse a cabo. A partir de ese momento fue evidente que el principal obstáculo para aprobar la reforma no era solamente la fracción del Partido Conservador, sino la mala comunicación entre ambas cámaras, ya que la de los Lores había logrado aliarse con algunos comunes conservadores y con el rey para frenar una ley que abiertamente beneficiaba a los sectores sociales más necesitados.

Debe añadirse que el veto de la Cámara de los Lores fue apoyado abiertamente por el monarca Edward VII, y se centraba en evitar que se invirtieran mayores recursos públicos en la educación, la salud y la vivienda de los trabajadores, pues ello, desde luego, representaba un incremento a los impuestos, sobre todo para los sectores más favorecidos del Reino. También es preciso agregar que entre las medidas políticas liberales se incluían apoyos a los sindicatos y a los diputados nacionalistas irlandeses, quienes exigían mayores espacios de discusión con el monarca para comunicar al Pleno la molestia irlandesa ante la adhesión de su país a la Gran Bretaña desde principios del siglo XIX. La razón era que los irlandeses habían quedado como una minoría católica en el Reino. De este modo, la nueva propuesta parlamentaria liberal quedó atorada en 1910, lo que generó el disgusto de amplios sectores sociales.

Sin embargo, tras la repentina muerte del rey Edward VII, su hijo y heredero al trono, George V (1910-1936) no tuvo más alternativa que ceder ante la presión del gobierno del primer ministro y firmar la Ley Parlamentaria de 1911, lo que obligó a la Cámara de los Lores a levantar su veto. Es conveniente recordar que fue la reina Anna, con su especial personalidad, quien doscientos años antes había sido la última soberana en negarse a firmar abiertamente leyes aprobadas por el Parlamento. Por eso precisamente, desde el reinado de Victoria comenzó a llevarse a la práctica una ley no escrita en Gran Bretaña, según la cual al soberano se le impide negarse a firmar leyes y reformas aprobadas desde la Cámara de los Comunes. Así, con el sometimiento de George V a la Cámara de los Comunes desapareció el último vestigio de gobierno personal monárquico en territorio británico, un anhelo de la clase política del Reino desde siglos atrás (Parmele, 2016: 83).

Una vez aprobado el *People's Budget*, el Partido Liberal se centró en elaborar una reforma parlamentaria que asegurara la total independencia de la Cámara de los Comunes frente al monarca para así eliminar de un solo golpe la influencia de la Cámara de los Lores en la política británica. De este modo los liberales, amparados en su mayoría, y con buenas relaciones con otras fracciones como los diputados laboristas y los nacionalistas irlandeses —además de contar con el control absoluto del gabinete— concentraron sus esfuerzos en hacer pública su postura de apoyo decidido a la clase trabajadora; para eso elaboraron una nueva ley en 1911 en la que, entre otras cosas, se prescindía de la figura del líder de la oposición en la Cámara de los Lores. En su lugar se determinó que quien desempeñara esa función en la Cámara de los Comunes también lo haría en la de los Lores, buscándose con ello evitar nuevos episodios en donde la Cámara alta encontrara mecanismos constitucionales para aliarse con el monarca, y juntos vetar reformas y leyes propuestas para beneficiar a las mayorías.

Esta reforma parlamentaria de 1911 incluía abolir el derecho de los Lores a vetar cualquier ley financiera y de gobierno, la posibilidad de que una reforma de ley que fuera rechazada tres veces por los Lores se convirtiera en ley de manera automática y disminuir la duración de los ejercicios parlamentarios de siete a cinco años (Government UK, 2016d). Lo anterior permitió a la Cámara de los Comunes erigirse como el pilar principal de la política británica a partir de la segunda década del siglo xx.<sup>1</sup>

Todas estas medidas hicieron posible que durante los años veinte, y hasta los cuarenta, se realizara una considerable cantidad de reformas constitucionales y políticas en Gran Bretaña, que incluyeron la modificación del número de comunes de acuerdo con la densidad demográfica; el derecho al voto de las mujeres mayores de treinta años y con algún título de propiedad en 1918; el mismo derecho para todos los hombres mayores de veintiún años; el de las mujeres a ser votadas en la Cámara de los Comunes, así como la

<sup>1</sup> Debe agregarse que no obstante la aprobación de la reforma de 1911, la misma entró en operación al final de la segunda guerra mundial, sobre todo por los efectos que tuvieron las dos guerras mundiales en la vida política, económica y social británica, pues durante dicho lapso, en las décadas de los veinte, treinta y cuarenta, privó ante todo el sentimiento de orgullo nacional, solidaridad y unidad frente a las amenazas extranjeras, de manera particular en contra de Alemania. Por esa razón, la Ley de 1949 suele considerarse, en el espectro político británico, como la institucionalización y puesta en marcha de la reforma de 1911.

instalación del sistema de voto alternativo o preferencial (*alternative vote*).<sup>2</sup> Es importante señalar que este esquema sustituyó al del voto único transferible (*single transferable vote*), que se había utilizado en el Reino durante siglos.<sup>3</sup>

Durante este mismo lapso se gestó un cambio en la procedencia de muchos diputados (o comunes), ya que en los siglos previos, tal y como ya se ha señalado, provenían de círculos sociales acomodados o contaban con patrocinios de hombres poderosos a quienes servían en el Parlamento. Por ello, en el siglo xx comenzó a ser cada vez más común observar a diputados de la clase trabajadora, quienes incidían de múltiples formas para insertar temas que favorecieran a los obreros y a los sectores más vulnerables.

Este fenómeno coincidió con el surgimiento de un nuevo organismo de composición trabajadora conocido como Partido Laborista. Dicha agrupación comenzó a tomar forma a partir de 1889, después de una serie de reuniones entre grupos sindicales ingleses que buscaban una organización electoral amplia y con presencia en el Parlamento. De ese modo, en una votación entre sus agremiados 548 000 representantes votaron a favor de crear un partido de trabajadores y obreros, contra 434 000 que buscaban sumarse al Partido Liberal y crear presencia ahí o en otros partidos que fueran surgiendo (Duverger, 2014: 22). El fundador y primer líder de la nueva agrupación fue, en 1900, Keir Hardie, un obrero y minero del carbón que llegó a ser

<sup>2</sup> Este modelo es conocido también como segunda vuelta instantánea (*instant-runoff voting* “IRV” o *alternative vote* “AV”). En ella se pide al elector que numere sus preferencias entre varios candidatos, comenzando con el 1 asignado a su mejor opción, el 2 para la segunda, y así de manera sucesiva con el resto de los candidatos. En las rondas de conteo de votos se va eliminando al que menor cantidad obtenga, otorgándole dichos sufragios a quienes estaban como segunda opción en la misma boleta. De este modo, en tres o cuatro rondas se elimina a todos los candidatos hasta quedar sólo dos. En este momento, quien reciba más votos como segunda, tercera o cuarta opción, y que alcance el 50 por ciento más uno, será el ganador y se lleva toda la representación. Este sistema se aplica hoy en Australia para elegir a sus diputados para la Cámara de los Comunes.

<sup>3</sup> Este sistema de votación (*single transferable vote* “STV”) hace que el elector elija a los candidatos de su preferencia, comenzando con el 1 como su mejor opción, y así sucesivamente con el 2, 3, 4, etcétera. El procedimiento lo explico a continuación: primero se divide el número de votantes entre el número de candidatos más un número uno. La fórmula es la siguiente: “X” (# de votantes) entre “Y” (# de candidatos) + 1 = R (resultado), quedando la fórmula como sigue:  $X/Y+1=R$ . Así, en una primera ronda se suma el total de votos para cada uno de los prospectos. En una segunda los candidatos a la cabeza otorgan la mitad de sus votos a los que estaban como segunda opción en las boletas, de manera que pierden votos en esta ronda. En una tercera se eliminan quienes se encuentran a la zaga y sus segundas, terceras, cuartas (etcétera) opciones se suman a los aspirantes que siguen con posibilidades. En una cuarta ronda se suma la totalidad de votos acumulados entre los punteros, agregando el número 1 al que queda a la cabeza para asegurar la mayoría de al menos el 50 por ciento más uno (*Elections STV*, 2016).

diputado en la Cámara de los Comunes. Él mismo organizó todo un movimiento obrero que reivindicaba los derechos de la clase trabajadora, tomando como base la filosofía económica marxista. Su movimiento pugnaba por la propiedad colectiva de los medios de producción, pero no impulsaba una revolución popular para tomar el poder. Tal unión política obrera y trabajadora pronto tuvo eco en el Reino, principalmente en Inglaterra, Escocia y Gales.

Es importante añadir que fue durante este mismo periodo de principios del siglo xx, más específicamente en 1912, cuando el gobierno liberal de Herbert Henry Asquith determinó, con el apoyo del Parlamento, otorgar un salario de cuatrocientas libras a los integrantes de la Cámara de los Comunes (Norton, 2009: 274). Esa medida permitió a los diputados laboristas concentrar su atención en las demandas de sus representados, ya que hasta ese momento eran los propios sindicatos los encargados de reunir los fondos entre sus agremiados para ofrecer un sueldo a los comunes que los representaban en el Parlamento.

De esta forma, puede considerarse que el ejercicio de la política británica comenzó la etapa formal de profesionalización de sus políticos a partir de 1912. Paradójicamente, esta reforma liberal fue mermando su propio poder con el paso de los años, ya que a partir de ese momento tanto los diputados laboristas como los independentistas irlandeses elaboraron propuestas parlamentarias mejores y más profesionales, logrando que su apoyo se convirtiera en un elemento imprescindible para la acción del gobierno liberal frente a los conservadores.

Fue tal vez por este carácter institucional y profesional de la política del Reino Unido desde principios del siglo xx que la oposición laborista aceptó seguir las fórmulas impuestas por el sistema parlamentario británico y decidió trabajar arduamente para reformarlo y no para derrocarlo. De hecho, “el marxismo británico fue siempre dominado por intelectuales, y comparado con otros movimientos europeos siempre resultó muy limitada la coordinación entre intelectuales y trabajadores al interior del socialismo británico” (Burns, 2010: 168).

De vuelta con el tema del origen social de los comunes en el Parlamento, si bien las clases trabajadoras vieron incrementar poco a poco su presencia en los organismos políticos, fueron los conservadores quienes postularon a los comunes con mayores grados de educación, sobresaliendo los abogados, militares y hombres de negocios. Así, el siglo xx fue testigo de cómo la Cámara

de los Comunes se convirtió finalmente en el complejo crisol en el que se encontraban representadas todas las fracciones sociales del Reino. Lo anterior significó una gran aportación y se convirtió en una de las principales características del sistema británico: la representación real de los ciudadanos en la Cámara baja.<sup>4</sup>

En lo que corresponde al desarrollo partidista debe agregarse que las condiciones políticas, económicas y sociales del siglo xx permitieron que el añejo sistema bipartidista británico se transformara brevemente en uno tripartita, como resultado del crecimiento del Partido Laborista. Lo anterior fue posible gracias a que el Partido Liberal estableció alianzas con los laboristas a fin de no colocar candidatos en un mismo distrito y así no quitarse votos entre sí, todo ello con tal de derrotar a los del Partido Conservador. De esta forma, mientras más laboristas se integraban al Parlamento, al mismo tiempo, los gobiernos liberales establecían leyes que garantizaban protección a los sindicatos para no ser demandados por daños y perjuicios en caso de huelgas de sus trabajadores, tema que formaba parte de la agenda central del movimiento laborista británico en aquellos años (Burns, 2010: 171). De tal manera, la percepción general era que la política progresista del país provenía más del movimiento laborista que del Partido Liberal, el cual continuaba acogiendo en su seno a amplios sectores burgueses tradicionales británicos.

Con estas condiciones en juego, el Partido Laborista llegó a ocupar el sitio de primera oposición al gobierno conservador de Bonar Law a principios del siglo xx. Ya en 1924, logró ganar sus primeras elecciones, colocando por primera vez a un laborista como primer ministro, Ramsay MacDonald, quien al frente de un gobierno de coalición duraría pocos meses en el poder. A pesar de ello, volvería años después a ocupar el cargo, de 1929 a 1935. Lo anterior puso en evidencia el declive del Partido Liberal, ya que muchos de sus integrantes fueron sumándose al Partido Laborista. Esto último fortalece la tesis de Maurice Duverger de que:

[...] Inglaterra [Gran Bretaña] conoció dos partidos a través de toda su historia, hasta 1906, cuando el laborismo comenzó a manifestar su poder que, desde 1918 y sobre todo desde 1924, ha entablado un proceso de eliminación del

<sup>4</sup> Esto mismo, pero con directrices específicas, se desarrolló en Estados Unidos para que la Cámara de Representantes se expresara como un órgano de representación genuino de la gente y para la gente. Sus dinámicas, características y procesos están explicados de manera minuciosa en *El federalista* (Hamilton, Madison y Jay, 1998).



Partido Liberal, que tiende a reconstruir un nuevo dualismo y parece actualmente a punto de realizarse, habiendo quedado reducidos los liberales a un 1.44 por ciento de los asientos parlamentarios. Si se compara esta evolución con la de los demás países del *Commonwealth*, el parecido general es bastante notable (Duverger, 2014: 236-237).

Sin embargo, pese a esta transformación del sistema de partidos al interior del Parlamento británico —que incluso podría haber puesto en jaque la existencia y continuación de las bases políticas del Reino— resulta sobresaliente que dicho fenómeno temporal tripartidista y su retorno al tradicional bipartidismo se dieron en medio de una precisa institucionalización de las formas al interior del sistema político y electoral del Reino Unido.

Es oportuno añadir que fue durante este periodo cuando el monarca George V otorgó en 1917 su venia para cambiar el nombre de la casa familiar, Saxe-Coburg y Gotha, por el de Casa Windsor (*The London Gazette*, 1917). El motivo de este cambio fue la conflagración bélica en contra de Alemania durante la primera guerra mundial, ya que, como se recordara, la familia real británica tenía orígenes alemanes, y mantener un apellido alemán en la Casa Real resultaba contradictorio para el país en tiempos de guerra.

Así pues, mientras el país concentraba sus esfuerzos en concretar alianzas y combatir enemigos en Europa, su sistema político fue fortaleciéndose, encontrando los cauces para hacer más efectiva la acción de gobierno y la política parlamentaria. Una muestra de ello es el desarrollo de los gabinetes en la sombra (*Shadow Cabinets*). Este modelo parlamentario fue creado por los diputados laboristas en los años veinte; sin embargo, no sería sino hasta los cincuenta cuando dicha figura adquirió un papel más efectivo para comunicar sus posiciones a la opinión pública (Norton, 2009: 277). Con el paso de las décadas este ejercicio del gabinete en la sombra se ha convertido en una práctica eficaz para exponer de manera abierta las divergencias políticas entre el partido gobernante y la oposición. Este gabinete puede entenderse como un equipo de voceros de alto nivel designado por el líder de la oposición. Sus integrantes son comunes electos cuyo papel principal es sostener una postura contraria a cada ministro del gabinete del gobierno en funciones, cuestionando y desafiando sus decisiones en cada materia. El objetivo de este ejercicio es presentarse como una alternativa viable y con capacidades para gobernar frente a los electores (Government UK, 2016e). De hecho, puede ser considerado como una especie de gobierno en espera.

De esa manera, el parlamentarismo británico encontró, sobre todo durante la primera mitad del siglo xx, las herramientas para su desarrollo institucional. Un elemento que sin duda manifiesta lo anterior es la conformación de comités parlamentarios, a través de los cuales se transparentó la acción de gobierno en los negocios públicos; ello en el lapso que corría entre que se aprobaban y entraban en vigor las nuevas leyes (Norton, 2009: 279). La característica principal de los comités parlamentarios es que desarrollaron la capacidad de atender y dar seguimiento puntual a diversos asuntos de interés público de forma simultánea. Sus integrantes son comunes o lores de distinta extracción partidista con facultades para discutir y proponer nuevas leyes, así como para intervenir en temas de carácter económico con impacto nacional (Government UK, 2016f). Desde sus orígenes su designación compete exclusivamente al *speaker*.

De forma paradójica, el triunfo británico en la primera guerra mundial generó una serie de dificultades entre Gran Bretaña y sus dominios: Canadá, Terranova,<sup>5</sup> Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, ya que éstos habían perdido cientos de miles de combatientes en un conflicto que defendía sobre todo los intereses británicos en Europa. Por ello, dichos dominios expresaron al Reino sus intenciones de alcanzar la autodeterminación en asuntos internacionales, marcando así una línea divisoria con los intereses imperiales británicos. Por tal motivo, la Corona encargó elaborar, a través del Parlamento, un reporte pormenorizado en el que un comité estableciera los lineamientos para construir nuevas relaciones interimperiales con el fin de otorgar mayor autonomía y nuevas capacidades de autogobierno a los miembros del Imperio.

El resultado fue el Estatuto de Westminster de 1931, que garantizó la independencia legislativa y su autonomía en materia de política exterior a Australia, Terranova, el Estado Libre de Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Canadá. Lo anterior se daría con el estatus de comunidades con gobiernos iguales y separados del gobierno imperial británico (Tidridge, 2011: 47).

Precisamente, el Estatuto de Westminster fue uno de los últimos acontecimientos de importancia durante el reinado de George v, quien fallecería por cuestiones pulmonares pocos años después. Su gestión se caracterizó por

<sup>5</sup> En aquellos años la provincia de Terranova (o Newfoundland en inglés) se encontraba administrada por autoridades diferentes de las canadienses. Su incorporación definitiva a Canadá se concretó en 1949, una vez puesto en evidencia el declive del Imperio británico.

la moderación en sus relaciones con el Parlamento y un estilo de vida más discreto que sus antecesores. Lo sucedió en el trono su hijo Edward VIII (1936), quien como jefe de la Iglesia anglicana se vería imposibilitado para casarse con una mujer estadounidense divorciada en dos ocasiones. Por tal motivo, decidió abdicar en favor de su hermano menor, George VI (1936-1952), quien sería el responsable de encarar uno de los procesos más amargos del Reino: la segunda guerra mundial. Cabe señalar que durante este periodo de crisis sucesoria, el Parlamento se constituyó como el organismo institucional que coadyuvó a solventar dicho trance sin rompimientos institucionales de por medio, guardando una posición imparcial y mesurada en este tema que atañía principalmente a la familia real.

Dicha crisis sucesoria de la Casa Windsor, con tres reyes en el trono en un mismo año (1936), prácticamente coincidió con el regreso del Partido Conservador como cabeza de la Cámara de los Comunes después de un periodo de dominio laborista. Así, los primeros ministros Stanley Baldwin (1935-1937) y Neville Chamberlain (1937-1940) experimentarían al interior del Reino un periodo de abundancia económica, pero también, al exterior, enfrentarían el crecimiento del poderío alemán y la amenaza que significaba para el país, expresada en el inicio de las hostilidades militares europeas. Durante estos periodos conservadores, el parlamentarismo británico se inclinó hacia la conformación de coaliciones partidistas para asegurar la unidad nacional y facilitar así la acción de gobierno. Ahora bien, debe reconocerse que si bien se mantenían divergencias entre laboristas y conservadores durante el periodo de Chamberlain, éstas de ninguna manera comprometieron la gobernabilidad ni mucho menos la cooperación del líder laborista Clement Attlee en los esfuerzos británicos durante la guerra. Al final, aquejado por motivos de salud, Neville Chamberlain renunció al cargo de primer ministro, cediéndole el puesto su correligionario Winston Churchill (1940-1945).

El primer ministro Churchill era un personaje bien conocido en Gran Bretaña desde hacía varias décadas. De hecho, pese a ser un político identificado con el sector conservador, estuvo muy involucrado en la elaboración y aprobación del *People's Budget* que el Partido Laborista empujó años atrás. En este sentido, sus aptitudes políticas y experiencia como miembro del Parlamento no podían ponerse en duda, ya que al momento de asumir el cargo de primer ministro contaba con sesenta y cinco años de edad. Lo anterior sin

considerar que Churchill fungía como Lord del Almirantazgo<sup>6</sup> hasta antes de la renuncia de Chamberlain, además de que había ocupado el mismo cargo durante la primera guerra mundial.

De este modo, al contar con la experiencia probada del primer ministro Churchill, además de con la propia capacidad para ajustarse a cualquier eventualidad gracias a sus cimientos institucionales sólidos, el parlamentarismo británico pudo sesionar durante la segunda guerra mundial, con cambios de sede según las circunstancias, como por ejemplo cuando fue destruida la centenaria casa de la Cámara de los Comunes al interior del Palacio de Westminster, en mayo de 1941, tras los bombardeos alemanes. Este tipo de acontecimientos despertó más que nunca el sentimiento de unidad política entre todos los partidos hacia el gobierno conservador de Churchill. Incluso se estimuló la actitud de servicio al Reino entre los miembros del Parlamento, pues para finales de 1941 eran 116 los diputados o comunes, de distintas extracciones políticas, que se encontraban sirviendo al país en el frente de guerra (Norton, 2009: 280). En este sentido, el famoso discurso de Churchill al asumir su cargo como primer ministro resulta muy elocuente: “Yo diría a la Cámara, como dije a los que se han unido a este gobierno: no tengo nada que ofrecer más que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor [...]; ¿cuál es nuestro objetivo?, victoria a toda costa, victoria a pesar del terror, victoria por largo y duro que sea el camino, porque sin victoria no hay sobrevivencia [...]. En estos momentos me siento con derecho a reclamar la ayuda de todos, y digo vengan todos, vamos a avanzar juntos con nuestras fuerzas unidas”.<sup>7</sup> Cabe agregar que esta actitud estoica de los líderes británicos en medio de la guerra coincidió plenamente con la postura asumida por el propio monarca, George VI, quien pese a la insistencia de la clase política nacional decidió permanecer en Londres junto a su pueblo y su Parlamento durante los bombardeos alemanes. Tal situación sin duda generó un acercamiento sin precedentes entre el rey y la nación justo en momentos en que el país enfrentaba la mayor amenaza de su historia.

Debe mencionarse que el recurso de la comunicación radiofónica se convirtió en un elemento central para mantener a la ciudadanía informada acerca

<sup>6</sup> Hasta los años sesenta del siglo xx, el Lord del Almirantazgo fue considerado como la cabeza más visible de la Real Armada Británica. A partir de 1964 este cargo se integró al Consejo de Defensa del Reino Unido por Decreto Real (*The London Gazette*, 1964).

<sup>7</sup> Se puede escuchar el audio completo en YouTube, Winston Churchill, “Blood, Toil, Tears and Sweat”, <<https://www.youtube.com/watch?v=fKBR0igDPfM>> [visto en septiembre de 2016].

de lo que se discutía en la Cámara de los Comunes y las decisiones que ahí se tomaban. A partir de ese momento la elocuencia en los discursos radiofónicos emitidos desde el Parlamento británico se transformó en una vía para mantener cercanía y comunicación entre el pueblo y sus representantes. De hecho este medio de comunicación y el estilo argumentativo desarrollado en Gran Bretaña llevó a que el propio ministro encargado de la propaganda alemana, Joseph Goebbels, recomendará a Adolf Hitler adoptar el mismo tono realista expresado por Churchill en sus mensajes (Burns, 2010: 205). Quizá sea por ello que se ha expresado —respecto del sistema parlamentario— lo siguiente: “[...] lo más importante que ha sucedido en Gran Bretaña fue que esa nación decidió ganar o perder la guerra según las reglas establecidas a través de los procedimientos parlamentarios” (Norton, 2009: 281).

Nos parece importante resaltar que pese a los efectos de la segunda guerra mundial el sistema político de Gran Bretaña emergió como un paradigma sólido y probado, ya que si bien el gravísimo conflicto bélico de mitad de siglo xx entrañó amenazas profundas para el país, es una realidad que el prestigio del parlamentarismo británico cobró nuevas dimensiones como un régimen sólido y eficaz. Además, debe añadirse que lo anterior sucedió al mismo tiempo en que Estados Unidos emergió como la superpotencia hegemónica de Occidente, una de cuyas consecuencias inmediatas fue hacer inviable la unidad política del viejo Imperio británico, que se encontraba maltrcho y con buena parte de su infraestructura destruida por la guerra.

Aunado a ello, debe agregarse que el final de la guerra dejó a la economía del Reino Unido en condición de dependencia absoluta de Estados Unidos, y con una pérdida de población significativa de alrededor de 450 000 muertos. Asimismo, se debe considerar que los países de la Commonwealth, y del Imperio, contabilizaban también cientos de miles de fallecidos entre sus poblaciones. Por ello, en definitiva el siglo xx vio cómo se disolvió el orgullo del Imperio británico para dar paso a años de racionamiento de todo tipo entre sus habitantes, y a la incorporación del Reino como un elemento más en la órbita de influencia estadounidense (Burns, 2010: 204-206). Todo lo anterior sucedió frente al otro gran hegemón que se levantó victorioso al este de Europa tras el fin de la segunda guerra mundial: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

La etapa de la posguerra en Gran Bretaña provocó una serie de cambios y adaptaciones en la vida política que se reflejaron de diversas formas. La

más inmediata fue la derrota de Churchill en las elecciones generales de 1945 que, por cierto, fueron los primeros comicios en diez años. En este proceso, el Partido Laborista resultó el vencedor, por lo cual integró un gobierno de mayoría que encabezó su líder, Clement Attlee, como primer ministro durante el periodo 1945-1951. Él impulsó un programa gubernamental con mayor control estatal, el cual buscaba responder a las urgentes demandas sociales en materia de vivienda, empleo y seguridad social, que en conjunto constituyeron los pilares del sistema de bienestar británico. Para lograrlo, los laboristas impulsaron un plan de nacionalización de servicios básicos, cuyo mejor ejemplo es el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés),<sup>8</sup> creado en 1945 y puesto en marcha tres años después. El NHS opera en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte de manera separada pero con los mismos criterios. Así, esta institución se concentra en proveer servicios integrales de salud que incluyen, entre otros, rehabilitación, prevención y cura de enfermedades.<sup>9</sup>

A nivel interno, la búsqueda de soluciones para una demandante y necesitada población después de los estragos de la guerra se conjugó con la necesidad británica de posicionarse como una nación con cierto poderío, pese a las carencias económicas. Por ello, el gobierno laborista tomó la decisión de implementar un programa nuclear para reforzar su posición como potencia vencedora de la segunda guerra mundial, meta que alcanzaría en los años cincuenta, colocándose como el tercer país —detrás de Estados Unidos y de la Unión Soviética— en desarrollar de forma autónoma armas nucleares.

En el ámbito internacional, el periodo de la posguerra obligó a Gran Bretaña a salir de sus antiguos territorios por todo el mundo, estimulando con ello la descolonización de África, Asia y Medio Oriente. El motivo principal fue la falta de recursos económicos para mantener su posición imperial, pero también el rechazo abierto de las dos potencias victoriosas de la guerra (Estados Unidos y la Unión Soviética) a la existencia de remanentes coloniales de terceras potencias. Ante ello, Gran Bretaña no tuvo mejor opción que replegarse del escenario internacional en sus territorios de ultramar, y en su lugar fortalecer desde los años cincuenta a la Mancomunidad Británica, la *Commonwealth of Nations*, cuyo principal objetivo es alcanzar la coopera-

<sup>8</sup> National Health Service.

<sup>9</sup> Para mayor información acerca de este servicio de salud pública, que ha servido de modelo para el resto de Europa y otras partes del mundo, véase Sir William Beveridge (1942).

ción entre los diversos países con orígenes políticos británicos. Estos Estados reconocen la autoridad de la Corona del Reino Unido, pero al mismo tiempo son soberanos y no se encuentran precisamente sometidos a su jurisdicción (Tidridge, 2011: 200-206).

Es importante señalar que una vez rotos los lazos con sus antiguas colonias, Gran Bretaña no se incorporó como un actor activo en los esfuerzos de unidad europea, sino que más bien se orientó a mantener una distancia con el resto de Europa, al tiempo en que estrechó sus vínculos militares y económicos con Estados Unidos, y en menor medida con sus antiguos dominios de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, ya que estos últimos eran los países con los cuales guardaba mayores coincidencias económicas, políticas, sociales y culturales.<sup>10</sup>

El inicio de la década de los cincuenta dio la oportunidad a los conservadores para regresar al poder en las elecciones generales de 1951, en las cuales Winston Churchill volvió a ganar y a ocupar el cargo de primer ministro, de 1951 a 1955. Durante dicho periodo sobrevino la muerte del rey George VI a principios de 1952.

Lo sucedió en el trono su hija Elizabeth II, convirtiéndose de inmediato en un símbolo de la continuidad de los grandes íconos británicos, y del patriotismo, pues en diversas ocasiones su figura pública interactuó con la población en tiempos de guerra. Puede considerarse que el ascenso de Elizabeth II coincidió con una etapa de complicadas relaciones británicas con lo que fue su imperio y con Europa continental, contribuyendo a revivir el muy añejo espíritu identitario británico de lejanía y separación del resto de Europa (Burns, 2010: 217).

Ahora bien, debe precisarse que fue justamente en la década de los cincuenta del siglo XX cuando los partidos Conservador y Laborista comenzaron a compartir agendas y a moderar sus discursos ideológicos para alcanzar metas de desarrollo social y económico. En el ámbito parlamentario, la política británica se mostró más efectiva como herramienta para solucionar conflictos,

<sup>10</sup> Esta posición británica se hizo más evidente después de su intento fallido por mantener el control del canal de Suez —entre octubre y noviembre de 1956— cuando junto con Israel y Francia pretendió someter militarmente a Egipto para mantener el control sobre el canal; no obstante, la desaprobación estadounidense obligó a Gran Bretaña a replegarse y a desistir de su intento. Así, la conocida “crisis del canal de Suez” fue la última acción militar británica de gran calado a nivel internacional. A partir de ese momento se sometería a la dirección militar estadounidense en los conflictos internacionales, bajo el amparo de las Naciones Unidas.

y sus partidos políticos, cada vez más como estructuras homogéneas y verticales de poder.

A mediados de los cincuenta el estado de salud de Churchill decayó, lo que obligó al Parlamento a convocar a nuevas elecciones, a partir de las cuales sus correligionarios, Sir Anthony Eden, Harold Macmillan y Sir Alec Douglas-Home encabezarían la Cámara de los Comunes hasta 1964, consolidándose así el dominio del Partido Conservador durante poco más de catorce años. Durante esta etapa, el Parlamento británico se concentró en mantener el firme apoyo a las políticas sociales impulsado por sus antecesores laboristas. Al mismo tiempo, desarrolló planteamientos legislativos para no perder soberanía en el momento de homologar las leyes británicas con las nuevas reglamentaciones europeas, que estimulaban la unidad comercial, económica y política en el mediano o largo plazos.

Bajo esta dinámica, los comunes británicos establecieron comités especiales que estudiarían los nuevos proyectos de legislación europea para así estar en posibilidades de elaborar recomendaciones a la Cámara de los Comunes respecto de las leyes que se estaban discutiendo y proponiendo en Europa, las cuales requerían la atención total del Parlamento en ambas cámaras. Un claro ejemplo de ello fue la ratificación británica de la Convención Europea de Derechos Humanos en 1951. Es conveniente señalar que dicho tema ya se había discutido en el Parlamento británico —a través de sus comités especiales— de modo que cuando la propuesta fue enviada a los diferentes países del continente, Gran Bretaña la encaró con la seguridad de conocer el tema (Stewart, 2009: 284). Por ello, su aprobación fue un ejercicio meramente protocolario. Lo anterior contrastaba con el resto de Europa, en donde el tema de los derechos humanos era un asunto relativamente nuevo a nivel legislativo, pese a que ya se había discutido y consensado por diferentes gobiernos de la región en diversos foros multilaterales.

El periodo de los primeros ministros *tories*, Eden, Macmillan y Douglas-Home (1955-1964), coincidió con un crecimiento económico constante y una política de descolonización forzada, sobre todo después del fracaso en el canal de Suez. Esta política de descolonización, prioritariamente en África, fue declarada oficial por el primer ministro Harold Macmillan a través de un famoso discurso ofrecido en Sudáfrica conocido como “Los vientos del cambio”, en el cual expresó su aceptación del nacionalismo africano de la siguiente forma:



El viento de cambio está soplando a través de este continente [...]. Como ya he expresado, el crecimiento de la conciencia nacional en África es un hecho político y hay que aceptarlo como tal. Eso significa, y será juzgado por ello, que debemos llegar a un acuerdo. Creo sinceramente que si no lo hacemos podríamos poner en peligro el precario equilibrio entre el Este y el Oeste del que depende la paz del mundo [...]. Lo que ahora está en juego es mucho más que nuestra fuerza militar o nuestras habilidades diplomática y administrativa; es nuestro estilo de vida.<sup>11</sup>

Fue así como Gran Bretaña dio paso a la separación de África de su espacio imperial, tal y como lo había hecho con la India pocos años antes,<sup>12</sup> al igual que con el Medio Oriente. De ese modo, los conservadores fueron los encargados de administrar la caída del Imperio británico, y al mismo tiempo los responsables de fortalecer el sistema de seguridad social impulsado por sus contrincantes laboristas.

Asimismo, tras un breve periodo del primer ministro *torie* Sir Alec Douglas, de 1963 a 1964, los laboristas regresaron al poder con un gobierno de mayoría con Harold Wilson al frente. Éste, cuyo primer mandato se extendió de 1964 a 1970, manifestó pocas coincidencias con las agendas socialistas contemporáneas y con el control público de la industria. Incluso se interesaba más por invertir en desarrollo tecnológico para poner a Gran Bretaña a la vanguardia científica, que en incrementar los beneficios sociales de los trabajadores o en fortalecer sus sindicatos (Burns, 2010: 221-222).

Cabe señalar que durante esa etapa de los años sesenta, miles de habitantes de las antiguas colonias del Imperio comenzaron a emigrar a Gran Bretaña, y fue hasta ese momento cuando el gobierno británico decidió imponer frenos a la migración, sobre todo debido a los sentimientos xenófobos y muchas veces racistas hacia los inmigrantes. El problema era que la clase trabajadora blanca británica los responsabilizaba de la subvaloración de la fuerza de trabajo en el país. Dicha tendencia llevó de nuevo a los conservadores al poder en la persona de Edward Heath, quien de 1970 a 1974 buscó establecer una serie de recortes a la agenda social para recuperar la economía y combatir el creciente desempleo. Al mismo tiempo, procuró limitar el poder

<sup>11</sup> Se puede escuchar el audio completo en YouTube, "PM Harold Macmillan: Wind of Change Speech at the Cape Town Parliament, 3 February 1960", en <<https://www.youtube.com/watch?v=c07MiYfpOMw>> [visto en octubre de 2016].

<sup>12</sup> En 1947 el Parlamento británico aprobó la *Indian Independence Act*, mediante la cual se hacía efectiva la separación de la India del Imperio a partir del 15 de agosto de dicho año.

de los sindicatos, situación que ejerció presión a su gobierno ya que la desocupación no retrocedía (*BBC News*, 2016a).

En el ámbito continental, el gobierno de Heath incorporó a Gran Bretaña al Mercado Común Europeo en 1972, así como al Acuerdo Europeo del Carbón y el Acero, y a la Comunidad Europea de Energía Atómica (Government UK, 2016g). Con estas acciones Heath buscaba incluir al Reino de la Gran Bretaña en las dinámicas que venían poniéndose en marcha en Europa. Ese mismo año se intensificaron los conflictos por parte de grupos nacionalistas en Irlanda del Norte, los cuales exigían, a través de acciones paramilitares, la salida de Gran Bretaña de la isla para permitir la reunificación de Irlanda en una sola república. Lo anterior provocaba un fuerte conflicto con los unionistas irlandeses, que buscaban mantener su dependencia y lazos con el gobierno británico. Así, la búsqueda de una salida negociada tuvo como consecuencia que se percibiera al gobierno conservador de Heath como un mediador fallido, ya que a partir de su gestión las divisiones entre separatistas y unionistas irlandeses generaron mayor inseguridad, acrecentándose la violencia durante décadas.<sup>13</sup> Al mismo tiempo, debe agregarse que los movimientos nacionalistas en Escocia y Gales crecieron en intensidad en el mismo lapso, pero sin el contenido violento de los irlandeses.

De esta forma la desocupación, la lenta recuperación económica, el crecimiento de los nacionalismos en el Reino y, en general, las políticas de reducción de beneficios sociales, fueron elementos que provocaron la salida de los conservadores del poder, permitiéndoles el regreso a los laboristas, en las figuras de Harold Wilson (1974-1976) y James Calahan (1976-1979), quienes como primeros ministros concentraron sus administraciones en recuperar los niveles de bienestar social a través del incremento de impuestos a los más ricos y el combate al desempleo. Empero, la crisis económica de los setenta golpeó fuertemente a ambas administraciones, de modo que para finales de la década la falta de una actividad remunerada afectaba al 5 por ciento de los trabajadores, además de que la inflación llegó al 17 por ciento. Lo anterior obligó al gobierno de Calahan a solicitar un préstamo de emergencia al Fondo Monetario Internacional, situación que le generó duras críticas de parte de los conservadores, quienes acusaban a los laboristas de ser irresponsables en las cuentas públicas. Del mismo modo, los intentos de su gobierno

<sup>13</sup> Para información detallada sobre el caso de Irlanda puede consultarse a Paul Dixon (2001: 340-368).

para reducir la inflación a través de restricciones salariales a los trabajadores generaron paros y huelgas en todo el país. Todo este escenario caótico provocó una solicitud de pérdida de confianza de parte de la mayoría opositora en el Parlamento a principios de 1979 (Government UK, 2016h), dejando todo el escenario listo para el retorno del Partido Conservador al poder, liderado por Margaret Thatcher.

Debe agregarse que, paradójicamente, todo este periodo de inestabilidad económica y social en Gran Bretaña coincidió con una etapa de plena consolidación del Estado parlamentario, al incrementarse sus responsabilidades legales en la organización interna de ese aparato político. Lo anterior se tradujo en la independencia de los gastos y presupuesto del Parlamento, al pasar del control de la Tesorería a la administración de la propia Cámara de los Comunes. De tal modo se estableció que el *speaker*, el líder de la Cámara de los Comunes (o primer ministro) y el líder del gabinete en la sombra conformarían, a partir de 1978, un cuerpo unificado con el fin de dotar a la Cámara baja de las atribuciones suficientes para administrar sus propios fondos (Seaward, 2009: 297). Lo anterior separó definitivamente al Parlamento británico de cualquier organismo gubernamental en materia financiera, concediéndole una libertad de acción total y absoluta para administrar y destinar los fondos públicos sin supervisión externa.

Al año siguiente, esto es, en 1979, se celebraron nuevas elecciones generales y a ellas Gran Bretaña llegaría sumergida en una profunda crisis económica y de desempleo, lo cual generó descontento entre la clase media trabajadora urbana. Dicha situación favoreció el arribo del movimiento neoconservador británico más radical experimentado en el siglo xx, en la persona de la líder del Partido Conservador, Margaret Thatcher. Su administración se caracterizó por presentarse a sí misma como un movimiento con fuertes componentes morales y filosóficos, que enfatizaban valores tradicionales como el individualismo, el poder del trabajo duro y la adherencia a las tradiciones familiares (Burns, 2010: 234).

El gobierno de Thatcher se caracterizó por recortar gradualmente el esquema de protección social que brindaron las administraciones previas, ya fueran liberales, conservadoras o laboristas, con la idea de disminuir los apoyos sociales surgidos del contrato social posterior a la segunda guerra mundial. La intención era contar con mayores recursos económicos para hacer más competitivo al país en el plano financiero, una vez puesta en evidencia

la crisis del Estado benefactor a nivel mundial en la década de los setenta. Otro de los pilares centrales del gobierno de Thatcher fue su actitud abiertamente beligerante en contra de los sindicatos, ya que buscó minar su poder e influencia política en el Parlamento.

Esta tendencia de lucha gubernamental en contra de los trabajadores organizados, así como su propensión a debilitar el sistema de salud para permitir la llegada de la iniciativa privada, fue identificada en Gran Bretaña como parte de un movimiento “americanizante” del país, que privilegiaba la competitividad, la meritocracia y el interés propio. Ello quedó claramente expuesto por la propia Thatcher cuando señaló: “No hay tal cosa, no hay sociedad; hay individuos, hombres y mujeres y ellos conforman familias. Y el gobierno puede hacer cualquier cosa excepto ser persona; la gente debe ver por ella misma primero” (*The Sunder Times*, 2016). En suma, lo que pretendía exponer Margaret Thatcher con tales planteamientos es que para ella no existía la sociedad, sino sólo los individuos que debían ver por ellos mismos sin esperar gran cosa del gobierno.

Conforme a su plan, buena parte de su atención la puso en desarticular a los poderosos sindicatos británicos, como el de los mineros, a mediados de los años ochenta, el cual resintió duramente la política agresiva del Estado británico y terminó sucumbiendo tras el cierre de minas en Gales e Inglaterra. A nivel europeo, Thatcher continuó con la política distante y diferenciadora con el resto del continente, mostrándose muy recelosa de cualquier acuerdo, sobre todo por el riesgo económico que podría conllevar comprometerse más profundamente con mecanismos multilaterales como la Comunidad Europea, de la cual Gran Bretaña formaba parte desde 1975.

Para dejar en claro esta tradicional postura británica, la primera ministra declaró —en una reunión efectuada en Bélgica frente a diversos jefes de Estado europeos— lo siguiente: “No hemos construido exitosamente las fronteras del Estado en Gran Bretaña, sólo para verlas retraerse bajo un súper Estado europeo que ejerza el poder y el dominio desde Bruselas”.<sup>14</sup> Con esta postura, dejó clara la posición de su gobierno respecto del proyecto de la Comunidad Europea y sus potenciales facultades extraterritoriales.

De tal modo, el gobierno de Thatcher rechazó la posibilidad de que Europa se erigiera como un ente político tal y como Estados Unidos funciona-

<sup>14</sup> Se puede revisar la conferencia completa en Margaret Thatcher Foundation (2016a).

ba desde hace siglos, ya que la historia y diferencias nacionales resultaban evidentes (Margaret Thatcher Foundation, 2016b). Cabe añadir que su postura respecto de Estados Unidos fue de estrecha cercanía con los gobiernos de Ronald Reagan y George Bush, con los que mantenía marcadas coincidencias ideológicas.

Su salida como primera ministra en 1990, después de tres victorias electorales, dejó en Gran Bretaña un sello particular en las labores de gobierno y en su relación con el Parlamento, el cual dominó gracias al firme liderazgo que ejerció al interior de su partido, y también por sus particulares y cercanas relaciones con la reina Elizabeth II, con quien procuró mantener reuniones semanales durante toda su gestión para construir acuerdos y lograr su apoyo moral y público en los momentos más difíciles de su administración.

Debe agregarse que fue precisamente la década de los ochenta cuando la tradicional disciplina partidista británica tendió a debilitarse, debido sobre todo a la alta profesionalización alcanzada por los comunes en el Parlamento, quienes se constituyeron en elementos activos de la Cámara de los Comunes cada vez menos dispuestos a seguir la línea de su partido, si ello significaba dañar su imagen pública ante los medios de comunicación.

Esto último llevó al Partido Conservador a emanciparse de su líder Margaret Thatcher y convocar a elecciones internas. En la segunda vuelta de dicho proceso electoral ella decidiría renunciar una vez que vio comprometido su triunfo. Su correligionario John Major la reemplazó en el cargo en 1990, y dos años después resultaría vencedor en las elecciones generales.

La salida de Thatcher del poder obedeció en buena medida a su animadversión hacia el proyecto de la Unión Europea, sobre todo después de la serie de cambios que venían gestándose en la Unión Soviética con Mijaíl Gorbachov al frente, y en la propia Europa como consecuencia de la caída del Muro de Berlín. De hecho, puede considerarse que en esos años la Cámara de los Comunes se transformó en un escenario en el cual sus miembros se manifestaban particularmente ansiosos por asegurar una amplia cobertura de sus intervenciones en el Parlamento, pero al mismo tiempo se mostraban muy recelosos de exponer una imagen vulgar e inapropiada que pudiera despertar críticas externas.

De este modo los Comunes evitaron a toda costa las deformaciones en la percepción de la opinión pública acerca del Parlamento británico, quienes lo integran, y sobre todo cuál es la importancia de lo que ahí se discute (Seaward,

2009: 298). Por ello es que la sublevación partidista en contra de Thatcher y su salida estuvieron lejos de convertirse en un circo mediático que pudiera dañar el prestigio que la Cámara de los Comunes.

La llegada de los años noventa atestiguó un cambio de dirigencia en el Partido Conservador, con un primer ministro de bajo perfil como John Major (1992-1997),<sup>15</sup> quien sería el encargado de reposicionar a su partido frente a un laborismo que ganaba terreno. Al mismo tiempo, buscó encarar los agudos cambios que se suscitaban en Europa con la reunificación alemana en 1991 y con la desaparición de la Unión Soviética al año siguiente.

Su gobierno se caracterizó por ofrecer una versión menos ideologizada del conservadurismo británico que la de su predecesora, al tiempo en que intentó no generar más conflictos con los sindicatos, los cuales se encontraban ya muy debilitados después de más de once años de duros golpes por parte del gobierno de Thatcher. A nivel parlamentario, la reconfiguración de los liberales y los socialdemócratas en un solo partido, a finales de la década previa, fue un intento del viejo Partido Liberal para obtener mayor presencia electoral frente a sus rivales laboristas; no obstante, la elección de 1992 dejó al nuevo Partido Liberal Demócrata en una lejana tercera posición, sin mayores oportunidades para influir en ese momento en la vida pública del país.

Por eso la principal oposición al gobierno de Major continuó siendo la del Partido Laborista, que desde la Cámara de los Comunes criticó los índices de desempleo y la recesión imperantes. Asimismo, presionaron a Major para adelantar las elecciones y estar en condiciones de recuperar el poder; sin embargo, el primer ministro, amparándose en el ejercicio constitucional británico, se negó a hacerlo y esperó hasta 1992 para convocarlas con el mencionado resultado a su favor.

Quizá uno de los elementos que le valió a Major ganar esos comicios en 1992 fue la activa participación británica en la primera guerra del golfo Pérsico de 1991, pues fue la mayor operación militar británica en el exterior desde la segunda guerra mundial. Por consiguiente, el desenlace favorable

<sup>15</sup> Es importante señalar que según el esquema parlamentario anglosajón, cuando un primer ministro se ve obligado a renunciar al cargo, su correligionario que lo suple tiene la opción de culminar el periodo para el cual había sido electo originalmente el saliente. Por eso John Major, pese a haber asumido el cargo a la salida de Margaret Thatcher en noviembre de 1990, decidió culminar el periodo de su predecesora hasta 1992, y fue entonces cuando convocó a elecciones generales, las cuales ganó. Es por eso que su gobierno, si bien abarcó de 1990 a 1997, en realidad su etapa como primer ministro electo fue sólo de 1992 a 1997.

para Occidente brindó a Major la fuerza suficiente para mantenerse en el poder hasta 1997.

Debe señalarse que uno de los acontecimientos más complicados para ese gobierno se dio en 1990, año en que Gran Bretaña ingresó al Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio (*The European Exchange Rate Mechanism*), creado a finales de los setenta, mediante el cual se buscaba reducir la variabilidad del tipo de cambio para hacer posible una política que permitiera la unión monetaria europea en el mediano plazo; sin embargo, el ingreso de Gran Bretaña al mencionado ejercicio generó una devaluación de la moneda local y pérdidas por más de tres billones de libras al gobierno británico.

Por eso el gobierno de Major decidió desconocer el acuerdo y sacar a su país del mecanismo con el apoyo del Parlamento. El resultado fue favorable para Gran Bretaña, ya que su moneda se recuperó pocos años después, pero el descrédito público de los conservadores por la decisión de involucrar a la nación en esa aventura económica fue castigado severamente en las urnas en las elecciones generales de 1997.

En dicho proceso electoral los laboristas regresaron al poder tras dieciocho años de gobiernos conservadores de manera ininterrumpida; no obstante, esa victoria por mayoría en la Cámara de los Comunes puede considerarse natural después de casi dos décadas de gobiernos *tories*, ya que la ciudadanía se encontraba cansada de la retórica conservadora de la responsabilidad fiscal y los recortes al gasto público.

El nuevo primer ministro laborista fue el escocés Anthony Charles Lynton Blair, mejor conocido como Tony Blair, quien era considerado un moderado y reformista más cercano al centro que a la izquierda, no obstante sus orígenes como activista sindical en Escocia. Blair logró imponerse en las elecciones generales de 1997, 2001 y 2005 con gobiernos de mayoría en las tres ocasiones, ubicándose como el único laborista en conseguirlo. Lo anterior le permitió poner en marcha una serie de políticas a nivel interno y externo sin considerables contrincantes, escudándose en buena medida en la condición mayoritaria de su partido.

Ahora bien, si el arribo de los laboristas en Gran Bretaña en los años noventa obedeció en buena medida al agotamiento del movimiento conservador, cierto es también que Tony Blair logró ofrecer una nueva imagen al electorado, tras incorporar en sus discursos el concepto de “nuevo laborismo”, el cual empujaba propuestas innovadoras a través de reconfiguraciones ideoló-

gicas, en las cuales el socialismo o la propiedad social quedaban en un segundo término, beneficiando en el mediano plazo al conservadurismo y al propio capitalismo británicos (Faucher-King y Le Galès, 2010).

A nivel parlamentario, el gobierno mayoritario de Blair puso en marcha una serie de reformas constitucionales que incluyeron la abolición de los elementos hereditarios en la Cámara de los Lores.<sup>16</sup> Esta reforma determinó mantener solamente noventa y dos lores hereditarios para aprovechar su experiencia en las labores parlamentarias, mientras que los demás serían nombrados para ocupar los cargos de forma vitalicia, pero con parámetros de meritocracia y ya no de herencia aristócrata. Lo anterior apuntaló las reformas que previamente se pusieron en marcha desde mediados de los cincuenta. Así, a partir del triunfo laborista, a finales del siglo xx los lores vitalicios tomaron su carácter actual, al formar parte de este grupo decanos de universidades, empresarios con aportaciones considerables a la economía del país, científicos con renombre internacional; en suma, hombres y mujeres considerados los más brillantes y sabios de todo el Reino.

Su designación es facultad del primer ministro y es ratificada por la Corona. Cada partido político tiene derecho a proponer una lista de potenciales lores o baronesas de intachable conducta. Es por eso que en dicha Cámara lores o baronesas se adhieren a determinada fracción política, aunque en realidad su papel es más de moderadores y consejeros del gobierno y la Corona.

Cabe agregar que pese a que la reforma puesta en marcha por Blair en 1999 mantuvo noventa y dos lores hereditarios, con los años éstos han ido renunciando, dando paso a nuevos lores vitalicios nombrados por el primer ministro en turno. También debe señalarse que en la actualidad de los 812 asientos en la Cámara de los Lores,<sup>17</sup> veintiséis corresponden a los llamados lores espirituales —que son obispos o arzobispos anglicanos leales a la Corona— quienes tras su retiro otorgan su membresía al obispo de mayor rango en secuencia para ocupar el cargo (UK Parliament, 2016j).

<sup>16</sup> Debe señalarse que esta reforma, conocida como Ley de la Cámara de los Lores de 1999, no respondió de manera particular a la vieja demanda laborista de abolir por completo la Cámara de los Lores por considerarla innecesaria. Por ello, dicha reforma de Tony Blair fue percibida como muy limitada por amplios sectores laboristas, quienes señalaban que la Cámara de los Lores solía servir únicamente para retrasar las reformas en materia social, regularmente en alianza con los segmentos más conservadores de la Cámara de los Comunes.

<sup>17</sup> Para un seguimiento puntual de cada uno de ellos en cuanto a filiación partidista, género, intereses y pertenencia a comités puede consultarse UK Parliament (2016i).



Otra de las reformas que tuvieron éxito gracias al carácter mayoritario de la administración de Tony Blair fue su proyecto de impulsar —desde la Cámara de los Comunes— la creación de sendas asambleas en Escocia y Gales. De este modo se estableció el Parlamento de Escocia en 1998, que cuenta con 129 miembros electos y tiene su sede en Edimburgo. La forma de elegirlos es una combinación del sistema *first past the post* para elegir a setenta y tres de ellos, con el *additional member system*, o sistema de representación proporcional, para escoger a cincuenta y seis (Jones, 2009: 358).

En lo que corresponde a Gales, se determinó crear su Asamblea Nacional con sesenta miembros electos, cuarenta según el esquema de circunscripciones electorales con el método de *first past the post*, y los otros veinte de acuerdo con el modelo *additional member system* de representación proporcional, como en Escocia.<sup>18</sup> Su sede se encuentra en la Bahía de Cardiff, al sur de Gales (Jones, 2009: 362).

Es muy importante añadir que con el reestablecimiento del Parlamento en Escocia y la apertura de la Asamblea Nacional de Gales a finales del siglo xx, Inglaterra se convirtió en la única nación del Reino Unido sin un Parlamento local propio, ya que los asuntos relativos a los intereses ingleses se tratan y resuelven en la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña.<sup>19</sup>

Ahora bien, por otra parte es oportuno identificar una de las manifestaciones que quizá mejor expresan el carácter omnipresente del predominio inglés en el imaginario colectivo de las otras tres naciones que componen el Reino de la Gran Bretaña. Nos referimos a los himnos nacionales de Inglaterra, *God Save the Queen y Land of Hope and Glory*, los cuales se consideran también los himnos oficiales de escoceses, norirlandeses y galeses, bajo la bandera británica. Esta situación genera incomodidad en amplios sectores nacionalistas de Escocia, Gales y en buena parte de la comunidad católica de Irlanda del Norte, ya que dichos países poseen sus propios himnos nacionales, los cuales de ninguna manera son adoptados por los ingleses como propios.

Como una manifestación de esta problemática, el gobierno laborista de Tony Blair concentró buena parte de sus esfuerzos en concretar los acuerdos de paz con las autoridades de Irlanda del Norte con el apoyo del gobierno de

<sup>18</sup> Más adelante, en este mismo capítulo, se explicarán dichos sistemas electorales y sus características.

<sup>19</sup> Debe señalarse que en el año 2000 —al igual que en los parlamentos y asambleas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte—, Londres comenzó a elegir una Asamblea local de autogestión. En ésta, los conservadores resultaron vencedores en las elecciones de 2000, 2004 y 2008, mientras que los laboristas alcanzaron la mayoría en los procesos de 2012 y 2016 (UK Parliament, 2017b).

la República de Irlanda, lo cual consiguieron en abril de 1998 y son conocidos como los “Acuerdos de Belfast”, o los “Acuerdos del Viernes Santo”, que permitieron a Irlanda del Norte, entre otras cosas, el restablecimiento de un Parlamento local con 108 miembros electos en todo el territorio.

Dicho Parlamento llegó a conocerse como Asamblea de Irlanda del Norte y establecería el principio de doble mayoría, para así garantizar una representación equilibrada entre las dos partes en conflicto, es decir, los nacionalistas republicanos católicos congregados en ese momento en el Partido *Sinn Féin*, y los unionistas protestantes leales a la Corona, aglutinados en el Partido Unionista. En tales acuerdos se determinó la amnistía y la deposición de armamento de todos los grupos paramilitares involucrados, así como la excarcelación de los militantes irlandeses implicados en atentados en territorio británico. Sin duda el mayor triunfo de la política para Irlanda del Norte emprendida por el gobierno de Blair fue la aprobación de este Acuerdo en los referendos de mayo de 1988 en territorio de Irlanda del Norte y en la República de Irlanda (Government UK, 2016i).

Empero, pese a su mayoría parlamentaria, el propio Blair tuvo que empujar fuertemente su propuesta de paz, ya que sectores conservadores del país se encontraban en desacuerdo con la excarcelación de los militantes de ciertas fuerzas paramilitares irlandesas —como el Ejército Republicano Irlandés o el Ejército Irlandés de Liberación Nacional— implicados en atentados que costaron la vida de británicos. Entre éstos, quizá uno de los más recordados sea el ocurrido en marzo de 1979, en el que perdiera la vida el consejero de Margaret Thatcher, Airey Neave, quien además fungía como diputado conservador en el Parlamento.

Por ello, el propio Blair tuvo que llevar a cabo una intensa labor de discusiones y cabildeo al interior de la Cámara de los Comunes, incluso entre miembros de su propio partido. El objetivo era encontrarse en posibilidades de ofrecer una postura unida y sólida frente a la oposición conservadora y así convencer a la opinión pública de que era una excelente oportunidad para terminar con la añeja disputa con los nacionalistas irlandeses. De este modo, en su intervención del 5 de julio de 1999, con la mayoría de la Cámara de los Comunes a su favor, Blair señaló:

Ambas partes necesitan certezas —los unionistas quieren garantías de que el desmantelamiento [de los republicanos] va a suceder, y al mismo tiempo de

que, si no lo hacen, el Ejecutivo [del Reino Unido] no se niegue a hacerlo. Los republicanos [por su parte] quieren la certeza de que los dirigentes [de Irlanda del Norte] son serios y cumplirán su compromiso de permitir un gobierno incluyente y genuino. Nuestro acuerdo, en mi opinión, ofrece ambas opciones [...]. Si ellos quieren la paz entonces la verdadera paz vendrá [...]; por eso confirmo que la gente debe discutir los detalles, debatir, pero no deshacerse de la mejor oportunidad para alcanzar la paz que vamos a tener en esta generación (AP Archive, UK: Blair Speech).

De esta forma, el primer periodo de Tony Blair alcanzó acuerdos sobresalientes que lograron contener los ímpetus nacionalistas de escoceses, galeses e irlandeses, y cuya mejor representación se concreta con el reestablecimiento de sus respectivos parlamentos y asambleas locales.

No obstante estos notables avances a nivel interno, lo cierto es que la administración de Tony Blair será más recordada a nivel internacional a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en territorio estadounidense, pues desde el primer momento se decidió por la alineación de Gran Bretaña a la política de Washington en su lucha en contra del terrorismo internacional. Esta actitud llevó al Reino Unido a participar en una nueva operación militar en Irak, conocida como la Segunda Guerra del Golfo Pérsico,<sup>20</sup> al lado de Estados Unidos, ignorando los llamados de contención de múltiples gobiernos del mundo al interior de las Naciones Unidas.

El resultado militar fue favorable para estadounidenses y británicos en Irak, pues lograron deponer al presidente Saddam Hussein tras acusarlo, sin pruebas convincentes de por medio, de fabricar clandestinamente armas de destrucción masiva sin conocimiento de las Naciones Unidas, sin embargo, tras confirmarse que no era cierto, la comunidad internacional señaló que el verdadero motivo de la invasión había sido tomar el control de su producción petrolera. Por ello, el prestigio ganado por Tony Blair fue diluyéndose en Gran Bretaña, pues se consideró que había mentido al país y al mundo al empeñarse en una campaña militar ilegal.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Debe señalarse que algunos especialistas identifican este conflicto como la Tercera Guerra del Golfo Pérsico, señalando que la primera fue la guerra entre Irak e Irán de 1980 a 1988, y la segunda, la invasión multinacional amparada por la ONU y encabezada por Estados Unidos para recuperar Kuwait en 1990.

<sup>21</sup> Años después, en 2016, el propio Tony Blair tuvo que ofrecer una disculpa pública y expresar su arrepentimiento a Gran Bretaña y al mundo por confiar en informes que señalaban de manera errónea que Irak estaba desarrollando armas de destrucción masiva. Afirmó que era consciente de la existencia de personas que nunca olvidarían su error, y que no lo perdonarían por considerarlo

Pese a haber resultado victorioso en las elecciones de 2005 por tercera ocasión consecutiva, el desgaste de Blair en el poder llevó a su partido a pedirle su renuncia como primer ministro, en un caso muy similar al ocurrido con la primera ministra Margaret Thatcher años antes, pues pese a contar a su favor con la mayoría en la Cámara de los Comunes, las condiciones internas le hicieron muy difícil culminar su periodo. Por ello, presentó su dimisión ante al Parlamento en junio de 2007, dejando tras de sí una administración plagada de claroscuros.

Así, de acuerdo con la práctica parlamentaria británica —tal como se ha visto— su sucesor y correligionario, el también escocés Gordon Brown, fue designado por la bancada del mayoritario Partido Laborista como el encargado para culminar hasta 2010 la gestión que había ganado Blair en las urnas. De tal modo, gracias a la mayoría parlamentaria heredada del gobierno de su antecesor, Brown se empeñó en concluir con las operaciones militares británicas en Irak, de manera que para mediados de 2009 las tropas del Reino Unido ya se habían retirado en su totalidad. Esto, desde luego, generó tensiones con el gobierno de Estados Unidos, pero para el primer ministro la salida de sus fuerzas armadas de territorio iraquí era un asunto de imagen pública, debido a las críticas de amplios sectores sociales británicos por el ingreso de Gran Bretaña a tan controvertida operación militar.

Quizá el asunto de mayor complejidad que encaró Gordon Brown durante su administración fue la crisis financiera internacional de 2009, pues ésta contrajo la economía británica con importantes consecuencias económicas y laborales desfavorables para la población, así como también acarreo una serie de quiebras bancarias. Ello obligó a Brown, entre otras cosas, a establecer una serie de medidas más estrictas para la llegada de trabajadores migrantes, con el fin de procurar mayor empleo para los británicos. La situación económica en el país hizo crecer la molestia entre los miembros de su partido, quienes pidieron adelantar las elecciones internas para destituir a su líder; no obstante, dichos intentos no tuvieron el apoyo suficiente entre los miembros del Parlamento.

Una vez superada la revuelta al interior del Partido Laborista, el primer ministro decidió devolver los poderes judiciales y de seguridad pública a las autoridades de Irlanda del Norte en un intento por mejorar su imagen dentro

---

deshonesto, pero insistió en que en su momento el informe era contundente y que él no decidió intervenir militarmente en Irak mintiéndole a la opinión pública (*The Guardian*, 2016a).

y fuera de su organización partidista de cara a las elecciones generales que se aproximaban. Al final de cuentas su acercamiento con las autoridades irlandesas tuvo éxito, ya que en abril de 2010 dichos poderes fueron entregados a Belfast (Government UK, 2016i); sin embargo, el efecto esperado por Brown de sus acuerdos con Irlanda del Norte no se vio reflejado en las elecciones generales, pues su partido quedó en segundo lugar detrás del Partido Conservador y su líder David Cameron.

Cabe señalar que en un desesperado intento por mantenerse en el poder, Gordon Brown buscó crear un gobierno de coalición parlamentaria al lado de los diputados del Partido Demócrata Liberal; no obstante, la falta de acuerdos y de compromiso del Partido Laborista para convocar a una serie de referendos y reformas electorales que beneficiaban a los demócrata-liberales le impidió continuar con su gestión.

Así, una vez en el cargo de primer ministro, David Cameron hizo pública su decisión de conformar un gobierno de coalición en alianza con los demócrata-liberales. Esto le permitió sumar cincuenta y siete diputados de esa formación política a los 307 conservadores, con lo cual alcanzó un cómodo margen de 363 asientos, de los 650 existentes en la Cámara de los Comunes (Oppenheimer, 2010). Con esos números, el gobierno de coalición encabezado por los conservadores logró gobernar con el 56 por ciento del Parlamento a su favor. Lo anterior dio la tranquilidad suficiente al gobierno entrante del joven líder conservador David Cameron para emprender una serie de medidas en materia de recortes al gasto público y de austeridad con el fin de hacer frente a la crisis que se vivía en el país con motivo del quiebre financiero internacional iniciado un año antes con la debacle inmobiliaria en Estados Unidos.

Al contrario de sus dos predecesores laboristas escoceses en el cargo, David Cameron era un londinense de clase acomodada que había estudiado en el colegio privado más elitista del país: el Eton, entidad académica fundada en el siglo xv por el rey Henry vi. Hay que añadir que la institución guarda fuertes conexiones históricas con la aristocracia británica, ya que ahí suelen estudiar los príncipes herederos al trono, así como los hijos varones de lores y barones de todo el Reino. De hecho, las inclinaciones aristócratas de Cameron se manifestaron con mayor claridad a partir de su matrimonio con Samantha Gwendoline Sheffield, descendiente del rey Charles II (Burns, 2010: 256). Cabe agregar que tanto el padre de Cameron, como el de su esposa, el barón Sir Reginald Adrian Berkeley Sheffield, también estudiaron allí.

Por otra parte, resulta importante señalar que la primera administración de David Cameron (2010 a 2015) fue el primer gobierno coaligado desde Winston Churchill en los años cuarenta. Éste fue ganando popularidad, en buena medida, por el desgaste de trece años de los gobiernos laboristas, pero también por la recuperación de la economía que experimentó el país. De ese modo, Cameron fue superando los obstáculos y las críticas de quienes lo acusaban de ser un primer ministro superficial, preocupado por la moda: un líder sin mucha sustancia (Burns, 2010: 257).

A nivel interno y amparado en la mayoría parlamentaria que le otorgaban los miembros de la Cámara de los Comunes de extracción liberal-demócrata, Cameron echó a andar una serie de medidas dirigidas a reducir el déficit del gobierno a costa de los servicios sociales. También dirigió una serie de privatizaciones de compañías estatales, siendo la más reconocida de ellas la del servicio postal británico. Asimismo, introdujo reformas de carácter más restrictivo en materia de migración tras afirmar que los niveles de alrededor de 300 000 nuevos migrantes al año eran ya insostenibles para Gran Bretaña, pues esas cifras requerían el diseño de nuevas políticas de educación, salud y servicios públicos (*BBC News*, 2016b). Lo anterior, porque a su juicio la llegada masiva de miles de ciudadanos, principalmente de origen polaco y rumano, generaba fuertes tensiones sociales y laborales que estimulaban la xenofobia.

En el mismo sentido, la posición de Cameron respecto del creciente carácter multicultural de la sociedad británica fue un asunto que acaparó la atención del Parlamento y de los medios de comunicación, pues en reiteradas ocasiones el primer ministro señaló que una de las fallas del multiculturalismo era el incremento del terrorismo islámico. Esta posición, generalmente compartida por la extrema derecha británica, puso a la sociedad ante dos posturas abiertamente antagónicas: los que rechazaban abierta o veladamente el multiculturalismo y, por ende, la llegada de nuevos migrantes, y los que promovían la inclusión y la tolerancia.

Es oportuno añadir que incluso el primer ministro David Cameron afirmó durante una reunión de la Unión Europea en Alemania que el multiculturalismo emprendido por Occidente había fallado. Ahí señaló:

[...] hemos permitido el debilitamiento de nuestra identidad colectiva. Con la doctrina del multiculturalismo estatal hemos alentado a las diferentes culturas a vivir vidas separadas, separados unos de otros y de la tendencia principal. Hemos fallado en proporcionar una visión de la sociedad a la que sientan que

quieren pertenecer. Incluso hemos tolerado estas comunidades segregadas que se comportan de maneras que van en contra de nuestros valores.<sup>22</sup>

Tales aseveraciones desde luego generaron diversas opiniones, no sólo en Gran Bretaña, sino en toda la Unión Europea, ya que ponían en evidencia al gobierno británico respecto de temas bastante delicados. Al mismo tiempo, su rechazo a que su sistema financiero se sometiera a las directrices de la Unión Europea con sede en Bruselas fue otro asunto polémico y de tensión para su administración. Esto se acentuó cuando el primer ministro afirmó que el Reino Unido se encontraba muy contento de no estar en el euro, y que nunca se uniría a él (Mora, 2011). Esas divergencias con Bruselas fueron elementos que políticamente resultaron muy atractivos para el gobierno de David Cameron, quien aprovechando la coyuntura prometió someter a referéndum la estadia de Gran Bretaña en la Unión Europea, después de pertenecer al Mercado Común Europeo desde principios de los años setenta.

Otro elemento trascendente de la gestión de Cameron fueron sus consultas parlamentarias para encarar de forma exitosa dos referendos durante su gobierno. El primero en 2011 fue relativo al sistema de votación para elegir miembros de la Cámara de los Comunes. El motivo de este primer referéndum fue que los liberal-demócratas condicionaron su apoyo para formar gobierno con David Cameron a cambio de aprobar, con su mayoría, la celebración de otra consulta que permitiera cambiar el sistema de votación tradicional de Gran Bretaña (*first past the post*) por otro conocido como voto alternativo (*alternative vote* o *instant runoff voting*).<sup>23</sup> El resultado de tal referéndum fue el rechazo al sistema propuesto por los liberal-demócratas, con el 32.1 por ciento por el sí, contra el 67.9 por ciento por el no (*BBC News*, 2016c). Dichos resultados sin duda afianzaron aún más el viejo modelo electoral británico, cuestión que apoyaron los conservadores desde el principio.

El otro referéndum favorable para el gobierno de Cameron fue el relativo a la independencia de Escocia. Esta consulta de 2014 significó un reto mayúsculo para el primer ministro, ya que el Reino Unido corría el riesgo de fragmentarse después de más de tres siglos de existencia; sin embargo, al final las hábiles gestiones de Cameron, así como la coalición con los liberal-demó-

<sup>22</sup> Para un seguimiento completo del discurso véase Government UK (2016k).

<sup>23</sup> Este sistema de votaciones se lleva a cabo en Australia.

cratas, replegaron el espíritu separatista escocés, sobre todo al excluir con el apoyo del Parlamento británico una tercera opción de la boleta, la conocida como *devomax*, que iba más allá de un sí o no; es decir, con esta tercera opción se abría una posibilidad intermedia para dotar a los escoceses, en el mediano plazo, de un mayor poder parlamentario local frente a la influencia del Parlamento británico de Westminster. Ello, en los hechos, daba la posibilidad al gobierno escocés de tener el control de absolutamente todo en su territorio, excepto la política exterior y la defensa. Al final, la boleta de este referéndum se limitó a una pregunta corta: “¿Debería Escocia ser un país independiente?”, con dos lacónicas opciones, sí o no. El resultado fue de un 44.7 por ciento por el sí y un 55.3 por ciento por el no (*BBC News*, 2016d).

Los referendos señalados pueden considerarse dos éxitos de la política interna del Partido Conservador y su primer ministro; empero, el malestar entre amplios sectores británicos respecto de la Unión Europea continuó incrementándose en todo el Reino. Ante esa realidad, Cameron propuso convocar a un referéndum de permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea con el apoyo de su partido y la abstención de laboristas y liberal-demócratas. Esto dio luz verde para que dicho referéndum, conocido como *Brexit* (*British Exit*), se proyectara para celebrarse antes de 2017 (*BBC News*, 2016e).

La propuesta *Brexit* de David Cameron y su partido cobró mayor fuerza durante la campaña de la elección general de 2015, ya que pese a que él mismo se había declarado contrario a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el compromiso asumido frente al país a mitad de su primer mandato y el apoyo parlamentario recibido en su oportunidad hacían de este nuevo referéndum una promesa por cumplir.

Ya durante la campaña general de 2015, laboristas y conservadores se mantenían en encuestas con números similares, sin embargo, de manera sorpresiva el Partido Conservador se llevó las elecciones por mayoría tras alcanzar 330 asientos en la Cámara de los Comunes, lo que representó el 50.7 por ciento de las curules. El problema fue que, una vez ratificado su triunfo, el tema del *Brexit* concentró la atención pública así como las labores parlamentarias entre los miembros de la Cámara de los Comunes, de entre los que surgían personajes tanto a favor como en contra.

Finalmente, la fecha para la celebración de este referéndum se estableció para el 23 de junio de 2016, y se contaron entre los partidarios del no a exprimeros ministros y numerosos personajes políticos y artísticos de todo



el Reino. Incluso el propio David Cameron se pronunció abiertamente por el no; sin embargo, el resultado favoreció la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea tras alcanzar el sí el 51.9 por ciento, contra un 48.1 por ciento. Esto fue un duro golpe para todos los países europeos miembros del organismo, además de que manifiesta la particularidad histórica que poseen los británicos como individuos insulares que no han dejado de observar con desconfianza al resto de la Europa continental, y refuerza su personalidad apartada e individualista en el viejo mundo.

Al final de cuentas, esta decisión democrática de la sociedad británica, más allá de provocar la renuncia del primer ministro Cameron tres semanas después de los resultados del *Brexit* —pese a haber obtenido un triunfo por mayoría parlamentaria poco tiempo antes—, significó un golpe contundente al espíritu paneuropeo y supranacional que busca alcanzar Bruselas.

Así, de uno u otro modo, la falta de atención de los gobiernos británicos para atender demandas sociales, políticas y económicas fue castigada por una población que es consciente de que su historia y sus sólidas instituciones políticas y financieras podían encarar los desafíos del futuro inmediato a partir de la era post*Brexit*.

En cuanto al sistema parlamentario británico, debe mencionarse que los más recientes primeros ministros ciertamente han podido gobernar y generar cambios con la venia de las mayorías en la Cámara de los Comunes, lo que ha agilizado y actualizado la dinámica del viejo pero efectivo sistema parlamentario británico, el cual, por cierto, como se ha señalado en el presente capítulo, posee elementos casi orgánicos e indisolubles que dan muestra de su alto grado de efectividad y capacidad de adaptación a diversos entornos. Estas características han resultado ser lo suficientemente atractivas como para proyectar con éxito el sistema parlamentario hacia otras regiones del mundo. A continuación se analizarán las particularidades históricas que han permitido el desarrollo y adaptación singular del parlamentarismo en otras naciones del Reino Unido.



## ORÍGENES, ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS PARLAMENTARIAS EN ESCOCIA

De igual forma que el modelo inglés, el parlamentarismo en Escocia tiene al menos ochocientos años de existencia desde sus primeras menciones con el término latino de *colloquium*, precisamente para referirse a una reunión celebrada en Kirkliston, al oeste de Edimburgo, en 1235, en donde el rey Alexander II, que gobernara de 1214 a 1249, convocó a hombres notables para solicitar sus consejos en asuntos políticos y de justicia; sin embargo, antes de adentrarnos en la naturaleza del parlamentarismo escocés es necesario señalar algunos breves antecedentes y características que manifiestan las particularidades de Escocia respecto de Inglaterra.

En primer término, se tiene constancia de que el territorio actual de Escocia fue poblado por tribus pictas hacia el siglo I, y fue precisamente su carácter indomable lo que obligó al emperador Adriano a construir una muralla en la actual Gran Bretaña, para así crear una barrera que protegiera al Imperio romano de los oriundos de toda la región norte. Posteriormente, tras la caída del Imperio romano de Occidente en el siglo V, varias tribus germánicas, sajonas y de anglos fueron poblando lo que los romanos llamaron Britania.<sup>1</sup>

De tal modo que, mientras en el sur de las islas británicas los anglos y los sajones se asentaron —sobre todo a partir del siglo VI— y reprodujeron algunas formas de administración y gobierno del antiguo Imperio romano, erigiéndose en un esquema social medieval, en el Norte los celtas provenientes de Hibernia —nombre otorgado por los romanos al actual territorio de Irlanda—, aprovechando la ausencia romana fueron adentrándose en territorio caledonio, mezclándose de manera pacífica con los pictos y creando una lengua autóctona conocida como gaélico, que es una mezcla de los idiomas

<sup>1</sup> En la actualidad, la Britania comprende la parte sur de la isla principal de Gran Bretaña (hoy Inglaterra), mientras que la región norte no conquistada por los romanos fue bautizada por éstos como Caledonia (actualmente Escocia).

picta y celta. Precisamente por ello, pictos y celtas pueden considerarse parte del mismo grupo humano céltico (Parmele, 2016: 103). Cabe añadir que hacia el siglo VIII las conquistas vikingas, y posteriormente las incursiones anglosajonas, fueron rediseñando la cultura y la lengua gaélica escocesas.<sup>2</sup>

Para el siglo XI todos los nombres antiguos para referirse a este territorio desaparecieron y comenzó a usarse el actual de Escocia.<sup>3</sup> A diferencia de sus vecinos anglosajones de Inglaterra, los escoceses desarrollaron una organización política basada en clanes regionales, con lores locales carentes de un poder centralizado efectivo que unificara todo el territorio en términos políticos.<sup>4</sup> Ello permitió su división interna y, por ende, el predominio de la Corona británica, que *motu proprio* se adjudicó el derecho de reconocer y nombrar monarcas escoceses durante los siglos XI al XII.

En el año 1235 Escocia logró erigir su primer concilio de nobles y hombres de la Iglesia de todo el Reino, ello después de que el rey Alexander II los convocara para apoyarlo en la solución de asuntos políticos y de justicia. Este primer Parlamento escocés es conocido como *Colloquium* o primer Gran Concilio del Rey. Su función principal fue tomar decisiones por consenso en todo el territorio, para lo cual adoptó como eje principal la figura del soberano. Así, las décadas siguientes posicionaron al Parlamento escocés en una especie de concilio de nobles y obispos que, convertidos en la Corte del monarca, sesionaban bajo su mandato.

Para finales del siglo XIII, la muerte del rey Alexander III (1249-1286) generó una fuerte crisis política en Escocia, ya que no tenía herederos al trono; por eso la Corona inglesa, con Edward I al frente, aprovechó el vacío de poder para imponer a John Balliol (1292-1296) como rey de Escocia, lo que significó que el país se reconocía como vasallo del rey de Inglaterra. Tal situación provocó malestar en algunos nobles escoceses, entre ellos William Wallace y Robert Bruce.

William Wallace se levantó en armas en 1296 y llegó a infligir derrotas a las fuerzas militares inglesas que lo superaban en número. Su demanda

<sup>2</sup> El gaélico es considerado en Escocia como el idioma nacional, y debido a sus orígenes tiene muy limitadas coincidencias fonéticas con el inglés moderno.

<sup>3</sup> En inglés "Scotland" y en gaélico "Alba".

<sup>4</sup> No obstante, desde finales del siglo IX Escocia contó con su primer monarca formal en la persona de Kenneth MacAlpin I, conocido como rey de los pictos (843-848). A partir de ese momento, pasarían cuatro siglos y veinticinco mandatarios para que los escoceses lograran organizar su primer gobierno nacional a través de una reunión parlamentaria representativa.

ante la Corona inglesa era sólo una: la libertad de Escocia. Este malestar generalizado entre nobles escoceses provocó que el rey John Balliol abdicara ese mismo año en favor del monarca inglés y se exiliara en Francia. A partir de ese momento, la Corona inglesa asumió el control político de Escocia y de su Parlamento, el cual, por cierto, ya se había dado tiempo para limitar la influencia de Baillol debido a su sometimiento expreso a Inglaterra. Poco tiempo después William Wallace fue derrotado y capturado por fuerzas militares inglesas, las cuales lo ejecutaron en 1305 de manera pública bajo cargos de traición al rey de Inglaterra (Burns, 2010: 76).

Durante este periodo de guerra, la Corona inglesa propició un lapso conocido como *Interregnum* en Escocia, dejando en una situación muy desfavorable al Parlamento escocés, que se limitó a nombrar a algunos nobles como guardianes del país. Estos nombramientos, en los hechos, reconocían la ocupación extranjera en territorio escocés, y al mismo tiempo mantenían con vida la operación del Parlamento.

En 1306, un noble con influencia y poder, Robert Bruce, desconoció la autoridad inglesa y se levantó en armas, provocando que el papa Clemente v lo excomulgara. Pese a ello, los clérigos y hombres de la Iglesia al interior del Parlamento escocés decidieron expresar su apoyo abierto a Robert Bruce, lo que en los hechos significaba una declaración de rebeldía parlamentaria escocesa no sólo en contra de la Corona inglesa, sino también de Roma y la Iglesia católica.

Así, gracias a la determinación expresada desde el Parlamento escocés, Robert Bruce fue coronado legítimo rey de Escocia, ganando adeptos y recursos por todo el país, y logrando derrotar y expulsar a las fuerzas inglesas de Escocia en junio de 1314 (Bamberg, 2014: 26). Pese a ello, la Corona inglesa encabezada por Edward II no reconoció la independencia de Escocia. En ese momento, el papa Juan XXII decidió mediar entre escoceses e ingleses para establecer una ley de paz en 1317; sin embargo, entre sus propuestas el papa no reconocía a Robert Bruce como rey de Escocia, sino simplemente como noble. Por tal razón, Bruce se negó a establecer un acuerdo de paz con los ingleses hasta que Roma lo reconociera como monarca.

Para reforzar esta petición, el Parlamento de Escocia escribió al sumo pontífice lo siguiente:

Ha sido un placer que Dios nos haya devuelto nuestra libertad, por uno de los más valientes príncipes y reyes, Lord Robert, quien fue sometido a todo tipo de trabajo, fatiga, dificultades y peligros. A él estamos decididos a adherirnos en todos los términos, tanto por su mérito, como por lo que ha hecho por nosotros. Pero, si este príncipe perdiera esas nociones que tan noblemente ha perseguido y consintiera que nos sometiéramos al rey de Inglaterra, lo expulsaremos inmediatamente como nuestro enemigo, y escogeremos a otro rey. Mientras cien de nosotros permanezcamos vivos, nunca estaremos sometidos a los ingleses. Porque no es por gloria ni riquezas ni honor; es sólo por nuestra libertad que debemos defendernos, y por la cual ningún hombre honesto está dispuesto a perder si no es con la vida misma (Parmele, 2016: 110-111).

Así, ante la vehemencia de este llamado del Parlamento, el papa reconoció a Robert Bruce como rey de Escocia, aunque la aceptación inglesa de la independencia tardó una década más en expresarse, justo cuando en 1328, durante el reinado de Edward III, éste declarara: “Y así renunciamos a todo reclamo nuestro o de nuestros antepasados en tiempos lejanos que de alguna manera se hayan fijado sobre el Reino de Escocia” (Parmele, 2016: 112).

A partir del reconocimiento inglés de la independencia de Escocia, el gobierno escocés mantuvo una cercana alianza desde el siglo XIV con la Corona francesa, coalición que se manifestó en campañas militares conjuntas en contra de Inglaterra en años posteriores, tanto en las islas bretonas como en territorio continental europeo.

Fue precisamente durante la guerra de independencia escocesa cuando su *Concillium* fue comúnmente conocido como *Parlamentum* por las autoridades inglesas para referirse a la Corte de representantes nobles y hombres de Iglesia escoceses concentrados en una asamblea. De esta forma, a partir del reconocimiento de la independencia de Escocia —una vez superada la amenaza de una reconquista inglesa— el Parlamento escocés inició una serie de nuevas prácticas, como la incorporación de burgueses a la Corte Real del Parlamento.

Dicho esto conviene añadir que fue a partir de 1357 cuando el Parlamento escocés empezó a ser conocido como la “Comunidad Real de los Tres Estados”. El primero, los clérigos y hombres de la Iglesia; el segundo, los nobles; el tercero, los burgueses y terratenientes de comarcas comisionados por los poblados para representarlos (The Scottish Parliament na h-Alba, 2016). Debe señalarse que la incorporación de burgueses y terratenientes sin cargo nobiliario a las labores dotó al parlamentarismo escocés de nuevas herramientas

de representación, al hacer más extensivas sus funciones, al mismo tiempo en que facilitó la llegada de nuevos recursos económicos vía impuestos.

Por consiguiente, el Parlamento se dividió en tres estratos o tres Estados: el más alto era el de los clérigos, obispos y abades, quienes llegaron a ocupar para el siglo xv cerca de cinco decenas de curules parlamentarias, aunque a partir de los inicios del xvi la influencia de la Iglesia fue disminuyendo gradualmente en los tres Estados. El segundo estrato pertenecía a los nobles, los cuales eran regularmente lores o jefes de clanes regionales, quienes tenían el derecho de heredar sus cargos en el Parlamento. Entre los siglos xvi y xvii los asientos de los lores pasaron de cincuenta a 136. En general, los beneficios y características de este grupo se mantuvieron intactos con el transcurso de los siglos hasta la unión de las coronas inglesa y escocesa en 1603, con la dinastía de la Casa Estuardo.

Por su parte, el tercer eslabón del Parlamento escocés, el de los burgueses y terratenientes de comarcas, fue el de mayor importancia práctica para la Corona escocesa, pues de ellos dependía el cobro de impuestos y la llegada de nuevos recursos al monarca en turno. A finales del siglo xiii eran treinta los burgueses en el Parlamento, mientras que para inicios del xvi su número se había duplicado a sesenta y seis (Goodare, 2009: 302-303).

Resulta importante mencionar que a partir del siglo xv el Parlamento escocés decidió emitir todos sus documentos y discusiones en gaélico, y no más en latín, en un ejercicio que sirvió para otorgar mayor identidad a los “Tres Estados” como organismo político. Asimismo, al igual que en el caso de Inglaterra, diversos fueron los monarcas de Escocia que intentaron sujetar y someter al Parlamento bajo su control e influencia, pero al igual que sus pares ingleses, los parlamentarios escoceses rechazaron tales intentos, fortaleciendo así su autonomía e independencia de la Corona y del monarca en turno.

El siglo xv fue particularmente problemático para el parlamentarismo escocés por los intentos del rey James I (1394-1437) de someterlo a su voluntad, e incluso asemejarlo en sus usos y costumbres al inglés. De hecho, el papel del Parlamento fue protagónico cuando Sir Robert Graham —representante de los Tres Estados— participó activamente en el asesinato del monarca James I, para así adelantar la sucesión de su hijo James II (1437-1460), quien en 1445 juró no alterar las leyes emitidas por el propio Parlamento. Ya para finales de siglo, en 1496, los Tres Estados elaboraron la primera ley europea en donde garantizaban la educación de forma obligatoria a todos

los hijos varones de nobles y burgueses. Los siglos XVI y XVII permitieron el fortalecimiento del Parlamento escocés, convirtiéndose en una herramienta efectiva del monarca para llevar a cabo sus acciones de gobierno y establecer nuevas reglas. Prueba de ello es la creación de una Suprema Corte Civil, una decisión que sentó las bases jurídicas del sistema legal escocés. Asimismo, en 1560 el Parlamento local se adaptó a la reforma protestante, emitiendo una orden de revolución religiosa para romper así sus lazos con el papa y con la Iglesia católica, lo que permitió establecer a la religión protestante como la oficial del Reino (The Scottish Parliament na h-Alba, 2016).

Posteriormente, la muerte de la reina Elizabeth I de Inglaterra en 1603, quien no dejó descendencia, permitió que el rey James VI de Escocia ascendiera al trono, por ser el primero en la línea sucesoria como descendiente directo de Henry VII de la Casa Tudor en Inglaterra. Al asumir el trono inglés, el rey de Escocia James VI (1567-1625) pasó a ser también James I de Inglaterra (1603-1625), inaugurando así la monarquía de la Casa Estuardo. Las consecuencias de la adhesión de la Corona escocesa a la inglesa a principios del siglo XVII serían irreversibles en el mediano plazo para Escocia, pues destruiría la independencia ganada con mucho esfuerzo y sangre en el siglo XIV bajo el mando de Robert Bruce.

Al asumir el trono de Inglaterra, James VI tuvo que cambiar su lugar de residencia de Edimburgo a Londres. De inmediato el nuevo rey pretendió llevar los hábitos parlamentarios de Escocia a Inglaterra sin éxito, ya que los lores y comunes ingleses no se lo permitieron. Ante ello, propuso a los parlamentos la unión de los dos cuerpos legislativos en un solo; sin embargo, escoceses e ingleses rechazaron de manera tajante tal posibilidad. Por esta situación, pretendió entonces acompañarse de su Corte escocesa para gobernar Inglaterra, pero el Parlamento inglés emitió una ley que impedía a los escoceses participar en su Corte. Esto último provocó serias discrepancias entre el soberano y su Parlamento en Londres, las cuales culminaron con la disolución y cierre de éste por decreto real.

Al alejarse James VI de su Reino y comenzar con dificultades parlamentarias su gestión de gobierno en Inglaterra, debido a que la Cámara de los Comunes se negaba a dotarlo de recursos para gobernar con un Ejército fuerte (Bambery, 2014: 38), el Parlamento escocés inició una etapa de autogestión, ya que por primera vez fue capaz de gobernar sin la tutela directa de un monarca. Esto permitió, entre otras cosas, establecer una sede permanente para el



Parlamento de Escocia en el Palacio de Edimburgo, ya que desde el siglo XIII las sesiones se desarrollaban tanto en iglesias como en sedes indistintas propuestas por el propio rey.

Tras su muerte lo sucedió su hijo Charles I de Escocia e Inglaterra (1625-1649), quien de inmediato retomó los conflictos comenzados por su padre, principalmente por la recaudación de recursos financieros vía impuestos, que ambos establecieron desde sus sedes en Londres y Edimburgo. Por ello, decidió disolver el Parlamento inglés y emprender una lucha armada en contra de nobles escoceses que cuestionaron su autoridad al pretender imponer leyes tributarias y religiosas por la fuerza al Parlamento escocés. Así, mientras que el rey mantenía cerrado el Parlamento en Londres, el escocés de Edimburgo firmó en 1638 una ley de convenio nacional que mandataba a la población oponerse a las políticas permisivas decretadas por el rey Charles I en favor del catolicismo romano, al mismo tiempo en que se les pedía a los escoceses desconocer todas las leyes propuestas por el monarca durante su gestión de gobierno en Inglaterra. Dos años después, en 1640, el Parlamento escocés llevó a cabo una acción sin precedentes, al aprobar sesenta leyes que traspasaban el poder del monarca directamente al Parlamento, eliminando también la potestad del primero para disolver y convocar al segundo a discreción (The Scottish Parliament na h-Alba, 2016).

Lo anterior generó una guerra civil y religiosa en Escocia que se extendería también a Inglaterra e Irlanda, y que culminaría con la decapitación del rey en 1649 por parte de Oliver Cromwell y el propio Parlamento inglés. Tales hechos conmocionaron profundamente a los nobles escoceses, ya que si bien se habían revelado en contra de las malas políticas de la Corona, la nobleza de Escocia consideraba como principales responsables de la situación a los consejeros reales y no tanto al monarca escocés (Bamberg, 2014: 44). Dichos acontecimientos distanciaron a los parlamentarios escoceses de sus homólogos ingleses, ya que los responsabilizaban de la muerte del rey. La primera consecuencia de ese distanciamiento fue la conquista militar de Escocia por parte de Oliver Cromwell y la abolición de su Parlamento por primera vez desde su fundación cuatro siglos atrás.

No obstante, tras la muerte de Cromwell y la restauración del parlamentarismo en Inglaterra, el nuevo monarca Charles II (1660-1685) hizo lo propio también con la sede en Edimburgo del Parlamento de Escocia. Durante su periodo, el parlamentarismo escocés vio surgir las primeras expresiones parti-

distas, sobre todo con un grupo de representantes que se expresaban como opositores a las decisiones del monarca que residía en Londres. Ello puede ser considerado como las primeras manifestaciones de representantes nacionalistas organizados en una estructura política partidista de Escocia.

Tras la muerte del monarca Charles II, lo sucedió en el trono su hermano James VII de Escocia y II de Inglaterra (1685-1688), quien tampoco se esforzó por mantener una buena relación con sus parlamentos de Escocia e Inglaterra, sobre todo porque se declaró abiertamente católico, condición que lo sometía a los designios de la Curia romana. Esto último lo desacreditó frente a los nobles y barones escoceses en el Parlamento, quienes rechazaron su autoridad divina. Tal situación, junto con una serie de medidas autoritarias en contra del poderoso Parlamento inglés, obligó al monarca a abdicar a la Corona y huir a Francia para evitar ser decapitado como su padre cuatro décadas antes.

Un año después, en 1696, el Parlamento de Escocia emitió su última medida de carácter nacional a través de la Ley de Educación, para fundar escuelas en todo el Reino. Este documento proyectaba y mandataba a todas las comunidades que contaran con una parroquia a fundar ahí una escuela para la educación de la niñez escocesa. Esta orden se cumplió a través de donaciones de lores, obispos, barones y burgueses hasta la unificación de las dos coronas en 1707 (*The Scottish Parliament na h-Alba*, 2016).

Resulta importante añadir que, como se ha visto, los parlamentos inglés y escocés surgieron por motivos diferentes y trazaron objetivos distintos. Así, el parlamentarismo inglés surgió como una necesidad de administrar la riqueza, y también para legitimar y limitar a sus soberanos en tiempos de crisis mediante la aplicación de un efectivo método de gobierno que se ha perfeccionado con el paso de los siglos. Por su parte, el parlamentarismo escocés surgió y sobrevivió, durante más de cuatro siglos y medio, como un mecanismo de resistencia y autoconfirmación como país y como sociedad, pero sobre todo como un recurso para lograr la estabilidad.

A continuación se enumerarán las características operativas más identificables del parlamentarismo escocés durante su existencia. La primera y más importante, sin duda, es su carácter mucho más pragmático que el de su símil inglés, ya que los periodos de la deliberación parlamentaria escocesa no rebasaban los diez días, y en éstos un canciller electo por los propios representantes de los Tres Estados dirigía las sesiones, mientras que el encargado de defender

los intereses del soberano era un comisionado real, responsable asimismo de llevar las noticias y resultados de las deliberaciones al monarca.

Ahora bien, debido a que las sesiones parlamentarias escocesas eran de corta duración, debían organizarse cuerpos colegiados de representantes electos por ellos mismos —conocidos como *Lords of the Articles*—, quienes eran los responsables de presentar y negociar con el monarca las leyes emitidas por el Parlamento en pleno. Es importante añadir que el rey en turno no solía rechazar estas propuestas, pues ello significaba convocar de nuevo al Parlamento y alargar sus periodos, cuando en realidad sus representantes debían concentrar su atención en dar cuentas, debatir y convencer a sus propias comunidades de la razón de las leyes y reformas aprobadas.

Este procedimiento escocés evitaba, sin duda, las largas deliberaciones entre sus miembros, tal y como sucedía en Inglaterra, ya que los intereses comunes de nobles, burgueses y obispos escoceses se discutían y negociaban previamente entre los Tres Estados en reuniones locales. De esa forma, el ejercicio parlamentario se concentraba en discutir y aprobar propuestas y después en delegar su aprobación a los *Lords of the Articles*, quienes regularmente cerraban las sesiones con el visto bueno y firma del rey. Esta mecánica suponía, desde luego, que los monarcas de Escocia solían encontrarse más limitados para ejercer actos unilaterales sin consulta de por medio (Goodare, 2009: 308-309).

Otra característica propia del parlamentarismo escocés era que el soberano podía solicitar la recaudación de impuestos a la población, pero éstos debían ser reducidos y por tiempo limitado, condición que siempre se daba con la observación y aprobación de los Tres Estados; sin embargo, cuando el Reino necesitaba de recursos urgentes para alguna guerra, el Parlamento obligaba al rey a solicitar mayores impuestos y a asumir las críticas de la población afectada. Un elemento que no debe minimizarse es que a través del parlamentarismo y su rompimiento con la Curia de Roma, Escocia renovó su espíritu nacionalista al excluir el latín como lengua de sus archivos e imponer al gaélico como la oficial del Parlamento de los Tres Estados.

También tiene que señalarse la influencia que tuvo en Escocia el ascenso de la Casa Estuardo a la Corona inglesa, ya que a partir de ese periodo, a inicios del siglo XVII, el parlamentarismo escocés experimentó una marcada independencia del soberano, sobre todo porque éste despachaba en Londres y solía encontrarse en pugnas constantes con su Parlamento en Westminster.

Todo eso provocó un alejamiento del rey de Escocia con sus territorios originales, así como el reposicionamiento de la nobleza escocesa y de los burgueses en un nuevo sitio de mayor influencia económica y social, pero sobre todo, política. Además, debe reconocerse que en esos momentos Escocia no se conformaba propiamente como un país, sino más bien como una especie de agregación desordenada de pequeñas comunidades autosuficientes con productos agrícolas de precios similares en todo el territorio (Bamberg, 2014: 38), condición que evitaba el predominio o influencia de una región sobre otra.

Aunado a lo anterior, el hecho de que la nobleza tuviera capacidad de heredar sus asientos y posiciones en el Parlamento permitió su dominio como un grupo bien cohesionado frente a los monarcas escoceses, situación que se acentuó durante el siglo XVII con el ascenso de la Casa Estuardo a la Corona de Inglaterra y su consecuente alejamiento de la realidad y de los asuntos gaélicos.

Todo esto sin duda debilitó en general el poder de la Casa Estuardo, ya que por una parte se alejaba de Escocia, y por la otra, no terminaba de integrarse a los modos políticos de Inglaterra. Lo anterior quedó de manifiesto una vez que se hizo evidente que la reina Anna no tendría herederos al trono inglés, situación que animó al Parlamento a dar una especie de golpe de Estado al emitir un decreto que transmitía la Corona a la Casa Hanover de Alemania, una vez concluido el reinado de Anna.

Dicha situación generó encono entre los parlamentos de Escocia e Inglaterra; sin embargo, la dependencia escocesa en materia comercial, así como sus limitaciones económicas, hicieron posible que los representantes de la reina de Inglaterra lograran sobornar a sus parlamentarios. Es muy importante subrayar que todo esto sucedió pese a la opinión contraria que guardaba la mayoría de la población escocesa respecto de la unificación de ambas coronas (BBC, 2016a).

De este modo, tras intensas negociaciones —como ya se señaló— ambos parlamentos aprobaron la unión de los dos reinos en uno solo llamado Gran Bretaña a partir de 1707, con la reina Anna aún como soberana. Así se estipuló que Escocia enviaría cuarenta y cinco representantes a la Cámara de los Comunes, y dieciséis a la de los Loes británicas. Al mismo tiempo, se permitió la continuidad y predominio de la Iglesia presbiteriana en Escocia, limitando con ello la influencia de la anglicana en todo el territorio gaélico (Parmele, 2016: 121).

Sin duda puede considerarse que la unión de Escocia e Inglaterra en un solo reino fue un golpe mortal para las aspiraciones de continuidad monárquica de la Casa Estuardo, que reclamaba el legítimo derecho de reinar en Gran Bretaña. De hecho, este malestar escocés provocó que los comunes y lores gaélicos no apoyaran la llegada de la Casa Hanover tras la muerte de la reina Anna, y otros más incluso apoyaran al movimiento jacobita para restaurar en el trono a James Francis Edward Stuart, quien se autodenominó James VIII de Escocia y III de Inglaterra.

James Francis era un católico educado en Francia, hermano de la reina Anna y heredero al trono, el cual no compartía las visiones protestantes anglicana o presbiteriana imperantes en Gran Bretaña, condición ésta que despertó la animadversión de los comunes ingleses, alimentando así su proclividad a transferir la Corona a una casa alemana como la Hanover.

Al final de cuentas, el movimiento jacobita nacionalista escocés, que apoyó tanto a James Francis Edward Stuart en sus reclamos por la Corona entre 1714 y 1715, como a su sobrino Charles Edward Stuart<sup>5</sup> en el periodo 1745-1746, resultó infructuoso no obstante el respaldo de los escoceses de las tierras altas, quienes no pudieron vencer a los nobles de Escocia aliados de la Corona británica. Empero, pese a esta lealtad probada de la nobleza escocesa, el monarca británico George II determinó —apoyado por su Parlamento— eliminar para siempre el esquema feudal de Escocia, constituido en clanes, e imponer en su lugar otro nuevo basado en la legislación y en los modos de gobierno ingleses (Bambery, 2014: 66).

De uno u otro modo, la derrota de la Casa Estuardo frente a George II sirvió para dar márgenes institucionales a la anexión escocesa en favor de Inglaterra, cuya consecuencia fue el nacimiento de un nuevo país, aunque esto significara erradicar las tradiciones políticas escocesas desarrolladas por más de cuatro siglos al interior de su Parlamento de los Tres Estados. Esto último significó que los escoceses se obligaban a asimilar un nuevo esquema político sin otra opción de por medio.

De esta manera, con la derrota de los jacobitas en 1647 se dio por terminado el reclamo escocés que iniciara cuarenta años antes, es decir, el 28 de abril de 1707, tras la disolución de su Parlamento. Esto último no significó que Escocia dejaría de regirse por formas de gobierno parlamentarias, sino que a

<sup>5</sup> Este personaje es conocido y ha sido citado en la historia de Escocia como *Bonnie Prince Charlie*, por su carácter afable con los escoceses de los clanes de las tierras altas.

partir de ese momento sus leyes y normas las establecería una mayoría extranjera en un Parlamento fuera de su territorio, pero al mismo tiempo formando parte de un Estado más grande (Goodare, 2009: 315).

Así, después de un largo periodo en que la política escocesa se dictó desde Londres, tendrían que transcurrir cerca de tres siglos para que el Parlamento escocés fuera restaurado, ahora bajo el mandato del primer ministro británico Tony Blair. Lo anterior fue posible en 1998, después de un referéndum que se efectuó un año antes, en el cual el 74 por ciento de los escoceses dieron el sí al establecimiento de un Parlamento autónomo. Además, un 64 por ciento se manifestó a favor de dotar a dicho Parlamento de facultades limitadas para la recaudación de impuestos (Bambery, 2014: 293). Este hecho sin duda revivió el espíritu parlamentario escocés, generando posibilidades de que el nacionalismo gaélico retomara nuevos impulsos en el siglo XXI.

A partir de ese momento se determinó que el restablecido Parlamento de Escocia sería unicameral y contaría con 129 miembros. Éstos podrían ser electos con un esquema mixto, utilizando los sistemas *first past the post* y el *additional member system*.<sup>6</sup> Su sede se establecería en Edimburgo, capital de Escocia, y asumiría un esquema de Parlamento nacional separado de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña (Burns, 2010: 251). A diferencia del parlamentarismo anglosajón, el escocés tomaría la forma de un hemiciclo al estilo francés, con un oficial presidente de Cámara<sup>7</sup> mirando de frente al resto de los diputados, y dos asesores —uno de cada lado—, quienes darían consejos al oficial presidente y lo apoyarían en todo momento, desligándose de su filiación partidista.

Por otra parte, debe añadirse que el resurgimiento del parlamentarismo en Escocia fue un tema muy polémico, ya que se lo consideró o bien como un organismo limitado por los separatistas y la clase trabajadora, o por el contrario como muy riesgoso por los aristócratas escoceses, quienes consideraban que con su instauración se abría la puerta a una eventual separación e independencia de Escocia; no obstante, más allá de cualquier postura en

<sup>6</sup> Este último sistema otorga asientos para regiones específicas bien focalizadas. En dicho esquema, el ciudadano emite su voto en dos boletas; uno por un candidato determinado y otro por partidos políticos. Al final, la suma de los votos determina el candidato o partido al que le corresponde el asiento.

<sup>7</sup> El equivalente el *speaker* británico. Esta figura, así como sus dos asesores, son elegidos en secreto por el resto de los diputados, y deben renunciar a su filiación partidista para poder encabezar y conducir las discusiones del Parlamento.

favor o en contra, lo cierto es que el Parlamento escocés renovó el carácter identitario del país frente al resto del Reino.

De tal forma, en noviembre de 1998 el Parlamento británico reconoció los resultados del referéndum y recibió la aprobación real para establecer una ley que conformaba de manera oficial los lineamientos para el Parlamento escocés. Al año siguiente, en mayo de 1999, se celebraron las primeras elecciones para conformar el Parlamento de Escocia en la era moderna, lo que daba vida, por ende, al primer gobierno de Escocia. En estas elecciones, laboristas y liberal-demócratas conformarían un gobierno de coalición con Donald Dewar como primer ministro para el periodo 1999-2003. Es importante señalar que la primera ley aprobada por el nuevo Parlamento de Escocia fue una de salud mental que incluía el derecho a apelar dictámenes al respecto. Fue firmada por el premier escocés el 8 de septiembre de 1999 (The Scottish Parliament na h-Alba, 2016c).

El primer periodo de gobierno de la coalición laborista-liberal-demócrata se concentró en aprobar, gracias a su carácter mayoritario, una serie de leyes para ordenar la actividad de los pescadores escoceses y del resto del Reino Unido. También se aprobaron otras que buscaron garantizar la protección de las víctimas de violencia doméstica, así como poderes judiciales inmediatos para detener y castigar a los responsables. Así, las primeras acciones parlamentarias escocesas se ciñeron a encontrar soluciones a temas comunes del país, dejando los grandes debates nacionalistas propuestos por el *Scottish National Party* (SNP) —Partido Nacional Escocés— para otra ocasión. Ello fue posible debido a que si bien el SNP había quedado colocado en segundo lugar con treinta y cinco asientos, la coalición de gobierno liberal-laborista los debilitó en el ejercicio parlamentario, pues juntos sumaban setenta y tres curules, es decir, más del 50 por ciento del Pleno.<sup>8</sup>

En 2003 se celebraron las segundas elecciones generales en Escocia,<sup>9</sup> y de nuevo laboristas y liberal-demócratas se unirían para conformar un gobierno de coalición, dejando otra vez al nacionalista SNP muy alejado de la toma de decisiones, pues sus veintisiete diputados poco podían hacer frente a la mayoría coaligada con sus sesenta y siete curules. Este segundo Parla-

<sup>8</sup> Para mayor información relacionada con cifras y datos de las elecciones escocesas puede consultarse The Scottish Parliament na h-Alba (2016a).

<sup>9</sup> A estas elecciones se las suele llamar también *Scottish Parliament Elections* (elecciones para el Parlamento escocés).

mento escocés deliberó sobre diferentes temas, nuevamente de carácter más bien limitado, constituyéndose como uno de los acontecimientos más sobresalientes la inauguración de su nuevo edificio, con su sede permanente en Holly Road, en Edimburgo.

En 2007 se llevaron a cabo las terceras elecciones generales escocesas, y en ellas finalmente el SNP obtendría el triunfo con cuarenta y siete curules en el Parlamento, superando a laboristas y liberales-demócratas en las preferencias, al sacar ventaja de las discrepancias entre ambos. Lo anterior evitó la conformación de un tercer gobierno coaligado consecutivo. De inmediato el SNP, con su líder y primer ministro Alex Salmond, determinaron eliminar el término “Ejecutivo escocés” y adoptar el de “Gobierno escocés”, reivindicando así el carácter nacional de su gestión.

El periodo de gobierno del primer ministro Salmond, de 2007 a 2011, se orientó a fortalecer las reivindicaciones nacionalistas escocesas, pues centró su atención en proponer reformas que dotaran de mayor poder al Parlamento de Escocia, además de dar la bienvenida a las voces que exigían un referéndum para separarse de Gran Bretaña. Incluso, él mismo se declaró partidario de la separación y vaticinó que la segunda década del siglo XXI vería finalmente cristalizado el anhelo separatista de los grupos nacionalistas escoceses (Carrell, 2007).

Las siguientes elecciones escocesas tuvieron lugar en mayo de 2011, y en ellas de nuevo el SNP obtendría la victoria, pero en esta ocasión por mayoría tras alcanzar sesenta y nueve asientos en el Parlamento. A diferencia de su periodo de gobierno anterior, el primer ministro escocés Alex Salmond empujó desde el inicio una serie de reformas amparado en su dominio parlamentario. Por consiguiente, se otorgaron poderes adicionales al Parlamento de Escocia con el fin de que pudiera elaborar leyes propias, por ejemplo en materia de límites de velocidad en autopistas y sobre consumo de alcohol. También decidió establecer un impuesto sobre la renta escocés para gravar al sector de la población económicamente más favorecido.

En 2013, el Parlamento escocés envió a la Corona británica una propuesta de ley conocida como “Aprobación Real y Gran Sello de Escocia”.<sup>10</sup> El encargado fue el oficial presidente del Parlamento de Escocia, y recibió el asentimiento real de la reina Elizabeth II. Esta normatividad fue muy importante

<sup>10</sup> Royal Assent and the Great Seal of Scotland.



para los nacionalistas escoceses, pues extendió su capacidad de acción política en el país, ya que a partir de ese momento toda propuesta de ley escocesa podía enviarse de manera directa a la Corona británica para su aprobación, sin intervención del Parlamento de Gran Bretaña. Lo más importante es que el asentimiento real de las propuestas de ley presentadas en el espectro de la monarquía constitucional británica significa prácticamente su aprobación automática, pues la Corona rara vez retiene un asentimiento real (The Scottish Parliament na h-Alba, 2016b), ya que se interpretaría como un obstáculo a la libertad de sus súbditos.

Tal hecho permitió elaborar la propuesta de un referéndum de independencia para Escocia en 2014 sin la amenaza que representaba un rechazo automático del Parlamento británico en su conjunto; no obstante, si bien el Parlamento británico no podía rechazar de manera abierta el referéndum de independencia debido al asentimiento real, sí podía exigir, en cambio, claridad en la pregunta y/o limitar las opciones de respuesta. De esta forma, y como ya se explicó, el ministro nacionalista escocés Alex Salmond tuvo que negociar con el primer ministro británico David Cameron el carácter de las opciones del referéndum. Hay que recordar que los nacionalistas escoceses buscaban tres opciones de respuesta; sí, no y *devomax*.

La iniciativa *devomax* permitía a los votantes optar por un proceso a mediano plazo que otorgaría mayores poderes al Parlamento de Escocia, abriendo así la posibilidad de controlar todas las políticas públicas escocesas sin necesidad de consultar a la Corona británica ni al Parlamento de Westminster. Ello dotaba de plena independencia al gobierno escocés, excepto para la política exterior y la defensa, responsabilidad que confería en su totalidad a Gran Bretaña.

Sin embargo, el gobierno británico rechazó esta tercera opción y exigió limitar la respuesta a un sí o un no para reconocer la legalidad del referéndum. De esta forma, al final el SNP no tuvo mayor alternativa que aceptar la oferta británica y se redactó así la pregunta: "Should Scotland be an independent country?",<sup>11</sup> y con sólo dos respuestas: sí o no. En consecuencia, los resultados favorecieron al no con 2 001 926 votos, es decir, con un 55.3 por ciento, contra un 44.7 que optó por el sí, lo que en números absolutos significó que 1 617 989 escoceses buscaban la independencia. Debe llamar la

<sup>11</sup> ¿Debería Escocia ser un país independiente?

atención que tales cifras representaron una altísima participación del 84.59 por ciento (*BBC News*, 2016d).

El resultado adverso del referéndum obligó a Alex Salmond a presentar su renuncia como primer ministro, pero al contar el Scottish National Party con la mayoría del Parlamento no fue necesario convocar a nuevas elecciones. Por lo tanto, de acuerdo con los estatutos parlamentarios pudo sucederle su correligionaria Nicola Sturgeon, quien sin oposición interna alguna se erigió como la primera ministra de Escocia. Ahora bien, es necesario señalar que pese a la derrota del movimiento nacionalista escocés en el referéndum de septiembre de 2014, el sentimiento nacional gaélico no sufrió una considerable desmejora, ya que en las elecciones generales de mayo de 2016 volvería a ganar el SNP tras alcanzar sesenta y tres escaños.

Sin embargo, estos asientos no eran suficientes para alcanzar la mayoría, pues faltaba uno. Pese a ello, sus coincidencias con el Partido Verde o el Partido Laborista no hacían muy difícil poder convencer a sólo un diputado de los seis verdes o cinco laboristas que formaban parte del Parlamento. Fue así como el desenlace del *Brexit*, en junio de 2016, en donde Escocia votó por mantenerse dentro de la Unión Europea, dio un nuevo impulso al espíritu independentista escocés, sobre todo una vez que Nicola Sturgeon afirmó que Escocia no compartía el resultado y que llamaría, en el corto plazo, a un nuevo referéndum de independencia, declaración que desde luego fue duramente criticada por el gobierno conservador británico (*The Independent*, 2016). Pese a ello, la primera ministra insistió en que su país rechazaba tanto la posición xenófoba expresada por el gobierno *torie* británico como el *Brexit*, y que por eso habría de convocar al nuevo ejercicio de consulta popular (*The Guardian*, 2016b).

Es evidente que el parlamentarismo de Escocia ha retomado gradualmente su carácter particular hasta convertirse en uno de los ejes identitarios más activos de los grupos nacionalistas gaélicos, quienes reivindican el derecho de los escoceses a gobernarse por sí mismos con sus propias instituciones y herramientas. Esto último, amparados en un Parlamento unicameral de usos y costumbres anglosajonas pero, al mismo tiempo, con el acendrado anhelo de la autogestión respecto de la Corona británica.

Por último, debe añadirse que una manifestación clara de este espíritu nacionalista escocés se identifica en la decisión de sus diputados al interior del Parlamento por adaptar un esquema diferente en sus elecciones locales

para designar representantes de los treinta y dos condados del país.<sup>12</sup> Este esquema de votación es el *single transferable vote* (STV) o voto único transferible, el cual sustituyó al tradicional sistema *first past the post* que se emplea en Gran Bretaña. El sistema STV, utilizado en Escocia durante las elecciones de gobierno locales de 2007 y 2012, sin duda democratizó el sistema electoral escocés, ya que el ciudadano tuvo la opción de elegir a varios candidatos dentro de una misma boleta, y no circunscribirse necesariamente a los aspirantes oficiales que los partidos ofrecen al elector (Curtice, 2012).

Como ya se explicó, este sistema electoral permite que el ciudadano emita su voto por diferentes candidatos según sus preferencias; con el STV un elector puede escoger en la boleta a su candidato favorito en forma descendente, de manera que en caso de que su opción número uno no obtenga la mayoría, su voto se suma a su segunda alternativa, con la esperanza de que dicho participante número dos llegue a alcanzar la mayoría del 50 por ciento más uno. De no obtenerla, entonces la tercera selección del elector puede sumar los votos de los demás ciudadanos, y así sucesivamente, hasta que algún contendiente logre esa mayoría.

Por sus características, a este sistema se lo suele conocer como “segunda vuelta instantánea”, ya que al elector se le ofrecen varias opciones en una misma boleta. Una de sus consecuencias más visibles consiste en que ciertamente desfavorece a los partidos tradicionales, pues la fortaleza de estos últimos (ya sea los liberales o los conservadores) suele sustentarse en minorías de alrededor del 30 o 35 por ciento del total de los votos, mismos que terminan convirtiéndose en una derivación de la democracia electoral, al otorgarles legitimidad y “mayorías” artificiales que les permiten acceder al poder con subrepresentación electoral.

Como se ha visto, esta circunstancia de acceder al poder incluso siendo una minoría es lo que privilegia precisamente el sistema inglés de *first past the post*. Es por ello que el esquema *single transferable vote* permite que los partidos o candidatos de mayor consenso popular sean quienes lo alcancen, democratizando así el voto electoral del ciudadano común en detrimento de la designación de candidatos por parte de las elites partidistas.

<sup>12</sup> Estos representantes de condados o comarcas son los encargados directos de solucionar las problemáticas comunes de los ciudadanos y reciben subvención del Parlamento escocés. En la actualidad su número es de 1223 y se reparten de acuerdo con la densidad demográfica. A todos ellos se les permite recibir un pago de medio tiempo para no ser considerados políticos de tiempo completo. Los treinta y dos condados pueden considerarse gobiernos municipales.



## **ORÍGENES, ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS PARLAMENTARIAS EN IRLANDA**

Al igual que en Escocia, el juego parlamentario irlandés comenzó a gestarse en el siglo XIII a partir de que en 1264 se convocó a los hombres más notables para conformar una asamblea en Castledermont, en la provincia de Leinster, aunque pocos años después fue trasladada al área que comprende en la actualidad la ciudad de Dublín. Para finales del mismo siglo se tiene constancia de que a estas reuniones acudían los jefes de clanes, hombres conocedores de usos y costumbres, druidas y poetas, quienes formaban parte de la aristocracia celta.

Ahora bien, antes de continuar con el estudio del parlamentarismo irlandés es necesario estudiar algunos de sus antecedentes históricos para identificar las peculiaridades que delinear los grandes contrastes entre Irlanda e Inglaterra. Dicho esto, debe mencionarse que la isla que hoy en día se conoce como Irlanda fue poblada por grupos identificados como celtas, cuyo aislamiento, por cerca de mil años, ayudó a configurar su cultura y lenguas autóctonas. Es importante añadir que si bien Roma no se aventuró a la conquista de Hibernia —hoy conocida como Irlanda—, sí serían los celtas durante los siglos V y VI quienes se adentraron en Caledonia, hoy Escocia, llevando consigo su estilo de vida y estructura tribal a las regiones altas. Con el paso de los siglos, celtas y pictos se mezclaron dando paso a la cultura y a la lengua gaélicas escocesas.

De esta forma, y gracias en buena medida a su carácter insular, los celtas desarrollaron sus propias estructuras de gobierno y autogestión sin intervención de potencias extranjeras. De hecho, mientras que Inglaterra y Escocia ya habían sido cristianizadas, en Irlanda las religiones paganas continuaban vigentes entre los diversos clanes hasta la llegada del misionero cristiano San Patricio, quien a mediados del siglo V comenzó allí su labor evangelizadora, al mismo tiempo que introdujo la palabra escrita.

No obstante la conversión católica irlandesa, la cultura autóctona de los celtas, así como las características geográficas que hacían difícil el acceso a la isla fueron factores que permitieron su desarrollo independiente basado en gobiernos tribales con una lengua propia, pero sin estructuras políticas sólidas ni conciencia nacional. Esta condición se hizo evidente a partir del siglo IX con la llegada de los vikingos, quienes aprovecharon las divisiones internas de los clanes celtas para empujarlos a tomar partido y fortalecer así a las tribus afines mediante la creación de alianzas firmes y duraderas. Ello permitió que los vikingos fueran asentándose sin grandes dificultades en Irlanda, y que adoptaran la cultura celta, mezclándola con elementos culturales nórdicos, lo que dio paso a una sincrética cultura y lengua gaélica irlandesa. A lo anterior debe agregarse la fusión interracial entre celtas y vikingos, que se produjo sin complicaciones religiosas.

Fue tan importante el impacto de la conquista vikinga en Irlanda, que no sería sino hasta la segunda mitad del siglo IX cuando comenzaron a fundarse los primeros asentamientos urbanos en todo el país por iniciativa de los conquistadores nórdicos. Ello al mismo tiempo que en el campo se estableció la cría de ganado como el pilar de la economía, debido sobre todo al carácter húmedo de la región, poco favorable para labrar la tierra. Tales características permitieron el surgimiento de cientos de pequeños reinos sin coherencia interna ni elementos que facilitarían la unión de unos con otros (Killeen, 2012: 12). Lo anterior fue el común denominador del dominio vikingo en Irlanda, que se prolongó del siglo IX al XII.

Cabe agregar que durante el siglo XI la cristianización de los vikingos coadyuvó a completar el proceso de asimilación de los descendientes de los antiguos conquistadores nórdicos en Irlanda; sin embargo, el carácter divergente que prevaleció entre los diferentes reinos y clanes irlandeses permitió una nueva oleada de invasiones a partir de 1169 en el siglo XII. En esta ocasión, los protagonistas fueron los normandos, quienes tras conquistar Inglaterra un siglo antes decidieron continuar con sus campañas de dominio en el extremo noroeste de Britania y desembarcar en costas irlandesas, arrasando con todo a su paso. Estos normandos —descendientes directos de los vikingos cristianizados y asentados en el norte de Francia desde el siglo X— contaban con una superioridad militar inigualable gracias a su caballería, dotada con poderosas armaduras, y a su gran capacidad de arcos y flechas de larga distancia que provocaban estragos entre sus rivales (Killeen, 2012: 47).

Fue por ello precisamente que su conquista de los reinos anglosajones que ya formaban parte de Inglaterra desde el siglo x —Mercia, Essex, Northumbria y Wessex, entre otros— fue un acontecimiento que determinaría el futuro de la propia Inglaterra, ya que tras el triunfo normando los usos y costumbres ingleses se mimetizaron a su vez con las costumbres francesas, adoptadas por los descendientes de los vikingos de Normandía, lo cual dio paso a una nueva cultura y a nuevos hábitos políticos a partir de 1066 (Ackroyd, 2011: 81-91).

De ese modo, debido a la posición geográfica y estratégica de Dublín, su conquista por parte de los normandos abrió la puerta para el establecimiento de un reino feudal en la isla, pues desde ahí se concentraron y organizaron las actividades económicas y políticas hacia toda Irlanda. Esta conquista normanda no sólo aseguró su posición en territorio irlandés, sino que también fortaleció su alianza con los reinos gaélicos escoceses, condición ideal para reafirmar su dominio en tierras inglesas. Así, a partir de la invasión de los normandos a la antigua Hibernia, de manera particular desde el desembarco en Waterford en 1171, la Corona inglesa —usurpada y adoptada por los invasores un siglo antes— se insertó de lleno en la historia de la nación irlandesa, con lo cual daba inicio la presencia permanente de Inglaterra como potencia extranjera por más de ochocientos años, hasta la creación del Estado libre de Irlanda en 1922 (Killeen, 2012: 49).

De acuerdo con esta dinámica, el monarca anglo-normando Henry II, quien gobernara de 1154 a 1189, fue el encargado de administrar el nuevo territorio irlandés anexado a su Reino.<sup>1</sup> El paso de los años ocasionó que los barones anglonormandos impusieran las leyes inglesas en las regiones ocupadas, lo que incluía la reproducción de los patrones feudales en la sociedad, así como de las leyes y del sistema parlamentario establecido en Inglaterra; no obstante, lo que ocurrió con los invasores vikingos sucedió también con los normandos, ya que muy pronto las autoridades y colonos anglonormandos comenzaron a adoptar las costumbres irlandesas, creándose así nuevos usos sociales híbridos.

Todo ello provocó que en el siglo XIV, el rey Edward III impusiera una serie de leyes severas que sancionaban la alineación inglesa en Irlanda. El

<sup>1</sup> Es conveniente señalar que desde el principio a Irlanda se la consideró un señorío separado de la Corona inglesa hasta 1541, año en que fue incorporado al Reino de Inglaterra.

primer paso fue legitimar nuevos reglamentos a través del Parlamento inglés. Dichos reglamentos conocidos como los estatutos de Kilkenny (1367), incluyeron la prohibición de matrimonios entre ingleses e irlandeses bajo pena de muerte, hablar la lengua irlandesa, vestir como irlandés, usar barba como irlandés; utilizar nombres irlandeses, adoptar niños o niñas irlandesas, permitir a irlandeses que su ganado pastoree en propiedades inglesas; comerciar con irlandeses, entre otras disposiciones (Library Ireland. Irish Books Online, 2017a). De hecho, matar a un irlandés no se consideraba una falta grave.

En lo que corresponde al parlamentarismo irlandés, como se dijo, éste comenzó sus operaciones en 1264, a partir de una convocatoria para reunir a los hombres más notables de la región en Castledermont, Leicester. Desde entonces se decidió adoptar funciones legislativas a imagen y semejanza del parlamentarismo inglés. A partir de este primer llamado, cada condado enviaría a dos caballeros para representar los intereses locales; sin embargo, para finales del siglo XIII se determinó que cada uno enviaría a un caballero y a un burgués con periodos de reunión que variaban de uno a dos años de forma indistinta.

A diferencia de sus símiles en Inglaterra y Escocia, el Parlamento irlandés no podía considerarse un órgano representativo del pueblo, ya que los hombres notables que asistían a sus debates formaban parte de un grupo social de conquistadores extranjeros ajenos a los intereses del país, quienes además de forma coordinada aceptaban y legislaban las reformas que desde el Parlamento inglés les mandataban.

Sin embargo, a lo largo del siglo XV la alineación de los descendientes de los conquistadores anglonormandos a los usos y costumbres irlandesas, incluso a su propio idioma, provocó que la Corona inglesa impusiera una serie de medidas extremas para reafirmar su poder y su presencia en el Parlamento de aquel país. Lo anterior, como respuesta a una serie de iniciativas locales tendientes a desconocer las leyes impuestas desde el Parlamento de Inglaterra. La muestra más clara de este encono en contra del parlamentarismo irlandés fue el envío en 1494 de Sir Edward Poynings como jefe de gobierno a Irlanda, con la encomienda de imponer un mecanismo parlamentario conocido como Ley Poynings.

Dicha Ley prohibía convocar al Parlamento de Irlanda hasta que la Corona inglesa otorgara su venia a las leyes que pretendían discutir los representantes irlandeses. Para lograrlo, se requería del sello real y de su aprobación en el Parlamento inglés (Ardill, 1907: 1). Lo anterior supuso limitar *de facto*



el poder de los nobles anglonormandos, mismos que no tuvieron mayor alternativa que observar cómo su autoridad era limitada desde la propia Corona. Lo anterior se agudizó por el hecho de que el monarca en turno gozaba de la facultad de veto ante cualquier propuesta irlandesa, además de que dicha iniciativa la tenía que aprobar primero el Parlamento inglés. De este modo, el parlamentarismo irlandés quedó supeditado de manera directa al órgano legislativo en Londres, el cual discutía y aprobaba las leyes aplicables en Irlanda.

Unas cuantas décadas después, durante el reinado de Henry VIII, y en medio de la reforma protestante que separó de manera definitiva a Inglaterra de la Curia romana, la Corona inglesa se adjudicó en 1541 el derecho de incorporar todo el señorío irlandés al Reino de Inglaterra. Al respecto, la actitud parlamentaria irlandesa no deja de ser curiosa, pues respondieron que el Parlamento irlandés aceptaba “alegremente y de buena gana” el proyecto de ley que otorgaba a Henry VIII el título de rey de Irlanda (UK Parliament, 2017c).

Así, una vez desposeídos los curas de sus monasterios y negada su presencia en el Parlamento irlandés tras la reforma religiosa de Inglaterra, fue evidente que los protestantes ingleses buscaban ejercer una mayor presión sobre la mayoría católica en Irlanda. Esto provocó intensas rebeliones sociales a partir de la segunda mitad del siglo XVI y hasta mediados del XVII en contra de la Corona inglesa. Lo anterior sucedía al mismo tiempo en que colonos protestantes ingleses y escoceses se asentaban en territorio irlandés, generándose con ello expectativas entre los miembros del gobierno inglés de disminuir el impacto social y económico de los católicos rebeldes, que de manera constante se levantaban en armas.

No obstante tales esfuerzos ingleses, en 1641 estalló el conflicto civil más intenso hasta ese momento, que se conoce como la rebelión civil irlandesa o la guerra civil irlandesa de 1641. En ella un grupo de terratenientes acaudalados, entre los que se incluían barones de añejas familias irlandesas<sup>2</sup> y descendientes de conquistadores anglonormandos,<sup>3</sup> se aliaron con el clero católico y decidieron desconocer al gobierno de Inglaterra, sobre todo por la amenaza que representaba para la mayoría católica el movimiento parlamentario puritano inglés y los colonos protestantes que iban asentándose progresivamente en la provincia del Úlster (al noreste de la isla). Lo anterior,

<sup>2</sup> Este grupo es conocido en la historia irlandesa como los *Old Irish*.

<sup>3</sup> Por su parte, a este grupo se lo conoce como los *Old English*.

sumado a las leyes impuestas desde Inglaterra, que reducían progresivamente los derechos de los irlandeses adeptos al catolicismo de todos los estratos económicos.

Ante este acto de rebeldía, de inmediato el rey Charles I y el Parlamento inglés decidieron enviar tropas para someter la insurrección irlandesa, y además en una muestra de su poder determinaron que el costo de la campaña militar lo absorbería en su totalidad la propia Irlanda y no se utilizarían recursos ingleses (UK Parliament, 2017d). Este conflicto fue un reflejo de los problemas que enfrentaba el monarca al interior de su propio Reino, ya que en Escocia se había suscitado, durante el mismo periodo, un levantamiento similar por motivos religiosos que se reflejó en la desobediencia del Parlamento escocés; no obstante, lo más grave para Charles I fueron sus problemas en el mismísimo Parlamento de Inglaterra, que había permanecido cerrado durante años debido a su tendencia a limitar el poder del monarca.

A pesar del apremio que representaba el levantamiento irlandés, el recién reabierto Parlamento de Westminster decidió condicionar sus apoyos posteriores al monarca para dotarlo de recursos frescos con los cuales pudiera hacer frente a los levantamientos en Irlanda y Escocia; sin embargo, Charles I optó por emprender su campaña militar sin la aprobación del Parlamento, situación que le abrió un frente más en la propia Inglaterra, pues los parlamentarios ingleses consideraron ilegal que el rey solicitara recursos o pusiera en marcha campañas militares sin su respaldo.

De esta forma, la guerra civil irlandesa de 1641 se constituyó en parte de la guerra de los tres reinos, la cual a su vez desembocó en la guerra civil inglesa de 1641 a 1646. La región que más resintió el impacto de la guerra civil irlandesa fue precisamente la provincia del Úlster, pues ahí se asentaban los colonos protestantes provenientes de Inglaterra y Escocia, sobre todo a partir de inicios del siglo XVII. La venganza por parte de los católicos irlandeses fue implacable en toda la región, pues se estima que alrededor de diez mil protestantes perdieron la vida en estos acontecimientos, ya sea por la acción directa de las milicias católicas, o por el abandono de familias y comunidades enteras a las orillas de los caminos para morir de frío en el invierno. Estos sucesos provocaron el desplazamiento de miles de colonos protestantes que buscaban huir a Inglaterra o Escocia para no caer en manos de las masas marginadas católicas irlandesas, que habían sufrido las penurias y la discriminación en su propia tierra durante generaciones (Killeen, 2012: 94).

Tras el éxito inicial de la campaña en el Úlster, las milicias católicas irlandesas se dirigieron al Sur y crearon en octubre de 1642 la Confederación de Kilkenny.<sup>4</sup> Desde ahí los *Old Irish* y los *Old English* unieron sus esfuerzos para proteger la religión católica. Es importante añadir que los *Old English*, como descendientes de los conquistadores normandos, nunca se habían revelado en contra del monarca inglés, pero la ofensiva protestante dirigida a golpear de manera insistente la religión católica en Irlanda los colocó ante la disyuntiva de ser fieles a la Corona inglesa o a Dios. La mencionada Confederación de Kilkenny contó con el apoyo de la Iglesia de Irlanda y del papa Inocencio x (1644-1655), quien encomendó al nuncio papal Gianbattista Rinuccini, como su representante directo, defender a la Confederación ante el gobierno inglés y promover su sobrevivencia ante las coronas de Francia y España.

El nuncio papal Rinuccini llegó a Irlanda con dinero y armas para la Confederación, pero no pudo conseguir los apoyos necesarios de los reinos católicos de Europa. Al mismo tiempo, las diferencias entre los *Old Irish* y los *Old English* comenzaron a hacerse más evidentes, pues los segundos mostraron su intención de unirse a las fuerzas militares del monarca Charles I en su lucha en contra del Parlamento protestante durante la guerra civil inglesa. Esta situación provocó que la Confederación de Kilkenny se erigiera con objetivos diferentes, pues mientras que los *Old Irish* buscaban una separación completa de la Corona inglesa para alcanzar la autogestión, los *Old English* insistían en congraciarse con el monarca y alcanzar acuerdos de convivencia entre protestantes y católicos en Irlanda.

La Confederación de Kilkenny se erigió sobre basamentos parlamentarios, ya que desde el inicio de sus funciones se escogió a una serie de hombres notables para representar los intereses de la Irlanda católica. De este modo, se determinó que la Asamblea de Kilkenny se conformara con once obispos católicos, catorce barones y 226 comunes, elegidos estos últimos por los terratenientes de todas las provincias. Los miembros de esta Asamblea formarían un gobierno con un consejero supremo y desde ahí se dirigiría el pago de impuestos para financiar la guerra (Library Ireland. Irish Books Online, 2017b). Cabe añadir que desde el principio los *Old English* miembros

<sup>4</sup> La Confederación adoptó ese nombre porque la reunión y el acuerdo se celebró en la ciudad de Kilkenny, ubicada en el condado del mismo nombre, que se sitúa a 128 kilómetros al suroeste de Dublín.

de este organismo reconocieron la autoridad del rey Charles I, y justificaron su presencia y participación en dicho cuerpo colegiado como parte de sus esfuerzos para contrarrestar al Parlamento puritano que desde Londres buscaba limitar su poder real.

De esta manera, desde la Asamblea de Kilkenny se estableció el envío de tropas irlandesas para defender al monarca inglés en contra de las fuerzas puritanas inglesas y presbiterianas escocesas; tal decisión dividió aún más a los irlandeses, pues los *Old Irish* se negaban a ofrecer asistencia a una Corona que los había despreciado de todas las formas posibles, incluido el robo de sus tierras milenarias en el Úlster.

Sin embargo, el ofrecimiento de la Corona inglesa y sus representantes en el sentido de tolerar la religión católica, su compromiso para anular la Ley Poyning, para contemplar un autogobierno irlandés, revertir parcialmente los procesos coloniales en el Úlster, pero, sobre todo, para respetar las tierras que ocuparon los católicos durante el inicio del conflicto (*E-rea*, 2017) fueron razones suficientes para que los *Old English* se sumaran al esfuerzo militar de la Corona inglesa en contra de su Parlamento.

A partir de ese momento los irlandeses católicos actuaron en tres frentes, uno de ellos dedicado a contener a ingleses y escoceses protestantes en el Norte en sus intentos por avanzar hacia el sur de Irlanda; otro más para ejercer el control sobre Dublín, y un tercero en territorio inglés, para combatir a las tropas protestantes leales al Parlamento que se había levantado en contra del monarca; sin embargo, la derrota de las fuerzas leales a Charles I y su posterior decapitación en 1649 dejaron muy mal posicionados a los católicos, ya que con la muerte del rey los acuerdos firmados quedaron anulados.

De inmediato el Parlamento de la Grupa inglés encomendó al general Oliver Cromwell someter a los irlandeses de manera ejemplar. Fue así como entre 1649 y 1653 las tropas parlamentarias inglesas, conocidas como el Nuevo Ejército Modelo (*New Model Army*), se concentraron en “reconquistar” territorios irlandeses. Para lograrlo, la institución parlamentaria se amparó en una serie de leyes que invitaban a la población a invertir sus recursos en la campaña militar a cambio de devolverles tierras confiscadas a los rebeldes, en algo que se conoció como la *Adventurers’ Act* o Ley de los Aventureros (BHO British History Online, 2017). Por esa razón, Cromwell dispuso de cuantiosos recursos económicos para reforzar una armada muy poderosa y experimentada para su campaña en Irlanda.

De tal forma, que desde la toma de Dublín a finales de 1649, el ejército de Cromwell fue apuntándose éxito tras éxito en su campaña irlandesa, caracterizándose por la crueldad extrema de sus métodos para infundir miedo a sus adversarios, pues tras la toma militar de las ciudades quedaban a su paso miles de muertos entre milicianos y civiles. En todo caso, el conflicto irlandés de 1641 a 1653 fue extremadamente costoso en vidas para el país, pues se estima que las campañas militares iniciales, el hambre, las enfermedades y la conquista de Irlanda por parte de Cromwell dejaron tras de sí seiscientos mil muertos, cifra desproporcionada para aquellos años debido a la escasa densidad demográfica. Algo en que coinciden los investigadores contemporáneos es que la crueldad de los métodos empleados por Cromwell en Irlanda parece ser una especie de castigo ejemplar por las matanzas de protestantes efectuadas por los católicos en el Úlster en 1641 (Parmele, 2016: 90). Por ello, no cabe duda que Cromwell subyugó de forma efectiva a toda la isla, imponiendo la ley inglesa y su poder en todos los rincones del país (Killeen, 2012: 96). Así de efectiva e implacable fue la huella de Cromwell en Irlanda.

Una vez derrotados los católicos, desarticulada la Confederación de Kilkenny y disuelta su Asamblea, miles de soldados irlandeses huyeron para incorporarse a las filas de las milicias en España y Francia, miles más fueron vendidos como esclavos a las posesiones en el Caribe y otros tantos fueron ejecutados por participar en la revuelta de 1641.

La religión católica quedó proscrita; muchos de sus sacerdotes fueron arrestados y asesinados, situación que obligaba a los sobrevivientes a permanecer escondidos y protegidos por sus comunidades para desde ahí profesar su fe en la clandestinidad. Asimismo, de acuerdo con las leyes emitidas por el Parlamento para financiar la campaña militar de Cromwell, se expropiaron las posesiones de los terratenientes *Old Irish* para otorgárselas a los inversionistas protestantes ingleses. Esto último terminó con siglos de tradición terrateniente,<sup>5</sup> con sus ancestrales familias irlandesas y el modo de vida de las comunidades aledañas. De la misma forma, la invasión de Cromwell y los excesos cometidos alimentaron el nacionalismo irlandés y sus rencores en contra de los conquistadores ingleses.

El gran poderío concentrado por Oliver Cromwell, su ejército y el movimiento puritano en Inglaterra desembocó en la desarticulación del Parla-

<sup>5</sup> En las provincias de Munster, Connacht y Leinster.

mento inglés y en la conformación de un gobierno militar autocrático con el propio Cromwell al frente, con duración de 1653 a 1658. La clausura del parlamentarismo en Londres y el fortalecimiento de su figura como “Lord Protector” del país provocaron que sus antiguos aliados en Westminster buscaran el retorno de la Casa Estuardo al poder, con Charles II al frente de la Corona. Así, la muerte de Cromwell en 1658 y la nula habilidad de su hijo Richard para mantener en el poder a la casta militar permitieron que el Parlamento y la Corona ingleses regresaran a sus funciones en 1659.

El retorno de la monarquía a Inglaterra significó la derrota de los puritanos frente a la Iglesia anglicana y ello estimuló que muchos terratenientes irlandeses católicos buscaran a Charles II para pedirle la restitución de sus tierras confiscadas por Cromwell. Si bien es verdad que el nuevo rey inglés era un anglicano moderado casado con una católica francesa, también era cierto que su padre había sido decapitado por el Parlamento con el que gobernaba y por ello evitó generarse mayores conflictos con sus miembros. De hecho, su gobierno contó con recursos económicos provenientes de Francia, lo que evitó problemas innecesarios con los parlamentarios ingleses. Por ello, Charles II procuró no entrometerse en asuntos irlandeses más allá de lo justo, aunque sí es verdad que buscó devolverle sus tierras a algunas familias *Old English*, al mismo tiempo que fue muy tolerante con los católicos, permitiéndoles la autogestión de Dublín bajo la tutela de un sobreviviente de la guerra civil irlandesa, James Butler, a quien incluso otorgó el título nobiliario de Primer Duque de Osmond (Killeen, 2012: 98-99).

En el espectro legislativo queda claro que el parlamentarismo irlandés, con excepción de la Asamblea de Kilkenny, se constituiría casi siempre como un aparato inerte sin capacidad de decisión frente al Parlamento inglés. Una muestra de ello es que incluso carecía de una sede permanente, pues sus reuniones se celebraban de manera indistinta en edificios de las ciudades de Drogheda, Kilkenny o Dublín; no obstante, a partir de la restauración de la monarquía en Inglaterra, el Parlamento irlandés elaboró una nueva forma de presentar sus propuestas legislativas. Éstas serían conocidas en inglés como *Head of Bills*, algo que en castellano podría expresarse como “iniciativas de ley dirigidas”.

Las *Head of Bills* consistían en que los parlamentarios irlandeses elaboraban propuestas que dirigían al representante de la Corona en el país (*Lord Lieutenant*). Cuando éstas contaban con el visto bueno del representante de

su majestad entonces eran enviadas al Parlamento inglés, en donde tenían que someterse al Pleno; allí podían enmendarse, rechazarse o devolverse a Irlanda. Si ocurría esto último, entonces eran consideradas como aprobadas por ambos parlamentos y entraban en vigor (McGrath, 2009: 324). Precisamente estas *Head of Bills* se convirtieron en parte central del parlamentarismo irlandés, pues a través de ellas las interpretaciones a la controvertida Ley Poyning daban alguna oportunidad a los nativos en contra de los abusos de los protestantes, pues tanto el rey como los comunes accedían a un conocimiento directo de las inquietudes irlandesas. Cabe agregar que este procedimiento se mantuvo entre ambos parlamentos hasta la declaración de independencia parlamentaria de Irlanda en 1782 (Ardill, 1907: 4).

No obstante lo anterior, las décadas que siguieron a la reinstauración de la monarquía parlamentaria en Inglaterra fueron de subordinación y restricciones constantes al Parlamento irlandés, situación que continuó incluso una vez erigido el Reino de la Gran Bretaña en 1707, ya que la gran mayoría de la población irlandesa rechazó la posibilidad de incluir a su nación en el nuevo Reino. Posición que por cierto fue compartida por la mayor parte de sus parlamentarios, pues de forma recurrente observaban cómo tanto la Cámara de los Lores como la de los Comunes británicas se reservaban el derecho de elaborar leyes y de actuar como tribunales de última instancia en casos de exclusiva competencia parlamentaria irlandesa.

Esta postura se intensificó en 1720, cuando desde Westminster se decidió aprobar una nueva legislación que le otorgaba capacidad al gobierno de Inglaterra para emitir leyes en Irlanda sin intervención de sus autoridades. El propósito de este tipo de reglamentos fue, sin duda, hacer sentir a los comunes irlandeses y a su pueblo el poder inglés que pesaba sobre ellos. Una muestra fue la Ley de 1728, que nuevamente limitaba los derechos de propiedad de los católicos (UK Parliament, 2017e).

Toda esta situación fue generando desorden y pobreza al interior del país, pues los terratenientes ingleses que se habían apoderado de enormes extensiones de tierra en Irlanda solían arrendársela a católicos en condiciones muy desfavorables, lo que no permitió el desarrollo exitoso de la burguesía local, y sí en cambio una gran masa de campesinos mal pagados y mal alimentados. Lo anterior contribuiría a la primera gran hambruna irlandesa en el periodo 1740-1741, en la cual se estima que perdieron la vida alrededor de cuatrocientas mil personas de un total de 2 500 000 habitantes con los que

contaba el país en ese momento (Killeen, 2012: 111); esto es, alrededor del 16 por ciento.

Quizá lo más grave de este proceso fue que mientras una parte considerable de población católica se debatía entre la vida y la muerte por esa gran hambruna de mediados del siglo XVIII, el Parlamento irlandés no pudo ejercer acción alguna para contener sus efectos, ya que ello habría significado desposeer de la tierra a sus propietarios ingleses protestantes para cultivarla y así aliviar el hambre. Empero, esto último era algo que el Parlamento inglés no iba ni siquiera a contemplar. De hecho, “los efectos devastadores de la hambruna de 1740 [en Irlanda], cuyas consecuencias seguían resintiéndose cinco años después, fueron otro indicador de la victoria y seguridad protestantes” (Killeen, 2012: 112).

Pese a las condiciones adversas, un grupo de parlamentarios irlandeses, encabezados por el nacionalista Henry Grattan, entraron en contacto con algunos comunes británicos con el fin de concientizarlos acerca de las condiciones de sometimiento del Parlamento en Irlanda y su limitada capacidad para velar por los intereses de la gente. Ante ello, el gobierno británico fue eliminando una serie de restricciones políticas y comerciales en Irlanda que ocasionaron su independencia parlamentaria en 1782, con el mandato de que dicha separación de la nación irlandesa “se diera en sus propios términos, otorgándoseles todo lo que querían en la forma en que ella misma parecía quererlo” (UK Parliament, 2017e); no obstante, la administración de Irlanda continuó en manos de un *Lord Lieutenant* y de autoridades nombradas desde Gran Bretaña, por lo que si bien se había logrado la independencia legislativa, ello no significó la autonomía administrativa.

Ahora bien, pese a que el Parlamento irlandés comenzó a sesionar de manera independiente a partir de esa fecha, y de que la Ley Poyning de finales del siglo XV había sido reformulada, lo cierto era que el sentimiento nacionalista y la radicalización de amplios sectores católicos en contra de Gran Bretaña y los protestantes iban en aumento. Este sentimiento anti inglés se vio alimentado por la declaración de independencia en Estados Unidos de 1776, y también por la Revolución francesa de 1789, pues ambos movimientos revolucionarios expresaban el hartazgo social en contra de gobiernos despóticos y servían como guía para el nacionalismo irlandés. De hecho, el viraje de Gran Bretaña respecto del sometimiento del Parlamento en Irlanda y su actitud más complaciente con los comunes irlandeses parecería ser parte



de una estrategia propensa a distender los sentimientos patrióticos de sus vecinos, motivados por la independencia estadounidense y también por la influencia de los pensadores ilustrados franceses.

Todo lo anterior estimuló un nuevo movimiento patriótico en Irlanda conocido como la Rebelión de 1798, organizada por el Grupo de los Irlandeses Unidos, integrado por católicos y protestantes presbiterianos del Úlster, quienes impulsaban la independencia administrativa y política del país respecto de Gran Bretaña, y encontraban en el triunfo de la Revolución francesa su principal inspiración. Es importante añadir que el Parlamento irlandés, compuesto principalmente por aristócratas protestantes anglicanos, desaprobó este movimiento y lo condenó, alineándose a lo establecido desde Londres para contener dicha revuelta.

Esta rebelión pronto tomó matices de guerra civil, pues los protestantes anglicanos apoyaron a las autoridades parlamentarias irlandesas y al gobierno británico, el cual envió miles de tropas para contener y eliminar a los alzados en armas. La respuesta británica fue contundente, pues aplastó de forma cruel a las fuerzas rebeldes y a las comunidades que las apoyaban. Se calcula que alrededor de veinticinco mil rebeldes perdieron la vida durante los poco más de cuatro meses del conflicto, y en un gran porcentaje éstos fueron civiles (BBC History, 2017).

Cabe añadir que, a diferencia de movimientos anteriores, la jerarquía católica irlandesa no apoyó esta insurrección por el temor que había despertado la Revolución francesa entre las altas esferas católicas europeas, y sí en cambio se alió con el Parlamento irlandés, lo que redundó en beneficios para la Iglesia católica en Irlanda después del conflicto, pues el gobierno británico se mostró más tolerante hacia ella.<sup>6</sup>

Sin duda, la revuelta irlandesa de 1798 sirvió de excusa para que el primer ministro *torie* William Pitt —quien por cierto gozaba del control de ambas cámaras—, decidiera proponer al Parlamento, en el periodo 1799-1800, la inclusión de Irlanda como parte del Reino de la Gran Bretaña (McGrath,

<sup>6</sup> Es importante añadir que previamente, es decir, en 1791, se aprobó desde el Parlamento británico la *Roman Catholic Relief Act*, o Ley de Alivio de la Religión Católica, cuya principal característica fue disminuir las limitantes a los católicos para incorporarse a las labores políticas, económicas y de carácter educativo. A partir de este momento, se les permitía el estudio y la práctica del derecho, así como el ejercicio de su religión y la existencia de escuelas católicas. A cambio, los creyentes en el catolicismo debían jurar su lealtad al monarca de Gran Bretaña. La Ley entró en vigor en Irlanda en 1793 (Politics.ie, 2017).

2009: 324). Para lograrlo prometió que a los católicos se les otorgaría el derecho de voto para elegir representantes en la Cámara de los Comunes británica. También ofreció tierras a los descendientes de los viejos terratenientes despojados de sus posesiones décadas atrás, además de que se garantizó asientos a la alta nobleza irlandesa en la Cámara de los Lores (UK Parliament, 2017f). Todo ello buscó de una u otra forma poner fin a las diferencias constitucionales, religiosas, sociales y económicas predominantes entre ambos países durante siglos.

De esa forma se creó un ambiente favorable para que el Parlamento irlandés secundara la propuesta de su par británico para incorporarse al Reino, situación que se hizo oficial el 1º de agosto de 1801, al quedar formalmente integrado el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, decreto que terminó *de facto* con cinco siglos de difícil funcionamiento del parlamentarismo irlandés, el cual era frecuentemente considerado por el propio Parlamento de Westminster como “la asamblea más corrupta que jamás haya existido en toda Europa” (Ardill, 1907: 140-143).

Una vez incorporada al Reino, y de acuerdo con los compromisos elaborados por el primer ministro William Pitt, Irlanda envió treinta y dos lores y cien comunes al Parlamento en Westminster para sumarse a sus pares ingleses, escoceses y galeses. De este modo, las tres primeras décadas del siglo XIX estuvieron marcadas por el reforzamiento de los movimientos patrióticos irlandeses que luchaban por el reconocimiento de sus derechos como minoría católica en un reino de mayoría protestante.

Un personaje que jugó un papel central en este periodo fue Daniel O’Connell, quien era miembro de una aristocrática familia católica irlandesa, que lo envió a estudiar a prestigiosos colegios jesuitas en Francia. Acogido por las leyes de alivio a la religión católica emitidas por Gran Bretaña a finales del siglo previo, O’Connell estudió la carrera de derecho en Londres. A su regreso, organizó en 1823 un gran movimiento nacional para exigir el reconocimiento y cumplimiento de los derechos políticos de los católicos en Gran Bretaña. Sus actividades en la arena de la política lo catapultaron como candidato para ocupar un asiento en la Cámara de los Comunes en Westminster en 1829, proceso que incluyó una dura batalla civil para exigir que se respetaran los resultados de su elección en County Clare, en la provincia del Munster, al suroeste de Irlanda, pues hasta ese momento las leyes británicas no permitían la llegada de comunes católicos al Parlamento.

De este modo, a partir de Daniel O'Connell los católicos irlandeses comenzaron a ocupar asientos en el Parlamento de Westminster (Killeen, 2012: 161-168), y de inmediato, estimulados por el ejemplo de su líder, se empeñaron en mantener una posición patriótica y nacionalista frente al resto de sus pares.

Según esta dinámica, en 1834 O'Connell encabezó una moción de abrogación de la unión de Irlanda al Reino Unido de la Gran Bretaña, pero fue derrotada en la Cámara de los Comunes por 523 votos en contra y sólo 38 votos a favor; no obstante ese resultado, O'Connell insistió en conformar comisiones de análisis de su petición al interior del Parlamento británico, y declaró que 1843 sería el año de la abrogación. El sustento de su lucha era que Irlanda se encontraba en la ruina debido al abuso inglés; que las fábricas irlandesas habían dejado de producir para beneficiar únicamente a la industria y a la manufactura inglesas; que el campo irlandés había dejado de generar suficientes alimentos para enriquecer únicamente a sus propietarios ingleses en perjuicio de los arrendatarios irlandeses, los cuales no contaban con seguridad alguna. También afirmaba que de acuerdo con el tamaño de la población y el monto de la riqueza producida, Irlanda tenía derecho a 175 comunes y no sólo a 105, además de que las leyes en ambos países perjudicaban siempre a Irlanda, entre muchas otras cosas (Library Ireland, Irish Books Online, 2007c).

Sin embargo, con un Parlamento en donde los irlandeses católicos eran minoría, la abrogación de 1834 fue derrotada de nuevo, pero en esta ocasión el primer ministro británico, Sir Robert Peel, afirmó ante la Cámara de los Comunes que él personalmente haría lo que fuera necesario para mantener la unión, incluso si ello significaba crear mecanismos parlamentarios que hicieran imposible el desmembramiento del Reino (UK Parliament, 2017g).

El problema central para O'Connell en su aventura parlamentaria para alcanzar la abrogación de la unión fue que no toda Irlanda era católica, es decir, existían tres provincias católicas: Leinster, Munster y Connacht, pero la provincia del Norte (Úlster) no lo era, aunque al interior de la misma existían diferencias entre los protestantes anglicanos leales a la Corona británica y los presbiterianos descendientes de escoceses. Por cierto, estos últimos eran los que compartían en general los postulados liberal-democráticos de las revoluciones de Estados Unidos y Francia (Killeen, 2012: 169).

Por ello, al no contar con la uniformidad requerida al interior de su país, la propuesta de O'Connell no obtuvo el apoyo de sus homólogos escoceses y galeses en la Cámara de los Comunes, quienes si bien ni todos juntos alcanzaban

la mayoría, una demostración de unidad y solidaridad en favor de la causa irlandesa habría generado nuevos escenarios políticos en el Reino. Dos años después, esto es, a partir de 1845 y hasta 1850, todas las críticas de O'Connell en relación con el desproporcionado dominio inglés en su nación se vieron reflejadas de una forma cruel y dramática en la que ha sido una de las más grandes calamidades de la historia irlandesa: la gran hambruna.

Una vez que fueron derrotadas en forma sucesiva las distintas mociones nacionalistas-católicas irlandesas resultó evidente su distanciamiento político con el resto de la Gran Bretaña. Muestra de ello fue la displicencia, apatía y lentitud con que las autoridades de Londres encararon el problema de la plaga de la papa, producto agrícola que se había convertido para mediados del siglo XIX en la base de la producción y el autoconsumo de la empobrecida sociedad católica irlandesa, que como se ha señalado dependía de su propia cosecha para alimentarse.

Del mismo modo, la venta del tubérculo proporcionaba los recursos para pagar el arrendamiento de las pequeñas porciones de tierra que habitaban, las cuales por cierto eran propiedad de terratenientes protestantes ingleses, quienes en su gran mayoría no vivían en Irlanda y tenían como costumbre incrementar sus rentas de manera regular.

Debe señalarse que en las primeras fases de la plaga de las papas, “la estrategia del gobierno [británico] tuvo como objetivo minimizar su propia responsabilidad para resolver el problema de la hambruna y culpó por su costo a Irlanda” (Killeen, 2012: 188). Los irlandeses consideran que los catastróficos niveles de miseria humana que contempló, la tristeza y la impotencia causaron la muerte de Daniel O'Connell, como consecuencia de un derrame cerebral en 1847 (Parmele, 2016: 100).

En realidad, la gran hambruna irlandesa de 1845 a 1850 fue un resultado del fracaso del liberalismo británico del siglo XIX, pues sus sustentos ideológicos impidieron al gobierno destinar los recursos suficientes para combatirla a tiempo y en forma, ya que las autoridades inglesas no brindaron el apoyo necesario para paliar los efectos de la plaga de las papas. A lo anterior deben agregarse los pobremente definidos derechos de la propiedad privada irlandesa, ya que los terratenientes de Inglaterra no tenían ninguna seguridad de continuar con sus posesiones en aquellas tierras, lo que estimulaba el incremento arbitrario de sus rentas a los católicos para maximizar sus ganancias. La excepción a este fenómeno se dio en la provincia de mayoría protestante del

Úlster, ya que allí los efectos de la hambruna y los conflictos entre arrendatarios y terratenientes se encararon de manera más eficaz (Herrán, 2005).

En general la gran hambruna irlandesa puede ser considerada la más clara expresión de un malogrado sistema social impuesto desde el exterior. Prueba de ello es que de los ocho millones de habitantes que había en 1840 la sangría demográfica, resultado de las fallidas guerras civiles de independencia, las hambrunas y sus enfermedades, además de las migraciones obligadas para no morir de inanición, dejaron a la población en cuatro y medio millones para 1900 (Herrán, 2005). Resulta conveniente destacar que alrededor de dos millones de irlandeses pudieron haber muerto tan sólo por los efectos de la gran hambruna del periodo 1845-1850 (Parmele, 2016: 100).

Es un hecho que después de la devastadora hambruna Irlanda no sería la misma. En primer lugar, su sistema agrícola experimentó agudos cambios tendentes a evitar a toda costa una crisis similar. Por ello, ese sector recibió un apoyo sin precedentes por parte de las autoridades irlandesas, que privilegiaron el comercio y la producción de especies variadas. Al mismo tiempo, surgieron asociaciones de arrendatarios en la provincia de Leinster,<sup>7</sup> y desde ahí se extendieron de forma gradual al resto del país. Para protegerse de los excesos de los propietarios; estos grupos contaron con el apoyo de los diputados liberales irlandeses en la Cámara de los Comunes en Londres, quienes supeditados al voto católico irlandés decidieron crear el Partido Independiente Irlandés (*Independent Irish Party*). Este partido fue tomando cada vez mayor fuerza, de manera que para las elecciones de 1852 contaba ya con cuarenta y ocho diputados, esto es, casi el 50 por ciento de los comunes a los que tenía derecho Irlanda en el Parlamento británico (Killeen, 2012: 200). Desde ese momento las demandas de justicia y equidad en favor de los católicos irlandeses ganaron fuerza y uniformidad entre los representantes del pueblo irlandés, pues no permitían que el tema de Irlanda quedara como un asunto secundario o tangencial en la política británica durante la segunda parte del siglo XVIII. Lo comprueba el dato de que para 1874 estos grupos políticos irlandeses ya concentraban cincuenta y nueve escaños en la Cámara de los Comunes, mientras que en 1885 eran ya ochenta y cinco bajo el liderazgo del experimentado diputado irlandés Charles Stewart Parnel,

<sup>7</sup> Estos grupos siguieron el ejemplo de los arrendatarios en la provincia del Úlster, en donde desde finales del siglo XVIII organizaciones de protestantes presbiterianos habían defendido con éxito sus derechos frente a los terratenientes protestantes anglicanos.

quien fue el encargado de presentar las demandas de su país ante los primeros ministros (UK Parliament, 2018a).

Dicha estrategia produjo buenos resultados para la causa patriótica de Irlanda, pues desde la Cámara de los Comunes comenzaron a emitirse leyes en favor de los campesinos y arrendatarios irlandeses, así como de la Iglesia católica del país. Esto último se vio reflejado en la política desarrollada por el primer ministro liberal William Gladstone, quien de manera intermitente fue primer ministro británico de 1868 a 1894. Gladstone se comprometió a pacificar Irlanda y por ello rompió los vínculos entre el gobierno británico y la Iglesia anglicana irlandesa, con lo que esta última dejaba de ser la Iglesia estatal (UK Parliament, 2017h).

Es claro que Gladstone procuró generar condiciones de mayor acercamiento con Irlanda y por ello, desde la mayoría parlamentaria de su partido, y pese a la férrea oposición de sus rivales conservadores y de la propia Cámara de los Lores, propuso y llevó adelante una ambiciosa reforma agraria y en la tenencia de la tierra que disminuía o incluso eliminaba los gravámenes a los arrendatarios irlandeses católicos, y al mismo tiempo obligaba a los terratenientes protestantes a vender a precios justos y razonables. Asimismo, tales leyes cancelaban todos los impuestos a las tierras propiedad del gobierno británico que se pusieran a la venta en Irlanda. También obligaba a los terratenientes protestantes a enviar los contratos de arrendamiento directamente a Westminster, para que ahí las comisiones legislativas los revisaran para evitar abusos de su parte. Con lo anterior, el primer ministro Gladstone envió el mensaje de que a partir de ese momento sería el Parlamento británico la instancia que tomaría el control sobre la tenencia de la tierra en Irlanda y no más el libre mercado. Una muestra de este activismo de Westminster para aliviar las tensiones con Irlanda fue que de 1870 a 1903 se aprobaron dieciocho leyes parlamentarias para beneficiar principalmente a los arrendatarios irlandeses y frenar así los abusos de los terratenientes protestantes (Killeen, 2012: 202-203).

Ahora bien, pese a la serie de concesiones efectuadas por el gobierno británico en la parte final del siglo XIX, el movimiento patriótico irlandés no cedía terreno y exigía el derecho al autogobierno. Lo anterior contaba con el rechazo expreso de la provincia del Úlster y su mayoría protestante anglicana, que buscaba a toda costa, mediante alianzas con los conservadores británicos y la Cámara de los Lores, impedir la instalación de un autogobierno

irlandés. Tal situación profundizó las diferencias entre el norte y el sur de Irlanda, pues los intereses de ambas regiones permanecían divergentes, no obstante los acercamientos entre la Iglesia católica y las protestantes en toda la isla como resultado de las leyes emitidas poco tiempo antes.

Este movimiento patriótico irlandés tuvo entre las clases medias bajas su semillero natural de activistas, quienes no olvidaban la gran hambruna y sus efectos demográficos adversos. Justo en esa etapa, durante la segunda década del siglo xx, y en medio de rechazos sistemáticos del Parlamento británico para otorgarles el derecho al autogobierno, diversas organizaciones patrióticas irlandesas crearon en 1913 los grupos paramilitares de “voluntarios irlandeses” (*Irish volunteers*). Al inicio estos grupos fueron concebidos para hacer frente a otra corporación paramilitar creada en el Úlster un año antes por los protestantes unionistas y bautizada como Fuerza Voluntaria del Úlster (*Ulster Volunteer Force*).

Estos *Irish volunteers* aprovecharon en 1916 la incertidumbre de la primera guerra mundial y declararon de manera unilateral la independencia de Irlanda de Gran Bretaña en un acontecimiento conocido como el “Alzamiento de Pascua”. Este movimiento encontró inspiración en los postulados políticos del *Sinn Féin*, agrupación política partidista surgida a principios del siglo xx, que demandaba la separación irlandesa de Gran Bretaña y su unidad geográfica total.

El alzamiento de Pascua por parte de los voluntarios irlandeses se orientó sobre todo a ocupar oficinas gubernamentales en Dublín, y desde ahí declararon el surgimiento de una república irlandesa. La respuesta del gobierno británico fue contundente y generó indignación entre amplios sectores sociales de Irlanda, tanto por la fuerza desmedida que causó centenares de muertos —la mayoría civiles inocentes—, como por el castigo infligido a los responsables, cuyos líderes fueron fusilados tras breves juicios y declaratorias de ley marcial. Quizá el elemento de mayor trascendencia de este levantamiento fue que a partir del mismo, el sentimiento nacionalista irlandés tomó nuevas formas en dos frentes: el primero fue a través de grupos civiles armados que de forma irregular en cada oportunidad que se les presentaba confabulaban en contra del gobierno británico y quienes fueron denominados Ejército Republicano Irlandés (*Irish Republican Army*).<sup>8</sup> El segundo frente

<sup>8</sup> Cuyas iniciales en inglés son mundialmente conocidas como IRA (Irish Republican Army).

se constituyó por miembros de la Cámara de los Comunes a través del *Sinn Féin*, quienes insistían en la separación del Imperio británico y en su derecho a convertirse en una república independiente.

En este sentido, el hecho más significativo de la estrategia del *Sinn Féin* al interior de la Cámara de los Comunes británica fue su negativa a integrarse y ocupar los setenta y tres asientos obtenidos tras las elecciones de 1918,<sup>9</sup> y en lugar de ello, en enero de 1919 proclamaron el surgimiento del Parlamento de la República Irlandesa, *Dáil Éireann*,<sup>10</sup> respaldado en términos de fuerza militar por el Ejército Republicano Irlandés (ERI), que reclamaba autoridad sobre toda Irlanda incluyendo el Úlster (UK Parliament, 2017i). Lo anterior provocó una nueva guerra civil entre independentistas encabezados por el *Sinn Féin* y el ERI, y en el otro frente, los unionistas pertrechados por el gobierno británico.

De este modo, tras dos años de conflicto armado (1919-1921) el gobierno británico del primer ministro liberal David Lloyd George, desgastado tras cuatro años de participación en la primera guerra mundial, decidió enviar la propuesta de un Tratado Anglo-Irlandés (*Anglo-Irish Treaty*) al Parlamento británico. Éste a su vez se inclinó, en ambas cámaras, por aprobarla a finales de 1921. Por su parte, los representantes irlandeses reconocidos por el gobierno británico para admitir o rechazar la propuesta británica fueron solamente aquellos que habían ganado su asiento previamente en la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña; por ello, serían los únicos avalados constitucionalmente como los legítimos interlocutores y representantes de Irlanda para discutir el Tratado.

Así, después de intensos debates, los diputados irlandeses en una cerrada votación celebrada en diciembre de 1921 se pronunciaron a favor del Tratado, el cual entraría en vigor a partir de marzo del año siguiente. Esta decisión generó polémica y divisiones en el bando independentista irlandés, pues amplios sectores insistían en una independencia total y no parcial, ya que el Tratado propuesto mandataba que el Estado Libre de Irlanda debía mantener su lealtad al monarca George V como legítimo jefe de Estado.

<sup>9</sup> En estas elecciones para integrar la Cámara de los Comunes al interior del Parlamento británico, el *Sinn Féin* se llevaría setenta y tres asientos, el nacionalista *Irish Parliamentary Party* alcanzaría seis y los unionistas del Úlster, veintiséis. Se considera que esta victoria electoral del *Sinn Féin* fue posible gracias a que alcanzó el 48 por ciento de los votos de los irlandeses (English, 2006: 283-284).

<sup>10</sup> Asamblea de Irlanda en gaélico irlandés.



Entre sus principales características, el Tratado Anglo-Irlandés concedía a Irlanda el mismo estatus constitucional que a los dominios de Canadá y Nueva Zelanda; los miembros del Parlamento del Estado Libre de Irlanda debían prestar su juramento de lealtad a la Corona británica; las fuerzas militares británicas podían tener acceso libre a ciertos puertos irlandeses y contar con su plena colaboración cuando así fuera necesario, aunque se excluyó a los seis condados en el Norte: Antrim, Londonberry, Tyrone, Fermanagh, Armagh y Down (English, 2006: 307), mismos que tras rechazar el Tratado pasaron a formar parte integral del Imperio de Gran Bretaña, como Irlanda del Norte.

De ese modo, el Tratado confirmó la división de Irlanda en dos partes autónomas, una al Norte, que comprendía los seis condados señalados de mayoría protestante en el Úlster, y otra al Noreste y al Sur, compuesta por los veintiséis condados restantes de mayoría católica. Cada una de las dos Irlandas debía tener su propio Parlamento dividido en dos cámaras, y un Ejecutivo responsable del gobierno central; sin embargo, Irlanda del Norte rechazó conformarse como un gobierno autónomo y, apegándose a lo establecido en el artículo 12 del Tratado, solicitó no ser considerada un Estado libre, lo que significaba su adhesión al Reino de Gran Bretaña (UK Parliament, 2017i).

En este sentido, de conformidad con el Tratado, el Estado Libre de Irlanda celebró sus elecciones en enero de 1922, acontecimiento que supuso la dimisión *de facto* del líder independentista Éamon de Valera, quien había fungido como presidente y líder del rebelde *Dáil Éireann*, en el cual se mantenía al frente de cincuenta y siete de los ciento veintinueve diputados (University College Cork, 2017). Cabe añadir que la aprobación del Tratado Anglo-Irlandés significó, al mismo tiempo, el reconocimiento británico hacia las nuevas autoridades irlandesas.

Posteriormente, la escasa mayoría de diputados pro Tratado —sesenta y cuatro contra cincuenta y siete que lo rechazaron— decidieron conformar un gobierno provisional y elegir a uno de los sobrevivientes del alzamiento de Pascua, Michael Collins, quien había sido un brillante estratega militar y político que buscaba una solución negociada de mediano plazo con Gran Bretaña para alcanzar la independencia absoluta de Irlanda. De este modo, Collins encabezó los esfuerzos irlandeses para administrar los veintiséis condados de mayoría católica, y para hacer posible la convocatoria al establecimiento de un Parlamento y un gobierno para el nuevo Estado Libre de Irlanda;

no obstante, es preciso añadir que en términos prácticos, con el Tratado Anglo-Irlandés Irlanda se convertía en un dominio británico —tal y como lo eran Canadá y Nueva Zelanda— con libertad para elegir su propio Parlamento, pero siempre bajo la autoridad y aprobación del monarca.

De esta manera, en medio de las divisiones entre irlandeses pro Tratado y anti Tratado, se convocó a elecciones en junio de 1922 para conformar el primer gobierno del Estado Libre de Irlanda. A partir de ese momento el Parlamento irlandés se elevó como una Asamblea Constituyente con el objetivo de crear los marcos legales para un gobierno institucional con reconocimiento pleno de Gran Bretaña y del resto del mundo. Este hecho desembocó en una nueva guerra civil entre 1922 y 1923. En este nuevo capítulo histórico, las autoridades del Estado Libre de Irlanda, con la legitimidad legislativa que le confería ser un gobierno electo, y con el apoyo británico, se enfrentaron a fracciones irlandesas del ERI, las cuales desconocían, entre otras cosas, el Tratado Anglo-Irlandés, el gobierno del Estado Libre de Irlanda, a su Parlamento y al monarca británico (Houses of the Oireachtas, 2017a). En su lugar, el *Sinn Féin* y el ERI proclamaban el surgimiento de una República de Irlanda para toda la isla, más allá de los veintiséis condados de mayoría católica reconocidos por el gobierno de Gran Bretaña.

El resultado de la guerra civil fue una derrota de los republicanos y del ERI. En este acontecimiento armado perdería la vida, en una emboscada, Michael Collins, quien no solamente fungía como presidente del gobierno provisional, sino también como comandante en jefe de las fuerzas armadas irlandesas. Tras su muerte, en agosto de 1922, el Parlamento irlandés designó como el primer presidente de Irlanda a William Thomas Cosgrave, de acuerdo con el viejo modelo parlamentario de designación de jefe de gobierno.<sup>11</sup>

El nuevo gobierno irlandés comenzaría sus funciones el 6 de diciembre de 1922, dos meses después de haber sido promulgada su Constitución. De este modo nacería el Estado Libre de Irlanda (*Saorstát Éireann*). A partir de ese momento y hasta 1937 el gobierno y el gabinete irlandeses conformaron un Consejo Ejecutivo, en el cual el jefe del gobierno era reconocido como su presidente, y de ese modo fungía como el elemento regulador de la política interna. Dentro de ese esquema, el Artículo 12 de la Constitución del Estado Libre de Irlanda creó por mandato un *Oireachtas* o Parlamento. A la

<sup>11</sup> Debe recordarse que en ese momento la figura de jefe de Estado formal seguía recayendo en la Corona británica.

cabeza de este último se encontraba el monarca británico como jefe de Estado. Asimismo, se incluyeron dos cámaras legislativas de acuerdo con los usos y costumbres irlandesas: una Cámara de Diputados (*Dáil Éireann*) y un Senado (*Seanad Éireann*), ambas elegidas por el pueblo (Houses of the Oireachtas, 2017a).

El Senado estaría conformado por sesenta miembros distinguidos por su labor en favor del pueblo y serían electos para fungir en el cargo por periodos trianuales y así se mantendría hasta 1936. Por sus orígenes británicos, esta versión del Senado irlandés se encontraba en estrecha relación con el gobernador general designado para Irlanda, figura que la propia Constitución irlandesa había establecido en su Artículo 60. Por ello, ambas cámaras tuvieron constantes roces entre 1922 y 1932, sobre todo por la intención del *Dáil Éireann* de ignorar el juramento de lealtad al monarca británico, y por la insistencia del *Seanad* en cumplir con el protocolo. Esta situación provocó una serie de tensiones que no lograrían superarse entre ambas instancias legislativas hasta la abolición del Senado en 1936 (Houses of the Oireachtas, 2017b).

El periodo de gobierno de William Thomas Cosgrave, de 1922 a 1932, se distinguió por buscar pacificar al país a toda costa y sentar las bases para el establecimiento de una Irlanda separada de Gran Bretaña. Cosgrave afirmaba, como presidente del Consejo Ejecutivo irlandés y como cabeza del Parlamento de Irlanda, que el sistema de justicia, las leyes y las instituciones les habían sido impuestas a los irlandeses desde el exterior, lo cual significó la suplantación de los usos y costumbres locales que se encontraban operando como parte de un mismo organismo vivo desde siglos atrás. En este sentido reiteraba:

El cuerpo de leyes y el sistema de Judicatura que se imponía a la nación eran ingleses (ni siquiera británicos) en su simiente; ingleses en su crecimiento, ingleses en su vitalidad [...]; por ello no se arraigaron en el fértil suelo de esta nación. Por lo tanto, no hay nada máspreciado entre nuestras libertades recién ganadas que la libertad de constituir un sistema judicial y una administración de la ley y la justicia, según los dictados de nuestras propias necesidades y según un patrón de nuestra propia concepción. Esta libertad se instaura y el derecho se establece en la Constitución elaborada y aprobada por los representantes electos de nuestro pueblo (Jordan, 2006: 87).

Es importante señalar que Cosgrave se caracterizó por combatir de manera implacable a las fuerzas irregulares del ERI con la meta de apaciguar

al país y dar paso a una anhelada estabilidad política que le permitiera a Irlanda su emancipación del Imperio británico. Para lograrlo era fundamental desarmar a los disidentes; por ello estableció desde el *Oireachtas* una serie de leyes que castigaban de forma severa la posesión de armas en tiempos de guerra civil. En esta línea, Cosgrave se posicionó frente a sus críticos de la siguiente manera: “Vamos a conseguir las armas aun si tenemos que buscar en todos los hogares del país. Las personas que roban armas van a ser llevadas ante los tribunales militares y si se las encuentra culpables serán ejecutadas sin distinción” (Jordan, 2006: 65).

El principal argumento del gobierno de Cosgrave fue que la ley castigaría severamente a aquellos que atentaran en contra de los representantes del pueblo irlandés. Incluso en reuniones con líderes moderados del ERI les expresó lo siguiente: “Estoy llegando a la conclusión de que si vamos a otorgar clemencia en cualquier momento sólo será si los irregulares lo desean [...]. No voy a dudar tratándose de la sobrevivencia del país, [incluso] si ello significa exterminar a diez mil republicanos. Los tres millones de nuestro pueblo son muchos más que esos diez mil” (Jordan, 2006: 67).

De esta manera, su firme convicción y sus acciones lograron la pacificación del país para mediados de 1923, justo cuando las milicias rebeldes del *Sinn Féin* decidieron entregar sus armas y sumarse a los esfuerzos políticos para integrar una nueva agrupación partidista conocida como *Fianna Fáil* (o “Guerreros del Destino”), fundada por el experimentado líder nacionalista Éamon de Valera en 1926, quien desde sus inicios se erigió como el heredero de los postulados independentistas del *Sinn Féin*, pero desde un plano más político.

A raíz de la pacificación del país, la gestión de William Thomas Cosgrave se concentró en desmovilizar y reducir el personal militar irlandés para destinar recursos a otras áreas administrativas, decisión que provocó una amplia animadversión entre buena parte de los militares. También negoció con éxito y evitó que el gobierno británico, con apoyo de las autoridades de Irlanda del Norte, anexara territorio del condado norteño de Donegal en favor de la población protestante de la región.

Es necesario señalar que el periodo de Cosgrave se caracterizó por sus decisiones verticales, debido a la ausencia de debates parlamentarios que cuestionaran sus acciones de gobierno, pues debe recordarse que la suya fue una administración en la que el Parlamento le confirió facultades extraordi-

narias al ostentar el estatus de presidente del Consejo Ejecutivo de país. De acuerdo con tal dinámica, Cosgrave convocó a nuevas elecciones para junio de 1927, y en ellas la agrupación que lideraba, *Cumann na nGaedheal* (Sociedad de los Irlandeses), obtendría cuarenta y siete de los ciento cincuenta y tres escaños parlamentarios en disputa; no obstante el *Fianna Fáil* de Valera quedaría con cuarenta y cuatro curules como la segunda fuerza política.<sup>12</sup>

Lo anterior permitió a Éamon de Valera colocar en una posición complicada al gobierno de Cosgrave, toda vez que rechazó que los cuarenta y cuatro diputados electos por su partido juraran lealtad al monarca británico al momento de pronunciar el Discurso del Trono irlandés. Ello generó una aguda crisis institucional, pues no era posible echar a andar el gobierno cuando cerca de una tercera parte de sus comunes desconocía a la autoridad británica; sin embargo, el asesinato del vicepresidente del Consejo Ejecutivo, Kevin O'Higgins, al parecer por miembros del ERI, ocasionó que el presidente Cosgrave aprobara una reforma parlamentaria que hacía posible decretar al *Fianna Fáil* como un partido ilegal, con el riesgo de arrojarlo a la clandestinidad si su líder y fundador, Éamon de Valera, insistía en negarse a jurar lealtad a la Corona británica.

Por ello, ante la amenaza de la desaparición política y el riesgo que implicaba convertir al *Fianna Fáil* en una agrupación ilegítima y clandestina, Éamon de Valera aceptó llevar a cabo el juramento de toda su bancada, pero de inmediato, gracias al carácter minoritario del gobierno de Cosgrave, su fracción parlamentaria convocó a nuevas elecciones para el mes de septiembre de 1927.

En esas elecciones *Fianna Fáil* incrementó a cincuenta y siete el número de sus diputados en el Parlamento, tras recibir el 35 por ciento de los votos; sin embargo, el partido *Cumann na nGaedheal* de Cosgrave alcanzó sesenta y dos curules tras acumular el 38.6 por ciento. Si bien Cosgrave mantuvo el poder, lo cierto era que para ese momento Éamon de Valera y sus correligionarios ya habían logrado elaborar una plataforma electoral atractiva para los irlandeses nacionalistas, toda vez que manifestaban una vocación comprometida con el desarrollo económico de Irlanda.

Es oportuno señalar que en general la administración de Cosgrave, sobre todo en su periodo de 1927 a 1932, tuvo mayores matices de carácter

<sup>12</sup> Todas las cifras y porcentajes que se presentarán al respecto fueron obtenidos de *Elections. Northern Ireland Elections* (2017a).

conservador, sobre todo por la disciplina hacendaria que puso en marcha en detrimento de los programas sociales. A nivel interno impulsó la agricultura, pero mantuvo a la industria irlandesa muy dependiente de la británica, situación que hizo que se resintieran con mayor fuerza los efectos de la crisis de 1929, pues las estructuras productivas industriales del país dependían casi en su totalidad de las de Gran Bretaña.

Al interior del Parlamento irlandés, la fracción de De Valera logró concretar alianzas políticas con otras agrupaciones, como el Partido Laborista Irlandés o el Partido Agrario, con la ayuda de los cuales lograron paulatinamente excluir de todas las referencias parlamentarias a la figura del monarca británico, de manera que para 1936 ya habían sido removidas prácticamente en su totalidad (UK Parliament, 2017j).

De esta forma, con el *Fianna Fáil* en franco crecimiento y el desgaste del presidente Cosgrave, Éamon de Valera se alzó finalmente con el triunfo en las elecciones de 1932, después de alcanzar setenta y siete asientos parlamentarios contra los cincuenta y cuatro de sus más cercanos oponentes de *Cumann na nGaedheal*. Esto fue posible gracias a que el partido de De Valera obtuvo el 44.5 por ciento de la votación, lo que le permitió convertirse en el primer ministro del Estado Libre de Irlanda, después de que el gobernador general, como representante de la Corona británica, lo reconociera como jefe de gobierno.

Una de las primeras acciones del gobierno de De Valera fue suprimir el juramento de lealtad a la Corona británica y disminuir los tributos económicos a Gran Bretaña. Lo anterior generó conflictos entre el Parlamento irlandés y su contraparte en Westminster, lo que derivó en una serie de sanciones de carácter económico en contra de Irlanda. Pese a ello, De Valera mantuvo sus objetivos independentistas, y en un intento por fortalecer aún más su posición al interior del *Dáil* irlandés decidió adelantar las elecciones para enero de 1933. En éstas *Fianna Fáil* alcanzó el 49.7 por ciento de los sufragios, situación que le otorgó un gobierno de mayoría.

Aunado a lo anterior, De Valera logró consolidar una alianza parlamentaria con el Partido Laborista Irlandés, razón por la que contó con una holgada mayoría que le permitió reforzar sus intenciones independentistas. Así, desde la posición de primer ministro Éamon de Valera aprobó una serie de profundas reformas constitucionales en 1933 que permitieron la abolición del polémico juramento de lealtad a la Corona, el cual debían realizar todos

los miembros de la Cámara baja (*Dáil Éireann*) y los senadores de la Cámara alta (*Seanad Éireann*) antes de ocupar sus asientos. Como debe recordarse, éste fue el motivo que inició la guerra civil de 1922-1923.

Dentro de esta dinámica reformista constitucional parlamentaria, para 1934 se eliminó la designación de miembros de la universidad para gozar de asientos en el Senado, costumbre impuesta desde la Gran Bretaña. Lo anterior preparó el terreno para la abolición del Senado en 1936, después de que dicho organismo se distinguiera más por ser un instrumento del monarca británico en contra de los intereses irlandeses, que una sede de defensores y representantes del pueblo. Ello se expresó de manera constante en las luchas parlamentarias entre la *Dáil* y el *Seanad* desde la puesta en marcha del tercer Parlamento en 1922. De esta forma, después de rechazar la Enmienda Constitucional 24, que mandataba su desaparición, el Senado fue abolido el 29 de mayo de 1936 (Houses of the Oireachtas, 2017b).

Para diciembre del mismo año, 1936, todas las referencias a la Corona fueron suprimidas de la Constitución, aprovechándose la reciente abdicación del monarca Edward VIII. En esas mismas deliberaciones, la Enmienda 27 abolió el cargo de gobernador general. En su lugar se propuso crear el puesto de presidente de gobierno (*Taoiseach*) para legitimar las acciones del primer ministro en funciones, quien sería electo cada siete años por medio del método de elección de segunda vuelta instantánea (*alternative vote*). También se propuso crear un nuevo Senado con sesenta miembros, que serían renovados en cada elección. De ellos, once serían designados directamente por el presidente, seis por las universidades del país, y los restantes cuarenta y tres a través de paneles especiales de nominación conocidos como paneles vocacionales. Éstos se integrarían por miembros de la Cámara baja, por senadores salientes y por representantes del gobierno federal (Houses of the Oireachtas, 2017b).<sup>13</sup>

Una vez aprobada la nueva Constitución por el Parlamento irlandés, se estableció entonces que la misma sería sometida a referéndum el mismo día de las elecciones siguientes, programadas para el 1º de julio de 1937. Debe añ-

<sup>13</sup> En la actualidad el Senado irlandés mantiene sus directrices fundacionales e incluye entre sus miembros a individuos que poseen un conocimiento especial o experiencia en diversos temas: administrativos, agrícolas, culturales, comerciales o laborales. En realidad, los nominados suelen ser miembros del partido ganador, y en algunos casos candidatos que perdieron su elección para el *Dáil* o Cámara baja.

dirse que durante su gestión de 1933 a 1937, el gobierno de De Valera se caracterizó por el enfriamiento de relaciones entre su partido, el *Fianna Fáil* y las fracciones aún activas del ERI. Lo anterior, ya que el Ejército Republicano Irlandés insistía en retomar los posicionamientos violentos de rompimiento frontal con Gran Bretaña para así satisfacer a sus bases irlandesas nacionalistas; no obstante, De Valera insistió en mantener una estrategia más orientada hacia un pragmatismo constitucional gradual de mediano plazo. Estas divergencias generaron agudas críticas del ERI en contra del primer ministro y del *Fianna Fáil*, al acusarlos de ser antirrepublicanos y marionetas desenmascaradas del Estado. Ante ello, el gobierno de De Valera decidió proscribir a toda la organización, para lo cual recibió el apoyo parlamentario del *Dáil* durante el verano de 1936 (English, 2006: 332).

Una vez consolidado su poder y la estabilidad política irlandesa, De Valera encaró las elecciones de julio de 1937. En ellas se redujo el número de curules en el *Dáil* al pasar de 153 a 138. En dichos comicios el *Fianna Fáil* y De Valera conservaron su gobierno de mayoría, tras alcanzar el número mínimo de diputados necesarios con sesenta y nueve, y el 45.2 por ciento de los votos. La victoria del *Fianna Fáil* en 1937 puede considerarse como una ratificación del mandato de De Valera y de la propia Constitución, la cual fue aprobada por el pueblo en el referéndum de ese mismo 1° de julio.

Posteriormente, el 29 de diciembre de 1937, el Parlamento irlandés declaró en sesión solemne la entrada en vigor de la nueva Constitución, que de conformidad con su Artículo 4 estableció un nuevo nombre para el país: Éire (Irlanda). El Artículo 5 decretó que Irlanda era un Estado soberano, independiente y democrático. Del mismo modo, el Artículo 15 determinó que desde ese momento el Parlamento nacional sería denominado y conocido como *Oireachtas*, que estaría conformado por un presidente y dos cámaras, una de Representantes del Pueblo (*Dáil Éireann*) y un Senado (*Seanad Éireann*), y que a partir de entonces el *Oireachtas* sería la única autoridad legislativa facultada para emitir las leyes del Estado. Asimismo, el Artículo 28 estableció que el primer ministro sería el jefe de gobierno y se lo llamaría *Taoiseach* (Houses of the Oireachtas, 2017b).

Debe agregarse que el *Oireachtas* de diciembre de 1937 determinó que la Constitución sólo podría enmendarse por una ley ordinaria aprobada previamente por el mismo órgano durante los tres años siguientes a la entrada



en funciones del primer presidente.<sup>14</sup> En cumplimiento de ese mandato, el 25 de junio de 1938 Éire tuvo a su primer presidente designado por el *Oireachtas* en la persona de Dubhglás de Híde, a quien se consideró como un político conciliador, independiente y apartidista.

Pese a los éxitos políticos de De Valera, la posición de su partido al interior del *Oireachtas* se encontraba muy comprometida, ya que su gobierno superaba por sólo una curul al conjunto de la oposición. Por ello, decidió convocar a nuevas elecciones en junio de 1938, para reforzar su presencia parlamentaria aprovechando el fervor nacionalista como resultado de la nueva Constitución irlandesa. En esos comicios, el *Fianna Fáil* de De Valera efectivamente consolidó su posición en el *Oireachtas*, tras conseguir setenta y siete asientos y casi el 52 por ciento de la votación. Tales cifras le dieron la comodidad parlamentaria para trabajar en la conformación de Irlanda como una república independiente y separada de forma definitiva de Gran Bretaña, ya que aún el Imperio británico dictaba buena parte de las relaciones de Irlanda con el exterior.

Durante dicho lapso, el *Fianna Fáil* se consolidó como el partido de la nación y el más receptivo ante las demandas populares, con una amplia experiencia en la movilización política y un fuerte compromiso de justicia social. Por su parte, el *Cumann na nGaedheal* reaccionó de manera muy negativa tras perder el poder, e incluso permitió la integración de grupos nazis entre sus filas, como los conocidos “camisas azules”. Eso provocó fuertes diferencias en su interior, lo que obligó al partido a refundarse en los años treinta como *Fine Gael* (familia de Gael o de los irlandeses), con fuertes tendencias conservadoras. Esta agrupación fue adoptando diversos elementos para diferenciarse de *Fianna Fáil* entre los electores. Sus principales características fueron que se asumía como partido del Estado; enfatizaba sus objetivos a nivel institucional y procuraba no mencionar al pueblo; insistía en la necesidad de brindar apoyos económicos a los grandes productores agrícolas y a la clase media alta, de la cual provenía la mayoría de sus integrantes. En general, fue considerado un partido ortodoxo (Killeen, 2012: 264-265), que insistía en la responsabilidad fiscal.

De este modo, el gobierno de De Valera correspondiente al periodo 1938 a 1943 se concentró en consolidar la estabilidad política del país y en desa-

<sup>14</sup> A partir de 1941 el *Oireachtas* decretó que la Constitución sólo podría ser modificada previo referéndum.

rollar los instrumentos necesarios para alcanzar la independencia irlandesa en materia de política exterior, lo que le conferiría su separación total de Gran Bretaña. Para ello, se valió de la mayoría parlamentaria de que gozaba su partido, el *Fianna Fáil*. Durante dicho lapso, las sanciones económicas británicas en contra de Irlanda fueron disminuyendo en buena medida gracias al carácter más moderado que adoptó De Valera en su relación con Londres. De hecho, la devolución a Irlanda de tres puertos ocupados por las fuerzas navales inglesas fue considerada un signo de la reconciliación británica con la actitud neorpublicana del “cabeza de gobierno”, Eámon de Valera.<sup>15</sup>

En 1943, tal y como lo mandataba la Constitución, De Valera pidió al presidente Dubhglás de Híde convocar a nuevas elecciones el 23 de junio y disolver el *Oireachtas* para conformar un nuevo gobierno.<sup>16</sup> *Fianna Fáil* volvió a resultar ganador tras conseguir sesenta y siete curules y el 41.8 por ciento de los votos; no obstante, De Valera no alcanzó la mayoría parlamentaria que le permitiría seguir con su programa de gobierno sin negociar con las otras fuerzas. Por ello, confiado en su buena imagen convocó a nuevas elecciones al año siguiente (1944), con el argumento de la necesidad de fortalecer la neutralidad irlandesa durante los difíciles años de la segunda guerra mundial, por lo que su gobierno requería de una mayoría absoluta para encarar lo que se requiriera en relación con las hostilidades en Europa.

En este sentido, el gobierno de De Valera tuvo la habilidad de mostrarse al mismo tiempo independiente y empático con la causa aliada, postura que se extendió entre la opinión pública de Irlanda en aquellos años; no obstante, resulta necesario señalar que esta neutralidad irlandesa dependió totalmente de la protección británica, ya que Irlanda no habría tenido capacidad de defenderse si la Alemania nazi hubiese decidido invadir la isla. Es decir, la armada británica sirvió de escudo de las costas irlandesas durante los años de la guerra. Oficialmente, De Valera mantuvo una política de neutralidad a toda prueba, pero en realidad mostró cierta inclinación por Gran Bretaña. Por ejemplo, si un piloto alemán era derribado y caía en paracaídas en territorio irlandés, inmediatamente se lo encarcelaba hasta que concluyera la gue-

<sup>15</sup> Es importante considerar que uno de los rasgos políticos identitarios de la República de Irlanda es llamar a su primer ministro en funciones “cabeza de gobierno”, en un esfuerzo por distinguirse de sus contrapartes de otros lugares del mundo, que llevan a la práctica el sistema parlamentario de Westminster.

<sup>16</sup> La Constitución irlandesa permite periodos parlamentarios de hasta siete años, pero en la práctica no sobrepasan los cinco con un gobierno de mayoría.

rra; por el contrario, si a un piloto británico o aliado le sucedía lo mismo, era rápidamente trasladado a Irlanda del Norte sin mayores preguntas (Killeen, 2012: 267). Por todo lo anterior, De Valera y su partido obtuvieron el triunfo en las elecciones del 30 de mayo de 1944, tras alcanzar setenta y seis de los ciento treinta y ocho asientos en disputa, cifra que devolvía al *Fianna Fáil* su posición como partido mayoritario en el *Oireachtas*.

Una vez concluida la segunda guerra mundial, Irlanda no recibió los beneficios del Plan Marshall en una primera instancia y, por ello, fue el único país del bloque capitalista que no mostró crecimiento económico en los años de la posguerra y sí en cambio una contracción mantenida. Lo anterior obedecía a que la industrialización aún no se consolidaba en su territorio y en su lugar se privilegió la producción agrícola, cuyas exportaciones no podían soportar toda la economía irlandesa (Killeen, 2012: 267-268). Fue hasta finales de la década de los cuarenta cuando Estados Unidos decidió inyectar capital para el desarrollo de Irlanda, sobre todo para fortalecer su productividad en el campo y multiplicar sus ventas al exterior, principalmente hacia Gran Bretaña. El motivo de esta ayuda fue el riesgo de que la ideología socialista se expandiera en el país como producto de la pobreza y la marginación en la que venía sumergiéndose de nuevo.<sup>17</sup> Sólo de esta manera fue posible que Irlanda recibiera apoyo de Occidente para reactivar su maltrecha economía.

En medio de este escenario de crisis interna se convocó a nuevas elecciones en febrero de 1948, en las cuales se incrementó el número de asientos en el *Oireachtas* al pasar de 138 a 147. En dicho proceso, el *Fianna Fáil* de De Valera ganó sesenta y ocho curules en el *Dáil* y el 41.9 por ciento de los sufragios, lo que le confería el derecho a encabezar un gobierno de minoría; sin embargo, una sorpresiva coalición entre todos los demás partidos de la oposición, encabezados por el *Fine Gael*, así como los laboristas y algunos antiguos miembros del *Fianna Fáil*, agrupados en otros partidos y descontentos con su antiguo líder, posibilitó la conformación del primer gobierno de coalición en Irlanda. Este último grupo resultó fundamental para integrarlo, ya que sus diez asientos en el Parlamento y el 13 por ciento de la votación a su favor fracturaron al *Fianna Fáil*. Esta nueva agrupación partidista se llamó *Clann na Poblachta* (Partido de la República) y fue fundada

<sup>17</sup> Para más información acerca del apoyo estadounidense a la economía irlandesa de la posguerra se recomienda consultar History Ireland (2017).

por el líder del ERI, Sean MacBride (English, 2006: 351). En ella se agruparon antiguos federalistas y jóvenes socialistas desencantados con el estilo de De Valera.

El nuevo primer ministro de este gobierno coaligado fue el líder del *Fine Gael*, John A. Costello, quien sería el encargado de buscar equilibrar una agenda diversa entre sus aliados políticos, impulsando por un lado propuestas conservadoras en materia hacendaria, pero al mismo tiempo promoviendo acciones de corte social, como el apoyo médico gratuito a madres y menores de edad, proyecto cuyo objetivo era hacerse extensivo al resto de la sociedad (English, 2006: 352); no obstante, sin duda el gran acontecimiento político que marcaría a esta administración fue la Ley de la República de Irlanda de 1948, la cual decretó que: “El presidente, con la autoridad y el permiso del gobierno, puede ejercer el poder ejecutivo o cualquier otra función ejecutiva del Estado con el exterior o en sus relaciones externas” (Houses of the Oireachtas, 2017b).

Este documento fue aprobado por el *Oireachtas* el 18 de abril de 1949, y mandató simultáneamente el establecimiento de la República de Irlanda, lo que significó su salida *de facto* de la Commonwealth, debido a que dicho organismo no permitía la inclusión de repúblicas, pues éstas no mantenían como jefe de Estado al monarca británico en turno. Precisamente por eso la ley irlandesa que establecía la autonomía del presidente en sus decisiones de política exterior significó, al mismo tiempo, la ruptura del último lazo que ató por siglos a Irlanda con Inglaterra, y posteriormente con Gran Bretaña.

Debe agregarse que la Ley de la República de Irlanda fue un documento que contó con el apoyo absoluto del *Oireachtas*, y se convirtió en la bandera política del gobierno de John A. Costello, quien pese a ello perdería en las siguientes elecciones de 1951 frente a Éamon de Valera y su partido, sobre todo por los roces de Costello con la Iglesia católica como resultado de su propuesta de apoyo médico gratuito para madres y menores de edad. Este proyecto gubernamental potencialmente significaba, a juicio de las autoridades católicas irlandesas, el inicio de una etapa de planificación familiar o de campañas pro aborto asesoradas e impulsadas por el Estado irlandés (English, 2006: 352). A lo anterior debe agregarse que la relación de De Valera con los católicos siempre fue de cordialidad, toda vez que su gobierno toleró y no tocó los intereses de la Iglesia católica, la cual prácticamente monopolizó el sistema educativo y se otorgó a sí misma el derecho de educar a generaciones completas (Killeen, 2012: 269-270).

Así, a partir del regreso del *Fianna Fáil* al gobierno, a principios de la década de los cincuenta del siglo xx, esta agrupación y el *Fine Gael* se han consolidado como los partidos políticos más importantes en la República de Irlanda, en donde el primero ha conseguido once veces colocar a su líder como cabeza de gobierno, incluidas las elecciones de junio de 2017. Por su parte, desde el proceso electoral de 1951 y hasta 2017, el *Fine Gael* ha logrado ser gobierno en siete ocasiones, después de resultar vencedor en las correspondientes competencias comiciales.

Si bien la instauración de la República de Irlanda supuso el rompimiento definitivo con Gran Bretaña, su Parlamento y su sistema Westminster, lo cierto es que Éire tiene vínculos históricos muy complejos y difíciles de fracturar con los británicos, ya que su estilo de gobierno, aunque no es considerado parte del sistema Westminster, sí comparte orígenes y prácticas, y es por ello que ha sido incluido en este trabajo.

Aunado a lo anterior, el tema de Irlanda del Norte es un asunto aún pendiente en el que la República de Irlanda ha tenido que poner en juego la mejor diplomacia con sus contrapartes británicos, ya que muchas de las estructuras políticas y sociales de los seis condados de mayoría protestante del Úlster comparten usos y costumbres con Gran Bretaña que predominan en su política en la actualidad. De ellos se hablará a continuación.

## **El caso de Irlanda del Norte**

Tal y como ya se mencionó, el territorio irlandés comenzó a llevar a cabo su propio esquema de representación con los hombres de mayor influencia de la región en Castledermont, Leicester. En ese sitio se adoptó el funcionamiento del parlamentarismo inglés una vez consolidada la conquista normanda de toda la región. Se determinó que los condados enviarían caballeros y posteriormente burgueses; sin embargo, tal y como se ha señalado, los asistentes a estos parlamentos irlandeses de ninguna manera podían considerarse representantes del pueblo, ya que formaban parte de un compacto grupo de conquistadores, los cuales no encarnaban los intereses del país, y sí en cambio aceptaban las directrices que les mandaban desde el Parlamento de Inglaterra.

Por ello, tras la consolidación del poderío inglés en tierras irlandesas, entre finales del siglo xvi y principios del xvii, después de derrotar las suble-

vaciones gaélicas de los clanes locales, O'Donnell y O'Neill,<sup>18</sup> las autoridades inglesas se empeñaron en establecer con éxito un asentamiento de mayoría protestante en el norte de la isla, de manera particular en seis condados de la provincia del Úlster. Para lograrlo, enviaron colonos ingleses y escoceses protestantes a los actuales condados de Londonberry, Antrim, Down, Armaght, Tyrone y Fermanagh. Ésta fue la más grande y mejor organizada entre todas las colonizaciones previas y posteriores en Irlanda. Su objetivo principal fue anclar los intereses ingleses en la zona y así persuadir a los habitantes de toda la isla de que la Corona había llegado para quedarse. Al mismo tiempo, toda la región del Úlster se constituyó en un cinturón protestante que serviría de freno ante cualquier intento de reconquista católica.

La colonización del Úlster supuso la extinción de los derechos feudales irlandeses y, de manera simultánea, la adopción del sistema jurídico inglés. Entre las nuevas leyes sobresalía el mandato para los recién llegados propietarios protestantes, conocidos como *undertakers*, mediante el cual tenían prohibido arrendar y más aún vender sus tierras a irlandeses católicos, situación que los obligaba a llevar agricultores y trabajadores escoceses o ingleses para su tarea colonizadora. Dichos reglamentos determinaron también que a la población católica del Úlster debían reubicarla en los condados del oeste y del sur de la propia provincia: Donegal, Monaghan y Cavan. De igual modo, a la Iglesia protestante anglicana le fue concedida la totalidad de los inmuebles católicos confiscados, para desde ahí llevar a cabo sus esfuerzos de conversión de católicos al protestantismo.

Desde luego que la migración protestante al Úlster generó una serie de debates al interior de la Cámara de los Comunes, pues se consideraba que el monarca James I de Inglaterra y VI de Escocia buscaba aglutinar ambos países en torno a una nueva unidad política; sin embargo, tras recibir el rechazo contundente de la Cámara de los Comunes el monarca concentró su atención en unificar a ingleses y escoceses en torno a una causa común, y esa causa podía ser la colonización del Úlster en Irlanda (Bardon, 2012: 111-112).

<sup>18</sup> Este acontecimiento es conocido como la Guerra de los Nueve Años (1594-1603), y en él la Corona inglesa sometió militarmente a un nutrido grupo de clanes gaélicos irlandeses. Dicha victoria tiene especial relevancia porque a partir de ella Inglaterra decidió implantar una gran colonia protestante en las tierras confiscadas, con individuos totalmente leales a sus intereses. Cabe agregar que la región del Úlster se había caracterizado por ser la más católica y anti-inglesa de toda la isla durante el siglo XVI (Bardon, 2012).

Al mismo tiempo, los cuestionamientos del orden moral comenzaron a ser cada vez más reincidentes en las discusiones parlamentarias. Por ello, se distribuyeron panfletos en donde se justificaba la colonización por varias razones. La primera de ellas era porque las tierras estaban despobladas y los nativos no alcanzaban a cubrir ni la tercera parte de las mismas; las demás, porque los irlandeses ya habían probado ser desleales e inconstantes en sus deberes; eran pobres, mal educados, poco considerados para educar a sus hijos y, por lo tanto, también eran incapaces de construir castillos o casas, de explotar los bosques y de mejorar la producción agrícola. Para reforzar estos planteamientos racistas, los ingleses se apoyaban en citas bíblicas que describían la conquista y colonización de la tierra de Canaán por los hijos de Israel (Bardon, 2012: 129-130).

Al considerar tales elementos, podemos afirmar que la colonización protestante del Úlster durante los siglos XVII y XVIII fue una tarea que posicionó a Inglaterra, y posteriormente a Gran Bretaña, con la fuerza necesaria para gobernar y defender a su propia población, aunque esta última hubiese sido implantada a través de proyectos de gobierno tendientes a desaparecer a los pobladores católicos originarios del lugar.

Las autoridades del Úlster estaban plenamente identificadas con los usos y costumbres políticas de Londres y Westminster. La figura encargada de administrar los territorios irlandeses ostentaba el título de “lord teniente” de Irlanda o “lord diputado”. Era el representante directo del monarca y, por ello, el jefe de gobierno irlandés, y aunque gozaba de reconocimiento al interior de la Cámara de los Comunes británica no tenía la obligación de presentar reporte alguno ante el Parlamento o las asambleas irlandesas. Sin duda, uno de los lores tenientes más conocidos fue lord Sir Arthur Chichester, quien ejerció el cargo entre 1604 y 1615, encargándose de planificar y ejecutar con éxito la colonización del Úlster en unos cuantos años.

Una vez consolidada la presencia protestante inglesa y escocesa al norte de Irlanda, los conflictos con los católicos se focalizaron al oeste y al sur del Úlster —en las provincias de mayoría católica— y desde ahí se generaron diversos conflictos de carácter político, social, económico y militar durante los siglos XVII, XVIII y XIX, mismos que desangraron severamente al país, tal y como ya se señaló previamente. Pese a ello, “las colonias en el Úlster se utilizaron como guarniciones británicas en Irlanda. Esta política colonial cimentada en los vínculos tradicionales entre Irlanda del Norte y Escocia occidental

envolvió de modo inextricable a los tres reinos el uno con el otro, en formas que aún persisten hasta nuestros días” (Burns, 2010: 108).

No obstante, la presencia católica de irlandeses gaélicos en la provincia del Úlster continuó como un asunto no resuelto para el gobierno británico a finales del siglo XIX, ya que este segmento de la población se consideraba a sí mismo parte de la nación irlandesa y con derecho a un gobierno autónomo; todo ello al mismo tiempo que los unionistas protestantes del Úlster desarrollaron con el paso de los siglos una identidad británica y una firme lealtad hacia la Corona.

Estas tensiones sociales en el Úlster se incrementaron conforme fue discutiéndose en la Cámara de los Comunes en Londres la posibilidad de conceder un Estatuto de Autonomía (*Home Rule Bill*) para toda Irlanda, lo que significaba otorgar autonomía de gobierno a través de un ejercicio parlamentario local para toda la isla. El primero de estos esfuerzos fue el *Home Rule Bill* discutido en junio de 1886 en Westminster, pero al final se rechazó por votación mayoritaria en la Cámara baja, lo cual provocó protestas callejeras en los barrios católicos en Belfast, que terminaron reprimidas por fuerzas militares y policíacas que dejaron decenas de muertos (Bardon, 2012: 343-344).

El segundo *Home Rule Bill* para Irlanda se presentó desde el gobierno liberal del primer ministro William Gladstone en febrero de 1893, quien gracias al carácter mayoritario de su gobierno logró que la Cámara de los Comunes aprobara su propuesta; sin embargo, la Cámara de los Lores decidió rechazarla, lo que ocasionó el retraso de los anhelos de autonomía irlandeses. Para 1912 se presentó la tercera propuesta de *Home Rule Bill* para Irlanda al interior del Palacio de Westminster, que en esta ocasión por fin recibió el apoyo parlamentario suficiente para su aprobación, pero el estallido de la primera guerra mundial impidió su ejecución.

En esa ocasión los protestantes del Úlster decidieron organizar grupos de resistencia destinados a enfrentar lo que potencialmente significaba su eventual separación del gobierno británico. Como resultado de estos esfuerzos formaron los cuerpos paramilitares “*Ulster Volunteer Force*”, armados con rifles importados de Alemania. Por su parte, los nacionalistas del Norte se sumaron a las fuerzas de los voluntarios irlandeses (*Irish Volunteers*). De este modo, en el Úlster dos grupos paramilitares antagónicos quedarían conformados y muchas veces separados sólo por unas cuantas calles en los mismos poblados (Bardon, 2012: 344).



Una vez finalizadas las hostilidades en Europa, el conflicto civil en Irlanda del Norte encontraría nuevas rutas de expresión, ya que el nacionalismo irlandés fue ganando espacios de manera gradual en el Parlamento. Por ello, los republicanos incorporaron diversos mecanismos para presionar a las autoridades británicas para buscar su autonomía, amparados en la mayoría que representaban en Irlanda. Finalmente, tras una serie de sucesos sangrientos de todo tipo los esfuerzos de republicanos y nacionalistas irlandeses se vieron recompensados, cuando en diciembre de 1920 el gobierno británico aprobó en el Parlamento una última *Home Rule Bill* para Irlanda, que fue ahora sí capaz de dotarla con autonomía; no obstante, dicho Estatuto de Autonomía dividía a Irlanda en dos partes autónomas, y confería al Norte los seis condados de mayoría protestante en el Úlster. Esa Ley buscó no sólo limitar el impacto de las milicias republicanas del *Sinn Féin* y del ERI, sino también desmovilizar a las milicias probritánicas en la región, las cuales aceptaron a regañadientes el Estatuto de Autonomía de 1920 (UK Parliament, 2017i).

Esta *Home Rule Bill*, conocida también como Ley de Gobierno de Irlanda (*Government of Ireland Act*), en los hechos determinó la creación oficial de Irlanda del Norte, lo que supuso conformar su propia red de instituciones gubernamentales y políticas, tendentes a garantizar la supremacía de los protestantes unionistas en los seis condados (McGaughey, 2012: 159). Entre estas nuevas atribuciones de las autoridades norirlandesas se incluía la creación de su propia policía, que destacó por su gran número y capacidad para imponer el orden en todo el territorio. Muestra de ello es que después de los años de guerra civil, entre 1920 y 1922, en los seis condados protestantes de Úlster las autoridades probritánicas lograron mantener el control, no obstante que la propia capital, Belfast, se convirtió muchas veces en el lugar con mayores disturbios y enfrentamientos entre católicos republicanos y protestantes unionistas.

Así, quizá el elemento más problemático para el futuro de Irlanda del Norte durante la segunda década del siglo xx fue que en realidad un tercio de su población no quería que el país existiera como una entidad separada de Irlanda; sin embargo, con una cómoda mayoría en su Parlamento, los gobiernos unionistas nunca efectuaron esfuerzos serios para convencer a las minorías católicas de aceptar la separación política de Irlanda del Norte respecto del resto del país. Una muestra es que los asuntos relativos a Irlanda del Norte fueron calificados como fuera de orden al interior de Westminster, por consi-

derar que dicho territorio no merecía nuevas discusiones relativas a su administración (Bardon, 2012: 346), pues en realidad formaba parte integral del Reino Unido de la Gran Bretaña.

No obstante esta postura parlamentaria, el desgaste británico como resultado de la primera guerra mundial, así como los efectos económicos y sociales de la guerra civil irlandesa, fueron elementos que llevaron a las autoridades y al Parlamento de Gran Bretaña a aprobar, en diciembre de 1921, el Tratado Anglo-Irlandés (*Anglo-Irish Treaty*) con el objetivo de pacificar el país y proponer a Irlanda un nuevo estatus constitucional semejante al de otros dominios británicos en el mundo. Empero, gracias a la Ley de Gobierno de Irlanda, establecida un año antes, Irlanda del Norte no fue incluida en esta nueva figura constitucional, ya que sus seis condados de mayoría protestante desconocieron el Tratado Anglo-Irlandés y se adhirieron como parte integral de Gran Bretaña.

A partir de ese momento, el Parlamento británico comenzó a referirse a Irlanda del Norte, constitucional y legalmente, como una entidad política separada del resto de Irlanda. Es preciso señalar que durante todo este proceso, los unionistas apelaron a la memoria histórica para recordar el papel que jugó Irlanda del Norte en la primera guerra mundial, ello debido al desempeño de la 36ª División del Úlster en su participación en la batalla de Somme, de julio a noviembre de 1916. A partir de este suceso militar, los soldados norirlandeses crearon una imagen de dedicados protestantes leales a Gran Bretaña debido a su coraje y sacrificio en el campo de batalla.

Se considera que desde el comienzo de la gran guerra nada fue tan importante para los unionistas de Úlster que defender su posición en el norte de Irlanda como parte integral del Reino Unido. “Los soldados de la 36ª División consideraban su unionismo como un rasgo de identidad capaz de demostrar su devoción a la Corona y a los valores e ideales protestantes, y al mismo tiempo probar su coraje y valentía en el campo de batalla, estableciendo una imagen popular de heroísmo imperial y de martirologio” (McGaughey, 2012: 87). Este ideal del combatiente protestante del Úlster fue alimentado en Gran Bretaña por comentarios como los emitidos por el propio general mayor de la 36ª División, quien fungiera también como miembro de la Cámara de los Comunes, Sir Oliver Nugent, al señalar que “la División de Úlster fue a pelear y sacrificarse por el Imperio, forzando de este modo a Gran Bretaña a proteger y garantizar la unión [norirlandesa] en nombre de aquellos hombres del Úlster que murieron por estos ideales” (McGaughey, 2012: 86).

De este modo, a su regreso esos mismos soldados veteranos de la primera guerra mundial se convirtieron en experimentados guardias y milicianos de la *Ulster Volunteer Force* en su lucha en contra de los nacionalistas católicos irlandeses, lo que aunado al apoyo institucional y político británico sin duda fortaleció la posición y dominio de los unionistas protestantes sobre los católicos nacionalistas en Irlanda del Norte.

Así, una vez concretada la separación de Irlanda en dos entidades, los grupos organizados más visibles, como el Partido Unionista, la Gendarmería Real del Úlster (*Royal Ulster Constabulary*), el Ministerio Irlandés de Asuntos Externos y la Leal Institución Naranja u Orden de Orange (*Orange Order*), se concentraron en recrear sus propias políticas institucionales (McGaughey, 2012: 159-160), muchas de ellas de tipo parlamentario, bajo el cobijo de la Corona.

Según esta lógica, la creación del primer Parlamento de Irlanda del Norte, con motivo de la promulgación de la Ley de Gobierno de Irlanda de 1920, generó por ende el primer gobierno norirlandés con atribuciones restringidas. La idea general de esta Ley fue crear un Concilio irlandés en donde las autoridades de la Irlanda católica y nacionalista, así como las de la protestante Irlanda del Norte, pudieran llegar a acuerdos y encontrar rutas de cooperación en temas comunes; sin embargo, la negativa de los diputados electos por Irlanda para integrarse al Parlamento en Westminster, como ya se vio, impidió llevar a cabo este Concilio irlandés, dando paso de este modo a la celebración de las primeras elecciones en Irlanda del Norte y a la instalación de su primer Parlamento en junio de 1921, con sede en la ciudad de Belfast. Esta primera Legislatura fue la encargada de votar y rechazar, a finales del mismo año, su anexión al resto de Irlanda, y al mismo tiempo de aprobar su solicitud de completa adhesión al Reino de la Gran Bretaña. Lo anterior, pese a que no fue sino hasta la primavera de 1923, una vez superada la guerra civil irlandesa, cuando los parlamentos de Irlanda del Norte y el *Dáil* en Dublín comenzaron a sesionar de manera regular, y no sólo por convocatoria extraordinaria, para legitimar nuevas leyes (UK Parliament, 2017j).

A partir de ese momento, todas las negociaciones entre autoridades británicas e irlandesas se efectuaban sin la participación de Irlanda del Norte, ya que si bien se mantenía como una entidad geográficamente unida al resto de Irlanda, en los niveles jurídico y político su separación era franca; no obstante, no sería sino hasta 1925, con la promulgación de la “Ley de Confirmación del Acuerdo” (*Confirmation of Agreement Act*), cuando a Irlanda del

Norte le sería conferido un autogobierno limitado, el cual se convertiría de hecho en el primer ejemplo de gobierno devuelto por parte de Gran Bretaña en favor de autoridades locales.

Todo este novedoso mecanismo de devolución de autoridad generó incertidumbre entre la población protestante del Úlster, ya que consideraban al nacionalismo irlandés como una amenaza a sus tradiciones y estilo de vida. A su vez, este nerviosismo entre las cúpulas protestantes norirlandesas se expresaba a través de comentarios de funcionarios de alto nivel, quienes manifestaban de forma abierta que “[había] tumulto en todas partes, la incertidumbre acerca de las intenciones del gobierno británico, la duda incluso sobre la responsabilidad de los servicios militares y policiales” (Jones, 2009: 340). Todo ello abonó para el surgimiento de condiciones de miedo que condujeron al fortalecimiento del extremismo y de la intolerancia hacia los católicos entre los habitantes y las autoridades de Irlanda del Norte.

Precisamente esta sensación de vivir bajo un estado de constante amenaza ayudó a endurecer las posiciones extremas de los grupos protestantes excluyentes, como la *Orange Order*, de la cual surgieron algunos primeros ministros irlandeses, como Sir James Craig, quien en su oportunidad señaló: “Yo siempre he dicho que soy un hombre de la *Orange Order* primero, y un político y miembro de este Parlamento después [...]; de lo que me jacto es de que somos un Parlamento protestante y un Estado protestante” (CAIN Ulster University, 1969: 33).<sup>19</sup>

En este sentido, una vez institucionalizada la supremacía protestante en el Úlster, el funcionamiento de su Parlamento se circunscribió a adoptar el modelo Westminster, con dos cámaras parlamentarias, el Senado y la Cámara de los Comunes. Esta última se integraba con cincuenta y dos diputados electos a través de sufragio universal directo; ya para las elecciones de 1929 se optó por elegir a partir de distritos electorales mediante una combinación de los sistemas de *single members* y el *first-past-the-post*. Cabe añadir que en Irlanda del Norte no existían limitantes para otorgar el voto a los católicos, que por ser minoría no constituían una amenaza para la clase política protestante. Por su parte, el Senado contaba con veintiséis miembros, veinticuatro de los cuales los elegía la Cámara baja con base en el principio de representa-

<sup>19</sup> Debe señalarse que esta tendencia de los políticos norirlandeses a pertenecer a la *Orange Order* fue el común denominador durante muchas décadas.

ción proporcional; los otros dos asientos los ocupaban los alcaldes de Belfast y de Londonberry (Jones, 2009: 340).<sup>20</sup>

En términos generales el Parlamento norirlandés operó con las reglas parlamentarias británicas, a partir de las cuales el *speaker* o “portavoz” concentró buena parte de la carga burocrática al fungir como árbitro en las disputas por procedimientos parlamentarios, y al mismo tiempo como portavoz ante la Corona. Tal y como sucede en todo el sistema Westminster, en Irlanda del Norte el *speaker* era electo de entre los miembros de la Cámara de los Comunes, y a partir de ese momento renunciaba a su filiación partidista para cumplir con su importante encargo. Otra particularidad del modelo parlamentario norirlandés era que el jefe de gobierno acudía de manera indistinta a ambas cámaras a presentar sus propuestas, aunque sólo podía votar en una de ellas. De igual forma, ambos cuerpos legislativos solían juntarse sólo cuando una propuesta de ley del primer ministro no alcanzaba consenso en los dos, razón por la cual se discutía y se votaba con senadores y comunes reunidos, y al término de la votación se hacía la suma, la que determinaba la aprobación o no de la iniciativa respectiva.

Como era de esperarse, las elecciones efectuadas en Irlanda del Norte desde la década de los veinte hasta los años ochenta del siglo xx estuvieron dominadas prácticamente por los partidos unionistas y protestantes, ya fueran los de carácter abiertamente excluyente, como el *Ulster Unionist Party*, apoyados por la logia *Orange Order*, o ya se tratara de los moderados, entre los que destacaban los liberales o el *Alliance Party of Northern Ireland*, quienes pugnaban por no acrecentar el sectarismo protestante en contra de la minoría católica.

Así, a lo largo de doce procesos electorales, de 1921 a 1971, seis fueron los primeros ministros de Irlanda del Norte, todos ellos del mismo partido: el *Ulster Unionist Party*. Además, todas sus administraciones fueron de carácter mayoritario (United Kingdom Election Results, 2017), situación que ayudó a acrecentar la sensación de sometimiento y frustración entre la población católica, pues en realidad no podía considerarse representada en su propio Parlamento debido a su carácter minoritario.

<sup>20</sup> Es importante añadir que desde el principio se estableció que las elecciones para primer ministro se celebrarían a más tardar cada cinco años, mientras que las designaciones para el Senado cada ocho; sin embargo, las dos guerras mundiales y la inestabilidad interna a partir de los años sesenta y hasta los ochenta del siglo xx impidieron un desarrollo democrático constante en el país.

Esta circunstancia provocó tensión social y ciertamente el gobierno norirlandés, a pesar de contar con la mayoría parlamentaria suficiente, no llevó a cabo esfuerzos serios de inclusión política de los católicos con el fin de revertir las diferencias existentes entre ambos grupos sociales. Lo anterior no obstante que la presencia social católica se incrementaba en mayor medida que el aumento demográfico de los protestantes. De este modo, si bien las diversas posturas al interior del Parlamento de Irlanda del Norte respecto de la necesidad de incorporar a la minoría católica al bienestar económico generaban amplios debates, lo cierto es que no se llegaba a soluciones concretas ni de mediano plazo. De hecho, el primer ministro Terrence O'Neill declaró a finales de los años sesenta lo siguiente:

Es terriblemente difícil explicar a los protestantes que si se les da a los católicos romanos un buen trabajo y una buena casa vivirán como protestantes [...]. Si tratas a los católicos con la debida consideración y amabilidad, vivirán como protestantes a pesar de la autoridad de su Iglesia [...]; ellos [los católicos] se van a negar a tener dieciocho hijos, pero si están desempleados y viven en condiciones miserables llevarán a esos dieciocho hijos a recibir asistencia pública (CAIN Ulster University, 1969: 35).

Pese a lo anterior, la segregación en contra de los católicos fue el común denominador, lo cual generaría potenciales focos de resistencia en contra del gobierno norirlandés. Además, debe agregarse que dicha población exigía la anexión de Irlanda del Norte a la República de Irlanda y que para ello apoyaba los esfuerzos nacionalistas e independentistas de fuerzas como el *Sinn Féin*, que gradualmente incrementaba su presencia en Irlanda del Norte, tanto en el nivel político como en el paramilitar.

Esta contención acumulada a lo largo de las décadas encontró finalmente su cauce violento a finales de los sesenta a partir de la creación de la *Northern Ireland Civil Rights Association* en 1967, organismo que denunciaba la discriminación de la minoría católica por parte del gobierno y de la mayoría protestante, y que exigía una serie de reformas que garantizaran sus derechos civiles. Para lograrlo convocaron a marchas multitudinarias, que intentaron ser contrarrestadas por otras manifestaciones organizadas por grupos protestantes en apoyo al gobierno norirlandés. De este movimiento en favor de los derechos de los católicos surgieron iniciativas que exigían, entre otras cosas, que los votos tuvieran el mismo valor y fueran de carácter universal;

que los distritos electorales no se dividieran de manera intencional para fragmentar los sufragios católicos; el otorgamiento de vivienda social sin discriminación; mayor acceso de católicos a las funciones de gobierno (CAIN Ulster University, 2016). Cabe añadir que de todas estas demandas, la de otorgamiento de vivienda social fue la única que los parlamentos de Westminster y Belfast aprobaron casi de inmediato.

Como producto de estas protestas católicas, comenzaron a agudizarse las expresiones de violencia y represión por parte del gobierno norirlandés y militares británicos. Esto sucedió a partir de agosto de 1969, justo cuando en el barrio de Bogside en Derry, en Londonberry, al noroeste de Irlanda del Norte, las tropas británicas cobraron protagonismo en el conflicto tras la solicitud de ayuda de las autoridades de Belfast, que se consideraron rebasadas.

Poco más de dos años después (el 30 de enero 1972) tuvo lugar el acontecimiento que marcó un antes y un después en este conflicto, y que es conocido como el domingo sangriento (*Bloody Sunday*). Ese día, los militares británicos mataron a catorce civiles desarmados que protestaban en el barrio de Bogside en la ciudad de Derry, generándose la indignación internacional y, al mismo tiempo, brindándole nuevos bríos a las acciones armadas del ERI, tanto en el interior de Irlanda como en territorio británico. Lo sucedido en Bogside incrementó la intensidad de las protestas, ya que durante los funerales de once de las víctimas, decenas de miles de norirlandeses católicos salieron a las calles a expresar su solidaridad y repudio hacia las autoridades británicas. En Dublín se calcula que cien mil personas protestaron a las afueras de la embajada británica y al final del mitin le prendieron fuego (CAIN Ulster University, 2016).<sup>21</sup>

Todo lo anterior provocó que el primer ministro de Irlanda del Norte, Brian Faulkner, fuera llamado a Londres a comparecer ante el primer ministro conservador de Gran Bretaña, Edward Heath, quien le informó que el Parlamento en Londres había decidido intervenir en las labores de gobierno en su país, así como dejar sin efecto toda acción parlamentaria norirlandesa, en un ejercicio que es conocido como *Direct Rule*. En este tipo de intervención la Cámara de los Comunes británica asumió el control político en todo Irlanda del Norte, y para otorgarle legitimidad parlamentaria aprobó la *Nor-*

<sup>21</sup> Estos acontecimientos, iniciados en 1968 con las primeras marchas y que culminarían en 1998 con la firma del Acuerdo de Belfast o Acuerdo del Viernes Santo —entre autoridades británicas, norirlandesas e irlandesas—, son conocidos en diversas publicaciones británicas e irlandesas como *The Troubles* (los problemas).

*thern Ireland Temporary Provisions Act* de 1972, que significó en los hechos la suspensión indefinida del Parlamento de Belfast (UK Parliament, 2017k).

Es necesario mencionar que durante las cinco décadas de funcionamiento del Parlamento en Irlanda del Norte, desde los veinte hasta principios de los setenta del pasado siglo, éste en realidad nunca tuvo capacidad de alterar o rechazar las leyes o reglamentos que emitía Westminster para su territorio. Asimismo, la legislación parlamentaria norirlandesa se encontraba sometida de forma permanente a la revisión judicial desde Westminster. De hecho, también su ejercicio financiero se mantuvo bajo el control de Londres, ya que el Parlamento norirlandés carecía de prerrogativas en tal sentido; no obstante, Westminster solía otorgar algunas atribuciones al organismo legislativo de Belfast, sobre todo cuando este último entraba en negociaciones directas con el gobierno de la República de Irlanda en las materias territorial y de ciudadanía.

Esta tendencia probritánica de las autoridades y los representantes norirlandeses obedecía en buena medida a que los vínculos con Londres y Westminster garantizaban de alguna manera su propia sobrevivencia en territorio irlandés, ya que ahí los protestantes se encontraban en condición de minoría respecto de los católicos, pues prácticamente se concentraban en sólo seis condados del Úlster. Por eso precisamente, a lo largo de sus doce procesos electorales de 1921 a 1969, el *Ulster Unionist Party* fue la agrupación política más poderosa de Irlanda del Norte: ganó todas las elecciones, y con ello monopolizó la Primera Magistratura del país así como su Parlamento. Este partido buscó consolidar un gobierno que preservara su posición como entidad política sometida a la tutela y protección británicas, amparado en que sus bases protestantes significaban las dos terceras partes de la población total norirlandesa.

Por ello, la mejor manera de restar espacios políticos a los católicos fue instrumentar sistemas electorales que garantizaran el predominio protestante por medio de esquemas como el *first-past-the-post* que, como se ha visto, convierte los votos electorales en asientos parlamentarios eligiendo sólo al candidato de mayor votación. Ello provoca que todos los sufragios emitidos hacia los otros candidatos simplemente desaparezcan. Por eso la división de los distritos electorales de tal forma que los barrios católicos fueran separados para quedar en minoría provocó gran malestar entre la ciudadanía católica norirlandesa, ya que entendían de manera clara que la división distrital electoral vigente en ese momento guardaba la clara intención de mantener-



los sin representación en el Parlamento por su carácter minoritario. Esto último también pasaba con los partidos protestantes moderados, los cuales nunca lograron vencer al poderoso partido de gobierno, el *Ulster Unionist Party* (Jones, 2009: 345-346), como fueron los casos del Partido Liberal de Irlanda del Norte o del Partido Laborista Irlandés.

Durante este periodo de *Direct Rule*, Irlanda del Norte siguió realizando elecciones para designar diputados en Westminster, en las cuales el *Unionist Party* mantuvo siempre su hegemonía sobre sus contrincantes. Prueba de ello es que durante las cinco elecciones generales de Gran Bretaña durante el periodo 1974-1987, este partido mantuvo la mayoría de los asientos norirlandeses en la Cámara de los Comunes británica. Es necesario señalar que ésta fue la situación que prevaleció tanto en las elecciones generales de febrero y octubre de 1974 y en las de 1979 —cuando a Irlanda del Norte se le asignaban doce asientos en la Cámara de los Comunes británica—, como en las de 1983 y 1985, cuando Gran Bretaña incrementó a diecisiete el número de asientos norirlandeses en la Cámara baja del Parlamento.

A lo anterior debe agregarse que las condiciones del sistema electoral norirlandés estimularon que el *Unionist Party* reforzara su posición displicente frente a las demandas de mayores derechos para la población católica de su país, y sí en cambio bloqueara toda iniciativa ajena a sus intereses impulsada por representantes de otros partidos norirlandeses en la Cámara de los Comunes, quienes por su reducido número no lograban presentar una agenda de discusión en el Parlamento. Esta realidad estimuló el incremento de acciones rebeldes por parte del Ejército Republicano Irlandés en territorio británico durante el periodo de *The Troubles*.

Toda esta compleja etapa en Irlanda del Norte durante los setenta y los ochenta llevó incluso a la división física de protestantes y católicos mediante muros que separaban barrios en la ciudad de Belfast. Se estima que fueron noventa y nueve las murallas que se levantaron a lo largo de veinte kilómetros, con una altura que llegó a alcanzar los siete metros (Fresneda, 2013). Esta situación de inestabilidad permanente dio paso a que el gobierno laborista de Tony Blair buscara encontrar una salida política al conflicto, la cual no sólo garantizara la participación e incidencia de los católicos en la vida democrática del país, sino también su activo involucramiento político en el futuro inmediato, aunque ello significara negociar con grupos cercanos al ERI, como en el caso de *Sinn Féin*.

Tal y como ya se señaló en su oportunidad, estas negociaciones del gobierno británico con protestantes y católicos norirlandeses tuvieron su máximo logro con los Acuerdos del Viernes Santo, firmados en abril de 1998 en la ciudad de Belfast, y aceptados por los gobiernos de Gran Bretaña y la República de Irlanda. En general, para la mayoría de los partidos políticos norirlandeses este acuerdo significó la reapertura de un cuerpo conocido como Asamblea de Irlanda del Norte. Este organismo contaría con ciento ocho miembros electos en distritos equilibrados para hacer posible la representación de católicos y protestantes en sus dos agrupaciones políticas más significativas; el *Sinn Féin* y el *Unionist Party*.

Cabe añadir que estos acuerdos contaron con el apoyo de la mayoría de la población irlandesa, que tras los referendos de mayo de 1988 en Irlanda del Norte y en la República de Irlanda decidieron dar paso a una nueva etapa de mayor tolerancia en los territorios del Úlster. Como resultado de estos ejercicios de participación ciudadana y acorde con lo establecido en los acuerdos firmados en Belfast, el Parlamento británico aprobó, gracias a la mayoría laborista del primer ministro Tony Blair, la *Northern Ireland Act* de 1998, mediante la cual, entre otras cosas, se convocaba a elecciones en el sistema de segunda vuelta instantánea (*single transferable vote*), lo cual había sido una demanda católica y de los grupos civiles para alcanzar equilibrios y equidad en todo el territorio.

Así, una vez establecida la paz y puesto en marcha el programa de desarme de los grupos irregulares antagónicos en Irlanda del Norte, el siguiente paso fue brindar certidumbre política al proceso. Por ello, la Asamblea norirlandesa fue dotada de la autoridad suficiente para discutir y aprobar legislaciones primarias y llevar a cabo reformas políticas al interior del país; sin embargo, éstas las debía aceptar la Secretaría de Estado como órgano representante de la Corona, que al final seguía conservando su derecho de aprobar o rechazar cualquier ley emergente (Jones, 2009: 349).

En esas primeras elecciones de la Asamblea norirlandesa restaurada, celebradas en junio de 1988, resultó vencedor el *Unionist Party*, aunque en forma muy lejana de las mayorías absolutas que gozaron durante las décadas previas. De hecho, acumuló sólo veintiocho asientos de los ciento ocho en disputa, seguido del *Social Democratic and Labour Party* con veinticuatro curules, por veinte del *Democratic Unionist Party*, mientras que el *Sinn Féin* alcanzaría los dieciocho representantes. Los demás partidos ganarían entre todos los dieciocho lu-

gares restantes (Elections, 2017). Resulta interesante saber que de acuerdo con la *Northern Ireland Act* de 1998, el gobierno surgido de la Asamblea de Irlanda del Norte se compondría de un Ejecutivo encabezado por los cuatro líderes de los partidos mayoritarios, en donde el ministro principal de Irlanda del Norte fungiría como cabeza de gobierno frente a la Asamblea; no obstante, en realidad este sistema fue diseñado para que nacionalistas y unionistas compartieran el poder y la toma de decisiones políticas, ya que tanto el ministro principal en turno como su viceministro y el presidente de la Asamblea deben asumir sus cargos con base en la elección mayoritaria de todos los representantes.

Dicho esquema requiere que ambos grupos, divididos en cuatro partidos principales —*Unionist Party* y *Democratic Unionist Party* (dentro del bando de los unionistas), y *Sinn Féin* y *Social Democratic and Labour Party* (del lado de los nacionalistas)—, deben de manera forzosa llegar a acuerdos, ya que la acción de gobierno depende en gran medida de sus ministerios, los cuales tienen que encabezar necesariamente miembros de los cuatro partidos mencionados. En otras palabras, una vez reconstituida la Asamblea de Irlanda del Norte, ésta debía funcionar según los principios del consenso y el equilibrio como forma de gobierno.

Asimismo, este primer gobierno norirlandés restaurado debía salvaguardar el funcionamiento del Concilio Ministerial del Norte y del Sur de Irlanda, que era el organismo encargado de garantizar la cooperación entre los poderes ejecutivos de Irlanda del Norte y la República de Irlanda para resolver problemáticas comunes. Este Concilio Ministerial estaba obligado a cooperar en todos los niveles con el Poder Ejecutivo surgido de la Asamblea norirlandesa y su contraparte británica en Londres. En términos generales, el funcionamiento de la Asamblea de Irlanda del Norte mantiene la operación del sistema Westminster, con la particularidad de que el ministro principal (primer ministro) debe resultar electo por la mayoría de los diputados, no sólo los de su propio partido, sino también los de toda la oposición. Es conveniente señalar que los Acuerdos del Viernes Santo también establecieron que la totalidad de los miembros de la Asamblea debían expresar abiertamente su posición y ubicarse en uno de los tres grupos parlamentarios: unionistas, nacionalistas o neutrales, para de esta forma mantener la transparencia en la institución legislativa.

Otra particularidad del Parlamento norirlandés consiste en que el *speaker* o portavoz es el encargado de revisar, y en su caso de aprobar, cualquier pro-

yecto de ley en su calidad de presidente de la Asamblea de acuerdo con sus estatutos tipo Westminster. También es la figura encargada de procesar las enmiendas a los proyectos de ley rechazados y de mantener contacto directo con la Corona para la aprobación de nuevas leyes (The Northern Ireland Assembly, 2017).

Este primer periodo de la Asamblea restaurada norirlandesa logró considerables avances, pues por primera vez los unionistas protestantes se encontraron con una oposición numérica y representativa similar del lado de los católicos nacionalistas, lo que sin duda estimuló la tolerancia entre ambos grupos. Pese a lo anterior, la desconfianza mutua entre protestantes unionistas y católicos nacionalistas se mantuvo, generándose discordancias más allá de la Asamblea, lo que llevó al gobierno del primer ministro Tony Blair a suspender la actividad parlamentaria.

Una vez suspendidas las labores legislativas de esta primera Asamblea en octubre de 2002, se determinó mantener la convocatoria a elecciones para el año siguiente, con la esperanza de que esta suspensión sirviera para distender el ambiente social y legislativo para así lograr alcanzar mayor armonía y acuerdos entre ambos grupos. En dicho proceso electoral de noviembre de 2003, el *Democratic Unionist Party* se llevó treinta asientos, contra veintisiete del *Unionist Party*, veinticuatro del *Sinn Féin* y dieciocho del *Social Democratic and Labour Party*. Mientras que las diez curules restantes se repartieron entre los demás partidos políticos.<sup>22</sup>

Si bien el proceso electoral se llevó a cabo sin mayores contratiempos, las diferencias entre ambos grupos no disminuían, situación que abonó para extender la suspensión legislativa en Irlanda del Norte hasta 2007. Lo anterior significó que los 108 diputados electos para integrar la segunda Asamblea norirlandesa no estaban en posibilidades de tomar sus asientos de manera oficial en el Palacio de Stormont, en Belfast.

El motivo de esta nueva suspensión, que se extendió por poco más de cuatro años, obedeció a las continuas desconfianzas expresadas entre católicos y protestantes al interior de la Asamblea con motivo de las acusaciones de espionaje mutuo en instituciones de gobierno, así como por las acciones violentas cometidas por sus seguidores en diversos puntos del territorio para solucionar sus diferencias. El principal argumento de los unionistas en con-

<sup>22</sup> Las cifras, porcentajes y datos de los procesos electorales de Irlanda del Norte se consultaron en *Elections. Northern Ireland Elections* (2017).

tra de los nacionalistas consistía en que los primeros demandaban pruebas tangibles del desarme del ERI tras cuatro años de la firma de los Acuerdos del Viernes Santo. Todo ello, mientras los nacionalistas insistían en que dicho desarme se haría efectivo una vez que ellos mismos aprobaran y formaran parte de los cuerpos de seguridad pública de Irlanda del Norte, que seguían manteniendo sus vínculos con los grupos más extremistas del bando protestante. Este nivel de tensión social llevó a Tony Blair a mantener la suspensión legislativa y a declarar que la autonomía sería restaurada, pero solamente hasta que la violencia fuese erradicada y sustituida por formas políticas exclusivamente pacíficas y democráticas, con un compromiso en este sentido definitivo y sin ambigüedades (Oppenheimer, 2002).

De este modo, después de arduas negociaciones, entre julio y octubre de 2005 tanto el ERI como los grupos paramilitares protestantes anunciaron el desmantelamiento total de sus fuerzas y se acogieron a los métodos democráticos para alcanzar sus fines. Como respuesta, los gobiernos de Londres y Dublín señalaron una hoja de ruta para lograr la reapertura de la Asamblea, y convocaron a nuevas elecciones para marzo de 2007. Sólo así Irlanda del Norte fue capaz de ejercer su autonomía de gobierno en medio de acuerdos y compromisos de corto y mediano plazos que reivindicaban los acuerdos previos del Viernes Santo.

De tal modo, en las elecciones de 2007, 2011 y 2016, así como en las de marzo de 2017,<sup>23</sup> resultó vencedor el *Democratic Unionist Party*, seguido siempre muy de cerca por el *Sinn Féin*, el cual gracias a las características del sistema electoral y legislativo norirlandés se une con el *Social Democratic and Labour Party* —como agrupaciones nacionalistas— para lograr contrapesos, equilibrios y participación en las acciones de gobierno.

Si bien los muros en Belfast mantienen dividida a la sociedad norirlandesa en el Úlster, lo cierto es que, sin duda, las prácticas democráticas del sistema Westminster tienen en Irlanda del Norte su principal reto de cara al futuro.

<sup>23</sup> A partir de estas elecciones se determinó, por unanimidad, reducir el número de diputados en la Asamblea, que pasaron de ciento ocho a noventa.



## **ORÍGENES, ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS PARLAMENTARIAS EN GALES**

Hacia principios del siglo xv se tienen documentados los primeros ejercicios parlamentarios en diversas localidades galesas; en ellos el independentista Owain Glyndwr buscó llegar a acuerdos con diversos nobles y jefes de los clanes galeses para que rigieran en todo el territorio, en un intento por contrarrestar el dominio inglés sobre su país. Si bien su revuelta fue finalmente sometida por la Corona inglesa, sus llamados para conformar asambleas regionales sentarían las bases de la representación popular en Gales.

En el ámbito histórico, Gales se encontraba habitado por tribus celtas, pero a diferencia de Escocia e Irlanda, esta región sí fue conquistada en su totalidad por el Imperio romano en el siglo I. Si bien la presencia romana se extendió allí hasta el siglo v, la lengua gaélica galesa se mantuvo en uso de manera paralela a la conversión de las tribus paganas celtas al cristianismo. Gales fue la primera nación que adoptaría esa religión en lo que hoy se conoce como Gran Bretaña, pues la propagación de ese culto fue un fenómeno que se extendió de Sur a Norte en las islas británicas, circunstancia que provocó que los galeses-romanos se percibieran culturalmente como superiores a sus vecinos, a quienes consideraban paganos.

Una vez que colapsó la influencia de Roma, los galeses se vieron sometidos por los nuevos conquistadores germánicos sajones, quienes desarrollaron y consolidaron sus propios centros de poder feudal, entre los que destacaban Gwynedd (en el Norte), Powys (en el centro) y Deheubarth (en el Sur), mismos que se encontraban políticamente fragmentados y con luchas permanentes entre sí. Ello les facilitó la conquista a sus más poderosos y políticamente más organizados vecinos ingleses.

Suele considerarse a Gales como una región que no desarrolló instituciones políticas propias, y que en cambio favoreció el personalismo y la llegada de príncipes para intentar gobernar y hacer frente a las divisiones internas,

así como a las invasiones extranjeras, primero de los vikingos, luego de los anglosajones, después de los normandos, y finalmente de los británicos. En este sentido, los dos príncipes que mayores esfuerzos realizaron para intentar conformar a Gales como un ente político integral fueron Hywel Dda ap Cadell (880-950) y Gruffydd ap Llywelyn (1007-1063). El primero desarrolló en el siglo X los primeros códigos de leyes escritas en el país, en un intento por organizar y legitimar las propiedades de los nobles. De hecho, Hywell visitaba regularmente la Corte inglesa para buscar llegar a acuerdos pacíficos con los anglosajones, algo que logró, pero tras su muerte el caos y las disputas regresaron a Gales, lo que permitió nuevas incursiones escandinavas y anglosajonas en todo el territorio (Burns, 2010: 49-50).

Cien años después llegaría el otro gran príncipe galés Gruffydd ap Llywelyn, quien a diferencia de sus antecesores sería un líder militar exitoso, que no sólo vencería a los anglosajones en territorio galés, sino que se aventuraría con éxito a conquistar territorios ingleses gracias a que estableció una confederación de pequeños reinos que reconocían su autoridad; sin embargo, las divisiones internas entre galeses hicieron fracasar su campaña, pues sería traicionado y decapitado. De hecho, su cabeza fue enviada a la Corona inglesa como un tributo al monarca para dar por culminado el conflicto (Jenkins, 2008: 44). Lo anterior significó el último intento galés por crear un reino unificado como el de Escocia e Inglaterra

No obstante, muy pronto la presencia inglesa en Gales perdería influencia tras la invasión normanda a la isla en 1066. Ahora bien, es necesario precisar que si bien es cierto que la conquista de los normandos estaba centrada en someter a la Corona inglesa, también lo es que Gales no pudo mantenerse fuera de los objetivos de esa conquista y que su resistencia fue constante pero de alcances limitados. Lo anterior obedeció a que los galeses carecían de un monarca central que dictara órdenes de forma vertical, así como de un organismo cameral que organizara una defensa conjunta. En lugar de eso, defendían posiciones distantes y de poca influencia estratégica para los conquistadores normandos, quienes por lo general se limitaron a mantener a los galeses aislados y sin apoyo alguno, al tiempo que usurpaban la Corona inglesa.

No sería sino hasta el siglo XIII cuando Llywelyn Fawr, conocido también como Llywelyn “El Grande”, intentaría dar legitimidad a Gales frente a la Corona anglo-normanda una vez que negociara con éxito la inclusión del



país a la Carta Magna de 1215, meta que alcanzó después de aliarse con nobles y barones ingleses para exigir al monarca John I una serie de cláusulas que dotaran a los nobles galeses con los mismos derechos que sus contrapartes en Inglaterra respecto de sus posesiones, herencias y otras garantías establecidas en dicho documento constitucional.

Tras la muerte de Llywelyn Fawr las divisiones internas y la lucha por el poder entre hermanos llevaron de nuevo a Gales hacia escenarios de fragilidad frente a la Corona anglonormanda, que provista de todos los mecanismos legales y militares terminó sometiendo al desordenado Principado de Gales en 1282, tras derrotar y matar a Llywelyn Ein Llyw Olaf (1223-1282).<sup>1</sup>

Dos años después, en 1284, el monarca Edward I decretó el Estatuto de Rhuddlan,<sup>2</sup> que sometió a Gales al sistema inglés de derecho consuetudinario, permitiéndole a la Corona la designación directa de alguaciles, *sheriffs*, jueces, y en general todo tipo de funcionarios ingleses. De igual modo, fueron incluidos también funcionarios galeses leales a la Corona, quienes al lado de sus colegas provenientes de Inglaterra alcanzaron por primera vez una administración unificada y ordenada en todo el territorio

De esta forma, la ley galesa que databa del príncipe Hywell desde el siglo X dio paso paulatinamente al *Common Law*, mediante el cual se definieron, a partir de las tradiciones inglesas, las nuevas leyes tributarias y de impartición de justicia que habrían de emplearse en Gales. Lo anterior puso fin a su periodo independiente, y al mismo tiempo dio inicio formal a su figura como un dominio de la Corona inglesa (Burns, 2010: 74).

Fue así como la Corona inglesa se adjudicó el derecho de gobernar Gales y transmitir sus tradiciones y leyes al nuevo súbdito. Tal situación se dio, por supuesto, en medio de conflictos sociales y legales entre los galeses y los forasteros ingleses que buscaban imponer la ley de su país sobre una entidad todavía semifeudal. Para el periodo 1348-1349, la peste negra mermó severamente a la población galesa, disminuyéndola en dos tercios, lo cual impulsó la llegada de miles de ingleses para ocupar las granjas vacías y retomar así las actividades agrícolas y económicas (Burns, 2010: 81). Lo anterior constituyó de hecho la primera gran migración inglesa, pero a diferencia de lo ocurrido

<sup>1</sup> Es preciso señalar que tras la derrota y muerte de Llywelyn Ein Llyw Olaf en 1282, el título de príncipe de Gales se ha otorgado al primer heredero directo al trono de la Corona inglesa (y posteriormente británica a partir de 1707).

<sup>2</sup> Este documento suele ser conocido también como “Estatuto de Gales de 1284”.

en Irlanda, este flujo migratorio se justificó con el argumento de que se dio por falta de mano de obra en el campo y para ocupar tierras abandonadas.

Lo cierto es que esta oleada migratoria de ingleses a tierras galesas fue percibida como una nueva invasión, ya que se daba tan sólo unas cuantas décadas después de la imposición de las leyes inglesas a través del Estatuto de Rhuddlan. Ello generó inconformidad en amplios sectores de la nobleza de Gales, así como también en la población, pues consideraban que sus tierras les eran arrebatadas por Inglaterra en medio de la tragedia de la peste negra.

Este malestar galés se sumó a los conflictos al interior del Reino que enfrentó el monarca inglés Richard II (1377-1399), quien tuvo que concentrar su atención en sofocar distintos levantamientos en su contra, no sólo militares sino también parlamentarios. El elevado nivel de conflictividad durante su gestión ocasionó que lo removieran del trono los rebeldes en el Parlamento inglés, circunstancia que aprovechó la nobleza galesa para organizar movimientos aislados de emancipación en todo el territorio.

Así, a principios de 1404 Owain Glyndwr llevó a cabo un intento de coronación como príncipe de Gales, alegando su derecho a la emancipación de Inglaterra. Este episodio sucedió ante representantes de las coronas francesa, escocesa y de Castilla. En un esfuerzo para debilitar la posición de la Corona inglesa en las cortes europeas, Owain buscó celebrar asambleas parlamentarias en distintas localidades galesas para lograr legitimidad frente al Parlamento inglés; sin embargo, una vez regularizadas las labores parlamentarias inglesas, la Corona de aquel país pudo someter militarmente la rebelión galesa, por lo que Owain se marchó y escondió para siempre. De ese modo, en el inicio del siglo XV Inglaterra recuperó su dominio total sobre Gales.

De hecho, allí se considera que la historia moderna de aquel país comienza con la derrota definitiva del espíritu independentista y emancipador bajo el mando de Owain Glyndwr, ya que todo el territorio quedó confinado a un estatus de subordinación permanente a la Corona inglesa. Lo anterior, después de que Inglaterra logró someter con éxito todas las formas de rebeldía expresadas por los galeses durante siglos.

Virtualmente, la esperanza de un Gales independiente y unido en torno a la figura de un príncipe nacido en ese país y no en Inglaterra ha desaparecido. Desde entonces ya no hubo un nuevo levantamiento en Gales que cuestionara el liderazgo e influencia de la Corona inglesa (Jenkins, 2008: 118).

Ello definitivamente contrasta con el espíritu nacionalista e independiente expresado por irlandeses y escoceses durante siglos.

Más de una centuria después, el imperio de los usos y costumbres británicos terminó por consolidarse en Gales por medio de una serie de leyes aprobadas durante el periodo de 1536 a 1543 entre ese territorio e Inglaterra. Con base en ellas, Gales se unificó como entidad política, otorgándose el mando del gobierno a sus nobles y caballeros, pero siempre bajo la tutela de la Corona inglesa. Hasta ese momento, el país no era más que una especie de confederación de pequeñas comunidades desvinculadas entre sí. A partir de entonces se dividiría en condados y su administración se llevaría a cabo tal y como se hacía en Inglaterra. Además, se determinó que todas las labores de gobierno y de justicia debían realizarse en inglés, dejando en un segundo término al idioma galés, lo que representó el inicio de la desarticulación cultural galesa, y al mismo tiempo el surgimiento de una nueva identidad más uniforme en torno a la posición de la nación al interior del Imperio inglés. De hecho, al no contar con un centro urbano y cultural como lo es Dublín para los irlandeses, o Edimburgo para los escoceses, los galeses optaron por adoptar a Londres como su objetivo aspiracional (Jenkins, 2008:133).

Si bien como se señaló, las leyes de adhesión galesa a Inglaterra fueron aprobadas en un periodo que va de 1536 a 1543, todo el proceso es conocido como Ley de la Unión de 1536. Es preciso añadir que a partir de ese momento, Gales fue facultado para elegir y enviar veintiséis representantes a la Cámara de los Comunes, quienes serían electos para defender los intereses de los sectores más adinerados de los recién creados condados galeses. La única condición para que dichos comunes se integraran a las labores legislativas en Westminster fue que utilizaran el inglés (Spartacus Educational, 2016).

En general, la actitud de los integrantes galeses del Parlamento fue de absoluta lealtad a la Corona. Incluso pese a las demandas financieras constantes del Charles I (1625-1649), que los llevaron a la exasperación, éstos se mantuvieron leales durante los años de la guerra civil (1641-1646), que culminaría con la decapitación del rey. Esta aparente contradicción de los comunes galeses, que apoyaban a un monarca que desconocía al Parlamento, generó conflictos entre ellos y sus contrapartes ingleses, que se sublevaron en contra del soberano; sin embargo, la llegada de Oliver Cromwell al poder (1653-1658), con su estilo monolítico y dictatorial, ayudó a que las divergencias entre los comunes ingleses y galeses se superaran por el bien común. Por ello, ambos

grupos apoyaron la restauración de la Casa Estuardo, para así restituir la Corona inglesa con un monarca heredero escocés al frente en la persona de Charles II (1660-1685). En general, se considera que los nobles y los burgueses galeses se vieron beneficiados durante el segundo periodo de la Casa Estuardo, esto es, de 1660 a 1707, ya que fueron ellos quienes regularmente ascendieron a los más altos cargos en la Corte inglesa.

Durante ese periodo, los partidos políticos que presentaban a sus candidatos frente al electorado galés, los liberales y los conservadores, cedieron paulatinamente el terreno a los asientos fácticos al interior de la Cámara de los Comunes, los cuales se otorgaban por el linaje de sus integrantes o a través de un complejo sistema de oligarquías, que sin elección de por medio designaba a sus representantes al Parlamento inglés (Jenkins, 2008: 151). El desarrollo de esta práctica terminó por garantizar los intereses de las oligarquías galesas, que solían agruparse en torno a los sectores más conservadores del parlamentarismo inglés.

Una vez establecida la Ley de la Unión de 1707, que integraba a Inglaterra y Escocia en torno a una nueva entidad política conocida como Gran Bretaña, Gales continuó con el envío de sus propios comunes al Parlamento. En su apartado 22, la Ley otorgó 27 asientos a los representantes galeses en el nuevo Reino, que se sumaban a los 45 escoceses y a los 486 ingleses para conformar una Cámara de los Comunes británica con 558 integrantes (Chastenet, 1947: 57).

La alineación galesa a la nueva nación británica se hizo de manera tan profunda y pasiva, que en 1746 “[...] el Parlamento británico declaró, sin temor a ofender al galés [común], que cada vez que apareciera la palabra Inglaterra en cualquier legislación debía leerse que incluía también a Gales” (Jenkins, 2008: 151). Ese detalle sin duda permite apreciar el papel que Gales jugaría desde el inicio de su inclusión como miembro de Gran Bretaña, al presentarse como un socio conservador, pero sobre todo leal a la Corona. De este modo, si bien su inclusión a Inglaterra fue un acto de anexión progresiva, la diferencia de Gales respecto de Escocia o Irlanda consiste en que desde principios del siglo XV decidió abrazar la cultura política y social inglesa como la suya, lo cual difuminaría progresivamente sus tradiciones culturales y políticas, incluido su propio idioma, que pese a todo se continuó hablando primordialmente en los poblados rurales más alejados.

Durante ese mismo periodo en cuestión, es decir, a mediados del siglo XVIII, el movimiento protestante metodista cobró mayor auge en territorio galés, sobre

todo como una expresión de autoafirmación religiosa local, ya que si bien Gales abrazaba el anglicanismo y el protestantismo, al mismo tiempo impulsaba dirigir mayor atención al servicio de los más necesitados a través de la acción cristiana colectiva. Por las características propias de la región, el metodismo galés fue considerado como una rama del anglicanismo dirigida a las clases bajas, ya que sus principales seguidores fueron granjeros pobres y trabajadores (*Dios Universal*, 2017). Con el paso de los siglos, el metodismo de Gales fue transformándose en lo que actualmente se conoce como la Iglesia presbiteriana de Gales, considerada como la religión oficial de la mayor parte de la población. De este modo, tanto la propagación del metodismo galés, como la defensa de la lengua gaélica, se convirtieron en dos de los elementos identitarios más socorridos por algunos sectores de la sociedad.

En este sentido, la alineación política y social con Inglaterra, pero al mismo tiempo la reafirmación del metodismo y la defensa del gaélico como elementos de carácter autóctono, dieron a Gales un distintivo particular como miembro de Gran Bretaña. Ya en el siglo XIX el acelerado proceso de industrialización y la explotación minera trajeron nuevas oleadas de inmigrantes ingleses a Gales en busca de empleo, lo que provocó nuevos escenarios de desencuentro entre los recién llegados anglicanos y los galeses locales metodistas. Por ello, se requirieron nuevos espacios de negociación política y de solución de conflictos desde la Cámara de los Comunes. Lo anterior sucedió ya que cada vez eran mayores los sectores sociales galeses que fueron perjudicados por la llegada de inmigrantes ingleses a sus tierras, por lo que exigieron una representación efectiva y una mejor defensa de sus intereses en el Parlamento británico. Todo este escenario ocasionó que la representación de los comunes galeses en el Parlamento dejara de ser mayoritariamente conservadora para dar a paso a una clara mayoría de liberales (Jenkins, 2008: 173). Estos últimos comenzaron, desde sus curules, a anteponer los objetivos de sus electores para garantizar sus derechos de propiedad y trabajo.

Tal dominio liberal entre los diputados galeses en el Parlamento británico se extendió hasta principios del siglo XX, surgiendo una nueva faceta más activa de los comunes de Gales, quienes se alineaban con sus contrapartes ingleses de la misma orientación para echar a andar nuevas legislaciones de carácter más extensivo en el ámbito social. Es necesario señalar que la Cámara de los Comunes fue el único espacio para hacer llegar las demandas galesas al Imperio, ya que la Cámara de los Lores siempre estuvo prácticamente

vetada para ellos, pues carecían de títulos nobiliarios propios, y los asientos que esporádicamente se otorgaban a Gales en esa Cámara ya estaban apartados para que los ocuparan algunos de los obispos de la Iglesia anglicana galesa, que se mantenía en constante pugna con sus contrapartes metodistas.

Ya en el siglo xx, si bien Gales se encontraba anclado como parte integral de Gran Bretaña, lo cierto era que la mayoría de su actividad económica fue lenta, lo que provocó que una buena parte de su población tuviera que vivir en condiciones desfavorables. Muestra de ello es que poco antes de la segunda guerra mundial, los bajos salarios, el desproporcionado desempleo y las condiciones de explotación minera obligaron a cientos de miles de galeses a emigrar a Estados Unidos y Canadá para poder sobrevivir (Jenkins, 2008: 235).

De hecho, no sería sino hasta después de la segunda guerra mundial cuando la mayoría parlamentaria liberal en Gran Bretaña elaboraría un plan de desarrollo integral para Gales sustentado en dos acciones: lograr una extendida propiedad social de las empresas y mejorar la calidad de los servicios de salud pública. Con ello se buscó crear condiciones suficientes para alcanzar finalmente el crecimiento económico en territorio galés y que éste se reflejara en altas tasas de empleo formal.

En 1955 se designó a la ciudad de Cardiff como la capital de Gales, y fue a partir de ese momento que las demandas de mayor atención pública comenzaron a multiplicarse por toda la región, sobre todo con motivo de las políticas de carácter keynesiano puestas en marcha desde finales de la segunda guerra mundial. De este modo, los años sesenta fueron testigos de una serie de movimientos sociales internos que exigían una mayor atención y cumplimiento de derechos a las autoridades británicas concentradas en Cardiff; ello se reflejó en un mayor número de comunes de las tendencias laborista y liberal para ocupar sus asientos en el Parlamento británico, arrebatándole espacios de representación al tradicional conservadurismo galés. Tal situación fue reforzándose con el paso de los años, ya que las elecciones galesas, tanto locales como generales, suelen otorgar un mayor número de asientos al Partido Laborista Galés.

De hecho, ni siquiera el embate conservador que atravesó Gran Bretaña en los ochenta, con Margaret Thatcher como primera ministra, logró derrotar al laborismo galés, el cual no obstante se encontró en la necesidad de establecer alianzas con los liberales (Jenkins, 2008: 285) para así garantizar su presencia en el Parlamento británico justo en momentos en que el neolibe-

ralismo se extendía de forma inevitable en gran parte del mundo occidental, constituyéndose como una importante amenaza para el tradicional Estado de bienestar construido desde la posguerra.

Ahora bien, la década de los noventa trajo consigo nuevos desafíos para Gales una vez que se puso en evidencia que el sistema económico asistencialista británico había cedido su paso a las nuevas tendencias neoliberales de fin de siglo, mismas que empujaban duramente en favor de la privatización de los bienes tradicionalmente públicos. Ello reavivó el tímido nacionalismo galés, que pugné por una mayor atención social, por el rescate de su idioma y por nuevos espacios de participación democrática, entre otras cosas. Por esa razón, el partido nacionalista *Plaid Cymru* (Partido Galés en gaélico), surgido en los años veinte del siglo pasado, comenzó a tener mayor presencia, al grado de que logró consolidar su posición como segunda fuerza política en el país desde los noventa y hasta la actualidad. De hecho, este partido concentra regularmente alrededor del 20 por ciento de la votación (National Assembly for Wales, 2018). El *Plaid Cymru* es un partido de corte socialdemócrata que pugna por la separación de Gales de Gran Bretaña y sus bases electorales más importantes se encuentran localizadas en el Noroeste y en el Este del país.<sup>3</sup>

Precisamente como una expresión de la llegada de nuevos tiempos en Gales, y después de dieciocho años de gobiernos conservadores en Gran Bretaña con Margaret Thatcher y John Major como primeros ministros, en 1997 se celebró un referéndum para devolverle su autonomía y crear un gobierno local galés que estuviera en posibilidades de retomar algunos poderes a través de la creación de una Asamblea Nacional. Esta acción, desarrollada durante la gestión del primer ministro laborista Tony Blair, generó una clara división en Gales, ya que si bien el resultado final fue de un 50.3 por ciento a favor, quedaban aún pendientes los verdaderos alcances de la devolución y su impacto en la identidad galesa a futuro (Jenkins, 2008: 298).

Al año siguiente (1998), el gobierno de mayoría laborista británico aprobó la Ley de Gobierno de Gales, solicitándole posteriormente su aprobación a Elizabeth II, quien otorgó su asentimiento real en julio del mismo año. Este documento mandató la creación de una Asamblea Nacional en Gales con sede

<sup>3</sup> Para mayor información acerca de esta agrupación partidista véase *Plaid Cymru/Party of Wales* (2018). Debe señalarse que el *Plaid*, como también es conocido, se ha erigido con el paso de los años como el principal adversario del Partido Laborista para las elecciones generales del Parlamento británico, y del Partido Conservador Galés en los comicios para conformar la Asamblea Nacional de Gales desde 1999.

en la bahía de Cardiff, compuesta por sesenta miembros y con un sistema de elección mixto, esto es, cuarenta se elegirían según el esquema de circunscripciones electorales con el modelo de *first-past-the-post*, de mayoría simple (el ganador se lleva todo), mientras que los veinte asientos restantes serían designados mediante el sistema *additional member system* (Jones, 2009: 362). Este último, conocido en la bibliografía especializada en castellano como sistema de representación proporcional, otorga escaños de acuerdo con el porcentaje de votos que reciben los partidos políticos contendientes, lo que convierte a dichos representantes en miembros plurinominales. El plazo para convocar a nuevas elecciones se estableció cada cuatro años.

En el primer proceso electoral, celebrado en mayo de 1999, obtuvo el triunfo al Partido Laborista de Gales, tras alcanzar veintiocho asientos; en segundo lugar se posicionó el *Plaid Cymru* con diecisiete curules; luego el Partido Conservador con nueve, seguido por el Partido Liberal-Demócrata con seis.<sup>4</sup> Estos números concedieron al líder del Partido Laborista de Gales, Alun Michael, el cargo de primer secretario, pero con carácter minoritario. Por esta razón los laboristas, con sus veintiocho diputados, decidieron conformar un gobierno de coalición con los liberal-demócratas, quienes con sus seis curules hicieron posible la instalación del primer autogobierno galés; no obstante, las malas relaciones del primer secretario con su bancada y sus aliados propiciaron su renuncia al cargo el año siguiente, por lo que sería electo como nuevo líder del laborismo galés Rhodri Morgan, quien de manera hábil mantuvo el gobierno coaligado y continuó su mandato hasta 2003, periodo para el que había sido electo su antecesor.

El gran éxito de Rhodri Morgan fue confrontar las visiones privatizadoras del gobierno británico en favor de mayores inversiones para el sector social. Morgan afirmaba que él quería asegurarse de que en Gales se aprovecharan al máximo las oportunidades económicas y sociales de toda una generación hasta extenderse a aquellos que estuvieron contra la pared durante los experimentos neoliberales de los años ochenta (Socialist Health Association, 2002).

Este tipo de discurso dirigido a la clase trabajadora, que fue afectada por la disminución de los beneficios sociales como producto de las políticas del Partido Conservador británico en los ochenta y noventa, acrecentó las bases del Partido Laborista de Gales, pues para las elecciones de 2003 los laboris-

<sup>4</sup> Todos los datos y cifras que presentamos a continuación, referentes a las elecciones de la Asamblea Nacional de Gales, provienen de National Assembly for Wales (2018).



tas alcanzaron treinta asientos tras obtener el 40 por ciento de los votos; en segundo lugar quedó el nacionalista *Plaid Cymru* con doce curules y el 21 por ciento. La treintena de escaños laboristas permitió a Morgan rechazar los intentos liberal-demócratas para conformar de nueva cuenta un gobierno coaligado, ya que lograr tan sólo un voto más para aprobar sus propuestas en favor de las clases trabajadora y rural galesas no era algo complicado. Así, el segundo gobierno laborista galés fue de minoría relativa, ya que las tres decenas de curules de su partido representaban exactamente el 50 por ciento de la Asamblea.

El segundo periodo del primer secretario Rhodri Morgan (2003-2007) se centró en crear nuevas condiciones que incrementaran el ejercicio y la autonomía del gobierno local galés. Muestra de ello fueron sus esfuerzos para dotar de mayores márgenes de maniobra a su gobierno. Esto fue posible gracias a una serie de negociaciones con el gobierno británico, el cual aprobó, y posteriormente envió a la Corona para su asentimiento real la Ley del Gobierno de Gales de 2006 (*Government of Wales Act*). Tal documento cedió mayores y nuevas facultades a la Asamblea, al delegarle poderes legislativos similares a los de sus contrapartes en Escocia e Irlanda del Norte. Dicha Ley mantuvo los sesenta miembros de la Asamblea galesa, quienes ahora serían electos para periodos de cuatro años bajo el viejo sistema *first-past-the-post* por circunscripción electoral, mientras que los veinte restantes lo serían mediante listas plurinominales basadas en cinco regiones del país.

Tal y como sucede en el sistema Westminster, después de cada elección la fracción mayoritaria elegiría a su líder como primer ministro, que sustituyó a la figura previa de primer secretario. Igual que en el régimen parlamentario británico, el gabinete se integraría por diputados electos de su misma agrupación o coalición. Uno de los elementos más importantes de esta Ley es que en la misma se decretó que la Asamblea Nacional de Gales no podría ser abolida, a menos que existiera un referéndum de por medio ([legislation.gov.uk](http://legislation.gov.uk), 2006).

De este modo, Gales consiguió la instauración de un gobierno autónomo unificado por primera vez en su historia. Lo anterior, si bien fue un éxito para el gobierno laborista galés, también propició que diversos sectores pidieran empujar aún más las negociaciones con las autoridades británicas para alcanzar una independencia absoluta de Londres. Esto último le confirió renovada fuerza al nacionalista *Plaid Cymru*, que lograría el segundo lugar en las elecciones de mayo de 2007, tras obtener quince curules en la Asamblea y cerca del 22.5 por ciento de los votos. El primer lugar lo consiguió de nueva

cuenta el Partido Laborista, con Rhodri Morgan al frente, pero obteniendo sólo veintiséis asientos tras ganar poco más del 32 por ciento de los sufragios. El tercer sitio fue para el Partido Conservador, con doce curules.

Lo anterior obligó a Morgan a conformar un gobierno de coalición con el propio *Plaid Cymru* para el periodo 2007-2011, comprometiéndose por ello a avanzar hacia espacios de mayor autonomía galesa respecto de Gran Bretaña. Durante su tercera gestión Rhodri Morgan preparó lo que sería un referéndum para incrementar las competencias de la Asamblea Nacional de Gales. También mantuvo su línea de gobierno en favor de garantizar acciones de apoyo social a la clase trabajadora. En 2009 anunció su retiro de la política tras cumplir setenta años, lo que obligó al Partido Laborista a elegir a un nuevo líder en la persona de Carwyn Jones, quien asumiría el cargo de primer ministro de Gales en diciembre de 2009.

La gestión de Carwyn Jones se caracterizó por las dificultades con el gobierno británico por la forma en que encaró la crisis económica mundial del 2008-2009, iniciada en Estados Unidos, ya que responsabilizaba a Londres de los males que aquejaban a la población galesa. Como respuesta, el gobierno británico negaba tal responsabilidad y la atribuía a las autoridades de Gales. Todo este escenario preparó el terreno para un referéndum de devolución en marzo de 2011, en el que la mayoría de los galeses expresó su aprobación para que la Asamblea Nacional extendiera sus atribuciones en diversos asuntos, como sanidad y servicios sociales, economía, administración, educación, justicia, agricultura y pesca, medio ambiente, cultura, turismo y deporte, entre otros. Los resultados fueron de 63.5 por ciento a favor por 36.5 en contra (*BBC News*, 2018a).

Ahora bien, pese a lo limitado de la participación ciudadana en dicho referéndum, que no rebasó el 35 por ciento, tanto el primer ministro Jones como la mayoría de la clase política galesa recibieron con júbilo los resultados. Al respecto, Carwyn Jones señaló que la victoria del sí significaba que finalmente una nación vieja como Gales había alcanzado la mayoría de edad. Mientras tanto, el líder del nacionalista *Plaid Cymru*, Ieuan Wyn Jones, fue más allá al afirmar que el resultado marcaba “el comienzo de una nueva era de devolución galesa: la década para restituir a Gales [también señaló que] para exigir respeto, primero debía mostrarse respeto por uno mismo [...]. Hoy hemos hecho justamente eso, y el resto del mundo puede sentarse y darse cuenta de que nuestra pequeña nación, aquí en el extremo occidental

del continente europeo, ha demostrado orgullo en quienes somos y en lo que defendemos” (*BBC News*, 2018b).

Dos meses más tarde, en mayo de 2011, se celebró el siguiente proceso electoral de Gales, exactamente el mismo día en que se realizaron las elecciones parlamentarias escocesas y norirlandesas. Así, gracias a la capacidad de liderazgo y conciliación del primer ministro Carwin Jones, los laboristas alcanzarían el 50 por ciento de la Asamblea, tras ganar treinta asientos. El segundo lugar lo ocuparon los conservadores, con catorce curules, desplazando con ello al nacionalista *Plaid Cymru*, que solamente obtuvo once, mientras que los liberal-demócratas ganaron cinco. Estos números le dieron la oportunidad a Jones para lograr fácilmente, pues nada más requería de un voto adicional, la mayoría en sus propuestas de ley, para lo cual regularmente acudió a los liberal-demócratas o a los nacionalistas del *Plaid Cymru*.

En esta segunda gestión de Jones continuaron los conflictos con el gobierno británico, al cual responsabilizaba por el limitado crecimiento de Gales. Por su parte, las autoridades de la administración conservadora del primer ministro David Cameron insistían, al defender su política de recortes al gasto público, en que su homólogo de Gales quería que Londres resolviera todos sus problemas, y que el verdadero responsable de la situación económica y el pobre crecimiento en ese país era precisamente Carwin Jones y su actitud de hacer poco y culpar mucho al gobierno conservador británico (*Wales on Line*, 2013). Entre sus principales acciones, Jones impulsó nuevos esquemas de propiedad pública, para lo cual presionó a la iniciativa privada para que invirtiera más en infraestructura, como en el caso de aeropuerto de Cardiff, al mismo tiempo en que buscó extender la red sindical de trabajadores en distintos ramos.

Para las elecciones de 2016 —las primeras en celebrarse cada cinco años—, de nueva cuenta los laboristas con Carwin Jones al frente alcanzarían el triunfo con veintinueve asientos, seguidos por el *Plaid Cymru* con doce curules, y los once de los conservadores. Por su parte, los liberal-demócratas lograrían tan sólo un escaño. Lo sobresaliente de estas elecciones fue el surgimiento de un nuevo partido, el *UK Independence Party* (UKIP), el cual es considerado de extrema derecha en Europa, que pugna por un acercamiento más estrecho con Gran Bretaña, apoya la salida de la Unión Europea y, en general, se manifiesta contrario a todos los movimientos nacionalistas escoceses, norirlandeses y, desde luego, galeses (*UKIP for the Nation*, 2018).

En su primera intervención electoral esta agrupación logró alcanzar siete asientos y alrededor del 13 por ciento de los votos.

Sin duda, los resultados de 2016 en Gales pusieron de manifiesto la llegada de nuevos actores y problemáticas al país, ya que el creciente nacionalismo de derecha que pugna por establecer reglamentaciones más duras para contener la inmigración, así como para limitar los derechos de las minorías, comenzó a entablar duros debates con el laborismo y con el nacionalismo independentista galeses, situación que agrega un elemento más al ya de por sí complejo escenario de la Gran Bretaña, en la parte final de la segunda década del siglo XXI, justo cuando los efectos del Brexit comenzarán a ser más palpables entre la población británica.

## **EL RÉGIMEN PARLAMENTARIO CANADIENSE Y SUS CARACTERÍSTICAS**

A lo largo de más de siglo y medio de existencia, desde la conformación de su primer Parlamento en 1867, Canadá ha cimentado un esquema operativo de gobierno bastante preciso y funcional que se apoya en los siglos de operación y experiencia del parlamentarismo británico por medio del diseño Westminster. Así, justamente desde sus primeras manifestaciones, la gobernabilidad<sup>1</sup> de este vasto territorio en el extremo norte del continente americano ha fluído de generación en generación gracias a los sólidos marcos jurídicos y políticos que han sustentado su ejecución desde el noroeste de la vieja Europa, de manera particular en las islas británicas.

De este modo, la instrumentación de normas de carácter judicial y de gobernabilidad puestas en marcha en territorio canadiense desde las primeras colonias inglesas en el siglo xvii en el extremo oriental del país —las cuales, por cierto, estuvieron en pugnas permanentes con las colonias francesas establecidas décadas antes en esos mismos parajes— sirvió como referencia para toda la región una vez concluida la Guerra de los Siete Años (1756-1763), en la que Gran Bretaña derrotaría a Francia, obligándola a ceder sus territorios en el extremo norte de América después de la firma del Tratado de París de 1763.

Por ello, a partir de la segunda mitad del siglo xviii, las leyes, usos y costumbres de la Gran Bretaña se impusieron en toda la zona, dando paso al asentamiento de las instituciones británicas sobre la política de todas las colonias existentes en el actual Canadá. Es por eso que, precisamente, después de la derrota francesa ante el linaje de la Casa Estuardo, con George iii como

<sup>1</sup> Entiéndase por gobernabilidad a la creación y consolidación de mecanismos capaces de permitir la operación del gobierno. Por ello, una administración gubernamental puede ser considerada capaz si posee las facultades para gobernar su sociedad, además de las herramientas suficientes para la resolución de los distintos problemas que enfrente. Para mayor información acerca de los debates en torno a la gobernabilidad, la nueva gestión pública y la gobernanza, véase Serna de la Garza (2010).

monarca, el diseño institucional del Reino Unido fue expandiendo su desarrollo e influencia en el entretejido social norteamericano.

De este modo, la práctica social protestante anglosajona de asistir a reuniones en las comunidades para desde ahí discutir y resolver las problemáticas cotidianas que atañían a la población encontraría en las comarcas canadienses precoces hábitos democráticos de manera casi involuntaria, en forma similar a lo sucedido en las trece colonias de lo que hoy es Estados Unidos.

Estos hábitos democráticos canadienses cristalizaron en la creación de su primera Asamblea en la provincia de Nueva Escocia durante la segunda mitad del siglo XVIII, de manera concreta en 1758. Si bien la práctica parlamentaria organizada comenzó a desarrollarse allí una década antes, con la inauguración del primer gobierno colonial de Nueva Escocia (Tidridge, 2011: 30), lo cierto es que fue hasta 1758 cuando la Asamblea gozó del reconocimiento pleno por parte de la Corona británica.

A partir de ese momento, la Asamblea de Nueva Escocia contó con un vicegobernador, un Consejo Ejecutivo y una Cámara baja elegida directamente por algunos ciudadanos. Cabe agregar que si bien se le negó el voto a la gran mayoría de la población, de cualquier forma fue la primera institución parlamentaria puesta en marcha en el país, y de hecho en todo el continente americano (Nova Scotia Legislature, 2018). No sería sino hasta el siglo XIX cuando se estableció en Nueva Escocia un Consejo con funciones similares a la Cámara de los Lores británica, pero éste fue abolido en el siglo XX.

Por otra parte, es necesario explicar que el desarrollo del parlamentarismo canadiense no podría entenderse sin la influencia del movimiento independentista surgido en las trece colonias en 1776, ya que ese acontecimiento generó temor en la Corona británica ante la posible expansión del sentimiento emancipador a toda Norteamérica. Aunado a lo anterior, la llegada de decenas de miles de estadounidenses a territorios de Nueva Escocia, Nueva Brunswick y Quebec, que se encontraban inconformes con la independencia de su país respecto de Gran Bretaña, creó nuevas presiones a las autoridades locales, que en muchos sentidos fueron rebasadas por la creciente demanda de servicios y apoyos del gobierno.

Estas presiones fueron más evidentes cuando de 1775 a 1780 llegaron treinta y cinco mil estadounidenses a Nueva Escocia, otros trece mil a Nueva Brunswick y nueve mil más a Quebec (Brown, 2002). Dicha colonización masiva de territorios en Canadá obligó a las autoridades británicas a recon-

figurar su división y su organización políticas. Debido a ello, se determinó desde Londres crear una Asamblea en Nueva Brunswick en 1784 y otra más en la provincia de Canadá en 1791, además de que se realizó una nueva delimitación territorial en el alto y el bajo Canadá, Ontario y Quebec, respectivamente (Lower, 1973: 52-58).

Esto último sucedió en el marco de la Ley de 1791, que otorgó soberanía cultural a franceses y británicos divididos en el alto y el bajo Canadá. También esta Ley determinó que los territorios canadienses gozarían de un sistema político representativo al estilo Westminster, integrado por una Cámara de los Comunes surgida del voto de la población con propiedades, y una Cámara alta nombrada por cada gobernador, el cual a su vez debía gozar de la aprobación de la propia Asamblea. Estas asambleas canadienses estarían facultadas para crear y votar sus propias leyes, mismas que se someterían a ratificación por parte de la Cámara de los Comunes en Londres.

En general, se considera que la Ley de 1791, conocida en la historia británica como *The Constitutional Act of 1791*, refinó el sistema de gobierno colonial que ya había operado en las colonias británicas del Atlántico desde tiempo atrás. Esto es, si bien ya existían asambleas electas, éstas convivían con órganos de gobierno creados por la Corona para ejercer su poder de manera vertical. También era cierto que los canadienses podían regular, vivir sus vidas y hasta destinar sus impuestos a su propio beneficio local, pero aún podrían ser vetados por parte de los órganos de gobierno supranacionales creados por el monarca en turno, y más todavía: toda ley aprobada por las asambleas en las provincias canadienses se encontraba sujeta a ratificación o rechazo por el Parlamento británico en cualquiera de sus dos cámaras (Lower, 1973: 57-58).

Por ello, si bien la guerra de 1812 con Estados Unidos significó un reto para las autoridades canadienses y el gobierno británico, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando la Corona percibió la amenaza que representaba continuar ejerciendo un control absoluto sobre las asambleas canadienses. El motivo fue la guerra civil estadounidense (1861 a 1865), que puso en evidencia las fallas en el reparto de poder en Estados Unidos, después de que los estados hicieran evidente su fuerza e influencia frente al gobierno central de Washington.

Esta situación ya la habían estudiado en diversos momentos las autoridades británicas en sus colonias en Canadá, siendo su manifestación más clara

el conocido “Reporte Durham”.<sup>2</sup> De este último emanaron una serie de recomendaciones al gobierno de Londres para otorgar mayores márgenes de maniobra a las autoridades canadienses y así dotarlas de capacidad de acción y respuesta rápidas ante las crecientes demandas sociales que surgían con el paso de los años. Es por eso que la guerra civil estadounidense puede considerarse el acontecimiento que terminó por obligar a la Corona británica a otorgar la autogestión de gobierno a sus territorios al norte del continente americano.

Así, después de una serie de reuniones celebradas entre 1864 y 1866, de las cuales la más conocida es la Conferencia de Quebec de 1865, un grupo de hombres de elevada posición económica presentaron ante la reina Victoria un documento en el que planteaban alcanzar la unión federal entre los territorios británicos de América del Norte (Nueva Brunswick, Nueva Escocia y las provincias del alto y el bajo Canadá, Ontario y Quebec).

Por ello, después de considerar lo planteado en el Reporte Durham, el Parlamento británico aprobó la solicitud y la turnó para su valoración final a la Corona, que en la persona de la reina Victoria otorgó su “Asentimiento real de autonomía y conformación de un nuevo dominio unificado por las regiones de Nueva Escocia, Nueva Brunswick y las provincias del alto y bajo Canadá bajo el nombre de Canadá”. Esta promulgación, conocida como *Constitutional Act of 1867* o *The British North America Act, 1867*, estableció un modelo de gobierno de tipo federal que dotaba, en un principio, de un gran poder al gobierno central en detrimento de los provinciales. Lo anterior, sobre todo para ofrecer posibilidades de reacción inmediata al gobierno federal frente a amenazas o situaciones extremas surgidas desde Estados Unidos.

Dicho mandato se hizo público el 1° de julio de 1867, lo que significó el nacimiento oficial de Canadá como un territorio unificado y autónomo con capacidad de autogestión limitada. Esto último, ya que de cualquier manera las leyes emanadas del nuevo Parlamento canadiense se encontraban sujetas a la aprobación de sus homólogos en Londres.

<sup>2</sup> Este documento, elaborado en 1839 por John George Lambton (Lord Durham), gobernador general de América del Norte, recomendó, entre otras cosas, otorgar mayor independencia a las provincias canadienses respecto de su metrópoli con el fin de alcanzar la autogestión de sus recursos. Del mismo modo, sugirió conferirles el derecho de elegir a sus gobernantes y autoridades mediante elecciones parlamentarias, pero no recomendó la facultad de veto que mantenían las autoridades supranacionales nombradas desde Londres. Asimismo, propuso llevar a la práctica los usos y costumbres políticas británicas, lo cual significaba permitir y estimular al mismo tiempo la formación de partidos políticos y aplicar métodos de elecciones desarrollados en Gran Bretaña desde siglos atrás (*Canada History*, 2018).



De esta forma vio la luz el modelo parlamentario canadiense a través de sus primeras elecciones federales llevadas a cabo en julio de 1867 según el modelo británico *first past the post* de mayoría relativa, vigente en Gran Bretaña. Al igual que en el modelo británico, el recién creado sistema político canadiense determinó la conformación de una Cámara alta o Senado que, a diferencia de sus contrapartes de la Cámara de los Comunes, no sería electa sino nombrada por el primer ministro.

De este modo, en un discurso que expresa la muy temprana tendencia conservadora del sistema monárquico constitucional canadiense, su primer ministro inaugural, un aristócrata nacido en Escocia, Sir John Alexander MacDonald, declaró abiertamente que el Senado no debía ser electo, ya que estaba destinado a convertirse en un lugar para la sobria reflexión capaz de frenar los “excesos democráticos” en la Cámara de los Comunes (*Parli.ca. The Dictionary of Canadian Politics*, 2018).

Como ha podido observarse, la absoluta alineación al sistema político británico expresada por los padres fundadores canadienses no es tan diferente de la que manifestaron en aquellos años sus contrapartes escocesas, galesas y norirlandesas en la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña. De hecho, para el caso de Canadá, el sistema británico garantizaba de una u otra forma mantener y extender las canonjías de clase de estos grupos encumbrados en el poder. Así, poner en marcha el modelo Westminster en su versión tradicional canadiense significó mantener e institucionalizar el poder al concentrarlo en su Cámara baja, tal y como había sucedido durante siglos en las islas británicas, ponderándose ante todo su lealtad al monarca en turno.

Con el paso de los años, la incorporación de nuevas provincias y territorios a Canadá<sup>3</sup> fue ensanchando la influencia del Parlamento, al otorgarles representatividad a los ciudadanos de ese vasto país transcontinental. De esa forma, mediante la adopción de mecanismos del sistema Westminster, el parlamentarismo federal canadiense buscó garantizar y defender la legalidad y la estabilidad política a partir de una serie de viejos procedimientos de origen británico, entre los que destaca el “discurso del trono”, con el cual se inaugura cada ejercicio parlamentario para aprobar el presupuesto del año en curso. Cabe agregar que este acto lo encabeza el gobernador o goberna-

<sup>3</sup> Manitoba en 1870, Columbia Británica en 1871, la Isla del Príncipe Eduardo en 1873, Saskatchewan y Alberta en 1905, Terranova y Labrador en 1949, más los territorios del Noroeste en 1870, Yukón en 1898 y Nunavut en 1999.

dora general como representante directo de la Corona británica. También se identifica la existencia de un *speaker* (o portavoz), el cual procede de la Cámara de los Comunes y es el enlace oficial entre el Senado canadiense y la Corona británica. El *speaker* es el responsable de mantener el orden y dirigir los debates entre los diputados del partido gobernante y los de oposición, siempre buscando garantizar el mayor respeto posible.

Asimismo, pueden identificarse en el modelo parlamentario canadiense las reminiscencias británicas a través de la división del territorio en circunscripciones; la organización y conformación de partidos políticos, el sistema electoral *first past the post* para elegir a los miembros de la Cámara de los Comunes, la elección del líder del partido con mayor cantidad de curules en la Cámara baja como primer ministro, un Senado que es designado por ese primer ministro y ratificado por el gobernador general, y el nombramiento del gobernador general también a través del primer ministro, quien es el encargado de proponerlo a la Corona británica.

Otras características de origen británico son la conformación de un gabinete de gobierno emanado de entre los diputados electos en la Cámara de los Comunes, regularmente integrantes del mismo partido gobernante; el juego político de los partidos de oposición alrededor de la agrupación partidista que obtenga la primera minoría; el escrutinio detallado de uso de los recursos públicos por parte del gobierno y su respuesta en los debates parlamentarios a la oposición, así como la crítica permanente de la oposición respecto de las nuevas leyes aprobadas durante los ejercicios parlamentarios.

Los anteriores son sólo algunos elementos visibles del entramado y complejo sistema parlamentario canadiense, cuyas expresiones más operativas comprenden su sistema de partidos políticos, su sistema bicameral y las amplias atribuciones conferidas al primer ministro en turno, mismas que se extienden cuando hay un gobierno de mayoría. En tal sentido, una parte considerable de este capítulo se centrará en analizar las estrategias parlamentarias aplicadas por Stephen Harper cuando fungió como primer ministro, de febrero de 2006 a noviembre de 2015.

Es preciso señalar que durante dicho lapso, Harper logró pasar de ser el unificador de los partidos conservadores canadienses a ser uno de los primeros ministros con mayor poder en la historia moderna de su país, esto gracias a su conocimiento y dominio del sistema parlamentario, mismo que hizo posible su victoria en tres procesos electorales consecutivos. Durante sus años

como cabeza del Poder Ejecutivo,<sup>4</sup> Harper no sólo logró desarticular los esfuerzos de la oposición para deponerlo, sino que incluso sus estrategias parlamentarias orillaron a sus adversarios a votar en favor de sus propuestas conservadoras, aunque éstas fueran contradictorias con sus propios estatutos partidistas y con su papel de partidos de oposición. “El gobierno de Harper pasó por encima de la oposición; muchos expertos lo señalaron como el campeón de los hechos basados en políticas en lugar de las políticas basadas en hechos” (Harris, 2015: 104), en algo que podría identificarse como la antecámara de la posverdad, puesta de moda en la era Trump pocos años después.

Lo más sorprendente de todo esto es que buena parte de la gestión de Stephen Harper como primer ministro la enfrentó con un gobierno de minoría (2006 a 2011), enmascarando, mediante manipulaciones legislativas habilidosas, una agenda política compleja (Johnson, 2011: 15) que abarcó desde debilitar y deponer a líderes de otras agrupaciones partidistas opositoras, hasta desarticular desde el poder la posibilidad de conformar un gobierno de coalición, el cual, como se ha visto en este libro, es una figura perfectamente legal puesta en marcha en toda Gran Bretaña de acuerdo con el sistema Westminster desde hace siglos; no obstante en Canadá esta figura de gobierno de coalición no ha tenido cabida, principalmente por el carácter profundamente conservador de su versión Westminster, que es sin lugar a dudas la más estrecha y menos progresista de todos los modelos parlamentarios inspirados en el paradigma británico, tal y como lo expondremos a continuación.

## **Orígenes parlamentarios y partidos políticos en Canadá**

Con el nacimiento de Canadá como ente político autónomo en 1867 surgió también su sistema parlamentario de carácter federal, que tenía como meta principal alcanzar y mantener la gobernabilidad en sus provincias; sin embargo, es necesario resaltar el carácter marcadamente conservador y oligárquico que definió este alumbramiento, ya que, como se mencionó, la Ley

<sup>4</sup> Es preciso señalar que si bien la monarquía constitucional canadiense reconoce en el monarca británico en turno a su cabeza de Estado, en los hechos, más allá del protocolo, el primer ministro como titular del Poder Ejecutivo es la figura con mayor poder y alcance en el país. Para un análisis más detallado del desarrollo político canadiense desde sus orígenes y hasta la primera década del siglo XXI puede consultarse a Oliver Santín Peña (2014).

Constitucional de 1867 significó la institucionalización y reconocimiento de las elites canadienses como soberanas de sus propios recursos y con capacidad de autogobierno.

Estas mismas elites se congregaron desde el comienzo en dos agrupaciones partidistas: el Partido Liberal-Conservador y el Partido Liberal. Ahora bien, es necesario señalar que los liberal-conservadores eran realmente un grupo de individuos alineados alrededor de la figura del primer ministro Sir John Alexander MacDonald, quien logró aglutinar a políticos liberales en favor de su causa, que era la causa la federalista, debido a la fuerza que podrían alcanzar los anticonfederados si lograban agruparse en un partido político sólido de alcance nacional, ya que éste podría ser capaz de amenazar la unidad recién creada. Pese a ello, un grupo de liberales decidieron mantenerse en su partido y contender en contra del liderazgo de MacDonald en las primeras elecciones de 1867, en que los liberal-conservadores se alzarían con la victoria por un estrecho margen sobre sus contrincantes del Partido Liberal.<sup>5</sup> Cabe agregar que pese a sus orígenes liberal-conservadores, este primer organismo político gobernante fue considerado en Canadá un partido conservador y así se consolidó con el paso de los años.

Los años siguientes fueron de un dominio marcado del Partido Conservador y su líder MacDonald, quien ocuparía el asiento de primer ministro durante seis gestiones diferentes, todas ellas en el periodo 1867-1891, con un paréntesis de 1873 a 1878, justo cuando los liberales ocuparon la primera magistratura. En general, los periodos de gobierno durante el siglo XIX en Canadá, ya fueran de extracción conservadora o liberal, se concentraron en los mismos objetivos, entre los cuales destacaba consolidar y extender la unidad política y geográfica del país a través de la construcción masiva de líneas de ferrocarril que interconectarán los centros económicos más importantes del vasto territorio.

De este modo, el proyecto unificador de las oligarquías canadienses, centradas en torno a los dos partidos políticos fundadores, fue tomando forma alrededor de objetivos políticos bien definidos. Este dominio alterno de liberales y conservadores en la arena política canadiense se dio gracias a los recursos económicos con los que contaban sus dirigentes, ya que lograron expandir su presencia a nivel federal, y no sólo eso, sino que también consi-

<sup>5</sup> Los datos y cifras que se presentan en este apartado, relacionados con las elecciones parlamentarias canadienses, pueden revisarse en: Parliament of Canada (2018a).

guieron derrotar a las agrupaciones políticas provinciales que de vez en cuando surgían de manera aislada, en un intento por emanciparse del dominio de las elites.

Para alcanzar este objetivo, el sistema electoral *first past the post* (FPP) resultó ser un instrumento invaluable para las elites partidistas liberal y conservadora canadienses, ya que gracias a este esquema de elecciones impulsado por la burguesía inglesa a principios del siglo XVIII con el objetivo de fortalecer la presencia del Partido *Whig* en la Cámara de los Comunes fue posible anular a las minorías, sin importar que éstas llegaran a representar más del 50 por ciento de los votos. Debe recordarse que lo anterior sucede precisamente porque este sistema se caracteriza por considerar únicamente los sufragios del candidato ganador en las circunscripciones electorales, sin importar su porcentaje. Es decir, si el candidato “A” obtiene el 40 por ciento en el distrito electoral en disputa, el 60 por ciento restante, repartido entre los candidatos “B”, “C” y “D”, deja de ser considerado y desaparece en favor del candidato con la primera mayoría, esto es, el aspirante “A”, sin importar que en realidad la mayoría, ese 60 por ciento, hubiese votado en contra.

Precisamente esta paradoja democrática que estimula la inequidad y crea falsas mayorías ha sido el motivo para que en Gran Bretaña diversas asambleas locales, como la escocesa, la norirlandesa o la galesa, hayan optado por un sistema mixto de mayoría relativa y representación proporcional (Escocia y Gales), en donde además de sufragar por un candidato en particular también se vota por el partido político, lo que brinda la posibilidad de incluir competidores que no hubiesen obtenido un asiento mediante el sistema *first past the post*, pero que al ser registrados en una lista plurinominal logran alcanzarlo, con base en el porcentaje de votos en favor de su partido. Algo similar ocurre en Irlanda del Norte, en donde mediante el complejo sistema *single transferable vote* (o voto único transferible) —que ya se explicó en este libro— el elector elige numéricamente a distintos candidatos de acuerdo con su nivel de preferencia, de modo que al final el aspirante con la mayor suma a su favor gana su curul en la Asamblea.

Desde luego que tenemos que aclarar que el viejo sistema *first past the post* continúa utilizándose en las elecciones generales de Gran Bretaña para integrar la Cámara de los Comunes, ello pese a que la propia Asamblea de Londres, desde su creación en el año 2000, lleva a la práctica un sistema mixto de mayoría relativa y representación proporcional al igual que en Escocia y

Gales. Debe añadirse que lo mismo ocurre en Australia y Nueva Zelanda, que con un sistema tipo Westminster decidieron hace décadas dejar de lado el método de falsas mayorías *first past the post* y optaron por mecanismos más democráticos e incluyentes para elegir su Cámara de los Comunes, como los ya descritos para otras asambleas de la Gran Bretaña. Lo anterior sin considerar que en Australia el Senado también se elige a través del método *single transferable vote*, situación que lo dota de la suficiente legitimidad democrática, si se lo compara con su símil canadiense (Ward, 2014: 192-194). Por su parte, en Nueva Zelanda adoptaron un sistema unicameral, debido a que ahí se eliminó el Senado a mediados del siglo XX por considerarlo un cuerpo innecesario y sin facultades para revisar los trabajos desarrollados previamente por la Cámara baja (Wilson, 2010: 145-146).

Sin embargo en Canadá, a diferencia de los otros modelos Westminster —con excepción, claro está, del Parlamento de Gran Bretaña—, la clase gobernante ha decidido mantener el viejo modelo FPP como un mecanismo de control que frena y contiene a las ideologías y a los partidos políticos emergentes. Lo anterior sucede en primera instancia en el ámbito provincial, y si acaso algún partido político local logra extender su presencia en el plano federal a través de algunas otras provincias, entonces las dificultades se multiplicarán debido a la ausencia de bases sociales, pero sobre todo de dinero, elementos con los que sí cuentan por su parte los partidos políticos fundadores canadienses (liberales y conservadores). Por ello, no es casualidad que en las cuarenta y dos elecciones federales celebradas en Canadá de 1867 a 2015 sólo hayan alcanzado la victoria el Partido Liberal (en veinticuatro ocasiones) y el Partido Conservador (en dieciocho).

Aunado a lo anterior, que el sistema político canadiense niegue la posibilidad de conformar gobiernos de coalición y prefiera mantener gobiernos minoritarios, ya sea de extracción liberal o conservadora, garantiza el duopolio de poder de los partidos fundadores. Esta circunstancia llama la atención si se toma en cuenta, por ejemplo, que desde el siglo XX la práctica de gobiernos coaligados no ha sido excepcional en Gran Bretaña ni mucho menos en Escocia, Gales o Irlanda del Norte, donde, como se ha visto, de hecho no podría concebirse la práctica de gobierno sin coaliciones de por medio. Éstos son sólo algunos elementos que pueden llevarnos a considerar que el sistema Westminster en Canadá no ha evolucionado lo suficiente, como sí lo ha hecho en el resto de los países que comparten el mismo esquema de prácticas parlamentarias.

Quizá la razón principal sea que la clase política gobernante de Canadá es profundamente conservadora más allá de distinguidos partidistas liberales o conservadores, pues más bien las fracciones han preferido aguardar su turno desde la oposición como primera minoría parlamentaria, la que por cierto han mantenido ambas agrupaciones en cuarenta de las cuarenta y dos legislaturas desde 1867, con las honrosas excepciones de 1993, justo cuando el separatista Bloque Quebequense se erigió como primera minoría en el xxxv Parlamento, y de 2011, cuando el Partido Neodemócrata hizo lo propio en el xli Parlamento; empero, es un hecho que el duopolio sigue su marcha pese al descontento cada vez mayor de algunos sectores informados que incluso cuestionan la existencia del Senado, el cual, como ya se dijo, no es electo sino designado por el primer ministro y aprobado por el gobernador o gobernadora general en turno.

Ahora bien, no obstante la dificultad que entraña competir en la arena política con los dos partidos hegemónicos canadienses, debe señalarse que las agrupaciones sociales han intentado, la mayoría de las ocasiones sin éxito, contender en elecciones provinciales o federales en contra de las maquinarias liberal o conservadora, sobre todo cuando sectores específicos de la sociedad consideran que sus intereses han dejado de estar representados por la clase política.

Estos esfuerzos han estado presentes en la política de Canadá desde sus inicios, pues como se señaló brevemente con anterioridad, existieron diferentes agrupaciones partidistas provinciales y federales. Quizá el primer grupo antagonista identificado en esa arena política haya sido el de los anti-confederados, quienes cuestionaban el carácter federal asumido por las elites de orígenes británico y francés asentadas principalmente en Ontario y Quebec, y buscaban por ello un aislamiento de la cultura, la religión y los hábitos de los francohablantes de la vida pública canadiense. Es por eso que a este grupo político podría considerársele la expresión reaccionaria más temprana surgida en el país, como un movimiento ultraconservador que por lo mismo encontró poco apoyo y difusión entre los electores de su tiempo. Misma suerte corrió a finales del siglo xix la Asociación Protectora Protestante (APP) (*Protestant Protective Association*), conformada por emigrantes norirlandeses llegados de Estados Unidos y miembros de la *Orange Order*, cuya principal meta era anular los derechos de los francohablantes, alertando al electorado acerca de la amenaza que este grupo católico representaba para los valores protestantes (Watt, 1967: 45-46).

Otro segmento político de relativa importancia a finales del siglo XIX fue el de los Patronos de la Industria (*Patrons of Industry*), quienes fundamentalmente buscaban reivindicar la vida rural y agrícola de aquellos años, en un intento por contener el empuje de los valores industriales urbanos de la época. Si bien gozó de triunfos electorales en algunas circunscripciones, al igual que la APP, sus agremiados terminaron engrosando las filas liberales o conservadoras, según el caso. En realidad el sistema electoral canadiense en que el ganador se lleva todo (FPP) sistemáticamente produce la sobrerrepresentación de los más fuertes y, al mismo tiempo, la subrepresentación de los más débiles (Malcolmson *et al.*, 2016: 185).

Con la llegada del siglo XX, la fortaleza bipartidista del sistema político canadiense se hizo más evidente, pues sólo algunos candidatos independientes en circunscripciones determinadas lograron unos cuantos asientos en la Cámara de los Comunes. Ya para la década de los veinte, el crecimiento económico y la poca variabilidad política entre liberales y conservadores en acciones de gobierno tornó cada vez más complicada la expresión de nuevas formas políticas en el país. Pese a ello, el Partido Progresista de Canadá (*Progressive Party of Canada*) y el Partido Laborista de Canadá, gracias a sus alianzas con partidos políticos provinciales de extracción comunista, lograron obtener decenas de curules en la Cámara baja durante esa década, aunque para los inicios de los años treinta ya era notorio el surgimiento de una nueva agrupación política capaz de aglutinar a las fuerzas provinciales de izquierda en torno a un organismo partidista central.

Este grupo conocido como la Cooperativa Federal Mancomunada (*Co-operative Commonwealth Federation*) (CCF), concentró y elaboró una serie de lineamientos políticos comunes a las formaciones partidistas de izquierda en todo el país a nivel provincial, con la meta de ofrecer una alternativa sólida a los electores descontentos con la crisis de 1929.<sup>6</sup> De esta forma, para alcanzar cohesión ideológica entre sus agremiados, la CCF convocó a una convención nacional en la provincia de Saskatchewan y ahí dio a conocer una declaratoria a la que tenían que ceñirse todas<sup>7</sup> y todos sus agremiados en el país y que

<sup>6</sup> Para mayor información acerca del desarrollo y las estrategias de los partidos de izquierda en Canadá se puede consultar Santín (2017).

<sup>7</sup> Es importante mencionar que, a diferencia de los liberales y los conservadores, en la fundación de este gremio político las mujeres jugaron un papel muy activo, ya que a través de diversos grupos, como el movimiento de mujeres sufragistas, se integraron plataformas de equidad de género, así como de derecho al voto y a ser votadas. Este movimiento se sumó al de las mujeres trabaja-



fue conocida como el *Manifiesto de Regina*, donde se denunciaron las condiciones en las cuales se encontraba la clase trabajadora canadiense con motivo de la crisis de 1929. También reclamaba por la desigual distribución de la riqueza y responsabilizaba del estado de las cosas a los gobiernos liberales y conservadores por considerarlos meros instrumentos del capitalismo. Proponeía terminar con el caos capitalista a través de una economía planificada, socializada y responsable en materia de explotación de los recursos naturales, que antepondría siempre los intereses de la gente a los de la minoría financiera y propietaria de los medios de producción (Whitehorn, 1992: 39).

La respuesta organizada desde los más altos círculos de poder, con el fin de contrarrestar esta propaganda que cuestionaba el papel de las elites en el país, fue involucrar y comparar al socialismo canadiense con el nacional-socialismo alemán y el socialismo soviético, mediante una estrategia bien pensada para generar miedo en los electores, pues el impacto de dichos movimientos europeos comenzaba a generar inquietud en las sociedades y en las democracias occidentales ya para mediados de los años treinta. Aunado a lo anterior, la gestión de gobierno del liberal William Lyon Mackenzie King, quien se mantuviera en el cargo de manera ininterrumpida de 1935 a 1948, dirigió buena parte de su atención a paliar las tensiones sociales surgidas durante los años de la crisis mediante un programa que brindaba mayor atención médica, educativa y de vivienda. De esta forma, Mackenzie King le fue disputando muchos postulados a la izquierda canadiense y en su lugar puso el sello liberal a los programas de mayor alcance social.

Esta hábil acción política del gobierno liberal consistió en adoptar varias viejas propuestas de la izquierda de su país, entre ellas las de impulsar la producción agrícola, reducir los impuestos, redireccionar el gasto público, impulsar diferentes programas de apoyo social a los más necesitados, como los de seguro de desempleo y apoyo a la niñez, entre otras medidas, todas las cuales formaron parte de un ambicioso proyecto enmarcado en los programas de la posguerra alrededor del modelo keynesiano. Todo lo anterior desarticuló los esfuerzos de los partidos provinciales de derecha que impulsaban una agenda ultraconservadora de mayor libertad económica y subsidios al capital privado. Cabe agregar que tales organizaciones de extrema derecha se asentaron principalmente en las provincias con mayores recursos energéticos, sobresaliendo sin duda Alberta.

---

doras, que desde principios de la segunda década del siglo xx formó parte activa de las organizaciones obreras canadienses.

De esta forma, tanto los movimientos organizados de la extrema derecha, como las acciones de gobierno de las administraciones liberales y conservadoras en los años cuarenta y cincuenta, obligaron a la izquierda a una nueva redefinición ideológica, ya que ciertamente muchas de sus banderas habían sido adoptadas por el modelo keynesiano de la posguerra, sin importar que fueran gobiernos liberales o conservadores. Por ello, en un intento por modernizarse, la CCF hizo a un lado la retórica de arrebatar los medios de producción a la burguesía canadiense, y en su lugar postuló un programa de mejoras sociales progresivas y democráticas en donde obreros y trabajadores alcanzarían el bienestar dentro de los marcos constitucionales.

Al documento en donde planteaba tal viraje y moderación ideológica se lo conoce como la *Declaración de Winnipeg de 1956*; en ella, si bien se reiteraba la propuesta socialista para Canadá, se rechazaban al mismo tiempo los totalitarismos en Europa del Este, en clara referencia al modelo socialista soviético. Si bien esta arenga de la izquierda canadiense reconocía avances en materia social en los años previos, también subrayaba que la mayor atención social puesta en marcha por los gobiernos liberales y conservadores obedecía sobre todo a la presión de las organizaciones sociales afiliadas a la CCF.

Sin embargo, a pesar de esta moderación en sus estatutos, el laborismo canadiense se sumó a las campañas de desprestigio que se instrumentaban desde el poder en contra de la CCF, pues regularmente afirmaba, a través de sus diarios y panfletos provinciales, que dicha agrupación estaba integrada por fanáticos que exponían a Canadá a caer dentro del modelo “comunista ruso”. Esta retórica y propaganda conocidas erróneamente como anticomunista por aquellos años se sumaban a la opinión de reconocidas figuras liberales y conservadoras en el Parlamento canadiense, que en cada oportunidad afirmaban que la CCF no era más que una banda de incendiarios y provocadores revoltosos controlados desde Moscú (Gidluck, 2012: 117).

De este modo, pese a tener en su contra toda esta urdimbre política, mediática y de gobierno, la izquierda partidista en Canadá logró ocupar asientos parlamentarios de forma regular desde los años treinta, haciendo evidente que, no obstante haber nacido en un modelo que privilegia el bipartidismo de manera sistémica, había encontrado los medios para enfrentar en la arena electoral a las poderosas maquinarias liberal y conservadora. Ahora bien, debe señalarse que su supervivencia en la nación del Norte ha sido posible gracias a sus reafirmaciones ideológicas de carácter más moderado, mismas

que hicieron necesario el nacimiento de un nuevo organismo en 1962, este sí de carácter nacional, conocido como Partido Neodemócrata (*New Democratic Party*), cuyas siglas en inglés son NDP. Esta agrupación requirió, a su vez, de un nuevo documento normativo con estrategias que se ajustaran al mundo de la guerra fría, pero que al mismo tiempo marcaran una diferencia respecto de los dos partidos dominantes. Tal documento fue conocido como *Declaratoria del nuevo partido*.<sup>8</sup>

De este modo, a partir de los años sesenta y hasta las primeras décadas del siglo XXI, el NDP ha ido consolidando su posición como la tercera fuerza política en la Cámara de los Comunes, con algunos momentos de crisis como en los noventa, pero también con conquistas sobresalientes, como ser la primera minoría parlamentaria en el periodo 2011-2015. Así, han debido pasar más de ocho décadas para que un tercer partido se instalara de manera definitiva en el escenario, y de esta manera convertirse en un contendiente real en todas las provincias y territorios del país, algo que, como se ha visto, es particularmente difícil en el modelo Westminster, y que en Canadá es bastante más complicado porque ahí los liderazgos liberales y conservadores nunca han mostrado disposición para cogobernar con esa fracción política, sobre todo para no verse obligados a incorporar una agenda más progresista.

Por ello es evidente que si un partido diferente de los tradicionales Liberal y Conservador quiere ser gobierno en Canadá, deberá de manera forzosa ganar las elecciones en un sistema más bien cerrado como lo es el *first past the post* que, como se ha reiterado, estuvo diseñado desde sus añejos orígenes ingleses para que los partidos grandes lo sigan siendo y conserven sus mayorías en amplias regiones, mientras que los pequeños deben luchar para sobrevivir localmente al paso de los años.

Es precisamente por eso que los gobiernos de coalición han sido un recurso para mantener la gobernabilidad en Gran Bretaña y en el resto del mundo Westminster, pues se recurre a los partidos pequeños para alinearlos alrededor de alguno grande por periodos específicos hasta las nuevas elecciones. Lo anterior hace posible sacar adelante la acción de gobierno mediante el consenso parlamentario; sin embargo, esto no pasa en Canadá y ahí es en donde justamente persiste la dificultad para que nuevos partidos políticos

<sup>8</sup> Para una revisión y comparación completa de conceptos en las diferentes declaraciones y estatutos erigidos como los documentos normativos de la izquierda canadiense puede consultarse el capítulo "Party Blueprints" en Whitehorn (1992: 34-70).

encuentren protagonismo a nivel nacional y cauces de negociación con el duopolio liberal-conservador.

El caso del NDP sin duda es el más idóneo para estudiar los movimientos sociales y partidistas en Canadá, ya que no sólo logró sobrevivir, sino que también alcanzó la siguiente fase —lo que no ha conseguido ningún otro— es decir, expandirse a todas las provincias. Así, gracias a la organización de sus bases a lo largo de todo el territorio, el movimiento de la izquierda partidista canadiense ha ido ganando mayores espacios y asientos parlamentarios en distintas circunscripciones, derrotando sobre todo a sus contrincantes del Partido Liberal, con quienes comparte agendas en materia social. Así, el votante de clase trabajadora urbana y los pequeños agricultores han encontrado otra opción a la planteada por los liberales para responder a sus necesidades y demandas.

Ahora bien, más allá del NDP es preciso informar que ha habido otros movimientos y organizaciones partidistas sobresalientes, pero por su carácter local o provincial no han logrado desplegar sus bases hacia otros puntos, limitando con ello su presencia, pues recordemos que el sistema *first past the post* elimina todos los sufragios de los aspirantes derrotados. Lo anterior provoca que los candidatos liberales y conservadores, por ser los únicos que generalmente tienen presencia en todas las circunscripciones electorales canadienses, se presenten uno frente al otro como las únicas dos opciones con posibilidades reales de ganar, lo que generalmente obliga al elector a ejercer el voto útil, y no sufragar por su opción preferida.

Esta situación en la que se coloca al electorado canadiense se ha logrado evitar en otros países del sistema Westminster con la instauración de la modalidad mixta, en la cual, si bien prevalece el FPP para un porcentaje considerable de los asientos en el Parlamento, también se brinda la oportunidad de que los votos de los candidatos perdedores sean agregados a las listas de plurinominales presentadas por los diferentes partidos políticos, otorgándole a éstos el derecho a ocupar escaños tras haber conseguido porcentajes generosos de votación en todo el país, aunque no hubiesen ganado circunscripción electoral alguna. Insistimos, en Canadá los electores no tienen esta opción.

Una muestra de esta paradoja democrática canadiense es la creación, el crecimiento y la desaparición de diversos partidos políticos locales o provinciales, pues al final de cuentas no logran alcanzar presencia en otras regiones. Quizá los casos del Partido Reformista, surgido en Alberta y con cierta presencia en Manitoba y Saskatchewan, en los años noventa, y del Partido del Bloque

Quebequense en Quebec en los mismos años, sean el mejor ejemplo de cómo opera la maquinaria político-electoral canadiense, ya que si bien el sistema electoral *first past the post* consolidó la presencia de ambos partidos en sus provincias de nacimiento al contar en ellas con sus principales bases, al mismo tiempo imposibilitó su crecimiento en otros lugares del país, ya que era imposible que ganaran circunscripciones electorales en otras provincias diferentes de las suyas. De este modo, el FPP sirvió de contención para que ideologías de ultraderecha, como la del Partido Reformista, o separatistas, como la del Bloque Quebequense, pudieran extenderse hacia otras regiones de Canadá en el siglo XXI.

Al final, el Partido Reformista, con presencia en el oeste, tuvo que ceder principios ideológicos y moderar su discurso para poder ser incluido en las nuevas agrupaciones conservadoras, éstas sí de carácter nacional, a finales del siglo XX y principios del XXI, como el actual Partido Conservador, que logró aglutinar a los conservadores moderados y cosmopolitas de Ontario y el Atlántico, con los conservadores populistas de las praderas y el Oeste, al lado de los quebequenses no separatistas (Flanagan, 2009a: 202). Por su parte, el nacionalista Bloque Quebequense ha terminado sucumbiendo ante el avance de la socialdemocracia, representada por el NDP, pues en dicha provincia se han asentado bases considerables de la izquierda más contestataria y progresista. Sin duda, los casos del Partido Reformista en el Oeste y del Bloque Quebequense en el Este son los ejemplos más recientes de cómo el nativismo y el nacionalismo canadienses han ido encontrando vías para fluir y enfrentar a los dos partidos dominantes, mismos que han terminado por ejecutar estrategias con carácter de unificación nacional (Chhiber y Kollman, 2004: 57) para contrarrestar estas reacciones, paradójicamente democráticas.

Por otra parte, en lo que compete a los organismos políticos fundadores del sistema canadiense (Partido Conservador y Partido Liberal), debe agregarse que con el paso de los años la fracción conservadora ha logrado superar sus diferencias, ya que después de distintas escisiones y refundaciones, el espíritu conservador sigue vigente y domina buena parte del imaginario colectivo de aquel país. Una muestra de ello es su tendencia a mantener los valores tradicionales anglosajones, y en menor medida franceses, para propagarlos, masificándolos con relativo éxito en un país multicultural.

Precisamente esta multiculturalidad y diversidad canadienses han sido el factor de división entre los sectores más conservadores, ya que el conser-

vadurismo de las provincias centrales (Ontario y Quebec), junto con el de las provincias del Atlántico, más cercanas a las corrientes políticas y culturales europeas, son susceptibles de manifestar mayor tolerancia. Por el contrario, las provincias de las planicies (Manitoba y Saskatchewan) y las del Oeste (Alberta y en mucho menor medida la Columbia Británica) suelen presentar propuestas conservadoras más excluyentes y menos cosmopolitas, tal vez por las características geográficas más aisladas y distantes con el resto del país. De hecho, este nativismo se expresó abiertamente en el Partido Reformista cuando en los años ochenta y noventa rechazaba el uso del idioma francés como estrategia para expandir su mensaje hacia otras regiones de Canadá.

Ese tipo de diferencias en el nicho conservador canadiense regularmente provocaba mayores coincidencias ideológicas entre los conservadores *tories* de las provincias centrales y del Atlántico y los liberales, que con los conservadores de las praderas y el Oeste, pues estos últimos, por su carácter aislado, solían mantener posiciones más reservadas hacia las propuestas y posturas políticas de sus contrapartes conservadoras de otras regiones. Lo anterior tiene sus orígenes en la propia conformación de Canadá como entidad política autónoma en el siglo XIX, ya que los padres fundadores eran en su gran mayoría hombres socialmente bien posicionados del alto y el bajo Canadá, así como de Nueva Brunswick y Nueva Escocia, quienes encontraron en la suma de voluntades de las elites anglosajonas y francófonas la vía para continuar con sus privilegios y darle rumbo político al nuevo país, sin desprenderse del todo de la tutela y la protección británicas.

En este punto resulta necesario mencionar que el papel de las elites y su manejo de las instituciones y de las mayorías ha sido abordado por diferentes autores, como Giovanni Sartori, quien las ubica como organizadoras de partidos políticos integrados por notables, que sin grandes diferencias ideológicas entre sí suelen contender en la arena política, evitando con ello generar polarizaciones sociales, lo que sin duda coadyuva al mantenimiento del *statu quo*. En tal sentido, el propio Sartori afirma que el sistema británico favorece el bipartidismo, en perjuicio del elector, que ve sacrificada su representación en el Parlamento para favorecer la gobernabilidad (Sartori, 2002: 269). Ello crea condiciones para la conformación de proyectos políticos poco divergentes entre sí por parte de aquellos que comparten el poder.

En el caso canadiense, sus dos principales agrupaciones políticas (liberales y conservadores) han construido, con el paso de más de siglo y medio de

existencia, una serie de coincidencias ideológicas que les ha permitido compartir un sólido bipartidismo oligárquico.

Este arreglo político de notables opera en Canadá con estructuras institucionales arropadas en un sistema electoral excluyente, como el tradicional *first past the post* (o uninominal) que, como ya se ha visto, convierte los votos de circunscripciones individuales en asientos parlamentarios. Este ejercicio elimina por sistema a los partidos pequeños, que encuentran pocos alicientes para mantenerse en la disputa política frente a los dos grandes del *establishment*. Debe subrayarse que, ciertamente, la izquierda organizada ha encontrado, después de muchos esfuerzos, los medios no sólo para sobrevivir, sino también para competir a nivel federal en todas las provincias y territorios.

Es por ello que aquí se afirma que la política canadiense parecería obedecer al carácter conservador y tradicionalista de sus elites, las cuales identifican pocas amenazas entre sus pares toda vez que sus antagonistas de la otra gran agrupación no suelen poner en riesgo los valores construidos por ambos desde hace décadas. Todo eso ha encontrado cobijo en una sociedad que, en su gran mayoría, ha terminado adoptando como propios los valores de dichas elites, mostrando además una fuerte tendencia a apegarse a los lineamientos dictados desde el poder, dentro de los cuales la unidad territorial, la tolerancia y la promoción del multiculturalismo han permeado como directrices nacionales.

Debe señalarse que en Italia diversos autores han trabajado las estrategias que las clases dominantes utilizan para llegar y mantenerse en el poder. Entre ellos sobresalen Vilfredo Pareto (1987), Gaetano Mosca (2011) y Robert Michels (2001), quienes en sus trabajos señalan y describen las maniobras que aquéllas llevan a cabo para autolegitimarse a costa de la sociedad que pretenden representar. Lo anterior, efectivamente se logra a través de un esquema en donde los sistemas políticos y electorales hacen posible la existencia y dominio de tales sectores. En este sentido, Pareto afirma que las elites se conforman de un número limitado de individuos que buscan mantener el equilibrio en el país para alcanzar la aprobación de sus gobernados. Deben ser lo suficientemente intuitivas e innovadoras, de modo que a través de ejercicios electorales rutinarios consultan la opinión del pueblo respecto de sus gestiones y decisiones de gobierno, buscando evitar de ese modo exabruptos sociales que pongan en riesgo la estabilidad que han logrado (Pareto, 1980).

Por otra parte, para Gaetano Mosca las clases empoderadas se encuentran formadas por grupos compactos muy bien organizados y conocidos como

la clase política, con capacidad suficiente para tomar grandes decisiones de interés público, procurando para sí mismos privilegios materiales que les dan la oportunidad de construir valores intelectuales y morales extensivos al resto de la sociedad, la que, por cierto, cuenta con limitadas alternativas y regularmente termina adoptando dichos valores para sí misma. Estos sectores privilegiados requieren de marcos democráticos que sustenten su existencia y predominio político, económico, social y cultural, y lo hacen a través de ejercicios electorales representativos indirectos.<sup>9</sup>

En este mismo sentido, Robert Michels afirma que las elites poseen fuertes y marcadas tendencias oligárquicas y burocráticas, por lo que los partidos políticos se convierten en mecanismos necesarios para mantenerse en el poder, ya que se transforman en los medios legítimos de dominio a través de ejercicios electorales democráticos. También Michels confirma que la “supuesta” renovación de las reglas de gobierno es una pura formalidad, ya que la comisión temporal de un encargo de poder llega a ser permanente, con lo que la conservación del cargo se transforma en un derecho establecido. En otras palabras, las autoridades democráticamente electas en este tipo de sistemas, tal y como sucede en Canadá, se encuentran más firmes en el poder que los funcionarios de los organismos aristocráticos. Lo anterior se sustenta en que las elites, en este esquema democrático-electoral, pueden permanecer mucho más tiempo en el cargo que la duración media en un Estado monárquico o no democrático (Michels, 2001: 137).

Lo anterior también lo abordó quien ha sido considerado como uno de los teóricos de la ciencia política más sobresalientes acerca del papel de los partidos políticos. Nos referimos a Maurice Duverger, quien en diversos pasajes describe la realidad del sistema Westminster y sus características particulares en Canadá, con la ventaja de que su análisis ahonda en el bipartidismo que lo define. En este sentido, sostiene que éste es un fenómeno específicamente anglosajón, aunque existen países con sistema Westminster en donde predomina un tripartidismo en el que los tres protagonistas tienen opciones reales de acceder al poder, ya sea por mayoría o por coaliciones, caso este último al que no pertenece Canadá.

<sup>9</sup> Puede profundizarse en Gaetano Mosca (2011). Asimismo, la reproducción del ensayo original, *Elementi di Scienza Politica*, escrito en 1896, en donde Mosca habla del papel de las elites como entes de dominio cultural, puede verse en <<http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/laclasepolitica.pdf>> [consultada en febrero de 2018].



Sin embargo, a su juicio el común denominador de los partidos políticos de los países anglosajones es su estructura de toma de decisiones centralizada, en la cual el control de las finanzas del propio partido, así como la designación de candidaturas, dependen del poder central y no tanto de las legislaturas locales (Duverger, 2014: 237-238). Lo anterior ha sucedido en Gran Bretaña durante siglos, así como en sus antiguos dominios, como Canadá.

Ahora bien, para que dichas estructuras duopólicas hayan logrado mantener el control político durante más de siglo y medio en territorio canadiense, han tenido que desarrollar plataformas atractivas que consiguen que sus pilares ideológicos permeen en amplios sectores de la sociedad que, pasiva, abraza tales principios como propios en un ejercicio de enajenación colectiva.

En este sentido, debido a las limitadas diferencias en las acciones de gobierno, ha sido necesario que liberales y conservadores logren emitir un mensaje ideológico claro que los distinga a cada uno del otro partido dominante, para desde ahí cimentar plataformas de gobierno y planes de acción que se instalen en el imaginario colectivo de las mayorías, entendiendo como tales a ese amplio sector que vota liberal o conservador, el cual ha logrado alcanzar en las elecciones federales del siglo XXI entre el 65 y 70 por ciento del voto popular en Canadá. Lo anterior sucede al mismo tiempo que el Partido Neodemócrata, el Partido Verde y el Bloque Quebequense, que son los otros tres con presencia parlamentaria, han conseguido obtener índices de votación de alrededor del 35 por ciento (Elections Canada, 2018).

Por lo anterior se hace necesario conocer las generalidades de las plataformas electorales de los liberales y de los conservadores canadienses, según sus propios documentos normativos. Por ejemplo, los liberales se asumen como la opción más progresista y promotora de los derechos humanos, como los impulsores del sistema de salud pública *Medicare*, no obstante que este último haya sido enarbolado por la izquierda cuando Thommy Douglas era el premier de Saskatchewan.<sup>10</sup> Es importante agregar que en su momento fue señalado como parte de un sistema comunista y maléfico que impulsaría el aborto y atraería hacia Canadá a doctores poco calificados procedentes de otros países (Brown y Taylor, 2012: 5); no obstante, como ya se comentó, los liberales adoptaron desde el gobierno federal dicho programa de salud médica universal y le pusieron su sello.

<sup>10</sup> Para una revisión completa del proceso de instauración del *Medicare* en Canadá puede verse Brown y Taylor (2012).

Asimismo, los liberales se autoproclaman como quienes han logrado mayores compromisos internacionales dentro de marcos multilaterales, ya que durante la administración del primer ministro Lester B. Pearson, en los años sesenta, el país propuso con éxito ante la comunidad internacional la conformación de los cuerpos de mantenimiento de la paz, conocidos como *Peacekeeping Operations* o Cascos Azules. Asimismo, gracias al primer ministro también liberal, Pierre Elliot Trudeau, en los años sesenta, setenta y parte de los ochenta, el Partido Liberal se considera a sí mismo el promotor del bilingüismo, ya que en su periodo se determinó reconocer a la lengua francesa como idioma oficial en los actos públicos. Además, el multiculturalismo y su política de recepción de migrantes y refugiados se ha convertido en otro estandarte político para atraer votantes. De igual modo, los liberales se asumen políticamente como los defensores de los símbolos patrios, ya que también en los años sesenta, durante el gobierno de Pearson, hicieron a un lado la bandera con motivos británicos y adoptaron la actual, con la hoja de arce.

De igual manera, la separación política del Parlamento canadiense respecto del británico, acaecida en los años ochenta durante el gobierno de Pierre Elliot Trudeau, y oficializada con la proclamación de la *Constitutional Act* de 1982, impulsa a los liberales a distinguirse de sus oponentes políticos como el partido que defiende y promueve la autonomía, pues a partir de los años ochenta del siglo xx Canadá tiene autonomía plena para enmendar su Constitución y promulgar leyes sin la intervención o la venia de la Gran Bretaña. Algo similar ocurre con la explotación responsable de los recursos naturales, ámbito en donde los liberales procuran ofrecer una imagen de desarrollo sustentable en equilibrio.<sup>11</sup>

En lo que corresponde al Partido Conservador, si bien éste ha tenido, como ya se señaló, múltiples agrupaciones a lo largo de su historia, el espíritu conservador ha seguido vigente en todo el país, manteniendo por región ciertas características que los diferencian. Así, al igual que entre sus competidores, los valores conservadores más promovidos son aquellos puestos en marcha durante las administraciones conservadoras. De esta forma, la conformación y unidad del país, promovida con éxito a lo largo de las primeras décadas de gobiernos conservadores; el derecho al voto de la mujer, puesto

<sup>11</sup> Sobre estos y otros valores liberales puede consultarse información en la página oficial del Partido Liberal (Liberal Party of Canada, 2018).

en marcha durante la gestión conservadora de Sir Robert Borden a partir de la segunda década del siglo xx; la promoción del libre comercio, instrumentada con fuerza por el gobierno de Brian Mulroney en los ochenta y noventa, apoyándose en sus contrapartes en Estados Unidos, Ronald Reagan, y Gran Bretaña, Margaret Thatcher, y el impulso a la libertad individual como eje rector del neoliberalismo de finales del siglo pasado, fueron elementos que terminaron incrustándose en la mentalidad conservadora canadiense contemporánea.

De la misma manera, el derecho a disfrutar los resultados del trabajo duro, la disciplina y la responsabilidad fiscales, así como la necesidad de fortalecer la posición militar canadiense en el mundo, fueron elementos muy socorridos durante la gestión de Stephen Harper en las dos primeras décadas del siglo xxi.<sup>12</sup> Y es que precisamente logró consolidar, una revolución conservadora que reformuló ideológicamente al propio conservadurismo canadiense, justo en momentos en que el nativismo y los nacionalismos vuelven a tomar bríos en Occidente con manifestaciones claras en Europa, de manera particular en Gran Bretaña con el triunfo del Brexit, y en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la Presidencia.

Así, la creación de rasgos distintivos en los que se empeñan liberales y conservadores para diferenciarse del “otro” se circunscribe a acciones de gobierno muy similares en realidad, cuyos matices son los elementos a los que acude con regularidad el partido que se encuentre en el extremo opositor, pues así va sentando las bases y preparando el discurso para las siguientes elecciones. Por lo tanto, el ejercicio democrático electoral se encuentra sujeto a dos partidos hegemones que difieren en algunos puntos en sus plataformas electorales, pero que comparten acciones y preocupaciones de gobierno. Así ha sido durante siglo y medio, y al parecer así será hasta que una tercera o cuarta fuerza logre ejercer presión mediante gobiernos de coalición.

En este sentido, debe llamar mucho la atención que en las campañas electorales federales de 2015 el líder del Partido Liberal, Justin Trudeau, prometió que de ganarlos esos serían los últimos comicios regidos por el sistema *first past the post*, pues afirmaba que Canadá necesitaba de una reingeniería político-electoral que hiciera más justo e incluyente su sistema político. Lo anterior sin duda beneficiaba a los otros organismos políticos con presencia nacional, es decir, el Partido Neodemócrata, el Partido Verde y,

<sup>12</sup> Sobre estos y otros valores de las corrientes conservadoras contemporáneas puede consultarse información en la página oficial de Partido Conservador (Conservative Party, 2018).

en menor medida, al Bloque Quebequense, incluso también a otros pequeños partidos políticos locales.

Sin embargo, una vez en el poder, el gobierno de Justin Trudeau afirmó que no existía consenso a nivel nacional para lanzar esas reformas electorales y, por ende, se mantuvo el viejo esquema FPP, que por cierto fue el que le permitió a Justin Trudeau obtener una mayoría de cerca del 55 por ciento de los asientos en el Parlamento (184 de 338), con sólo el 39.5 por ciento de los votos (*The Guardian*, 2017).

Al final de cuentas, como ha podido observarse, en Canadá no ha existido una evolución socialdemócrata dentro del seno liberal, tal y como sí sucedió en su oportunidad en Gran Bretaña, cuando los laboristas —sobre todo a partir de la segunda década del siglo xx— desplazaron y ocuparon los espacios electorales que tradicionalmente monopolizaban los liberales, ya que estos últimos dejaron de representar los intereses de la clase trabajadora británica que, consciente de su existencia; exigió mayor representatividad al interior de la Cámara de los Comunes. Lo anterior se alcanzó con éxito y regularidad a partir de los treinta; no obstante, queda claro que tal conciencia de clase no ha tenido la misma penetración en Canadá, en donde la clase trabajadora urbana más bien disfrutó tradicionalmente de los beneficios de una economía en crecimiento, sobre todo durante la segunda mitad del siglo xx.

Sin embargo, la presión proveniente de los sectores sociales más activos ha puesto en evidencia la paradoja democrática canadiense, que con sus elites ha mantenido en la exclusión a otras expresiones partidistas organizadas en un intento por seguir monopolizando el poder y la toma de decisiones en torno a un compacto grupo político que lidera las cúpulas de liberales y conservadores, los cuales suelen encontrar salida a sus diferendos al interior del Parlamento, en su Cámara baja.

## **Funcionamiento del sistema bicameral: el Senado y la Cámara de los Comunes**

### EL SENADO

El sistema parlamentario canadiense trabaja a imagen y semejanza del británico. Es uno de los diseños más tradicionalistas del modelo Westminster,

sobre todo por las características que ha venido adoptando su Cámara alta o Senado, cuyos integrantes, tal y como sus contrapartes en el Palacio de Westminster, no son electos sino designados por sus méritos. En Canadá, a los senadores los nombra el gobernador general —como representante de la Corona británica—, quien a su vez recibe recomendaciones del primer ministro en turno para ocupar los asientos vacantes.

En la actualidad son 105 los senadores que integran la Cámara alta canadiense, mientras que sus símiles en la Cámara de los Lores británica son 793 (hasta febrero de 2018), con la salvedad de que ahí prevalecen los lores espirituales (obispos anglicanos) y los temporales, que en su gran mayoría son hombres y mujeres destacados en diversas áreas de interés público.<sup>13</sup> Su encomienda en la Casa de los Lores no tiene una duración estricta, aunque suelen retirarse al cumplir los ochenta años, ello según la reforma instrumentada en Gran Bretaña en 2014, a partir de la cual el retiro es voluntario (Taylor, 2015: 1-2). En contraparte, los senadores canadienses ocupan su cargo hasta cumplir los setenta y cinco años, aunque el primer ministro posee facultades suficientes para cesarlos si así lo considera necesario y para nombrar nuevos representantes adeptos a su agrupación partidista. Esta práctica ha sido bastante común en las recientes décadas.

El Senado canadiense comenzó sus operaciones al mismo tiempo que la Cámara de los Comunes, es decir, en 1867. Su principal tarea, como bien lo aclaró en su momento el primer ministro inicial, Sir John Alexander Macdonald, consistiría en ofrecer una reflexión sobria capaz de detener los desenfrenos de la democracia emanados en la Cámara de los Comunes. Con el paso de los años este organismo parlamentario ha ajustado sus acciones a mantener un número limitado de atribuciones, con el fin de no entorpecer las actividades de la Cámara baja. Entre las responsabilidades que han permanecido a lo largo de poco más de siglo y medio de existencia es importante considerar a los comités especiales.

Éstos han sido los responsables, desde su creación en 1867, de realizar un seguimiento permanente de los asuntos de mayor relevancia nacional. Se trata de organismos que sólo pueden ser suspendidos cuando la Cámara de los Comunes cierra labores legislativas debido a una prórroga, o cuando ocurre

<sup>13</sup> Debe aclararse que pese a que aún existen lores de carácter hereditario en la Cámara de los Lores británica (menos de cien en la actualidad), éstos han venido disminuyendo su importancia para dar paso a la mayor visibilidad y protagonismo de los temporales (UK Parliament, 2018b).

una disolución del Parlamento con vistas a un proceso electoral federal cercano. En ellos se integran senadores de diversa filiación política y se dividen en dieciséis comisiones, entre las que destacan: Pueblos Originarios o Primeras Naciones, Agricultura, Pesca, Comercio, Ética y Conflictos de Interés del Senado, Recursos Naturales, Derechos Humanos, Lenguas Oficiales, y Reglas y Procedimientos Parlamentarios (Senate Procedure in Practice, 2015: 175-180). De todas, esta última es la encargada de vigilar la operación del Parlamento en ambas cámaras, buscando salvaguardar de forma estricta los usos y costumbres heredados del Parlamento británico que, por cierto, desde el siglo xv ha venido operando en forma de comités en la Cámara de los Comunes en Westminster.

Un personaje central en la operatividad del Senado canadiense es su *speaker*, el cual, a diferencia de en Gran Bretaña, no está sometido a la figura del monarca de manera directa, pero sí de modo muy tenue al gobernador o gobernadora general en turno, no así al primer ministro en funciones, el cual suele marcar la dirección del Senado en todas sus formas, sobre todo para evitar que éste se manifieste como un obstáculo del gobierno. A diferencia del Reino Unido, al *speaker* no lo nombra el monarca sino su representante, el gobernador general, quien es “propuesto” a su vez por el primer ministro. Desde el principio el *speaker* se identifica como tal ante sus colegas en la Cámara alta y se sienta en la cabecera del Senado mirando desde su lado derecho a la fracción parlamentaria afín al partido gobernante, y del lado izquierdo a la oposición. Su secretario se ubica también en la cabecera de la Cámara, entre las dos bancadas, de frente. El *speaker* es, en términos generales, el presidente del Senado, es decir, supervisa los debates, realiza el conteo de votos y representa a la Cámara alta en diversas ceremonias protocolarias. También es el enlace oficial directo entre el Senado y la Cámara de los Comunes.

Debajo de él se encuentra el secretario del Senado, quien se coloca ante una mesa cuadrada a pocos metros del *speaker*. Este funcionario es en realidad el experto en los procedimientos parlamentarios, así como el administrador oficial de los asuntos de la Cámara. Asimismo, es el responsable de preservar los registros del Parlamento para entregarlos actualizados al *speaker* cuando éste los requiera en sus negociaciones con los comunes o con el primer ministro. El secretario se hace acompañar por los ayudantes del *speaker*, quienes suelen ser dos senadores que comparten la misma mesa; uno de ellos es el *speaker pro tempore*, cuya principal tarea consiste en apoyar y asesorar al *speaker* o en

suplirlo cuando se ausente para atender asuntos de protocolo o responsabilidades de gobierno. Por otra parte, el “ujier del bastón negro” (*usher of the black rod*) es un alto funcionario del Senado que suele permanecer de pie a la izquierda del *speaker*, y su labor se centra en mantener y recordar los deberes ceremoniales de los senadores durante las sesiones.<sup>14</sup>

En lo que corresponde al “discurso del trono”, al igual que en su paradigma británico, el Senado es la sede de la inauguración de cada ejercicio parlamentario, ya sea por elecciones y llegada de un nuevo Parlamento, o por inicio de sesiones parlamentarias después de un receso. En esta ceremonia, que reafirma sus vínculos políticos con la Corona británica, el gobernador o gobernadora general brinda un discurso que abre las sesiones legislativas y reconoce el ejercicio presupuestario por desarrollar durante el año en cuestión. Al igual que en Gran Bretaña, los miembros de la Cámara alta y los representantes de la Corona, en este caso el gobernador general, no deben ingresar a la Cámara de los Comunes, por lo que el ujier del bastón negro se dirige desde la sala roja del Senado hacia la sala verde de los Comunes para anunciarles con tres golpes en el portón que el representante de la Corona ha llegado al recinto. Desde ahí guía lentamente a todos los comunes hacia la sala del Senado para ser testigos de la lectura del documento inaugural. Como se recordará, este procedimiento protocolario es el mismo que se realiza en Gran Bretaña, con la salvedad de que quien lee tal discurso suele ser el o la monarca en turno.

Ahora bien, más allá de los protocolos es evidente que el peso del Senado en Canadá es relativo, ya que carece de grandes discursos y evita las polémicas de carácter político que puedan confrontarlo con la sociedad. En este sentido, debe señalarse que diversos sectores progresistas de todo el país cuestionan de forma cada vez más severa la existencia de este nivel de gobierno, que en realidad tiene limitadísimas atribuciones. Así, regularmente el ejercicio del Senado reafirma el carácter tradicionalista del sistema político canadiense. Tomando en cuenta lo anterior debe recordarse lo antidemocrático de esta Cámara, que en realidad no ayuda mucho para disminuir las observaciones de sus críticos. Es por eso que muchos de ellos afirman que el Senado canadiense es un residuo del viejo Imperio británico o, en el mejor de los casos, una institución redundante (Smith, 2017: 178).

<sup>14</sup> Para mayor información acerca de las funciones administrativas y protocolarias de los distintos funcionarios del Senado canadiense puede verse Parliament of Canada (2018a).

En la actualidad, los 105 senadores canadienses se dividen entre las diez provincias y los tres territorios de la siguiente manera: Ontario y Quebec cuentan con veinticuatro asientos cada una; tanto Nueva Brunswick como Nueva Escocia tienen diez; Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan, Manitoba y Terranova-Labrador disponen de seis por provincia; la Isla del Príncipe Eduardo posee cuatro escaños, mientras que los tres territorios (Yukón, Nunavut y del Noroeste) conservan para sí un asiento por circunscripción. Otro dato curioso del Senado canadiense es que si bien Ontario y Quebec concentran poco más del 45 por ciento de la población, y por ello suman cuarenta y ocho de las ciento cinco curules, Nueva Brunswick y Nueva Escocia, pese a no alcanzar en conjunto siquiera el 5 por ciento de los habitantes mantienen veinte senadores entre las dos, ello en un acto que reafirma y respeta su jerarquía y tradición como provincias fundadoras. Por su parte, el resto de las demarcaciones, con excepción de la Isla del Príncipe Eduardo, cuentan cada una con poco más del 5 por ciento de los pobladores y tienen acceso a sólo seis lugares.

Esta serie de contradicciones sistémicas del Senado se ha ido alimentando con la retórica de su limitado funcionamiento y elevada polémica, sobre todo después de que en 2013 se ventilaron una serie de escándalos de corrupción entre algunos de sus miembros durante la gestión del primer ministro Stephen Harper, lo que obligó a su suspensión del cargo y expulsión pública después de que se descubrieran ciertos actos de deshonestidad y malversación de recursos por parte de varios senadores conservadores, entre ellos, Mike Duffy (Isla del Príncipe Eduardo), Pamela Wallin (Saskatchewan) y Patrick Brazeau (Quebec), todos nominados por Harper.

Las acusaciones se originaron después de que la auditoría general señalara que varios integrantes de la Cámara alta habían recibido miles de dólares en fondos y recursos públicos por concepto de viáticos y pagos de renta para casas ubicadas en las provincias que representaban, cuando en realidad habían optado por residir en Ottawa, sede del Senado, y además nunca justificaron dicha permanencia en la capital, ni mucho menos aclararon el destino de los recursos. Esta situación llegó a tal grado de conflicto, que el Senado decidió a finales de año, por votación mayoritaria, suspender a los tres senadores, congelándose su salario y negándoles todo derecho político como miembros del Parlamento mientras se llevaban a cabo las investigaciones.

Sin duda, el caso más grave fue el de Mike Duffy, no sólo por ser un reconocido periodista a nivel nacional y un personaje carismático ante los me-



dios, sino porque el mismo jefe de gabinete de Harper; Nigel Wright, se vio obligado a renunciar después de que se comprobara que le había entregado un cheque por noventa mil dólares a Duffy, para hacer pagadera la cantidad que la auditoria general lo acusaba de malversar por concepto de viáticos y rentas falsas. De hecho, fue Duffy quien afirmó que había recibido tal cheque de manos del propio jefe del gabinete conservador, en un intento por silenciar el escándalo mediático al pagarse la deuda; pero incluso fue más allá, al señalar que él había discutido el tema con el primer ministro, y que además éste se encontraba enterado de la existencia y emisión del cheque (NM Noticias.CA, 2013).

Asimismo, más allá de los procedimientos legales que estaban por emprenderse en contra de connotados políticos conservadores, era un hecho que “las arcas conservadoras estarían en peligro en la medida en que los seguidores y adherentes del partido descubrieran en qué se usaban sus donaciones para apoyar al conservadurismo canadiense” (Boyer, 2014: 114). Aunado a lo anterior, la entrega del cheque y las revelaciones de Duffy dejaron muy expuesto al hombre más cercano de Stephen Harper, su jefe de gabinete, Nigel Wright, ya que si bien él se había mantenido hasta ese momento como una persona íntegra y de incuestionable honorabilidad, lo cierto era que pudo actuar pensando que hacía lo correcto, y que la recepción del cheque por parte de Mike Duffy traía implícita la discreción del senador (Boyer, 2014: 115).

En lo que corresponde al caso del senador Patrick Brazeau —el mismo que retara en 2012 a una pelea de box al entonces diputado liberal Justin Trudeau, en un suceso sin precedentes mediáticos—, este personaje enfrentó los mismos cargos que Duffy, pero además le agregaron acusaciones por violencia doméstica, conducir en estado de ebriedad y posesión de cocaína, mismas que ocasionaron su suspensión del Senado, sin contar con que además tuvo que continuar involucrado durante tres años en una serie de juicios legales que lo inhabilitaron para ocupar el cargo hasta finales de 2016, cuando resultó absuelto por decreto real de la Corona (CBC News, 2016a).

El caso de Pamela Wallin no es menos escandaloso, ya que esta senadora por Saskatchewan, quien al igual que Duffy fuera una periodista ampliamente conocida en Canadá, fue señalada por la auditoría general por defraudar fondos públicos y por falsear declaraciones al mantener su residencia en Ottawa y recibir viáticos y dinero para su subsistencia en Saskatchewan. Wallin,

al igual que sus colegas, fue suspendida de su cargo en noviembre y no sería sino hasta mediados de 2016 cuando sería absuelta (CBC News, 2016b). Es oportuno señalar que hubo otro caso similar con el senador liberal por Ontario, Mac Harb, quien a diferencia de sus pares conservadores decidió pagar de su bolsillo la cantidad supuestamente defraudada y renunciar al cargo, no sin antes acusar a las autoridades encargadas de la investigación de cometer un error, pues se encontraba convencido de su inocencia (*The Globe and Mail*, 2014).

Pese a esta serie de acontecimientos y resoluciones senatoriales para castigar a algunos de sus miembros descubiertos en evidentes actos de deshonestidad lo cierto es que, con excepción de Brazeau, a quien se le siguieron otra serie de acusaciones en torno a su comportamiento personal y social, y sin considerar la renuncia de Mac Harb, los otros dos senadores conservadores involucrados, Duffy y Wallin, retomaron su curul después de las elecciones federales de 2015, pues con la disolución parlamentaria para efectuar ese proceso electoral concluían también las resoluciones que los afectaban, dejando sin efecto las suspensiones de ambos.

A partir de su reincorporación, Mike Duffy y Pamela Wallin se sumaron a un grupo de senadores independientes cuya principal agenda ha sido construir plataformas apartidistas que garanticen el derecho de los miembros de la Cámara alta a no pertenecer a partido político alguno, y aun así formar parte de las distintas comisiones, en un intento organizado desde 2016 para que en el Senado no imperen las fracciones partidistas; lo anterior, en un claro esfuerzo de sobrevivencia política de cara a las reformas que nunca antes fueron más necesarias y evidentes como después de los escándalos de 2013.

Una muestra de ello son las encuestas levantadas por *The Washington Post* a finales de 2013, en las que alrededor del 65 por ciento de la población de Canadá opinaba que el Senado debía ser abolido o profundamente reformado. En contraste con sólo un 5 por ciento de los canadienses que se manifestaron para que la Cámara alta continuara funcionando como hasta entonces. Por su parte el 20 por ciento restante de los entrevistados aún no estaba seguro sobre qué posición asumir (*The Washington Post*, 2013). Ante este nivel de profunda crisis de credibilidad en uno de los pilares constitutivos del sistema político, el entonces líder del Partido Liberal y posterior primer ministro, Justin Trudeau, pidió a todos los senadores de su partido renunciar a su filiación partidista y actuar a partir de ese momento como independientes, con la intención de mostrar su firme compromiso de reformar a la Cámara alta.

Su argumento consistió en que el Senado debía elevarse como un instrumento que vigilara a la Cámara de los Comunes y revisara las leyes desde allí emitidas. Trudeau afirmó: “El Senado está roto y necesita arreglarse [...]. Si el Senado sirve a algún propósito, éste es el de vigilar el extraordinario poder del primer ministro y su oficina, especialmente en un gobierno mayoritario” (NM Noticias, 2014). Debe agregarse que esta acción de parte de Trudeau dejó sin efecto los llamados del Partido Neodemócrata para abolir el Senado de una vez por todas o permitir la elección de sus integrantes. Esta acción requería necesariamente someter la Constitución a nuevos debates, algo que el propio Justin Trudeau se negó a hacer con el argumento de que la ciudadanía no estaba dispuesta a ser testigo de interminables deliberaciones provinciales que terminarían distrayendo su atención de los verdaderos problemas del país (Boyer, 2014: 359).

Resulta evidente que la expulsión de los senadores liberales de su partido, así como la promesa de su liderazgo en el sentido de reformar la Cámara alta, fueron sucesos que generaron grandes expectativas entre la opinión pública, pues a partir de ese momento se esperaba la estrategia a seguir de parte de los liberales en el Parlamento de cara a las siguientes elecciones generales.

Empero, dichas expectativas no serían satisfechas del todo por el propio Trudeau una vez que alcanzó la primera magistratura tras su victoria electoral en octubre de 2015, pues se opuso la posibilidad de elegir a los miembros del Senado, y en su lugar se comprometió a nombrar senadores honestos de carácter independiente y sin filiación partidista. En buena medida, este último compromiso lo ha cumplido al nombrar a los nuevos senadores, los cuales no han sido miembros de ningún partido político, o en todo caso han decidido renunciar a su filiación de manera pública, y desde el Senado intentan proyectar una imagen diferente de la de sus antecesores (*The Hill Times*, 2017).

Ya en la Cámara alta los nuevos senadores y senadoras se incorporan a las filas de los legisladores independientes, y desde ahí discuten y buscan generar nuevas dinámicas parlamentarias con la Cámara baja, aunque, claro está, tales ejercicios son apenas los primeros bosquejos de un Senado que busca operar de manera diferente, pero que sigue sin convencer a sus detractores, “que reclaman desde hace mucho tiempo que el Senado canadiense, al no ser electo, es ilegítimo” (Smith, 2017: 181). Aunado a lo anterior, es un hecho que esta Cámara continúa haciendo lo mismo que desde hace siglo y

medio, es decir, opera como una herramienta de poder que se limita a atestiguar lo que se aprueba en la Cámara de los Comunes, que es en sentido estricto donde se discute y decide la política canadiense.

Quizá el ejemplo más claro de esta falta de iniciativa e independencia ante la opinión pública sea el caso de la propuesta de reforma C-51 (*Bill C-51*) a través de la cual el gobierno de Stephen Harper reformuló los criterios para buscar extender la seguridad interna del país frente a acciones de carácter terrorista. Esta polémica reforma vio la luz como consecuencia de una serie de incidentes acaecidos en 2014 en Canadá que involucraron a individuos afines a grupos terroristas del Medio Oriente. El acontecimiento que atrajo mayor atención nacional e internacional fue, sin duda, el tiroteo al interior del Parlamento en Ottawa el 22 de octubre, justo cuando el gobierno se encontraba reunido en sesión parlamentaria, incluido el primer ministro.

En este suceso, un individuo identificado con el extremismo islámico mató a un soldado que se encontraba montando guardia en un monumento a las afueras del Parlamento, para posteriormente ingresar disparando en el inmueble; ya en el interior, el jefe de seguridad del Parlamento logró abatirlo, evitando así mayores pérdidas humanas.

El trauma causado por este hecho sirvió para que el primer ministro Harper presentara un ambicioso programa de reformas en las materias de seguridad, agencias de inteligencia, leyes criminales, inmigración, refugio, seguridad de viajantes aéreos y combate al terrorismo, las cuales serían conocidas en inglés como *Bill C-51*<sup>15</sup> y generarían gran polémica entre la sociedad civil.

Este paquete de reformas al sistema de seguridad generó acaloradas discusiones en la Cámara de los Comunes entre el gobierno y la oposición proveniente del Partido Neodemócrata y del Partido Verde, pero no así de parte del Partido Liberal, cuyos diputados la apoyaron y aprobaron en lo general. Este hecho puso de manifiesto, una vez más, los acuerdos fácticos entre liberales y conservadores, a pesar de la franca molestia expresada por amplios sectores de la sociedad civil canadiense, que veían amenazados sus derechos civiles debido a las extendidas atribuciones conferidas a las agencias de seguridad a partir de ese momento.

<sup>15</sup> El nombre completo de esta iniciativa es *Bill to Enact the Security of Canada, Information Sharing Act and the Secure Air Travel Act, to Amend the Criminal Code, the Canadian Security Intelligence Service Act and the Immigration and Refugee Protection Act and to make related and consequential amendments to other Acts.*

Entre dichas facultades destacaban mayores márgenes de maniobra a los servicios de inteligencia para espiar y seguir, de manera encubierta, a todos los ciudadanos potencialmente sospechosos de cometer delitos en el país con la premisa de proteger los valores canadienses. Al mismo tiempo, dicha reforma permitiría la detención, sin orden judicial de por medio, de cualquier ciudadano (Parliament of Canada, 2016). Fue precisamente por eso que diferentes grupos civiles, académicos, universitarios y políticos afirmaron que las nuevas reformas aprobadas por liberales y conservadores atentaban contra los derechos y las libertades individuales constituidas previamente en el país, pues esta nueva ley criminalizaría en la práctica a todo individuo que protestara en contra del gobierno.

Lo anterior se concretaría gracias a que esta reforma, conocida también como Ley Antiterrorista de 2015, otorga a las agencias de seguridad de Canadá facultades discrecionales para espiar y señalar a cualquier ciudadano como un individuo que busca la desestabilización del Estado. En este sentido, resulta necesario precisar que es tan extensa que, efectivamente, puede criminalizar las protestas callejeras o limitar la libertad de expresión de los disidentes del gobierno y sus representantes. Así, cualquier persona podría ser espiada y detenida por agentes policíacos uniformados o encubiertos.

Fue por eso precisamente que una vez presentada esta propuesta de ley en 2015, la dinámica parlamentaria en la Cámara de los Comunes centró sus discusiones en cómo afectaría las garantías individuales y la libertad de expresión. En estos debates, el Partido Neodemócrata y el Partido Verde manifestaron su abierto rechazo por considerar que la iniciativa amenazaba las libertades civiles. Por su parte, como se mencionó, el Partido Liberal apoyó en general la moción del gobierno de Harper y terminó sumándose en mayo de 2015 al bloque conservador en su tercera lectura. Las críticas que generó esta acción liberal provocaron que el líder de ese partido, Justin Trudeau, saliera al paso y afirmara que su agrupación había hecho lo correcto porque actuaban en favor del mejor interés de los canadienses; además prometía que de llegar al poder buscaría garantizar completamente los derechos civiles de la ciudadanía (*Ottawa Citizen*, 2015).

Al fin de cuentas, los números en esa votación serían 183 votos a favor (liberales y conservadores) por 96 en contra (neodemócratas, verdes y Bloque Quebequense). Cabe añadir que en esta tercera lectura se dieron veintisiete abstenciones (trece conservadores, cinco independientes, tres liberales,

cinco neodemócratas y uno de Fuerza Democrática).<sup>16</sup> Sin duda, la aprobación de tan controvertida ley expuso de nuevo los acuerdos parlamentarios fácticos existentes entre liberales y conservadores, que han operado de manera indistinta desde hace siglo y medio.

Ahora bien, lo más interesante es que una vez aprobada la Ley Antiterrorista por la Cámara de los Comunes, y de acuerdo con las mecánicas parlamentarias, fue turnada al Senado para su discusión, enmienda o ratificación. Este paso generó una serie de interrogantes sin precedentes en Canadá, ya que diversos sectores civiles hicieron llamados al Senado para que rechazara las reformas de ley por ser abiertamente impopulares (*Kil Bill C-51*, 2018); no obstante, siguiendo la ruta trazada por el espíritu tradicionalista y conservador de sus orígenes, reforzado a lo largo de siglo y medio de operaciones, el Senado aprobaría un mes después, sin modificación alguna, esta ley con cuarenta y cuatro votos a favor y veintiocho en contra, estos últimos básicamente de liberales independientes (*National Observer*, 2015).<sup>17</sup>

No obstante, la posición en contra de los senadores liberales independientes, lo cierto es que el Partido Liberal y su líder Justin Trudeau fueron muy criticados entre la opinión pública al fungir como soporte de una reforma abiertamente impopular. El posicionamiento de los senadores liberales independientes —que lo son a petición de su propio líder desde inicios de 2014— de poco sirvió para disminuir los cuestionamientos, ello debido sobre todo a su futilidad, dado su carácter minoritario en el Senado. Por ello, sus veintiocho votos en contra pudieron interpretarse más como una estrategia política para allegarse simpatía ciudadana y no como una postura firme y creíble que defendiera los derechos civiles. Esta aseveración se sustenta en que sus correligionarios en la Cámara de los Comunes, los cuales por cierto sí estaban en condiciones de frenar dicho plan de reformas en materia de seguridad, decidieron secundar la propuesta conservadora y sumarse a ella, aplastando por una clara mayoría al resto de los partidos opositores en la Cámara baja.

<sup>16</sup> Para una revisión de la postura de cada uno de los diputados en esta votación, así como sobre su filiación partidista, puede consultarse [openparliament.ca](http://openparliament.ca) (2018a).

<sup>17</sup> Debe recordarse que en enero de 2014, Trudeau decidió pedir a todos los senadores de su partido renunciar a su filiación y actuar a partir de ese momento como “liberales independientes”; ello, en un intento por ejercer presión para la reforma del Senado que viene discutiéndose en Canadá, sobre todo después de los escándalos por desvío de recursos y tráfico de influencias acaecidos durante el periodo 2012-2013, en los cuales, como ya se mencionó, fueron protagonistas algunos senadores conservadores.

Dicho todo lo anterior, sólo resta añadir que el Senado ha venido enfrentando su limitada operatividad y su carencia democrática. Es por eso que esta Cámara legislativa no resulta ser un ente atractivo ni mucho menos útil para la opinión pública, pues diferentes sectores sociales han venido cuestionando su existencia por considerarlo un organismo que, en términos prácticos, no tiene mayor función que la de cumplir con añejos protocolos.

Aunado a lo anterior, debe reconocerse que la Cámara alta canadiense en realidad no cuenta con los argumentos históricos que expliquen su pomposidad y parsimonia operativa, como sí sucede en Gran Bretaña con su Cámara de los Lores. Y es que quizá ahí sea precisamente en donde radica el principal problema para mantener el funcionamiento de una Cámara alta en cualquier otro modelo Westminster, más allá del propio Parlamento con sede en Londres, ya que justamente esta pieza del andamiaje institucional británico encuentra pocas justificaciones para seguir operando más allá de Inglaterra. Muestra de ello es que en Escocia, Gales e Irlanda del Norte el sistema de gobierno es unicameral, al igual que en Nueva Zelanda, país que con un claro espíritu democrático decidió prescindir del Senado por encontrarlo innecesario.

El caso de Australia es también muy interesante, pues las elites de ese país, si bien han mantenido la operación de su Senado, también resolvieron elegir mediante procesos democráticos a sus representantes en la Cámara alta, en un esfuerzo por dotarlos de legitimidad y cercanía frente a su sociedad y opinión pública; sin embargo, como se ha visto, Canadá es diferente por razones que vienen desde su fundación.

#### LA CÁMARA DE LOS COMUNES

En lo que corresponde a la Cámara baja canadiense o Cámara de los Comunes, a diferencia del Senado ésta opera como el eje central de la vida política del país. Su fortaleza reside en que sus miembros son electos por medio de procesos democráticos periódicos. Estos diputados, regularmente conocidos en el mundo anglosajón como MP (*Member of Parliament*) tienen un fuerte apego hacia el partido que los postuló, pues a diferencia del sistema estadounidense, el Westminster procura que el partido continúe siendo un elemento primordial en la política interna. De hecho, en Canadá la consi-

derable disciplina que guardan los comunes con su agrupación de origen provoca que un MP no entre en controversias con sus correligionarios ni con las iniciativas que de su bancada emanan (Malcolmson *et al.*, 2016: 125).

No obstante, a pesar de que el partido político y su líder en turno suelen dirigir los lineamientos de la bancada a la que un diputado pertenece, el MP debe saber expresar públicamente un apego hacia sus electores, pues de ellos depende su llegada y su permanencia en el cargo mediante reelecciones. Lo anterior hace muy difícil que los diputados logren trayectorias duraderas en la política, ya que éstas se sujetan en buena medida a una buena imagen pública del líder de su agrupación, lo que abre dos flancos para los MP: uno en el que deben obedecer y someterse a las directrices del dirigente vigente de su partido, y otro en el que sus acciones muestren franca empatía hacia sus electores con el fin de evitar crear una imagen de político ajeno a las problemáticas de sus representados y su comunidad de procedencia.

En este sentido, en el escenario político canadiense existen múltiples ejemplos de políticos connotados que pese a ser líderes de su partido a nivel nacional pierden su circunscripción electoral provincial al ser derrotados por un candidato de otro instituto que logró conectar más con la gente. Cuando eso sucede, el líder del partido debe contender en unas elecciones especiales, o *by-elections*, las cuales se realizan en alguna circunscripción electoral afín a su partido en donde un MP de su misma agrupación se sacrifica para otorgarle su asiento. Lo anterior es posible cuando el dirigente del partido en cuestión es designado como primer ministro, o en su defecto como líder de la oposición. Ello, porque el requisito más importante para ocupar un cargo de importancia recae en la capacidad para ganar y mantener un asiento en la Cámara baja.

Es importante señalar que en el momento en que una diputada o diputado logra ganar un escaño en la Cámara de los Comunes comienza a formar parte integral del organismo de toma de decisiones y se eleva como parte activa del *caucus* de su partido. Desde ahí el MP puede lograr el espacio mediático necesario para ampliar su imagen como una figura pública capaz de ir escalando posiciones, ya sea para afianzar su curul en la Cámara baja o para contender por el liderato de su partido cuando la situación sea propicia. Toda esta situación regularmente debe venir acompañada de una absoluta disciplina, ya que en Canadá el líder del partido incide de manera directa en su *caucus* para concretar las nominaciones a candidaturas para ocupar asientos



en la Cámara de los Comunes. Por eso los candidatos a MP deben manifestar un apego indudable a los lineamientos del partido al que pertenecen, pues eso permite que las organizaciones se muestren como entes bien organizados y cohesivos frente a los electores (Loat y MacMillan, 2014: 159).

Al igual que sus precedentes británicos, la Cámara de los Comunes en Canadá cuenta con un *speaker* o portavoz que funge como presidente de la Cámara y es el encargado de llevar a cabo las sesiones en orden y de acuerdo con los cánones anglosajones. Tal y como sucede en el Parlamento en Westminster, el *speaker* es electo de manera secreta entre los diputados con curul y tiene la obligación de renunciar a su filiación partidista de origen. En una costumbre que se remonta a los siglos XII y XIII en Inglaterra, como ya se señaló, el *speaker* es empujado levemente por sus compañeros en la Cámara de los Comunes para ocupar su cargo, ya que no pocos portavoces fueron ejecutados al manifestar malas noticias a los soberanos en turno en el pasado.

Sin embargo, esta costumbre nada tiene que ver con Canadá, aunque forma parte de esos “hábitos simbólicos o rituales graciosos cuya observación o suspensión no tiene impacto sustancial alguno en la operación de las reglas constitucionales” (Banfield, 2015: 190). Así como el anterior, existen otros tantos “hábitos simbólicos” que perduran en el parlamentarismo canadiense y no parecerían tener fecha de caducidad.

Ahora bien, en cuanto a las funciones del *speaker* sobresale su papel de enlace entre la Corona, el Senado y la Cámara baja; por ello, al tener que enfrentar distintos escenarios protocolarios, el *speaker* cuenta con asistentes, quienes son MP electos por la propia Cámara para suplirlo cuando éste se vea imposibilitado de asistir a determinadas sesiones. El lugar que le corresponde en el recinto legislativo es la cabecera del Parlamento, entre las dos bancadas, sobre una tarima que lo eleva del resto de sus compañeros.

Entre las limitadas atribuciones de un *speaker* pueden contarse su capacidad para emitir el voto de desempate, aplicado a casos extremos en que la Cámara baja no logre destrabar algún asunto. En realidad es muy complicado que se presente esta situación, ya que se requieren muchos factores para que los diputados de las distintas fracciones representadas en el Parlamento coincidan en un 50 por ciento a favor y el otro 50 en contra en algún tema delicado.

Por otro lado, un personaje de especial importancia en la liturgia parlamentaria anglosajona es el *Sergeant-at-Arms*, quien se ubica en una pequeña mesa en el otro extremo del recinto, de frente al *speaker*. Este individuo es

el encargado de la seguridad en la sala;<sup>18</sup> no obstante lo sucedido en Canadá en 2014, el *Sergeant-at-Arms* es en realidad el protagonista de una tradición protocolaria que consiste en abrir las sesiones parlamentarias con un acto ceremonial en el cual camina lentamente por la sala cargando un gran mazo dorado, símbolo de la autoridad emanada del pueblo y conferida a los MP.

En cuanto a la conformación de los integrantes del recinto, tiene que señalarse que a partir de las elecciones federales de 2015 el número de asientos en la Cámara de los Comunes se incrementó, al pasar de 308 a 338. Dicha sede repite los hábitos y operaciones simbólicas de la Cámara alta, ya que la fracción gobernante se sienta en el ala derecha del *speaker*, mientras que la oposición se agrupa en su extremo izquierdo, de frente a sus adversarios políticos. Debajo del *speaker*, dándole la espalda y vestido con una túnica negra se ubica, en la cabecera de una mesa, el secretario de la Cámara (o *clerk* en inglés), quien debe ser un experto en los procedimientos parlamentarios y es asistido por dos ayudantes. A diferencia del *speaker*, el secretario o *clerk* no debe su presencia en el recinto a haber ganado una curul en la elección federal, sino que más bien su trayectoria es burocrática y administrativa, como funcionario del Parlamento.

Debido a su larga experiencia en procedimientos parlamentarios, el *clerk* o secretario funge como el principal asesor del *speaker* y debe encontrarse disponible para apoyar a todos y todas las diputadas que así lo requieran. En este sentido, un secretario de la Cámara baja debe hacer manifiesta su ausencia de filiación partidista, pues su labor está más orientada a procurar que la compleja maquinaria de los procedimientos funcione correctamente en cada sesión, eliminando los obstáculos en la rutina parlamentaria del día a día.

Al igual que como sucede en los demás parlamentos con modelo Westminster, el primer ministro ocupa un asiento más en el recinto y recibe las críticas y observaciones a su gestión en cada intervención, estimulando así el debate público de temas de interés. Lo anterior es posible gracias a que existe un sitio específico para la prensa acreditada en el lugar, la cual se ubica

<sup>18</sup> Es necesario mencionar que en el tiroteo registrado al interior del Parlamento canadiense en octubre de 2014 fue precisamente el *sergeant-at-arms*, Kevin Michael Vickers, junto con otro miembro de la Real Policía Montada, el encargado de abatir al autor del atentado en un hecho sin precedentes, ya que la labor del Mazo había sido principalmente de carácter ceremonial. Pese a ello, y por desempeñarse también como jefes de seguridad del recinto, los *sergeant-at-arms* suelen ser expolicías con entrenamiento y experiencia en el uso de armas. Por lo tanto, debe quedar claro que no es un MP electo, sino más bien un funcionario designado por el representante de la Corona, es decir, el gobernador general.

en un angosto balcón justo a espaldas del *speaker*. También es necesario señalar que al igual que en la Cámara alta, el recinto de los Comunes reserva algunas filas para el público que se acomoda en una especie de gradas, justo detrás del sitio que se reserva para los periodistas, los cuales, debe añadirse, desarrollan un conocimiento certero acerca de los complejos procedimientos parlamentarios que deben hacer entendibles al resto de la población.

En lo que corresponde a los ministros o miembros del gabinete, éstos deben ser MP electos y formar parte del partido gobernante. Esto último ya que las autoridades canadienses se han rehusado a conformar gobiernos de coalición, por lo que los diputados designados para encabezar un ministerio tienen ante todo un apego partidista hacia su líder de bancada y primer ministro. De hecho, “la disciplina partidista garantiza que el gabinete mantenga siempre un número suficiente de votos para proteger su propia posición en el poder” (Malcolmson *et al.*, 2016: 124-125).

Sin embargo, este dominio del partido sobre el individuo en Canadá ha llegado a niveles mayúsculos debido al estilo particular de los primeros ministros más dominantes sobre sus MP. De hecho, “hay quienes creen que el sistema político se está moviendo en la dirección equivocada [...], pues [algunos] primeros ministros, ya sea azules [conservadores] o rojos [liberales], actúan frecuentemente más allá de lo debido” (Loat y MacMillan, 2014: 24).

Aunado a lo anterior debe considerarse que la labor de los ministros de gobierno en el sistema Westminster triplica su trabajo, ya que sin importar sus responsabilidades como funcionarios gubernamentales, el MP integrante del gabinete es al mismo tiempo diputado (por lo tanto, debe legislar sobre asuntos a nivel nacional), ministro (y por ello debe encabezar la agenda de su ministerio) y representante de su circunscripción electoral (con la obligación de mantenerse al tanto de sus representados).

En la actualidad se han desarrollado tres principios básicos para todo ministro de gobierno: 1) deberá mostrar lealtad y defender las decisiones del gabinete de manera decidida, 2) un ministro no sólo no debe criticar públicamente a un colega del gabinete sino que además debe defenderlo abiertamente frente a sus críticos y 3) un ministro no deberá expresar de manera pública opiniones personales acerca de las políticas de gobierno (Banfield, 2015: 196). Todo lo anterior debe conjugarse con una imagen pública favorable, pues ante todo su posición en el gobierno depende no sólo de la aprobación del primer ministro, sino también de sus electores, quienes pueden

darle la espalda en el siguiente proceso electoral, lo que significa probablemente el fin de su carrera política. Es por esta situación que al final de cuentas un MP no debe desconectarse del todo de su base electoral, pues de ellos depende y ante ellos responde.

Ahora bien, en lo que corresponde a las labores y responsabilidades de gobierno, la Cámara de los Comunes divide sus agendas en veintisiete comités especiales, desde los cuales hace el seguimiento de los proyectos gubernamentales. Entre los comités de mayor importancia sobresalen los de Servicio a Veteranos de Guerra, Agricultura, Comercio, Ciudadanía e Inmigración, Medio Ambiente, Reformas Electorales, Equidad, Asuntos Exteriores, Estado de la Mujer, Finanzas, Pesca, Salud, Asuntos Indígenas, Industria, Ciencia y Tecnología, Derechos Humanos, Defensa Nacional, Cuentas Públicas, Seguridad y Transporte, entre otros.<sup>19</sup>

En realidad la labor de los comités es primordial, ya que son los encargados de planificar los objetivos de gobierno. Su importancia radica en que desde allí, es decir, en cada Comisión, se proponen soluciones o cambios a los proyectos que son turnados al Pleno de la Cámara de los Comunes para su posterior discusión. De acuerdo con este esquema se busca alcanzar consensos mediante la negociación con los MP de otras agrupaciones, quienes también integran las comisiones. Precisamente, ahí suceden importantes ejercicios de *lobby* o cabildeo previos a la dinámica del contraste de ideas en el Parlamento (Sturgis, 2016: 175). Es por ello que los trabajos de los comités son engranajes indispensables en el buen accionar del parlamentarismo canadiense.

Por otro lado, dentro de este esquema de mecanismos específicos necesarios para el funcionamiento del gobierno parlamentario en Canadá debe incluirse la figura del “gabinete en la sombra”, integrado por miembros del Parlamento del principal partido opositor que son los encargados de dar seguimiento a las acciones de la administración. Se trata de diputados que “adoptan” un ministerio específico y desde ahí se concentran en estudiar las políticas públicas emprendidas por la entidad respectiva. El objetivo principal es exponer en los debates parlamentarios los errores y/u omisiones en la ejecución de parte del titular del ministerio en cuestión. Es por eso que este gabinete en la sombra debe mantener un sentido crítico, para así hacer pública la posición del partido antagonista y de este modo puedan identificarse y con-

<sup>19</sup> Para mayor información y para consultar asuntos específicos de cada Comité puede verse, Parliament of Canada (2018b).

trastarse las posturas de los dos mayores partidos políticos representados en el Parlamento.

Desde luego que el anterior ejercicio ha servido en términos prácticos para darle espacios mediáticos al principal partido opositor, pues éste expresa de manera abierta una visión contraria a las acciones de gobierno ya en marcha, además de que ofrece sus propias alternativas y propuestas de solución que son recibidas por la opinión pública para que emita su juicio. Todo esto ha servido para mantener a los políticos en el centro del debate nacional, contrastando visiones y opiniones, generalmente entre liberales y conservadores, situación que los separa del resto de los partidos, los cuales carecen de los mecanismos institucionales necesarios para hacer escuchar su voz con fuerza.

No obstante, debe señalarse que la creación de un gabinete en la sombra tuvo en sus orígenes británicos otras intenciones, ya que desde ahí se buscó que la oposición hiciera un escrutinio detallado de las acciones del primer ministro y su administración para mantener informado al monarca acerca de lo acontecido en el país y del impacto del gobierno entre sus súbditos. Es por eso que el gabinete en la sombra era una de las responsabilidades que debía atender el soberano de manera directa, pues era el mejor mecanismo para enterarse de cualquier malestar popular. Por esa razón, la cabeza de la primera minoría en el Parlamento es conocido como “líder de la leal oposición de su majestad”, un ejemplo más de cómo las tradiciones que se remontan a siglos de antigüedad en Gran Bretaña fueron adaptándose y evolucionando en Canadá hacia nuevas formas sincréticas en donde conviven el pasado y el presente.

Es cierto también que lo anterior puede considerarse resabios de prácticas anacrónicas de un imperio en decadencia que se niega a desaparecer, y que por eso se aferra a tales usos y costumbres como un mecanismo de defensa, sobre todo ante el avance que experimentó el federalismo en el modelo estadounidense a partir de la segunda mitad del siglo xx; sin embargo, resulta necesario subrayar que dicho modelo, pese a todo, descende de y comparte hábitos con los británicos heredados de su época colonial.

Para el caso canadiense, mucho se ha hablado y escrito acerca de la posibilidad de separar al Parlamento de la Corona británica. En tal sentido, debe recordarse lo expresado ante el Pleno por James Jerome, *speaker* de la Cámara de los Comunes durante el periodo 1974-1979, alocución que ya es considerada clásica en la cultura política parlamentaria del país:

¿Sería posible concebir algún proceso en el que algún funcionario canadiense electo pudiera ser llamado por nosotros presidente en lugar de gobernador general, y que ello nos diera la certeza de que tiene todo el poder y la autoridad que conocemos actualmente y que reside en el monarca? La respuesta, por supuesto, es que cualquier híbrido es poco probable. Sería casi imposible injertar esa característica en nuestro sistema parlamentario. Si se intentara, requeriría una revisión constitucional total (Tidridge, 2011: 63).

Lo anterior resulta por demás interesante en la medida en que permite observar con claridad el hondo carácter conservador de la política canadiense, pues el extracto señalado es considerado una de las intervenciones más elocuentes en defensa del sistema prevaleciente en Canadá y su apego cercano al más tradicionalista espíritu Westminster del mundo moderno. Incluso más allá de la tendencia conservadora que domina el ánimo político de la nación, es un hecho que los MP votan en sentido estricto por lo que les indican sus líderes de partido, más allá de sus opiniones personales, lo que se agrava si existe una tendencia conservadora que domine a las cúpulas partidistas. Es en sentido estricto un ejercicio en el que el representante vota como autómatas sin estudiar a fondo el impacto de su voto (Rathgeber, 2014: 66-77).

Si bien el sistema político canadiense puede considerarse anacrónico o muy tradicional, lo cierto es que ha logrado sobrevivir y mantenerse operando durante más de siglo y medio, lo que lo convierte en uno de los más antiguos y funcionales del continente americano, sólo después del estadounidense. Esta situación obedece, sin duda, a que sus dinámicas tienen orígenes muy antiguos en Gran Bretaña, aunque es verdad que han logrado mutar y adaptarse a las nuevas realidades del mundo moderno, otorgándole estabilidad y gobernabilidad a ese vasto territorio.

En este marco de estabilidad constante en Canadá, de 1867 a 2015 se han celebrado cuarenta y dos elecciones federales de forma ininterrumpida, de las cuales han emanado veintitrés administraciones, con trece primeros ministros conservadores y diez liberales. Jamás ha ocurrido un magnicidio de primer ministro, todas las administraciones han llegado a su fin de manera pacífica, y cuando algún mandatario muere en funciones existe todo un andamiaje constitucional que permite, ya sea concluir la gestión original o bien convocar a nuevas elecciones. Todo lo anterior se ha dado de manera ordenada y en paz.

Como garantes y observadores de todos estos procesos políticos internos se ubican los veintinueve gobernadores generales que han ocupado dicho encargo en Canadá de 1867 a 2018. Estas figuras poseen amplios poderes, pero disponen de mecánicas discrecionales operativas que los mantienen en un bajo perfil. Suelen permanecer en sus oficinas y viven de manera discreta, evitando exponer su imagen ante la opinión pública. Por lo regular entran en la arena política sólo cuando el sistema se encuentra frente a un reto que pone en jaque la gobernabilidad y favorecen al primer ministro en funciones como jefe de gobierno. Esto último ha provocado que la figura del gobernador general haya recibido críticas sin precedentes en Canadá en los años recientes (McWhinney, 2005: 18), sobre todo a partir de la prórroga parlamentaria emitida por la gobernadora general Michaëlle Jean en diciembre de 2009, para evitar que el primer ministro fuera sustituido de su cargo por la mayoría opositora, caso que se abordará en el apartado siguiente.

Volvamos al caso de la Cámara de los Comunes: es evidente que ese nivel de gobierno es el único mecanismo cuyo poder se extiende hacia todos los campos de interés nacional, convirtiéndolo en el eje principal de la vida política. Ahí se discuten las reformas, se aprueban o se rechazan. Para alcanzar a aprobar una ley, el gobierno en turno requiere de una mayoría simple de 50 por ciento más uno en esta Cámara, situación que no es complicada cuando se encabeza un gobierno de mayoría. Esta realidad puede resultar paradójica para la democracia, ya que un gobierno de mayoría puede aprobar todo tipo de leyes sin importar sus alcances, puesto que la oposición se encuentra imposibilitada legalmente para impedir reformas de gobierno, y su actividad se limita a denunciar de manera pública, a través de los debates parlamentarios, los posibles impactos de enmiendas aprobadas de forma automática por un gobierno de mayoría, los cuales, por cierto, no suelen obtener el 50 por ciento más uno del total de los votos de la ciudadanía, gracias al sistema uninominal *first past the post*. Un paradigma claro de ello son las elecciones federales de 2015, en las que el Partido Liberal obtuvo 184 asientos (54.4 por ciento de la composición de la Cámara), producto del 39.5 por ciento de la votación; el Partido Conservador noventa y nueve curules (29.2 por ciento) tras obtener 31.9 por ciento de los sufragios; el Partido Neodemócrata cuarenta y cuatro escaños (13 por ciento) y el 19.7 de las preferencias electorales; el Bloque Quebequense diez lugares (2.9 por ciento) con sólo el 4.6 de los votos emitidos, y el Partido Verde un espacio (0.29 por ciento), proveniente del 3.4 por ciento de la votación.

Es por ello que cuando se estudia el modelo canadiense, regularmente se mencionan las mayorías parlamentarias falsas. Por ejemplo, si se tomara en consideración el porcentaje del voto popular, tal y como sucede en otros países anglosajones con modelo Westminster (Australia y Nueva Zelanda), la mayoría alcanzada por los liberales en 2015 en Canadá no sería tal, pues tendrían sólo 134 asientos (lo que se traduce en el 39.6 por ciento de las curules), los conservadores 108 (32 por ciento), el Partido Neodemócrata 67 (19.8 por ciento) y el Bloque Quebequense 16 (4.7 por ciento). El caso más sobresaliente sería el del Partido Verde, pues según el esquema señalado habrían alcanzado once curules en lugar de únicamente una.<sup>20</sup> En este sentido en el cuadro 1 se evidencian las contradicciones de mantener y operar el actual sistema electoral canadiense, ya que resulta claro que las mayorías parlamentarias vigentes son recursos que permiten la gobernabilidad.

CUADRO 1  
ASIENTOS Y PORCENTAJES EN LA CÁMARA DE LOS COMUNES  
SEGÚN EL SISTEMA *FIRST PAST THE POST* (FPP) Y SIN DICHO SISTEMA  
EN LAS ELECCIONES FEDERALES DE OCTUBRE DE 2015

	<i>Asientos obtenidos (FPP)</i>	<i>Porcentaje asientos (FPP)</i>	<i>Asientos sin sistema FPP</i>	<i>Porcentaje de asientos sin FPP</i>	<i>Porcentaje de votos nacional</i>
Partido Liberal	184	54.4	134	39.6	39.5
Partido Conservador	99	29.2	108	32.0	31.9
Partido Neodemócrata	44	13.0	67	19.8	19.7
Bloque Quebequense	10	2.9	16	4.7	4.6
Partido Verde	1	0.3	11	3.2	3.4

FUENTE: Elaboración propia con datos de Elections Canada (2018).

Un dato que bien vale la pena mencionar es que en el sistema Westminster, el Parlamento canadiense requiere, desde 1963, que al menos se co-sigan doce asientos en la Cámara de los Comunes para que un partido político obtenga el estatus de partido oficial, lo que le permite tener mayores estipendios a sus diputados, que consisten en cuatro mil dólares canadienses para cada uno. También le corresponderían mayores recursos al partido de acuer-

<sup>20</sup> Estas cifras y porcentajes son de elaboración propia de acuerdo con datos obtenidos de Elections Canada (2018).



do con su proporcionalidad parlamentaria, y lo más importante, la posibilidad de cuestionar al primer ministro en las sesiones de preguntas y respuestas (Parliament of Canada, 2018c). Esto último permite al partido y a sus diputados mostrar sus agendas políticas e ideológicas a través de los medios de comunicación acreditados de forma permanente en el recinto legislativo.

Otro dato importante por considerar es que, de cualquier manera, los gobiernos de minoría en Canadá suelen sobrellevar sus gestiones gracias a su capacidad de negociación con otras agrupaciones políticas presentes en el Parlamento. Desde ahí estas alianzas parlamentarias de corta duración llevan adelante, de forma pragmática, diversos proyectos o reformas apremiantes para el gobierno de minoría en turno; no obstante, también debe añadirse que cuando estas negociaciones no alcanzan el éxito deseado aceleran la caída de dichas administraciones minoritarias, tal y como sucedió con el primer ministro Paul Martin en noviembre de 2005, cuando él mismo decidió no establecer compromisos públicos de mayor inversión al gasto social, como lo exigía el Partido Neodemócrata (NDP) como condición para apoyarlo en el cargo. Este caso particular provocó que el NDP decidiera alinearse con los conservadores y el Bloque Quebequense para derrumbar al gobierno liberal minoritario y adelantar las elecciones (Jeffrey, 2010: 579-580). Lo anterior aceleró la salida del Partido Liberal del poder después de trece años de gobierno consecutivos con dos primeros ministros distintos (Jean Chrétien y Paul Martin).

De esta forma, si tomamos en consideración los elementos expuestos, resulta claro que el ejercicio del poder en Canadá depende en buena medida de la capacidad del primer ministro para constituir una ruta de gobierno, ya sea siguiendo un esquema de minoría o uno de mayoría parlamentaria. Es por ello que un gobierno minoritario en Canadá no suele extenderse más allá de dos años y medio, que es el tiempo promedio en el que las alianzas se agotan, o bien cuando la gestión alcanza mayor visibilidad y puede consolidarse como mayoría en unas siguientes elecciones.

Ahora bien, una vez instalado en el sitio de primer ministro de un gobierno de mayoría, el líder del partido en el poder alcanza una capacidad de acción muy extensa que lo convierte en un caudillo imbatible en el escenario político, y quien durante su gestión no pocas veces es objeto de “culto a la personalidad”. “La autoridad del primer ministro se consolida por su irrestricto poder de nombramiento de funcionarios de todos los niveles. [Su po-

der] empequeñece la importancia de todas las demás oficinas del gobierno”. (Rathgeber, 2014: 116-117).

Por todo lo anterior, la Cámara de los Comunes se ha venido transformando desde la segunda mitad del siglo xx en la sede que alberga al gran potentado de la política del país. Desde ahí Canadá ha sido testigo de la actuación de primeros ministros hegemónicos, que no sólo dominan su bancada, su partido y al gobierno, sino que además, como se ha visto, poseen atribuciones constitucionales para nombrar a discrecionalidad todos los más altos cargos de la administración. Toda esta dinámica rodea al primer ministro de individuos leales y afines a su gestión, en donde prevalece sobre todo la amistad o la gratitud por la encomienda (Smith, 2018).

De acuerdo con lo anterior, uno de los ejemplos más recientes en donde un primer ministro alcanzó un inmenso nivel de poder y emprendió acciones avasallantes en contra de sus contrincantes políticos —no sólo con los de otros partidos sino también con los de su misma agrupación— lo es sin duda alguna el de Stephen Harper, quien desde 2003 se elevó como la figura conservadora más poderosa del país, y de 2006 a 2015 en uno de los mandatarios más verticales y duros en la historia de Canadá. Sus críticos afirmaban que incluso había adoptado alegremente la tradición de la provincia de Alberta de atacar a sus enemigos con antorchas y horcas. Por su parte, sus allegados aseguraban que a él le gustaba jugar a la política estirando la cuerda hasta el límite permitido por las reglas, lo que de una u otra forma estimulaba a sus colaboradores más cercanos a cruzar las líneas éticas o legales en su deseo de ganar para el jefe (Bourrie, 2015: 304-306).

Y es que Harper ha sido uno de los políticos canadienses con mayor habilidad para manejar las dinámicas y los tiempos parlamentarios para mantenerse en el poder hasta su derrota en las elecciones federales de 2015. Es por ello que las estrategias que llevó a cabo en dicho periodo merecen un estudio aparte, tal y como lo haremos a continuación, pues desvelan las grandes áreas de oportunidad que se mantienen en la arena política del país.

Para concluir este apartado debe añadirse que este empoderamiento de la figura del primer ministro en Canadá se da gracias a los amplios periodos en que el Parlamento se encuentra sin funcionar, ya que al año suele haber solamente entre 120 y 130 sesiones, con excepción de cuando se convoca a elecciones federales adelantadas o programadas por la ley electoral, lo que acorta aún más los días de labores. También regularmente se suspenden trabajos

legislativos de una a dos semanas por mes para permitir que los diputados atiendan sus agendas provinciales. Asimismo, se cuenta con una temporada de asueto en los meses de julio y agosto, y otra en invierno, la mayor parte de diciembre y de enero (Parliament of Canada, 2018d).

Todo lo anterior coadyuva a que el primer ministro en turno asuma el control político del país, situación que se agudiza cuando encabeza un gobierno de mayoría, pues en este caso los jefes de gobierno suelen atrincherarse con cerca de cien colaboradores y varios astutos asesores de manera permanente, quienes lo aconsejan para resolver todo tipo de avatares, brindándole alternativas políticas de impacto.<sup>21</sup>

### **Principales acciones parlamentarias durante la gestión del primer ministro Stephen Harper: prórrogas, coaliciones y acuerdos partidistas**

La gestión de este primer ministro marcó la política de diversas formas, sobre todo por el hábil manejo de los tiempos legislativos durante su gestión, tanto desde un gobierno de minoría en el periodo 2006-2011, como a lo largo de su administración mayoritaria, de 2011 a 2015. Desde su irrupción en escena como diputado del extinto Partido Reformista, lo más cercano a la extrema derecha canadiense, a principios de la década de los noventa Harper manifestó poseer iniciativas propias y el talento necesario para cuestionar la habilidad de su líder de bancada, el cristiano evangélico Preston Manning, quien además era el fundador de dicha agrupación. Este conflicto obligó a Harper a renunciar a la fracción reformista y a su sitio como miembro del Parlamento, ya que, como se ha visto, la disidencia al interior de un partido se tolera poco en Canadá y constituye el camino más viable hacia el destierro político.

Sin embargo, una serie de desatinos en la dirigencia del Partido Reformista llevó a Preston Manning a ser cuestionado por muchas de sus bases, las cuales reconocieron en Harper al personaje cuya visión contemplaba la unificación de las derechas alrededor de un partido político único.<sup>22</sup> Así fue

<sup>21</sup> Para mayor información de cómo opera la oficina del primer ministro puede consultarse Rathgeber (2014: 125-134).

<sup>22</sup> Es oportuno señalar que en esos momentos existían tres agrupaciones partidistas de derecha en Canadá: el Partido Conservador Progresista (con amplias bases en las provincias centrales y en las del Atlántico), el Partido Reformista (con bases de apoyo considerables en las planicies

ascendiendo como figura pública, primero tras alcanzar el liderazgo del Partido de la Alianza Conservadora Canadiense en 2002, y un año después, al lograr unificar a las derechas del país en torno a una nueva agrupación, el Partido Conservador de Canadá, del cual él mismo se reconoce como su fundador.

Todo eso lo logró gracias a una serie de estrategias que involucraron tanto a algunos MP de la Alianza Conservadora como del Partido Conservador Progresista, quienes decidieron establecer una agenda de unidad en la Cámara de los Comunes con el fin de hacerle frente a los gobiernos mayoritarios de extracción liberal que dominaban en aquellos años la política interna del país. Una vez establecida la unión de los dos partidos conservadores en torno a una nueva agrupación, Stephen Harper fue electo líder del nuevo partido, lo que al mismo tiempo lo convertía en el líder de la oposición en el Parlamento, ya que los conservadores eran la primera minoría en ese momento.<sup>23</sup>

Las elecciones generales de 2004 fueron su primera gran oportunidad, ya que su nuevo partido alcanzaría las noventa y nueve curules, esto es, veinticuatro más que en la legislatura anterior, consolidándose como la segunda fuerza política, sólo después de los liberales, que habían menguado su presencia en la Cámara baja teniendo que conformarse con una débil minoría de 135 asientos. Esta situación le ofreció la oportunidad de presionar al gobierno del primer ministro Paul Martin, que se encontraba en medio de una serie de acusaciones e investigaciones sobre desvío de recursos y tráfico de influencias de parte de miembros connotados del gobierno de su antecesor y correligionario, Jean Chrétien.

Esta serie de acontecimientos proyectaron una imagen negativa del gobierno liberal frente a los ciudadanos, situación que fue bien aprovechada por Stephen Harper, quien en su calidad de líder de la oposición buscó generar los acuerdos necesarios con los dirigentes de las otras dos agrupaciones opositoras representadas en el Parlamento para adelantar las elecciones. A partir de esta estrategia, exigió al primer ministro la renuncia de varios de sus colaboradores, cuyos nombres habían sido ventilados de manera pública durante los procesos de investigación en curso. Todo este proceso contó con el apoyo de los líderes neodemócratas y del Bloque Quebequense, los cua-

---

y en el oeste canadiense) y el Partido de la Alianza Conservadora Canadiense, que tras su nacimiento en 2000 se perfilaba como el sucesor del Partido Reformista.

<sup>23</sup> Para una mayor información sobre este proceso de unificación del conservadurismo canadiense alrededor de la figura de Stephen Harper, consúltese Flanagan (2009a).

les se mantenían alineados a las propuestas lanzadas por el líder conservador de la oposición.

Uno de los momentos de mayor tensión para la mayoría opositora durante esta etapa fue la propuesta del gobierno liberal conocida como *Bill C-38*, que pretendía legalizar los matrimonios entre personas del mismo género, ya que el Partido Neodemócrata y el Bloque Quebequense se habían manifestado a favor, lo que dejaba al Partido Conservador y a su líder ante la posibilidad de tener que distanciarse de los demás partidos de la oposición. Ante ello, Stephen Harper pidió a sus diputados y diputadas votar en favor de lo que su conciencia les dictara, decidiendo con ello de manera abierta renunciar a cualquier intento por bloquear o criticar dicha propuesta de ley. Esto lo llevó a declarar públicamente: “Quiero señalar que los miembros de mi partido, incluidos los de nuestro gabinete en la sombra, son perfectamente libres de votar de acuerdo con su conciencia sin mi interferencia” (*openparliament.ca*, 2018b).

Dicha acción sirvió para evitar confrontaciones innecesarias con los otros dos líderes de la oposición, ya que ambos, Jack Layton (del Partido Neodemócrata) y Gilles Duceppe (del Bloque Quebequense), se habían manifestado públicamente en favor de la propuesta C-38. Ello permitió que esta Ley terminara aprobada por mayoría con votos liberales, neodemócratas y del Bloque Quebequense, quedando sólo algunos diputados liberales y los conservadores como los únicos contrarios a ella. Lo más sobresaliente de esta estrategia de Harper fue que gracias a su neutralidad el debate en torno a la C-38 no polarizó a la opinión pública ni tampoco lo expuso como un político intolerante ante un sector del electorado.

Una vez puesta en marcha esta Ley, el líder de la oposición optó por esperar a que la alianza entre neodemócratas y liberales terminara fracturándose, ya que el político del NDP (Jack Layton) era consciente de la debilidad del primer ministro liberal (Paul Martin), y por ello empujaba fuertemente en favor de incrementar el gasto público en el corto plazo, además de que los neodemócratas buscaban a toda costa evitar la legalización de las compañías aseguradoras médicas privadas con la clara intención de inhibir ese tipo de inversión en dicho sector (Jeffrey, 2010: 579-569).

Este elemento terminó por acorralar al primer ministro, pues se negó a mantener su alianza con los neodemócratas ya que sus demandas le parecían excesivas. A partir de ese momento Stephen Harper, en su calidad de líder de la oposición, se reunió con el líder del NDP y le propuso ir juntos, al

lado del Bloque Quebequense, para emitir un voto de falta de confianza en contra del mandatario liberal, a lo que finalmente accedieron. El propio Paul Martin señala que ese momento fue definitorio para su futuro político, ya que juntos el NDP y el Partido Liberal contaban con 151 asientos, mientras que los conservadores y el Bloque Quebequense alcanzaban 153, además de los tres diputados que se habían declarado como independientes. Todo lo anterior generaba un delicado equilibrio que para mantenerse requería todos y cada uno de los votos (Martin, 2008: 429).

Resulta necesario mencionar que en el sistema Westminster que opera en Canadá existen tres formas de adelantar elecciones federales: dos desde la mayoría opositora y una más desde un gobierno minoritario. Desde la mayoría opositora los partidos pueden solicitar elecciones adelantadas al representante de la Corona (gobernador general) para que éste clausure el Parlamento y las convoque. Las dos vertientes para hacer tal petición son: emitir un voto de censura al primer ministro o propiciar un voto de falta de confianza. La primera opción expresa públicamente el desacuerdo de la mayoría opositora con el gobierno, y por ello solicitan la posibilidad de removerlo mediante un proceso electoral tras considerar su gestión como ineficiente. La segunda alternativa es más delicada políticamente, ya que expresa que la mayoría parlamentaria ha dejado de creer en la buena voluntad del primer ministro y, por ello, solicitan su remoción y nuevos comicios para elegir uno nuevo.

La tercera posibilidad para adelantar elecciones viene desde el propio gobierno de minoría. En esta vertiente el primer ministro solicita de manera directa al gobernador general dislocar el Parlamento para convocarlas, por considerar que la mayoría opositora obstaculiza y frena de manera intencional una serie de reformas de vital importancia para la buena marcha del país. Este tipo de llamados a comicios se concretan sólo cuando el primer ministro considera que se encuentra en posibilidades de incrementar sus curules en la Cámara de los Comunes, después de analizar los números de las casas encuestadoras.

Para volver al tema de las elecciones adelantadas de 2006, es preciso comentar que al final de cuentas el voto de falta de confianza que expresó el NDP significó su alianza con los conservadores para derribar al gobierno liberal, el cual ya no tuvo el mínimo margen de acción y se vio obligado a someterse a un nuevo proceso comicial anticipado. Es oportuno señalar que el propio Harper había declarado meses antes que él no intentaría forzar una elección adelantada si no contaba con el apoyo total del NDP (Flanagan, 2009b: 228).

Una vez alcanzado el acuerdo con el NDP, Stephen Harper, en su papel de líder de la oposición, efectuó la solicitud oficial a la gobernadora general Michaëlle Jean, quien clausuró el Parlamento y lanzó la convocatoria para nuevas elecciones federales a celebrarse en enero de 2006. Lo anterior lo dejó en la antesala de la primera magistratura gracias a su capacidad negociadora con las demás fuerzas de la oposición.

En dichas elecciones el resultado favoreció al Partido Conservador, que obtendría 124 asientos, contra 103 de los liberales, 51 del Bloque Quebequense y 29 del Partido Neodemócrata.<sup>24</sup> Si bien tales números daban la victoria a los conservadores, otorgándoles la primera magistratura del país, lo cierto es que ese gobierno sería de minoría. Por ello Stephen Harper puso en marcha, ya como primer ministro, una compleja estrategia de sobrevivencia política, amparándose en las propias dinámicas parlamentarias canadienses que están diseñadas para favorecer la conservación de los gobiernos minoritarios.

Entre sus acciones más sobresalientes en este periodo sobresalen: reducir de cinco a cuatro años los periodos de los gobiernos de mayoría; con esta reforma parlamentaria avalada por la mayoría opositora, el nuevo primer ministro buscó enviar el mensaje de que él intentaba democratizar el sistema al evitar largos periodos de gobierno para administraciones mayoritarias. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de que la mayoría opositora pudiera solicitar al gobernador general elecciones adelantadas en cualquier momento. Cabe destacar que en el marco de todas estas reformas se comprometió a no pedir comicios anticipados desde su administración minoritaria, con el fin de privilegiar las reformas necesarias en materia presupuestaria y concentrarse en disminuir los impuestos a bienes y servicios, que era justamente una de sus más ambiciosas propuestas de campaña.

Al mismo tiempo, la animadversión que se profesaban neodemócratas y liberales al interior de la Cámara de los Comunes, al responsabilizarse mutuamente por la llegada de los conservadores al poder, fue un factor que el gobierno de Harper supo aprovechar ya que, sacando ventaja de las divisiones internas del Partido Liberal, logró que los diputados liberales permitieran poner en marcha un agresivo plan de recortes a diversos rubros del gasto social para el periodo 2007-2008, además de una serie de reformas políticas en materia de migración y refugio conocidas como *Bill C-50* y *Bill C-31*, respectivamente.

<sup>24</sup> Todas las estadísticas y cifras que se señalarán a continuación —referentes a los procesos electorales canadienses— se obtuvieron en Elections Canada (2016).

Lo anterior fue posible una vez que decidieran ausentarse de la votación final 91 de los 103 MP liberales, cifra que dejó el camino libre para que los 114 diputados conservadores superaran a los 83 neodemócratas y del Bloque Quebequense, para finalmente aprobar tales leyes. El argumento esgrimido por la dirigencia liberal fue que ellos no iban a provocar un cierre parlamentario por tercera ocasión en cinco años para convocar a nuevas elecciones, ya que la gente estaba cansada de eso (Campion-Smith, 2008).

De esta manera, la estrategia de Stephen Harper para poder gobernar y aprobar leyes desde un gobierno minoritario consistió en presionar y chantajear al maltrecho Partido Liberal, responsabilizándolo de un llamado anticipado a elecciones, algo que los liberales evitaban en esos momentos dados sus pobres números de aprobación frente a la opinión pública. De este modo, la destreza legislativa del primer ministro consistió en presentar reformas conservadoras polémicas en la Cámara de los Comunes con la certeza de que serían aprobadas por la acción u omisión de los miembros liberales del Parlamento y su temerosa dirigencia. Todo esto demostró que Harper había aprendido muy pronto a ganar batallas parlamentarias sin siquiera pelearlas, acción que al mismo tiempo les arrebató a los liberales el corazón, el alma y el orgullo (Dryden, 2010: 100-101).

A partir de esta acción, Harper consiguió desvelar algunos de los vicios existentes en el sistema político canadiense, que como se ha visto mantiene añejas estructuras y una serie de hábitos de acción parlamentaria que se resisten al cambio. En este sentido, otra de las razones que podría explicar el mantenimiento de este sistema es la medida con que sus primeros ministros suelen conducirse, ya que ciertamente pocas son las ocasiones en que el sistema ha sido amenazado por sus propios gobernantes, quienes regularmente privilegian los tradicionales acuerdos liberales-conservadores para no entorpecer la praxis política y la propia gobernabilidad.

Empero, estos hábitos civilizados de la tradicional política canadiense, conocidos como *responsible government* (gobierno responsable),<sup>25</sup> se cimbraron con la llegada de un personaje enormemente pragmático y con un profundo conocimiento de los tiempos parlamentarios y electorales, cuya mejor expresión se demuestra en sus constantes llamados electorales adelantados para afianzarse en el poder.

<sup>25</sup> Se entiende como “gobierno responsable” al ejercicio de poder que recae en el primer ministro en turno, el cual de acuerdo con las leyes constitucionales canadienses, como titular del Ejecutivo, es el responsable de la administración y de todo el Parlamento.



En este sentido, entender la forma en que Stephen Harper logró mover la maquinaria parlamentaria en su favor para beneficiarse él mismo pasa de manera forzosa por el análisis de las elecciones federales de 2008 y 2011. En ambas se expresó su maestría en el manejo de los tiempos políticos, al beneficiarse sin rubor alguno de las áreas de oportunidad que presenta el parlamentarismo canadiense, el que durante el mandato de Harper se evidenció con instrumentos limitados para frenar los excesos personales de su primer ministro, tal y como se apreciará enseguida.

Una vez consolidada su fuerza, tras aprobar una serie de reformas en el periodo 2007-2008, Harper se propuso afianzar su posición al interior de la Cámara de los Comunes, pues el suyo, pese a los éxitos obtenidos, todavía era un gobierno de minoría y, por lo tanto, expuesto a la censura de la mayoría opositora en cualquier momento. Por ello, mantener la discordia entre sus rivales era un tema de vital importancia para su gestión, y para alcanzar esa meta se valió de todos los recursos a su alcance; sin embargo, el tiempo iba agotándose en su contra, ya que los gobiernos minoritarios suelen durar en Canadá alrededor de dos años y medio en promedio, por lo cual 2008 se planteaba como un potencial año electoral.

Ahora bien, si en efecto es cierto que la actividad parlamentaria permitía abrir camino para convocar a elecciones adelantadas en dicho año, las reformas puestas en marcha desde el inicio de su gestión le dificultaban solicitar un proceso anticipado, ya que él mismo se había comprometido a no convocar a comicios desde el poder. Ante esta realidad, puso en marcha una estrategia en la que responsabilizaba a la oposición de la falta de resultados en su gobierno. Y es que ciertamente existía una profunda división parlamentaria entre los opositores (Partido Liberal, Partido Neodemócrata y Bloque Quebequense), los cuales, si bien eran mayoría en el Parlamento, no lograban establecer una agenda común frente al gobierno de Harper que, de manera casi imperceptible, fue ganando terreno y prestigio entre amplios sectores del electorado.

Al final esta falta de consenso entre la oposición fortaleció al gobierno conservador, que aprovechó la coyuntura de crisis económica internacional en 2008 para adelantar las elecciones federales, con el argumento de la falta de acuerdos parlamentarios para encarar los escenarios económicos caóticos del momento. Por ello, Harper planteó ante la gobernadora general, Michaëlle Jean, su solicitud para disolver el Parlamento y convocar a un nuevo proceso electoral, con el fin de reconfigurar la Cámara de los Comunes y así

salvaguardar los intereses canadienses de cara a un mundo afectado por la crisis mundial originada por la quiebra inmobiliaria en Estados Unidos.

Con esta acción, Harper no sólo adelantó las elecciones federales en octubre de 2008, sino que además le dio un golpe contundente a la oposición que, incrédula, atestiguó cómo el primer ministro rompía su promesa de no adelantar elecciones desde el poder, y no sólo eso, sino que se perfilaba para alcanzar un gobierno de mayoría. En realidad esta estrategia casi resultó perfecta, de no ser porque se quedaría a tan sólo doce asientos de alcanzar el 50 por ciento más uno después de pasar de 124 a 143 curules.

Así, a partir de la puesta en marcha de las actividades legislativas en noviembre de 2008, esos doce asientos se convirtieron en un grave problema para el gobierno de Harper, ya que al romper su compromiso de no convocar a comicios anticipados desde la primera magistratura, la oposición por fin empezó a encontrar elementos para lograr acuerdos parlamentarios; no obstante lo dicho, es necesario mencionar que pese a la evidencia del acuerdo no respetado por Harper, el ambiente internacional también contaminó el ánimo de los electores canadienses, que incrédulos y temerosos preveían la quiebra de numerosas empresas estadounidenses y la posible contaminación del mercado canadiense.

De esta manera, frente a una sociedad dominada por el temor por la quiebra inmobiliaria de Estados Unidos y sus efectos en el resto del mundo, el primer ministro buscó mostrarse como el único personaje capaz de evitar que Canadá cayera en la vorágine de la crisis internacional, y no sólo eso, sino que además ofrecía alternativas de crecimiento apoyándose en la explotación de los recursos energéticos del país. Como parte de esta estrategia, presentó ante la Cámara de los Comunes una serie de propuestas encaminadas a disminuir impuestos a la ciudadanía, pero al mismo tiempo tales iniciativas afectaban a los partidos políticos de toda la oposición, ya que buscaban reducirles los subsidios gubernamentales y los obligaba a buscar recursos vía recaudaciones de particulares.

Esto sin duda colocó a los opositores en un lugar extremadamente vulnerable, ya que no contaban con la sofisticada maquinaria recaudadora conservadora. Aunado a lo anterior, el gobierno conservador intentaba poner en marcha un ambicioso plan de reformas laborales que limitaban el derecho de huelga en la burocracia. Frente a esta serie de planteamientos, el Partido Neodemócrata, en voz de su líder Jack Layton, propuso a su contraparte liberal Stéphane Dion

la conformación de un gobierno de coalición para sustituir a Harper. Como respuesta, éste canceló las propuestas en el Pleno de la Cámara baja, pero el mecanismo para su destitución ya había arrancado.

De este modo, en un hecho histórico para Canadá, el 1° de diciembre, a menos de dos meses de las elecciones previas, los líderes del Partido Liberal, el Partido Neodemócrata y el Bloque Quebequense anunciaron su voto de censura en contra del gobierno de Harper y, al mismo tiempo, la conformación del primer gobierno coaligado en la historia del país. En éste, los liberales accederían a dieciocho ministerios y los neodemócratas a seis. Los partidos involucrados se comprometían a convocar a elecciones en un término de dos años y medio, esto es, en junio de 2011 (CBC News, 2008). Por su parte, el Bloque Quebequense acordó no interferir con el funcionamiento de esta administración durante año y medio. Cabe añadir que esta coalición gubernamental entraría en vigor hasta el 8 de diciembre, una vez que la gobernadora general regresara de una gira de trabajo por Europa.

Ante este anuncio, Harper emitió un mensaje televisivo en el que acusaba a la oposición de pretender usurpar el poder después de un proceso democrático. Afirmaba que si bien en el pasado la conformación de Canadá se había alcanzado gracias a la coalición de hombres ilustres de distinta filiación, en ese momento el intento opositor se constituía más bien en una imposición ilegítima que atentaba contra la ciudadanía, que ya había expresado su opinión dos meses antes en unas elecciones democráticas. Asimismo, dejaba en claro que él, como primer ministro, haría todo cuanto estuviese a su alcance para “defender la democracia y la economía” de todo Canadá.<sup>26</sup> Este discurso estaba cargado de una serie de simbolismos que se ofrecían como recursos para mantener las tradiciones políticas vigentes. El principal objetivo era evitar a toda costa la conformación de un gobierno de coalición, calificándolo como un intento antidemocrático, cuando en realidad, como se ha visto, es una figura bastante socorrida en el resto del mundo político anglosajón.

De tal modo, y como él mismo lo advirtió, en una maniobra que sigue despertando suspicacias, la gobernadora general, Michaëlle Jean, adelantó su regreso a Canadá y en una reunión secreta recibió al primer ministro Harper, quien le pidió prorrogar el Parlamento aprovechando el fin de año, y así darle

<sup>26</sup> El mensaje completo puede verse en YouTube: “Harper Addresses Canadians on Proposed Coalition, Dec. 3rd”.

tiempo para elaborar un nuevo proyecto presupuestario para el ejercicio 2009 que contemplara reducciones de impuestos. De forma por demás polémica, Jean aceptó dicha propuesta y decretó una prórroga parlamentaria hasta finales de enero de 2009, ateniéndose a la segunda regla de prudencia, que dicta: “Los poderes discrecionales del gobernador general están disponibles y deberán usarse para resolver cualquier *impasse* constitucional al que se enfrente un gobierno de minoría después de unas elecciones federales generales” (McWhinney, 2005: 169).

Así, apoyándose en esta segunda regla de prudencia, la gobernadora general desautorizó el gobierno de coalición programado por la oposición, ya que en el sistema Westminster ningún gobierno puede entrar en operaciones con un Parlamento cerrado por orden directa del representante de la Corona. De esta forma, la oficina de Jean jugó su papel protagónico en uno de los capítulos más polémicos y turbios de la historia política canadiense contemporánea.

Lo más grave fue que con su acción, Michaëlle Jean no sólo cerró el Parlamento y desbarató un gobierno concertado por los tres partidos políticos opositores al Conservador, sino que además fue parte activa de un complot elaborado desde las oficinas del primer ministro, en una acción que bien podría definirse como un autogolpe de Estado, al cerrar un Parlamento con mayoría opositora para mantener a toda costa en el poder a la administración en funciones. Con esta estrategia, Harper logró aferrarse al poder en una acción que podría calificarse de legal, pero que es indebida, sobre todo porque entre sus justificaciones para permanecer en el cargo sobresalían aquellas en donde afirmaba que el gobierno de coalición propuesto por la mayoría opositora era en realidad un golpe de Estado dirigido por separatistas y socialistas (Gidluck, 2012: 197).

En medio de todos estos acontecimientos, uno de los protagonistas, el neodemócrata Brian Topp, quien fungiera como operador y enlace para concretar el anuncio de este primer gobierno coaligado para Canadá, llegó a afirmar poco después de su desarticulación lo siguiente: “Los eventos de noviembre de 2008 nos enseñaron que la oficina del gobernador general no es garantía para nuestra democracia parlamentaria, y que la Cámara de los Comunes necesita de manera urgente tomar los pasos necesarios para defender su papel central en nuestro sistema de gobierno” (Topp, 2010: 184).

Al mismo tiempo del cierre temporal parlamentario orquestado desde las altas cúpulas del poder en Canadá, al interior del Partido Liberal se orquestó

una rebelión dirigida por las esferas más poderosas del partido para remover a su líder, Stéphane Dion, tras cuestionarlo por su escasa habilidad y profesionalismo durante el proceso para concretar el gobierno de coalición. Era claro que nadie tenía la culpa en particular, pero Dion, como líder del partido, era a quien se quería responsabilizar de lo ocurrido (Trudeau, 2014: 227).

No obstante, en realidad lo que le reprocharon las elites liberales fue su decisión de pactar con la izquierda neodemócrata sin haber solicitado el visto bueno de los jefes del partido. Y es que en realidad estos últimos observaban con desdén la posibilidad de cogobernar con un partido que había venido cuestionando muchas de las viejas prácticas parlamentarias y de gobierno en Canadá, como lo es el Partido Neodemócrata que, deberá recordarse, ha insistido desde hace décadas en renovar las prácticas parlamentarias canadienses y reformar su operatividad. Un ejemplo de ello es su insistencia en suprimir el Senado debido a su limitada utilidad.

Por esta razón Dion fue empujado a renunciar a su cargo, y en su lugar se impuso a un académico neoconservador descendiente de la aristocracia zarista, Michael Ignatieff, quien de inmediato desconoció la alianza para formar un gobierno coaligado con el NDP, al calificarla como ilegítima e impulsada por perdedores (Ibbitson, 2015: 288). Lo anterior significó el reconocimiento *de facto* del gobierno conservador de Harper, lo que se expresó a través del apoyo parlamentario liberal, cuyos representantes votaron en favor del nuevo proyecto presupuestal de 2009. Lo anterior permitió al primer ministro continuar con su gestión.

Quizá lo más trascendente para la segunda administración de Harper fue no tanto el apoyo liberal al ejercicio presupuestal mencionado, sino más bien el grave distanciamiento entre la fracción liberal respecto de los MP neodemócratas y del Bloque Quebequense, ya que pese a ser mayoría, tales partidos no lograrían unificar posturas y constituirse en una amenaza seria para el minoritario Partido Conservador en el poder. Lo anterior se acentuó una vez que la dirigencia neodemócrata afirmara irónicamente que, pensándolo bien, sí existía una coalición gobernante en el Parlamento canadiense, la conformada entre liberales y conservadores (Lavigne, 2014: 174).

En este contexto de división opositora, Harper buscó el apoyo parlamentario del Partido Liberal para extender la misión militar canadiense en Afganistán más allá de 2008, extensión que por cierto contravenía lo establecido previamente por las administraciones liberales en el poder pocos años antes.

Al respecto, el Partido Neodemócrata insistió en respetar los plazos convenidos y acordados por todos los partidos en el documento original, manifestando así su inconformidad con prolongar las operaciones de personal militar canadiense en dicho país.

Resulta necesario señalar que el tema de la extensión de operaciones militares canadienses en Afganistán se convirtió en un asunto prioritario para Harper, ya que él mismo lo utilizó para propagar la narrativa de que Canadá era un país con una amplia trayectoria de operaciones militares en el exterior, basada tanto en el heroísmo de sus fuerzas armadas, como en el valor de sus ciudadanos, quienes no verían con orgullo cómo su primer ministro decidía claudicar y cancelar los compromisos con sus aliados en territorio afgano (Gutsten, 2014: 229).

No obstante la polémica generada al interior de la Cámara de los Comunes, al final las negociaciones entre el liderazgo liberal y el primer ministro conservador permitieron al gobierno de Harper extender la misión canadiense con el aval parlamentario gracias a la adhesión de los liberales, pues debe recordarse que hasta ese momento el Partido Conservador no contaba aún con la mayoría legislativa para aprobar leyes sin necesidad de negociar con otras fracciones. Debe insistirse en que esta decisión contrastó con la postura neodemócrata, cuya dirigencia se pronunció por repatriar a todo el personal militar desplegado en Afganistán debido al elevado número de bajas canadienses que venían registrándose semana tras semana por aquellos años.

Empero, esta dinámica de cooperación entre liberales y conservadores se rompería en 2009, a partir de que el primer ministro ignoró de manera sistemática las solicitudes liberales por aclarar las cuentas públicas. Por ello, el Partido Liberal buscó el apoyo parlamentario neodemócrata para derribar al primer ministro y así adelantar las elecciones federales; sin embargo, en esta ocasión fue el Partido Neodemócrata el que decidiría no sumarse a la iniciativa, ello tras lograr un incremento en el apoyo gubernamental para los desempleados en el país debido a la crisis global de 2008-2009. Así, tras las mencionadas negociaciones parlamentarias con el Partido Conservador, los diputados neodemócratas resolvieron abstenerse en las votaciones al interior de la Cámara de los Comunes, dejando sin el número necesario de sufragios a la iniciativa de los liberales, quienes sólo contaron en ese momento con el apoyo del Bloque Quebequense.

La postura asumida por el líder liberal Michael Ignatieff fue considerada soberbia y arrogante por parte del NDP, ya que afirmaban que había lanzado

su propuesta de voto de censura en contra del primer ministro sin siquiera consultar a las otras fracciones de la oposición, asumiendo que los otros partidos iban a sumarse. En realidad, esta falla del liderazgo del Partido Liberal reveló la poca habilidad y conocimiento de Ignatieff, ya que desde una minoría parlamentaria tiene que considerarse siempre detenidamente a cada uno de los oponentes para lograr así imaginar qué piensa cada uno y cómo reaccionarían ante este tipo de propuestas (Lavigne, 2014: 182).

Debido a su poca pericia, a partir de este revés parlamentario el liderazgo liberal menguó al interior de la Cámara de los Comunes, al tiempo en que el gobierno conservador fortalecía cada vez más su posición; sin embargo, el tema de Afganistán seguiría atrayendo la atención en Canadá, sobre todo por los informes de grupos de la oposición en el Parlamento, que señalaban posibles casos de tortura por parte de personal militar canadiense en la nación asiática. Esto volvió a colocar al gobierno conservador en el centro del debate nacional, ya que la oposición mayoritaria lo acusaba de ocultar información debido a su contenido y gravedad.

De este modo, el tema de las presuntas torturas por parte de militares canadienses en Afganistán se convirtió en otra amenaza para la continuidad del gobierno minoritario de Harper, que si bien había logrado con éxito dividir a la oposición, la sorpresa que causaron entre la opinión pública los señalamientos de acciones indebidas por parte de la milicia canadiense y la forma en que el gobierno conservador había ocultado tal información, dejaba a Harper sin muchos márgenes de maniobra. Por ello, previendo una posible convocatoria adelantada a elecciones, el primer ministro decidió prorrogar el Parlamento por segunda ocasión, esta vez con el argumento de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno Vancouver 2010. Esta prórroga fue avalada de nueva cuenta por la gobernadora general, quien le otorgó el tiempo necesario a Harper para negociar por separado el asunto de Afganistán con los líderes de la oposición, solicitándoles discrecionalidad absoluta como condición para revelarles todos los documentos que involucraran las operaciones militares canadienses en dicho país.

Este nuevo capítulo separó aún más a la oposición parlamentaria, pues los liberales y el Bloque Quebequense decidieron acceder a las condiciones del gobierno para conocer los detalles de las acusaciones de tortura, no así el Partido Neodemócrata, que desde el principio rechazó cualquier tipo de condición para hacer pública la información.

Esta nueva fractura entre la mayoría opositora al interior de la Cámara de los Comunes fue generando condiciones favorables para que el Partido Conservador pudiera aspirar a ganar la mayoría en unas nuevas elecciones federales anticipadas. El problema radicaba de nueva cuenta en que el primer ministro no estaba dispuesto a asumir el costo político de adelantar de nuevo un proceso electoral. Por ello, en una nueva estrategia decidió provocar a la oposición para que ellos fueran los que lo solicitaran. La forma en que logró hacerlo fue a través de sus negativas constantes a revelar los fondos destinados al gasto de defensa, argumentando que éstos eran temas que involucraban la seguridad nacional y que, por ello, en su calidad de comandante de las Fuerzas Armadas, el primer ministro no estaba en posibilidades de revelar tal información.

De esta manera, ante las negativas constantes por parte de Stephen Harper, la mayoría opositora no tuvo otra alternativa que emitir un voto de falta de confianza en contra de su gobierno, ello pese a que todas las encuestas colocaban al Partido Conservador en una posición inmejorable para obtener finalmente la mayoría parlamentaria. Así, en el proceso electoral de mayo de 2011 los conservadores, con Harper al frente, consolidaron su posición como partido dominante en el escenario político tras alcanzar por fin un gobierno de mayoría, al obtener 166 de los 308 asientos en disputa. A partir de ese momento, y ya sin frenos parlamentarios de por medio en la Cámara de los Comunes, el gobierno puso en marcha una serie de reformas de alcance nacional, así como una agenda más protagónica a nivel internacional.

Aquellas incluyeron recortes presupuestales federales, cuyas consecuencias se dejaron sentir en diversos ramos sociales y de salud. Posteriormente, los escándalos en el Senado concentraron la atención de la opinión pública entre 2012 y 2013, a partir de que se dio a conocer que diversos legisladores de extracción conservadora habían incurrido en actos de corrupción. Estos hechos fueron creciendo al involucrar de manera directa al primer ministro y a diversos colaboradores cercanos.

El nivel de escándalo que se generó por las acusaciones de desvío de recursos entre senadores de extracción conservadora ciertamente menguó la buena imagen del primer ministro, pues la atención mediática hacia el hecho fue constante y se transformó en un asunto de falta de ética al interior de su gobierno. De este modo, y aprovechando el mal momento conservador, el Partido Neodemócrata, en su papel de principal partido de oposición, presionó a Harper para que explicara con claridad, ante la opinión pública, qué



había sucedido con los desvíos en el Senado, y no sólo eso, sino que exigió a través de su líder, Thomas Mulcair, una rendición de cuentas y transparencia en los fondos públicos, al mismo tiempo en que culpó a Harper de ser el responsable de toda la situación por haber fomentado una cultura de la corrupción en su partido (*Global News*, 2018).

Esta presión política y la insistencia opositora de incluir el tema en los debates de la Cámara de los Comunes llevaron finalmente al primer ministro Harper a prorrogar por tercera ocasión el Parlamento, en septiembre de 2013, argumentándole en esta ocasión al nuevo gobernador general, David Johnston, la necesidad de reorganizar el presupuesto público para presentarlo a inicios del mes siguiente durante el Discurso del Trono. En esta oportunidad la oposición neodemócrata señaló que esta nueva prórroga buscaba fundamentalmente evitar el periodo de preguntas y respuestas en las siguientes sesiones de la Cámara baja, para eludir así la exposición mediática del primer ministro ante tan severas acusaciones. Por ello, en una carta abierta a la opinión pública, el entonces líder de la oposición, el neodemócrata Thomas Mulcair, afirmó: “Stephen Harper está estableciendo nuevos récords de prórrogas para evitar la rendición de cuentas. Él debe dejar de esconderse y llamar ahora mismo a reanudar labores en el Parlamento para hacer frente a las preguntas de los representantes del pueblo” (CBC News, 2013).

El resultado ciertamente benefició a Harper en el corto plazo, ya que congeló de un solo golpe todo el debate público respecto del desvío de dinero de sus senadores en la Cámara alta. De este modo, el recurso de la prórroga parlamentaria fue utilizado como un método efectivo de supervivencia política por su parte. Empero, lo más interesante de esta tercera y última fue que la solicitó desde un gobierno de mayoría con el claro objetivo de atemperar los ánimos y darle un poco de respiro a su administración para enfrentar los nuevos retos políticos que se avecinaban, los cuales, por cierto, muy pronto encontraron el cauce para atrapar la atención pública.

Fue así como a través de todo tipo de estrategias legales, Harper aprovechó las herramientas sistémicas del parlamentarismo para mantenerse en el poder, valiéndose para ello de todos los recursos a su alcance. Quizá algo de lo más trascendente es que fue, sin duda, uno de los primeros ministros que mejor supo aprovechar los resquicios y la rigidez del sistema para conservar el cargo. Aquí el problema es que el sistema político de Canadá fue fundado con el objetivo de lograr consensos, con base sobre todo en la buena voluntad,

en un ejercicio conocido como *responsible government*, el cual al mismo tiempo expresa un abierto respeto a sus añejas instituciones por parte de los gobernantes en turno.

Lo anterior se manifiesta a través de una serie de ejercicios y prácticas que han llevado a cabo los tradicionales partidos con mayor poder en Canadá, es decir, el Liberal y el Conservador, los cuales, tras alcanzar acuerdos pragmáticos mutuos, han conseguido dar paso a una sorprendente gobernabilidad y estabilidad políticas a lo largo de más de siglo y medio.

Así, las reformas en materia de seguridad puestas en marcha en la primavera de 2015 pueden considerarse uno de los capítulos más recientes que expresan esta confluencia de intereses en favor de la gobernabilidad interna a través de la operación minuciosa y bien planificada de acuerdos parlamentarios. Todo eso comenzó un año antes con la serie de incidentes en territorio canadiense que involucraron a individuos afines a grupos terroristas del Medio Oriente, y entre los que destaca sin duda alguna el tiroteo al interior del Parlamento en Ottawa en octubre del cual ya se habló previamente.

Estos acontecimientos sirvieron para que el gobierno del primer ministro presentara un ambicioso programa de reformas en materia de seguridad, generando una gran polémica en el país por considerarlas como un amasijo enorme y draconiano que involucraba temas de seguridad nacional, además de que el mandatario buscaba, a través de una nueva prórroga parlamentaria, limitar el debate en torno a la misma (Mulcair, 2015: 175).

Sin embargo, ésta no se concretó una vez que se hizo evidente que el Partido Liberal apoyaría tal reforma. Por ello, este paquete de enmiendas al sistema de seguridad detonó acaloradas discusiones en la Cámara de los Comunes entre el gobierno y la oposición. Así, una vez aprobada por la mayoría conservadora-liberal la propuesta C-51, serviría para poner de manifiesto, una vez más, los acuerdos fácticos entre las históricas y fundadoras fracciones parlamentarias canadienses.

De este modo, es interesante saber cómo, no obstante contar con la mayoría suficiente para sacar adelante esta controvertida reforma en materia de seguridad y libertades individuales, Stephen Harper encontró la manera de sumar a su reforma a los MP liberales, colocándola como un asunto aprobado por una clara mayoría en ambas cámaras. Lo anterior tuvo la intención de desacreditar las voces en contra de la enmienda, ya que prácticamente dos terceras partes de la Cámara de los Comunes la habían aprobado, y ello le

otorgaba la legitimidad suficiente. Lo dicho, claro está, sin contar su amago de prórroga parlamentaria en el caso de percibir amenazada la concreción de su paquete de seguridad.

Para finalizar debe añadirse que las elevadas aptitudes de Harper para mantenerse en el poder, así como su claro dominio del complejo sistema parlamentario, fueron elementos que le alcanzaron para extender su mandato durante más de nueve años y medio; no obstante, más allá de la temporalidad de su gobierno, lo cierto es que Canadá se encuentra en un franco proceso de redefinición de valores, en donde el tradicional, benigno y tolerante conservadurismo se enfrenta con otro más pragmático y excluyente.

Este espíritu conservador que ha dominado las estructuras políticas desde hace muchas décadas, y que encuentra en su Parlamento un seguro cobijo, se hace presente tanto al interior del propio Partido Conservador como también en el Partido Liberal. Prueba de ello es que durante el mandato de Justin Trudeau, quien ganó la primera magistratura después de una aplastante victoria electoral en octubre de 2015, tras alcanzar 184 de los 338 asientos en disputa, hoy más que nunca los valores multiculturales, la tolerancia y la tradicional bondad canadiense se han visto cuestionados por sectores sociales que no distinguen muchas variantes entre los planes de gobierno del conservador Harper y el liberal Justin Trudeau. La razón parecería obedecer a que ambos gobiernos parecen venir mimetizándose sin grandes dificultades en una considerable variedad de temas, ya que el estilo atractivo y relajado de Justin Trudeau, y el estilo parco y áspero de Stephen Harper se conjugan cuando así conviene a los grandes intereses canadienses, los cuales bien pueden identificarse tanto al interior del país entre sus elites, como en el exterior a través de sus corporativos empresariales.



## CONCLUSIONES

Como ha podido observarse, el parlamentarismo británico conocido como sistema Westminster se ha convertido en un ente político que ha evolucionado de manera ininterrumpida a lo largo de ochocientos años. Este esquema, que surgió de la necesidad para alcanzar acuerdos y soluciones en un mundo medieval, fue desarrollando alcances ilimitados en el manejo del poder por parte de los súbditos de la Corona inglesa a principios del siglo XIII. Si bien en sus orígenes los ejercicios de asambleas de notables reunidos alrededor del rey se utilizaron más bien como un instrumento de delegación de poder, muy pronto serviría para que la ascendente burguesía medieval encontrara mecanismos para cuestionar al monarca y limitar sus excesos.

La fuerza de este grupo social provino de su condición de representantes electos por sus comunidades, lo que sin duda otorgó extensos márgenes de legitimidad a sus demandas de mayor atención y sensibilidad por parte de las autoridades. Así, como encargados de salvaguardar los intereses de sus localidades frente al monarca en turno, los representantes del pueblo reunidos en asambleas, y posteriormente en parlamentos, se convirtieron en “comunes”, pues ahí en esa sala se reunían los súbditos sin jerarquía social ni religiosa a discutir las problemáticas más comunes de la gente común.

Conforme pasaban los siglos, esta Cámara iría eclipsando el poder divino de la realeza y el social y cultural de la aristocracia inglesa asentados en su Cámara de los Lores, llegando incluso a erigirse en el paradigma de la representación, la democracia, la justicia y la estabilidad en todo el Reino. Este ejercicio constante fue creando leyes y reglamentos hasta llegar a constituir modos de vida y prácticas legales que encontraron sustento y legitimidad en normas jurídicas no escritas pero sí vigentes con base en los usos y costumbres. Esto último se convirtió en la esencia del espíritu cultural, de las prácticas jurídicas y del estilo político inglés y posteriormente británico.

De este modo, las dinámicas parlamentarias inglesas fueron reduciendo la influencia y el poder de la monarquía en turno y, al mismo tiempo, extendiendo la hegemonía y los alcances de la nueva burguesía, que reivindicaba su sitio, pues se componía de los principales y más importantes contribuyentes del Reino.

Por esa razón, en el siglo *xvi* los intereses del Reino tuvieron que separarse definitivamente en dos cámaras, una reservada para los aristócratas con abolengo y los enviados de la Iglesia (Cámara de los Lores), y otra compuesta por los representantes de los caballeros de las villas y las burguesías locales (Cámara de los Comunes). En esta última, la reforma protestante del *xvi* cobró mayor importancia al convertirse en un signo de lealtad al soberano. Sin embargo, la rivalidad de la Corona protestante anglicana con las monarquías católicas de Europa obligó a los monarcas ingleses y británicos a depender más de sus súbditos, pues debieron solicitarles mayores recursos económicos para enfrentar los desafíos militares que provenían de la parte continental del viejo mundo, principalmente de Francia y España.

Esta necesidad de la Corona inglesa trajo consigo la oportunidad de que los comunes interiorizaran su propia importancia como elementos imprescindibles para la supervivencia del poder real, por lo que exigieron mayores espacios y garantías constitucionales para su gremio. Su éxito fue tal que no sólo terminaron por someter a la monarquía, sino que también la dejaron en una posición de vulnerabilidad incluso al momento de recibir recursos para su propia subsistencia. Sin duda, como pudo observarse a lo largo de esta obra, uno de los pilares que manifiestan el poder de la Cámara de los Comunes en el sistema Westminster es su capacidad exclusiva para legislar en materia hacendaria, convirtiéndola en el único organismo de gobierno capaz de intervenir directamente en los bolsillos del pueblo. Es por eso, precisamente, que un primer ministro en el esquema Westminster funge al mismo tiempo como el encargado de las finanzas y de los asuntos hacendarios, en un ejercicio que pone de manifiesto su poder.

Así, a partir de la consolidación en ese rubro de los comunes y su cámara, el crecimiento del parlamentarismo significó el mantenimiento y la ampliación de sus capacidades, de modo que finalmente, con la aparición de los primeros partidos políticos en los siglos *xviii* y *xix*, terminó por constituirse el cuerpo de este poderosísimo órgano legislativo que gobierna en Gran Bretaña.

Esta nueva modalidad parlamentaria, en donde los representantes se dividían en agrupaciones políticas para contender por los asientos en el Parlamento británico, pronto determinó las nuevas dinámicas legislativas, ya que los miembros del Parlamento comenzaron a seguir agendas políticas de acuerdo con la línea ideológica de su respectiva agrupación, y no solamente las directrices del patrocinador o acaudalado patrono que impulsaba las carreras políticas de los comunes. Durante esta etapa también las agrupaciones obreras y de trabajadores comenzaron a tener incidencia en la política británica, una vez que sus representantes comenzaron a alcanzar escaños parlamentarios desde los cuales exigían atender sus demandas de clase.

En lo que corresponde a los métodos de elección para los integrantes de la Cámara de los Comunes, pudo observarse que éstos variaron y fueron adaptándose con el transcurso del tiempo, al pasar de esquemas de nombramiento directo de diputados que representaban condados específicos, hasta llegar a marcos electorales tan diferentes y complejos como los actuales que funcionan en los países que se rigen por el sistema parlamentario Westminster.

Por otra parte, en cuanto a los procesos de reorganización política al interior del Parlamento británico que se vivieron en los últimos siglos, sobresale que los hábitos y estilos legislativos de negociación y construcción de acuerdos que se lograron en Gran Bretaña eventualmente se aplicaron y reprodujeron de varias formas en otras naciones cercanas, como Escocia, Gales, Irlanda e Irlanda del Norte, en donde el dominio de Londres fue intenso y absoluto, pues costaría varios siglos y múltiples conflictos sociales y militares imponerlos finalmente en toda Gran Bretaña, tal y como se señaló en su oportunidad.

En lo que toca a las colonias y dominios británicos alrededor del mundo, este mecanismo político de gobierno, que en ellos se consolidó en formas de autogestión, encontró en los colonos británicos a sus ejecutores ideales, ya que exportaron el modelo a diversos rincones del planeta durante la etapa imperial británica y desde ahí buscaron implantar sus hábitos políticos para lograr estabilidad en regiones muy alejadas de la metrópoli. Tal es el caso de países como Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.

Para el caso canadiense que atañe a este trabajo, pudo comprenderse cómo sus elites resolvieron, desde el reconocimiento —por parte de la Corona y su Parlamento— de Canadá como una comunidad autónoma en 1867,

adoptar el modelo parlamentario británico en su versión más estricta, y no sólo eso, sino también mantenerlo incólume con el paso de los siglos. Uno de los elementos que distinguen este conservadurismo político canadiense es, sin duda, la persistencia de su sistema electoral *first past the post*, que constituye el paradigma de la exclusión política para los nuevos actores y, al mismo tiempo, el máximo ejemplo de lo que representa el monopolio bipartidista liberal-conservador en cualquier versión Westminster. El motivo de esta afirmación es que después de revisar los antecedentes históricos y el funcionamiento del sistema político-electoral en otras naciones de Gran Bretaña es un hecho probado que el régimen político canadiense es el más conservador de todos.

Por ejemplo, basta recordar que en Gales, Escocia y en la Asamblea de Londres se utiliza el sistema electoral *mixed member proportional* (proporcional), y en Irlanda del Norte el *single transferable vote* (voto único transferible), que garantizan la equidad partidista y la gobernabilidad. En ambos casos las coaliciones de gobierno llevan a las autoridades a mostrarse más tolerantes y abiertas y, por ende, a alcanzar acuerdos y a evitar arbitrariedades en el uso del poder.

De igual modo, países como Australia y Nueva Zelanda utilizan la segunda vuelta instantánea, de manera particular el primero, conocida en inglés como *instant-runoff voting* o *alternative vote*, en donde los aspirantes con más votos netos a nivel nacional se imponen gracias al despliegue de varias rondas de votación implícitas en un solo sufragio, pues se enumeran los candidatos de preferencia del más al menos favorecido. Por su parte, en Nueva Zelanda se lleva a cabo también el sistema *mixed member proportional*, que otorga asientos por mayoría de acuerdo con el esquema “del ganador se lleva todo”, pero también a través de listas plurinominales en donde los partidos con mayores votos asignan diputados a la Cámara de los Comunes. Estos dos sistemas buscan eliminar el bipartidismo, con la finalidad de ampliar el espectro político hacia los partidos pequeños

Sin embargo, en Canadá todavía se utiliza exclusivamente el sistema *first past the post*, que genera mayorías artificiales por las razones ya expuestas, lo que ha beneficiado a liberales y conservadores al garantizarles el acceso al poder de manera ininterrumpida desde 1867. En este sentido, debe recordarse que sólo la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña es el otro único organismo parlamentario que mantiene este mismo esquema electoral, con



la salvedad de que los gobiernos de coalición han sido un elemento común en la práctica de gobierno británica, no así en Canadá, que ha rechazado abiertamente esa posibilidad con argumentos tan falaces como que ese tipo de gobiernos son el resultado de la unión entre perdedores o *losers*.

Desde luego, como ha podido observarse esta dinámica que practican las autoridades liberales y conservadoras canadienses tiene como intención excluir a terceros partidos de la posibilidad de convertirse en protagonistas con incidencia directa en los gobiernos de coalición. En la actualidad estos hábitos, de limitarse a mantener solamente gobiernos de minoría o mayoría, tienen como dedicatoria especial alejar del poder a la izquierda partidista, representada en Canadá por el Partido Neodemócrata (NDP). El NDP mantiene tradicionalmente una agenda progresista, incluyente y crítica hacia diversas estructuras del poder en Canadá, de manera particular hacia el Senado. Es ahí precisamente donde radica una de las banderas de la izquierda partidista, ya que consideran que dicho organismo es poco funcional. De hecho, éstos fueron los mismos argumentos que se expusieron en Nueva Zelanda para eliminar su Senado desde mediados del siglo xx.

A lo anterior debe añadirse al análisis reciente de la figura del expresidente ministro canadiense Stephen Harper, quien más allá de sus proyectos y estilo de gobierno, no cabe duda de que fue un personaje que expuso quizá más que ningún otro en su lugar las grandes áreas de oportunidad de que dispone el sistema parlamentario de ese país, pues desde la primera magistratura logró reafirmar su posición, y gracias a su instinto político, además de a su buen manejo de los tiempos legislativos, pudo llevar adelante sus administraciones minoritarias, y posteriormente consolidar su posición como eje rector de la vida política nacional a través de un gobierno de mayoría, de 2011 a 2015.

Y es que precisamente fue la actividad política de Harper la responsable de exteriorizar los defectos del sistema parlamentario canadiense a través del uso y abuso de las prórrogas parlamentarias en momentos críticos de su administración, para salvar su posición como jefe de gobierno. Para lograr lo anterior, aprovechó que la tradicional práctica de “gobierno responsable” utilizada por siglo y medio en Canadá evitó muchos de los excesos parlamentarios en los que puede incurrir un primer ministro en funciones para garantizar su permanencia. En este sentido, sin el menor recato Harper utilizó las herramientas legales a su alcance para estos fines, con argumentos tan disímiles como no interferir en la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno

de Vancouver en 2010 o evitar la potencial llegada de socialistas, separatistas quebequenses y liberales, quienes en su opinión usurparían la democracia canadiense a través de gobiernos de coalición, ajenos a la práctica vigente.

Asimismo, los escándalos de corrupción entre miembros conservadores del Senado a partir de 2012 fueron también razones para que el primer ministro clausurara las labores parlamentarias, en un intento de parar las críticas en su contra. Sin duda, lo más sobresaliente fue que en estas tres ocasiones los objetivos de Harper se cumplieron a cabalidad, pues en los dos primeros casos se mantuvo en el poder, y en el tercero sofocó las duras críticas en su contra.

Así, después de un repaso histórico-político del parlamentarismo británico y de su llegada y funcionamiento en Canadá, no debe quedar lugar a dudas de que este sistema es viejo pero actual; no es democrático en esencia pero sí es representativo; de sus entrañas pueden desprenderse acciones legales pero no siempre legítimas y que puede ser contradictorio pero nunca obsoleto. Lo que también puede afirmarse es que el modelo Westminster es la respuesta más sólida y contundente del individualismo capitalista al despotismo aristócrata europeo.

En América, el sistema Westminster se instaló en territorio canadiense para garantizar las canonjías de sus temerosas elites, las cuales elaboraron, reinterpretaron y adoptaron una serie de principios democráticos británicos y los transformaron en una pesada coraza que protegió los intereses de los hombres más poderosos en el siglo XIX, conocidos en la historia canadiense como los padres fundadores; casi todos ellos formaban parte de dos grupos en común; uno de blancos, anglosajones y protestantes, y otro de blancos católicos de origen francés. Ambos grupos, poderosos y elitistas, se subdividieron a su vez en dos agrupaciones políticas: el Partido Liberal y el Partido Conservador. Desde ahí masificarían sus intereses, principios e ideología para dominar a una nación multicultural que ha mantenido desde hace más de siglo y medio una estructura política que en el resto del mundo Westminster ya ha sufrido adaptaciones y cambios, pero que en el caso de Canadá permanece incólume y altiva en pleno siglo XXI.

## BIBLIOGRAFÍA

ACKROYD, PETER

- 2014 *Rebellion. The History of England from James I to the Glorious Revolution*. Nueva York: Thomas Dunne Books.
- 2011 *Foundation. The History of England from its Earliest Beginnings to the Tudors*. Nueva York: Thomas Dunne Books.

AGUIRRE, PEDRO, coordinador

- 2001 *Reino Unido*, col. “Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos”, no. 12. Ciudad de México: Instituto Federal Electoral.

AP ARCHIVE

- 1999 “UK: Blair Speech Parliament on N. Ireland Peace Process”, en <<http://www.aparchive.com/metadata/uk-blair-speech-to-parliament-on-n-ireland-peace-process/>>, consultada en septiembre de 2016.

ARDILL, JOHN ROCHE

- 1907 *The Closing of the Irish Parliament*. Dublín: Hodges, Figgis & Co.

BAMBERY, CHRIS

- 2014 *A People's History of Scotland*. Londres: Verso.

BANFIELD, C. ANDREW

- 2015 “Canada”, en Brian Galligan y Sctott Brenton, eds., *Constitutional Conventions in Westminster Systems*. Cambridge: Cambridge University Press.

BARDON, JONATHAN

2012 *The Plantation of Ulster. The British Colonization of the North of Ireland in the Seventeenth Century*. Dublín: Gill Books.

BBC (BRITISH BROADCASTING COMPANY)

2016 “The Last Scottish Parliament”, en <<http://www.bbc.co.uk/news/special/politics97/devolution/scotland/briefing/1707.shtml>>, consultada en noviembre de 2016.

BBC HISTORY

2017 “The 1798 Irish Rebellion”, en <[http://www.bbc.co.uk/historie/british/empire\\_seapower/irish\\_reb\\_01.shtml](http://www.bbc.co.uk/historie/british/empire_seapower/irish_reb_01.shtml)>, consultada en junio de 2017.

BBC NEWS

2018a “Welsh Referendum Analysis: Wales ‘United in Clear Vote’”, en <<http://www.bbc.com/news/uk-wales-12653025>>, consultada en enero de 2018.

2018b “Welsh Referendum: Voters Give Emphatic Yes on Powers”, en <<http://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-12648649>>, consultada en enero de 2018.

2016a “On this Day. 1972: UK Unemployment Tops One Million”, en <[http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/20/newsid\\_2506000/2506897.stm](http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/20/newsid_2506000/2506897.stm)>, consultada en octubre de 2016.

2016b “UK Net Migration Levels ‘Unsustainable’, Says David Cameron”, en <<http://www.bbc.com/news/uk-politics-35055355>>, consultada en octubre de 2016.

2016c “Vote 2011: UK Rejects Alternative Vote”, en <<http://www.bbc.com/news/uk-politics-13297573>>, consultada en octubre de 2016.

2016d “Scotland Decides”, en <<http://www.bbc.com/news/events/scotland-decides/results>>, consultada en octubre de 2016.

2016e “MPs Give Green Light to EU Referendum Bill”, en <<http://www.bbc.com/news/uk-politics-23205134>>, consultada en octubre de 2016.

BEVERIDGE, SIR WILLIAM

- 1942 “Social Insurance and Allied Services, Report”, en <<http://www.who.int/bulletin/archives/78%286%29847.pdf>>, consultada en junio de 2017.
- 1832 “Commentaries of the Laws of England: in Four Books; with an Analysis of the Work”. Nueva York: W. E. Dean Printer.

BHO (BRITISH HISTORIE ONLINE)

- 2017 “Charles I, 1640: An Act for the Speedy and Effectuall Reducing of the Rebels in his Majesties Kingdome of Ireland to their Due Obedience to His Majesty & the Crowne of England (1819)”, en <<http://www.british-historie.ac.uk/statutes-realm/vol5/pp168-172>>, consultada en junio de 2017.

BIBLIOTECA VIRTUAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, UNAM

- 2016 “La declaración de derechos (*The Bill of Rights*) (13 de febrero de 1689)”, en <<http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/www.bjv/libros/6/2698/20.pdf>>, consultada en junio de 2016.

BLACKSTONE, SIR WILLIAM

- 1832 *Commentaries of the Laws of England in Four Books; with an Analysis of the Work*. Nueva York: W. E. Dean Printer.

BOURRIE, MARK

- 2015 *Kill the Messengers. Stephen Harper's Assault on Your Right to Know*. Toronto: Harper Collins Publishers Ltd.

BOYER, J. PATRICK

- 2014 *Our Scandalous Senate*. Toronto: Dundurn.

BROWN, CRAIG

- 2002 *The Illustrated History of Canada. A Canadian Classic Now Completely Revised*. Toronto: Key Porter Books.

BROWN, LORNE y DOUG TAYLOR

- 2012 *Medicare's Birth in Saskatchewan. 50th Anniversary of a People's Victory*. Canadá: CreateSpace.

BURNS, WILLIAM E.

2010 *A Brief History of Great Britain*. Nueva York: Checkmark Books.

CAIN ULSTER UNIVERSITY

2016 “The Civil Rights Campaign: A Chronology of Main Events”, en <<http://cain.ulst.ac.uk/events/crights/chron.htm>>, consultada en septiembre de 2017.

1969 *Northern Ireland. The Plain Truth, Issued by the Campaign for Social Justice in Northern Ireland*. Castlefields; Dungannon, en <<http://cain.ulst.ac.uk/events/crights/pdfs/truth.pdf>>, consultada en septiembre de 2017.

CAMPION-SMITH, BRUCE

2008 “Immigration Reform Passes in Commons”, en <[https://www.thes-tar.com/news/canada/2008/06/03/immigration\\_reform\\_passes\\_in\\_commons.html](https://www.thes-tar.com/news/canada/2008/06/03/immigration_reform_passes_in_commons.html)>, consultada en marzo de 2018.

CANADA HISTORY

2018 “Lord’s Durham Report on the Affairs of British North America”, en <[http://www.canadahistory.com/sections/eras/reform/durham\\_report.htm](http://www.canadahistory.com/sections/eras/reform/durham_report.htm)> consultada en febrero de 2018.

CARRELL, SEVERIN

2007 “Scotland in 2017: Independent and Flush with Oil, Says Salmond”, *The Guardian*, en <<https://www.theguardian.com/politics/2007/nov/14/scotland.devolution1>>, consultada en noviembre de 2016.

CBC NEWS

2016a “Patrick Brazeau Returns to Senate After 3-Year Legal Saga”, en <<http://www.cbc.ca/news/politics/brazeau-senate-legal-saga-1.3780361>>, consultada en febrero de 2018.

2016b “Senator Pamela Wallin Won’t Face RCMP Charges over Expenses”, en <<http://www.cbc.ca/news/politics/pamela-wallin-rcmp-investigation-1.3589497>>, consultada en febrero de 2018.

2013 “Prorogation Official as GG Grants PM Harper’s Request”, en <<http://www.cbc.ca/news/politics/prorogation-official-as-gg-grants-pm-harper-s-request-1.1829448>>, consultada en marzo de 2018.

2008 “Liberals, NDP, Bloc Sign Deal on Proposed Coalition”, en <<http://www.cbc.ca/news/canada/liberals-ndp-bloc-sign-deal-on-proposed-coalition-1.700119>>, consultada en marzo de 2018.

CHASTENET, JACQUES

1947 *El Parlamento de Inglaterra*. Buenos Aires: Argos.

CHHIBBER PRADEEP K. y KEN KOLLMAN

2004 *The Transformation of National Party Systems. Federalism and Party Competition in Canada, Great Britain, India and the United States*. Princeton: Princeton University Press.

CHURCHILL, WINSTON

2016 “PM Winston Churchill: Blood, Toil, Tears and Sweat”, en YouTube, <<https://www.youtube.com/watch?v=fKBR0igDPfM>>, consultada en septiembre de 2016.

CONSERVATIVE PARTY OF CANADA

2018 *Conservative Party of Canada-Canada's Official Opposition*, en <<https://www.conservative.ca/>>, consultada en febrero de 2018.

CURTICE, JOHN

2012 *2012 Scottish Local Government Elections*. Londres: Electoral Reform Society.

DIOS UNIVERSAL

2017 “Movimiento metodista”, en <<http://www.diosuniversal.com/Otras-Religiones/Movimiento-Metodista>>, consultada en noviembre de 2017.

DIXON, PAUL

2001 “British towards Northern Ireland, 1969-2000: Continuity, Tactical Adjustment and Consistent Inconsistencies”, en *British Journal of Politics and International Relations* vol. 3, no. 3, octubre.

DRYDEN, KEN

2010 *Becoming Canada*, Toronto: McClelland & Stewart.

DUVERGER, MAURICE

2014 *Los partidos políticos*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

ELECTIONS CANADA

2018 “General Election: October 19, 2015”, en <<http://www.elections.ca/content.aspx?section=ele&document=index&dir=pas/42ge&lang=e>>, consultada en marzo de 2018.

2016 “Past Elections”, en <<http://www.elections.ca/content.aspx?section=ele&dir=pas&document=index&lang=e>>, consultada en febrero de 2018.

ELECTIONS. NORTHERN IRELAND ELECTIONS

2017a “Dáil Elections since 1918,” en: <<http://www.ark.ac.uk/elections/gdala.htm>>, consultada en agosto de 2017.

2017b “Northern Ireland Elections Candidates in 1998”, en <<http://www.ark.ac.uk/elections/fa98cands.htm>>, consultada en octubre de 2017.

2017c “Northern Ireland Assembly Elections”, en <<http://www.ark.ac.uk/elections>>, consultada en octubre de 2017.

ELECTIONS STV

2016 “Single Transferable Vote”, en <<http://www.elections.org.nz/events/past-events-0/2011-referendum-voting-system/about-referendum-choices/stv-single-transferable>>, consultada en septiembre de 2016.

ENGLISH, RICHARD

2006 *Irish Freedom. The History of Irish Nationalism*. Hampshire: Pan Mcmillan.

E-REA

2017 “The Irish Catholic Clergy, Stuart Sovereignty and the 1650 Appeal to the Duke of Lorraine”, *E-rea. Revue électronique d'études sur le monde Anglophone*, en <<https://erea.revues.org/3734>>, consultada en junio de 2017.



FAUCHER-KING, FLORENCE y PATRICK LE GALÈS

2010 *The New Labour Experiment: Change and Reform under Blair and Brown*. Stanford: Stanford University Press.

FLANAGAN, TOM

2009a *Waiting for the Wave. The Reform Party and the Conservative Movement*. Montreal: McGill-Queen's University Press.

2009b *Harper's Team. Behind the Scenes in the Conservative Rise to Power*. Montreal: McGill-Queen's University Press.

FRESNEDA, CARLOS

2013 “Los 99 muros de Belfast”, en *El Mundo*, 18 de enero, en <<http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/18/internacional/1358496802.html>>, consultada en octubre de 2017.

GIDLICK, LYNN

2012 *Visionaries, Crusaders and Firebrands. The Idealistic Canadians Who Built the NDP*. Toronto: James Lorimer & Company.

GLOBAL NEWS

2018 “Mulcair: Harper Implicated in Senate Scandal, ‘Culture of Corruption’”, en <<https://globalnews.ca/news/920624/mulcair-harper-implicated-in-senate-scandal-culture-of-corruption/>>, consultada en marzo de 2018.

GOODARE, JULIAN

2009 “The Parliament of Scotland to 1707”, en Clyve Jones, ed., *A Short History of Parliament*. Suffolk: The Boydell Press.

GOVERNMENT UK

2016a “Sir Robert, Peel 2nd Baronet (1750–1830)”, en <<https://www.gov.uk/government/historie/past-prime-ministers/robert-peel-2nd-baronet>>, consultada en septiembre de 2016.

2016b “William Ewart Gladstone”, en <<https://www.gov.uk/government/historie/past-prime-ministers/william-ewart-gladstone>>, consultada en septiembre de 2016.

- 2016c “Past Prime Ministers, David Lloyd George, Liberal, 1916 to 1922”, en <<https://www.gov.uk/government/historie/past-prime-ministers/david-lloyd-george>>, consultada en septiembre de 2016.
- 2016d “House of Lords Reform”, en <<http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/houseoflords/house-of-lords-reform/overview/constitutionalcrisis/>>, consultada en septiembre de 2016.
- 2016e “Shadow Cabinet”, en <<http://www.parliament.uk/site-information/glossary/shadow-cabinet/>>, consultada en septiembre de 2016.
- 2016f “Committees”, en <<http://www.parliament.uk/about/how/committees/>>, consultada en septiembre de 2016.
- 2016g “European Communities Act 1972”, en <<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/contents>>, consultada en octubre de 2016.
- 2016h “Past Prime Ministers, James Callaghan Labour 1976 to 1979”, en <<https://www.gov.uk/government/historie/past-prime-ministers/james-callaghan>>, consultada en octubre de 2016.
- 2016i “The Belfast Agreement”, en <<https://www.gov.uk/government/publications/the-belfast-agreement>>, consultada en octubre de 2016.
- 2016j “Gordon Brown: Labour 2007 to 2010”, en <<https://www.gov.uk/government/historie/past-prime-ministers/gordon-brown>>, consultada en octubre de 2016.
- 2016k “PM’s Speech at Munich Security Conference”, en <<https://www.gov.uk/government/speeches/pms-speech-at-munich-security-conference>>, consultada en octubre de 2016.

GROFMAN, BERNARD, ANDRÉ BLAIS y SHAUN BOWLER, eds.

- 2009 *Duverger’s Law of Plurality Voting. The Logic of Party Competition in Canada, India, the United Kingdom and the United States*. Nueva York: Springer-Verlag.

GUTSTEN, DONALD

- 2014 *Harperism. How Stephen Harper and his Think Tank Colleagues Have Transformed Canada*. Toronto: James Lorimer & Company Ltd.

HAMILTON, ALEXANDER, JAMES MADISON y JOHN JAY

- 1998 *El Federalista*, Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

HARPER, STEPHEN

2018 “Harper Addresses Canadians on Proposed Coalition Dec. 3<sup>rd</sup>”, en YouTube <[https://www.youtube.com/watch?v=w3SsUBrUc\\_M](https://www.youtube.com/watch?v=w3SsUBrUc_M)>, consultada en marzo de 2018.

HARRIS, BOB

2009 “The House of Commons, 1707-1800”, en Clyve Jones, ed., *A Short History of Parliament*. Suffolk: The Boydell Press.

HARRIS, MICHAEL

2015 *Party of One. Stephen Harper and Canada's Radical Makeover*. Toronto: Penguin Random House Canada.

HERRÁN, JOSÉ CARLOS

2005 “La gran hambre irlandesa”, en <<https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/la-gran-hambre-irlandesa>>, consultada en junio de 2017. Madrid: Instituto Juan de Mariana.

HISTORY IRELAND

2017 “Adopting the ‘American Way’: Ireland and the Marshall Plan, 1947-1957”, en <<http://www.historieireland.com/20th-century-contemporary-historie/adopting-the-american-way-ireland-and-the-marshall-plan-1947-57/>>, consultada en agosto de 2017.

HOUSES OF THE OIREACHTAS

2017a “Parliament in Ireland”, en <<http://www.oireachtas.ie/parliament/about/historie/parliamentinireland/>>, consultada en agosto de 2017.

2017b “The First Seanad (1922)”, en <<http://www.oireachtas.ie/parliament/about/historie/parliamentinireland/seanadandpresident/>>, consultada en agosto de 2017.

IBBITSON, JOHN

2015 *Stephen Harper*. Toronto: Penguin Random House Canada.

## INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA

2018 “La clase política, Gaetano Mosca”, en <<http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/laclasepolitica.pdf>>, consultada en febrero de 2018.

## JEFFREY, BROOKE

2010 *Divided Loyalties. The Liberal Party of Canada, 1984-2008*. Toronto: University of Toronto Press.

## JENKINS, GERAINT H.

2008 *A Concise History of Wales*. Cambridge: Cambridge University Press.

## JOHNSON, DAVID

2011 *Thinking Government: Public Administration and Politics in Canada*. Toronto: University of Toronto Press.

## JONES, CLYVE

2009 “Post-devolution Legislatures”, en Clyve Jones, ed., *A Short History of Parliament*. Suffolk: The Boydell Press.

## JONES, CLYVE y STEPHEN FARRELL

2009 “The House of Lords, 1707-1800”, en Clyve Jones, ed., *A Short History of Parliament*. Suffolk: The Boydell Press.

## JORDAN, ANTHONY J.

2006 *W. T. H. Cosgrave, 1880-1965. Founder of Modern Ireland*. Dublín: Westport Books.

## KAM, J. CHRISTOPHER

2009 *Party Discipline and Parliamentary Politics*. Nueva York: Cambridge University Press.

## KIL BILL C-51

2018 en <<http://killc51.ca/Business>>, consultada en febrero de 2018.

KILLEEN, RICHARD

2012 *A Brief History of Ireland: Land People, History*. Filadelfia: Robinson & Running Press Books.

LAVIGNE, BRAD

2014 *Building the Orange Wave. The Inside Story behind the Historic Rise of Jack Layton and the NDP*. Columbia Británica: Douglas & McIntyre.

LEGISLATION.GOV.UK

2006 “Government of Wales Act 2006”, en <<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/32/part/A1>> , consultada en enero de 2018.

LIBERAL PARTY OF CANADA

2018 *Liberal Party of Canadá*, en <<https://www.liberal.ca/realchange/>>, consultada en febrero de 2018.

LIBRARY IRELAND. IRISH BOOKS ONLINE

2017a “Statutes of Kilkenny, 1367 AD”, en <<http://www.libraryireland.com/IrishIndependence/11.php>>, consultada en junio de 2017.

2017b “The Confederation of Kilkenny (1642-1649)”, en <<http://www.libraryireland.com/JoyceHistorie/Confederation.php>>, consultada en junio de 2017.

2017c “The Last Conquest of Ireland (Perhaps)”, en <<http://www.libraryireland.com/Last-Conquest-Ireland/John-Mitchel-34.php>>, consultada en junio de 2017.

LOAT, ALISON y MICHAEL MACMILLAN

2014 *Tragedy in the Commons. Former Members of Parliament Speak Out about Canada's Falling Democracy*. Toronto: Penguin Random House Canada.

LOWER, J. A.

1973 *Canada, an Outline History*. Ontario: McGraw-Hill Ryerson.

## MACMILLAN, HAROLD

- 2016 “PM Harold Macmillan: Wind of Change Speech at the Cape Town Parliament, 3 February 1960”, en YouTube, <<https://www.youtube.com/watch?v=c07MiYfpOMw>>, consultada en octubre de 2016.

## MADDICOTT, J. R.

- 2013 *The Origins of the English Parliament, 924-1327*. Oxford: Oxford University Press.

## MAGNA CARTA

- 1215 “*Magna Carta* (15 de junio de 1215)”, en Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM <<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2698/17.pdf>>, consultada en junio de 2016.

## MALCOMSON, PATRICK, RICHARD MYERS, GERALD BAIER

y THOMAS M. J. BATEMAN

- 2016 *The Canadian Regime. An Introduction to Parliamentary Government in Canada*. Toronto: University of Toronto Press.

## MARGARET THATCHER FOUNDATION

- 2016a “Speech to the College of Europe (The Bruges Speech)”, en <<http://www.margareththatcher.org/document/107332>>, consultada en octubre de 2016.
- 2016b <<http://www.margareththatcher.org/>>, consultada en octubre de 2016.

## MARTIN, PAUL

- 2008 *Hell or High Water. My Life In and Out of Politics*. Toronto: McClelland & Stewart.

## MCGAUGHEY, JANE G. V.

- 2012 *Ulster's Men. Protestant Unionist Masculinities and Militarization in the North of Ireland, 1912-1923*. Montreal: McGill-Queen's University Press.

## MCGRATH, CHARLES IVAR

- 2009 “The Parliament of Ireland to 1800”, en Clyve Jones (ed.), *A Short History of Parliament*. Suffolk: The Boydell Press.

McWHINNEY, EDWARD

2005 *The Governor General and the Prime Ministers*. Vancouver: Ronsdale Press.

MICHELS, ROBERT

2008 *Los partidos políticos: un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna* vol. II, Amorrortu Editores, Buenos Aires: Amorrortu.

2001 *Los partidos políticos: un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna* vol. I. Buenos Aires: Amorrortu.

MORA, MIGUEL

2011 “Reino Unido se desmarca del acuerdo para reforzar la Unión Europea”. *El País*, 9 de diciembre, en <[http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/09/actualidad/1323406881\\_309993.html](http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/09/actualidad/1323406881_309993.html)>, consultada en octubre de 2016.

MOSCA, GAETANO

2011 *La clase política*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

MULCAIR, THOMAS

2015 *Strength of Conviction*. Toronto: Dundurn.

NATIONAL ASSEMBLY FOR WALES

2018 “Elections Results”, en <<http://www.senedd.assembly.wales/mgManageElectionResults.aspx?bcr=1>>, consultada en enero de 2018.

NATIONAL OBSERVER

2015 “Bill C-51 Passed by Senate, Despite Widespread Public Opposition”, en <<http://www.nationalobserver.com/2015/06/09/news/bill-c-51-passed-senate-despite-widespread-public-opposition>>, consultada en enero de 2016.

NM NOTICIAS CA

2014 “Justin Trudeau expulsa a todos los senadores de las filas liberales”, en <<http://nmnoticias.ca/2014/01/29/canada-justin-trudeau-expulsion-senadores-partido-liberal/>>, consultada en febrero de 2018.

- 2013 “Escándalo en el Senado: Mike Duffy involucra al primer ministro en caso de gastos injustificados”, en <<http://nmnoticias.ca/2013/10/23/escandalo-senado-mike-duffy-primer-ministro-gastos-nigel-wright/>>, consultada en febrero de 2018.

NORTHERN IRELAND ASSEMBLY, THE

- 2017 “Brief Summary”, en <[https://web.archive.org/web/20080419110258/http://www.niassembly.gov.uk/io/summary/new\\_summary.htm#3](https://web.archive.org/web/20080419110258/http://www.niassembly.gov.uk/io/summary/new_summary.htm#3)>, consultada en octubre de 2017.

NORTON, PHILIP

- 2009 “The House of Commons, 1911-1949”, en Clyve Jones, ed., *A Short History of Parliament*. Suffolk: The Boydell Press.

NOVA SCOTIA LEGISLATURE

- 2018 “Historie”, en <<https://nslegislature.ca/about/historie>>, consultada en febrero de 2018.

OPENPARLIAMENT.CA

- 2018a “Vote #395 on May 6th, 2015”, en <<https://openparliament.ca/votes/41-2/395/>>, consultada en febrero de 2018.
- 2018b “Bill C-38 (Historical)”, en <<https://openparliament.ca/bills/38-1/C-38/?page=28>>, consultada en marzo de 2018.

OPPENHEIMER, WALTER

- 2010 “Cameron cierra el gobierno de coalición con Clegg como número dos”, *El País*, 11 de mayo, en <[http://internacional.elpais.com/internacional/2010/05/12/actualidad/1273615201\\_850215.html](http://internacional.elpais.com/internacional/2010/05/12/actualidad/1273615201_850215.html)>, consultada en octubre de 2016.
- 2002 “El gobierno británico suspende por cuarta vez la autonomía del Úlster”, *El País*, 15 de octubre, en <[https://elpais.com/diario/2002/10/15/internacional/1034632814\\_850215.html](https://elpais.com/diario/2002/10/15/internacional/1034632814_850215.html)>, consultada en octubre en 2017.

OTTAWA CITIZEN

- 2015 “Trudeau Defends Liberal Vote on Bill C-51 As the ‘Right’ Move for Canadians”, 17 de junio, en <<http://ottawacitizen.com/news/poli>>



tics/trudeau-defends-liberal-vote-on-bill-c-51-as-the-right-move-for-canadians>, consultada en febrero de 2018.

OXFORD DICTIONARY OF NATIONAL BIOGRAPHY

- 2016a “Richard II (1367-1400), King of England and Lord of Ireland, and Duke of Aquitaine”, en <<http://www.oxforddnb.com/view/article/23499?docPos=2>>, consultada en junio de 2016.
- 2016b “Elizabeth I (1533–1603), Queen of England and Ireland”, en <<http://www.oxforddnb.com/view/article/8636?docPos=2>>, consultada en junio de 2016.
- 2016c “James VI and I (1566-1625), King of Scotland, England, and Ireland”, en <<http://www.oxforddnb.com/view/article/14592?docPos=1>>, consultada en junio de 2016.
- 2016d “Charles I (1600-1649), King of Scotland, England, and Ireland”, en <<http://www.oxforddnb.com/view/article/5143?docPos=1>>, consultada en junio de 2016.
- 2016e “Anne (1665-1714), Queen of Great Britain and Ireland”, en <<http://www.oxforddnb.com/public/dnb/560.html>>, consultada en julio de 2016.

PARETO, VILFREDO

- 1987 *Escritos sociológicos*. Madrid: Alianza Editorial.
- 1980 *Forma y equilibrios sociales*. Madrid: Alianza Editorial.

PARLIAMENT OF CANADA

- 2018a “House of Commons. Procedure and Practice. General Elections Results since 1867”, en <[http://www.ourcommons.ca/MarleauMontpetit/DocumentViewer.aspx?Lang=E&Sec=Ch25&Seq=11#\\_ftn3](http://www.ourcommons.ca/MarleauMontpetit/DocumentViewer.aspx?Lang=E&Sec=Ch25&Seq=11#_ftn3)>, consultada en febrero de 2018.
- 2018b “House of Commons. List of Committees”, en <<http://www.ourcommons.ca/Committees/en/Home>>, consultada en marzo de 2018.
- 2018c “Political Parties and Parliament Recognition”, en <<https://lop.parl.ca/content/lop/ResearchPublications/bp243-e.htm>>, consultada en marzo de 2018.
- 2018d “House of Commons Sitting Calendar”, en <<http://www.ourcommons.ca/en/sitting-calendar/2018>>, consultada en marzo de 2018.

2018e “The Work of the Senate”, en <<https://lop.parl.ca/About/Parliament/Publications/index-e.html#work-of-the-senate>>, consultada en febrero de 2018.

2016 “House of Commons of Canada, Government Bill: Bill C-51, First Reading (41-2)”, en <<http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=6932136&Col=1&File=4>>, consultada en enero de 2016.

PARLI.CA. *THE DICTIONARY OF CANADIAN POLITICS*

2018 “Sober Second Thought”, en <<http://www.parli.ca/sober-second-thought/>>, consultada en febrero de 2018.

PARMELE, MARY PLATT

2016 *A Short History of England, Ireland, and Scotland*. Los Ángeles: Cosmo Classics.

PLAID CYMRU / PARTY OF WALES

2018 <[http://www2.partyof.wales/pay\\_our\\_nhs\\_workers\\_a\\_fair\\_wage](http://www2.partyof.wales/pay_our_nhs_workers_a_fair_wage)>, consultada en enero de 2018.

POLITICS.IE

2017 “1793: New Catholic Relief Act Introduced”, en <<http://www.politics.ie/forum/historie/185969-day-irish-historie-1793-new-catholic-relief-act-introduced.html>>, consultada en junio de 2017.

RATHGEBER, BRENT

2014 *Irresponsible Government. The Decline of Parliamentary Democracy in Canada*. Toronto: Dundurn.

RHODES, R. A. W., JOHN WANNA y PATRICK WELLER

2011 *Comparing Westminster*. Nueva York: Oxford University Press.

RUSSELL, PETER H.

2010 “Constitution”, en John C. Courtney y David E. Smith, *The Oxford Handbook of Canadian Politics*. Oxford: Oxford University Press.

SALMON, PHILIP

2009 “The House of Commons, 1802-1911”, en Clyde Jones, ed., *A Short History of Parliament*. Suffolk: The Boydell Press.

SANTÍN PEÑA, OLIVER

2017 “Estrategias electorales de la izquierda canadiense en un sistema que favorece al bipartidismo”, *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales* nueva época, vol. LXII, no. 231: 77-106.

2014 *Sucesión y balance de poder en Canadá entre gobiernos liberales y conservadores. Administraciones y procesos partidistas internos (1980-2011)*. Ciudad de México: CISAN-UNAM.

SCOTISH PARLIAMENT NA H-ÁLBA, THE

2016a “Elections Results”, en <<http://www.parliament.scot/msps/election-results.aspx>>, consultada en noviembre de 2016.

2016b “Royal Assent and the Great Seal of Scotland”, en <<http://www.parliament.scot/help/66524.aspx>> consultada en noviembre de 2016.

2016c “The Scottish Parliament: Past and Present”, en <[http://www.parliament.scot/EducationandCommunityPartnershipsresources/SP\\_Timeline\\_English.pdf](http://www.parliament.scot/EducationandCommunityPartnershipsresources/SP_Timeline_English.pdf)>, consultada en noviembre de 2016.

SEAWARD, PAUL

2009 “The House of Commons since 1949”, en Clyde Jones, ed., *A Short History of Parliament*, Suffolk: The Boydell Press.

SEIDLE, F. LESLIE

2010 “Democratic Reform: The Search for Guiding Principles”, en John C. Courtney y David E. Smith, eds., *The Oxford Handbook of Canadian Politics*. Nueva York: Oxford University Press.

SENATE PROCEDURE IN PRACTICE

2015 *Senate of Canada*, en <<https://sencanada.ca/media/93509/spip-psep-full-complete.pdf>>, consultada en febrero de 2018.

SERNA DE LA GARZA, JOSÉ MARÍA

2010 “El concepto de la gobernanza”, en J. M. Serna de la Garza, *Globalización y gobernanza: las transformaciones del Estado y sus implicaciones*

*para el derecho público*, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM: 21-51.

SMITH, DALE

2018 “What Patrick Brown Reveals about Canada’s Broken Leadership Systems”, en <[http://www.macleans.ca/opinion/what-patrick-brown-reveals-about-canadas-broken-leadership-systems/amp/?\\_\\_twitter\\_impression=true](http://www.macleans.ca/opinion/what-patrick-brown-reveals-about-canadas-broken-leadership-systems/amp/?__twitter_impression=true)>, consultada en marzo de 2018.

SMITH, DAVID E.

2017 *The Canadian Senate in Bicameral Perspective*. Toronto: University of Toronto Press.

SOCIALIST HEALTH ASSOCIATION

2002 “Rhodhri Morgan’s Speech to the National Centre for Public Policy at Swansea”, en <<https://www.sochealth.co.uk/the-socialist-health-association/sha-country-and-branch-organisation/sha-wales/clear-red-water/>>, consultada en enero de 2018.

SPARTACUS EDUCATIONAL

2016 “Act of Union”, en <<http://spartacus-educational.com/TUDactunion.htm>>, consultada en noviembre de 2017.

STURGIS, ALICE

2016 *The Standard Code of Parliamentary Procedure*. Nueva York: McGraw-Hill.

TAYLOR, RUSSELL

2015 *House of Lords Library Note*, “Retirement from the House of Lords”, en <<file:///C:/Users/Downloads/LLN-2015-005.pdf>>.

THE ASSOCIATED PRESS ARCHIVE, UK

2016 “Blair Speech to Parliament on N. Ireland Peace Process”, en <<http://www.aparchive.com/metadata/UK-BLAIR-SPEECH-TO-PARLIAMENT-ON-N-IRELAND-PEACE-PROCESS/a79676d9208ec14907b8a35502807c15?query=ireland&current=12&orderBy=Relevance&hits=61&referr>>

er=search&search=%2Fsearch%3Fquery%3Direland%26allFilters%3DArmed%2520forces%3ASubject%2CPeace%2520process%3ASubject&allFilters=Armed+forces%3ASubject%2CPeace+process%3ASubject&productType=IncludedProducts&page=1&b=807c15>, consultada en octubre de 2016.

*THE GLOBE AND MAIL*

2014 “Mac Harb, Patrick Brazeau Charged with Fraud in Senate Scandal”, en <<https://www.theglobeandmail.com/news/politics/mac-harb-patrick-brazeau-face-fraud-related-charges-in-senate-scandal/article16680901/>>, consultada en febrero de 2018.

*THE GUARDIAN*

2014 “From the Archive, 31 March 1979: Car Bomb Kills MP Airey Neave”, 31 de marzo, en <<https://www.theguardian.com/theguardian/2014/mar/31/airey-neave-mp-assassination-bomb>>, consultada en octubre de 2016.

2016a “Tony Blair: I Express More Sorrow, Regret and Apology than You Can Ever Believe”, 6 de julio, en <<https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jul/06/tony-blair-deliberately-exaggerated-threat-from-iraq-chilcot-report-war-inquiry>>, consultada en octubre de 2016.

2016b “Nicola Sturgeon Challenges May with Second Referendum Bill”, 13 de octubre, en <<https://www.theguardian.com/politics/2016/oct/13/nicola-sturgeon-challenges-may-with-second-referendum-bill-scottish-independence-snp-conference>>, consultada en noviembre de 2016.

2017 “Justin Trudeau Abandons Campaign Promise to Reform Voting System”, 1º de febrero, en <<https://www.theguardian.com/world/2017/feb/01/justin-trudeau-abandons-voter-reform-canada>>, consultada en febrero de 2018.

*THE HILL TIMES*

2017 “Trudeau Says Senate Reform Is ‘On the Right Track, Blames Conservative Senators for Delays’”, 27 de junio, en <<https://www.hilltimes.com/2017/06/27/trudeau-says-senate-reform-right-track-blames-conservative-senators/112040>>, consultada en febrero de 2018.

*THE INDEPENDENT*

- 2016 “Second Independence Referendum ‘Last Thing Scotland Meeds’, says David Cameron”, en <<http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/second-independence-referendum-last-thing-scotland-needs-david-camerons-spokesperson-a7105736.html>>, consultada en noviembre de 2016.

*THE LONDON GAZETTE*

- 1964 “State Intelligence”, no. 43277, 20 de marzo, en <<https://www.the-gazette.co.uk/London/issue/43277/page/2545>>, consultada en septiembre de 2016.
- 1917 *Proclamation” By the King*, 17 de julio, en <<https://www.thegazette.co.uk/London/issue/30186/page/7119>>, consultada en septiembre de 2016.

*THE SUNDER TIMES*

- 2016 “Epitaph for the Eighties? There Is No Such Thing as Society”, en <<http://briandeer.com/social/thatcher-society.htm>>, consultada en octubre de 2016.

*THE WASHINGTON POST*

- 2013 “Think Our Senate Is Horrible? Wait Til You See Canada’s”, 9 de julio, en <[https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2013/07/09/think-our-senate-is-horrible-wait-til-you-see-canadas/?utm\\_term=.10126b655079](https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2013/07/09/think-our-senate-is-horrible-wait-til-you-see-canadas/?utm_term=.10126b655079)>, consultada en febrero de 2018.

## TIDRIDGE, NATHAN

- 2011 *Canada’s Constitutional Monarchy*. Toronto: Dundurn.

## TOPP, BRIAN

- 2010 *How We Almost Gave the Tories the Boot*. Ontario: James Lorimer & Company.

## TRUDEAU, JUSTIN

- 2014 *Common Ground*. Toronto: Harper Collins Publishers Ltd.

## UKIP FOR THE NATION

2018 <<http://www.ukip.org/>>, consultada en enero de 2018.

## UK PARLIAMENT

2018a “Living Heritage: Parliament and Ireland. Home Rule”, en <<http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliamentandireland/overview/home-rule/>>, consultada en agosto de 2018.

2018b “Lords by Party, Type of Peerage and Gender”, en <<http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/lords/composition-of-the-lords/>>, consultada en febrero de 2018.

2017a “Henry IV (1399) to James I (1603)”, en <<http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/originsofparliament/birthofparliament/keydates/1399to1603/>>, consultada en junio de 2017.

2017b “UK Election Statistics: 1918-2017”, en <[www.parliament.uk](http://www.parliament.uk)>, consultada en septiembre de 2017.

2017c “Living Heritage: Parliament and Ireland. Poyning’s Law”, en <<http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliamentandireland/overview/poyning-law/>>, consultada en junio de 2017.

2017d “Parliament and Ireland. Civil War”, en <<http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliamentandireland/overview/civil-war/>>, consultada en junio de 2017.

2017e “Living Heritage: Parliament and Ireland. Meeting Ireland’s Terms”, en <<http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliamentandireland/overview/meeting-irelands-terms/>>, consultada en junio de 2017.

2017f “Living Heritage: Parliament and Ireland. Parliamentary Union”, en <<http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliamentandireland/overview/parliamentary-union/>>, consultada en junio de 2017.

2017g “Living Heritage: Parliament and Ireland. Repeal”, en <<http://www.parliament.uk/about/livingheritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliamentandireland/overview/repeal/>>, consultada en junio de 2017.

- 2017h “Living Heritage: Parliament and Ireland. Disestablishment”, en <<http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliamentandireland/overview/disestablishment/>>, consultada en junio de 2017.
- 2017i “Living Heritage: Conflict”, en <<http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliamentandireland/overview/towards-home-rule/>>, consultada en junio de 2017.
- 2017j “Living Heritage: Ireland Becomes a Republic”, en <<http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliamentandireland/overview/ireland-becomes-a-republic/>>, consultada en agosto de 2017.
- 2017k “Living Heritage: Direct Rule”, en <<http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliamentandireland/overview/direct-rule/>>, consultada en septiembre de 2017.
- 2016a “Magna Carta (1215) to Henry IV (1399)”, en <<http://www.parliament.uk/about/livingheritage/evolutionofparliament/originsofparliament/birthofparliament/keydates/1215to1399/>>, consultada en junio de 2016.
- 2016b “Rise of the Commons”, en <<http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/originsofparliament/birthofparliament/overview/riseofcommons/>>, consultada en junio de 2016.
- 2016c “The Commons as Law Makers”, en <<http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/originsofparliament/birthofparliament/overview/lawmakers/>>, consultada en junio de 2016.
- 2016d “History of the House of Lords”, en <<http://www.parliament.uk/business/lords/lords-historie/historie-of-the-lords/>>, consultada en junio de 2016.
- 2016e “Act of Union 1707. The 1706 Negotiations”, en <<https://www.parliament.uk/about/livingheritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/act-of-union-1707/overview/the-1706-negotiations/>>, consultada en julio de 2016.
- 2016f “Articles of Union”, en <<https://www.parliament.uk/documents/heritage/articlesofunion.pdf>>, consultada en julio de 2016.
- 2016g “Living Heritage: Parliament and Ireland”, en <<https://www.parliament.uk/about/livingheritage/evolutionofparliament/legislatives>>



- crutiny/parliamentandireland/overview/repeal/>, consultada en agosto de 2016.
- 2016h “House of Commons. The Speaker of the House of Commons”, en <<https://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/Speaker.pdf>>, consultada en septiembre de 2016.
- 2016i “House of Lords. Members of the House of Lords”, en <<http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/lords/>>, consultada en octubre de 2016.
- 2016j “House of Lords. How Members are Appointed”, en <<http://www.parliament.uk/business/lords/whos-in-the-house-of-lords/members-and-their-roles/how-members-are-appointed/>>, consultada en octubre de 2016.
- 2016k “Changes Under Edward I”, en <<http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/originsofparliament/birthofparliament/overview/edward/>>, consultada en junio de 2016.

#### UNITED KINGDOM ELECTION RESULTS

- 2017 “Northern Ireland Parliamentary Election Results”, en <<http://www.election.demon.co.uk/stormont/totals.html>>, consultada en septiembre de 2017.

#### UNIVERSITY COLLEGE CORK

- 2017 “Debate on the Treaty between Great Britain and Ireland, Signed in London on the 6th December 1921: Sessions 14 December 1921 to 10 January 1922”, en <<http://celt.ucc.ie/published/E900003-001/>>, consultada en agosto de 2017.

#### WALES ON LINE

- s.f. “Nick Clegg Attacks Carwyn Jones’ ‘Blame London Culture’”, en <<http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/nick-clegg-attacks-carwyn-jones-2059418>>, consultada en enero de 2018.

#### WARD, ALAN, J.

- 2014 *Parliamentary Government in Australia*. Nueva York: Anthem Press.

#### WATT, JAMES T.

- 1967 “Anti-Catholic Nativism in Canada: The Protestant Protective Asso-

ciation”, *The Canadian Historical Review*, vol. 48, no. 1: 45-58. Toronto: University of Toronto Press.

WESTMINSTER ABBEY FOUNDED 960

2016 “The Chapter House”, en <<http://www.westminster-abbey.org/archive/visit-us/highlights/the-chapter-house>>, consultada en junio de 2016.

WHITEHORN, ALAN

1992 *Canadian Socialism. Essays on the CCF-NDP*. Toronto: Oxford University Press.

WILSON, MARGARET

2010 “Reforming Parliament”, en Raymond Miller, ed., *New Zealand. Government and Politics*. Melbourne: Oxford University Press.

## ÍNDICE ANALÍTICO

### A

- Abadía de Westminster: 26, 27, 29  
*Additional Member System* (Voto de representación proporcional): 89, 110, 176  
*Adventurers' Act* o Ley de los Aventureros: 124  
Afganistán: 237, 238, 239  
Alemania: 41, 43, 69, 73, 94, 108, 146, 152  
*Alternative Vote* (Voto alternativo): 70, 95, 143, 248  
Anglicana, Iglesia (galesa): 174  
Anglicana, Iglesia (inglesa): 33, 47, 48, 75, 40, 108, 109  
Anglicana, Iglesia (irlandes): 126, 134, 150  
Asamblea de Kilkenny: 123, 124, 126  
Asquith, Herbert Henry: 67, 71  
Attlee, Clement: 75, 78  
Australia: 15, 16, 19, 59, 63, 70, 74, 79, 95, 190, 224, 247, 248

### B

- Balliol, John: 100, 101  
Bandera del Reino Unido de la Gran Bretaña: 42, 67, 89, 148, 194, 202, 249  
*Bill of Rights* (1689): 38  
Blair, Tony: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 110, 161, 162, 164, 165, 175

- Bloody Sunday* (Irlanda del Norte): 159  
Brazeau, Patrick: 208, 209, 210  
*Brexit*: 96, 97, 114, 180, 203  
Bolingbroke, Henry (Henry IV): 28, 29, 30, 31  
Brown, Gordon: 92, 93, 182, 201  
Bush, George: 85  
Butler, James (primer duque de Osmond, Irlanda): 126

### C

- Calahan, James: 82  
Campbell-Bannerman, Henry: 67  
*Carta Magna* (1215): 13, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 37, 38, 169  
Casa Estuardo (Escocia): 33, 34, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 103, 104, 107, 108, 109, 126, 172, 181  
Casa Hanover (Alemania-Gran Bretaña): 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 67, 108, 109  
Casa Lancaster (Inglaterra): 28, 29, 30, 31  
Casa Tudor (Inglaterra): 29, 32, 34, 104  
Casa Windsor (Saxe-Coburg y Gotha): 73, 75  
Casa York: 31  
Collins, Michael (Irlanda): 137, 138  
Conferencia de Quebec: 184  
*Constitutional Act 1867* (Canadá): 184

Convención Europea de Derechos Humanos (1951): 80  
 Cosgrave, William Thomas: 138, 139, 140, 141, 142  
 Costello, John A.: 148  
 Craig, Sir James: 156  
 Cromwell, Oliver: 36, 37, 39, 105, 124, 125, 126, 171  
 Cromwell, Richard: 37  
 Culloden, Batalla de: 46

## CH

Charles I (de Escocia e Inglaterra): 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 105, 122, 123, 124, 171  
 Charles II: 37, 93, 105, 106, 126, 172  
 Charles III: 45  
 Chichester, Sir Lord Arthur: 151  
 Chrétien, Jean (primer ministro de Canadá): 225, 228  
 Churchill, Winston: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 94

## D

Declaración de Derechos de 1689 (*Bill of Rights*): 38  
 Declaración de Winnipeg de 1956: 194  
 Derecho consuetudinario: 13, 16, 23, 169  
 Derechos Humanos, Convención Europea de (1951): 80  
*Devomax* (Escocia): 96, 113  
 Dion, Stéphane: 234, 237  
 Douglas, Thommy: 201  
 Douglas-Home, Sir Alec: 80, 81  
 Duffy, Mike: 208, 209, 210  
 Durham, Reporte (Canadá): 184

## E

Eden, Sir Anthony (primer ministro): 80  
 Edward I: 24, 25, 100, 169

Edward II: 25, 101  
 Edward III: 25, 26, 27, 28, 29, 32, 102, 119  
 Edward VII: 67, 68  
 Edward VIII: 75, 143  
 Éire (República de Irlanda): 136, 137, 139, 143, 144, 145, 149  
 Elizabeth I: 33, 104  
 Elizabeth II: 79, 85, 112, 175  
 Episcopal, Iglesia (escocesa): 46  
 Escocia: 17, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 59, 71, 78, 82, 87, 89, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 120, 122, 150, 151, 167, 168, 172, 177, 182, 184, 185, 189, 190, 198, 208, 215, 247, 248  
 Estado Libre de Irlanda: 63, 74, 119, 136, 137, 138  
 Estados Unidos: 16, 60, 72, 77, 78, 79, 84, 85, 91, 92, 93, 128, 131, 147, 174, 178, 182, 183, 184, 191, 203, 234  
 Estatuto de Rhuddlan (Inglaterra-Gales, 1284): 169, 170  
 Estatuto de Westminster (1931): 63, 74  
 Estuardo, Casa (Escocia): 33, 34, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 103, 104, 107, 108, 109, 126, 172, 181

## F

*First Past the Post* (voto uninominal): 51, 89, 95

## G

Gales: 17, 24, 32, 44, 59, 71, 78, 82, 84, 89, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 189, 190, 215, 247, 248,

George I: 44, 45, 46, 47, 52  
 George II: 47, 52, 109  
 George III: 47, 48, 52, 181  
 George IV: 52, 53  
 George V: 68, 73, 74, 136  
 George VI: 75, 76, 79  
 Gladstone, William Ewart: 53, 134, 152  
 Gorbachov, Mijail: 85  
 Grattan, Henry: 128  
 Guerra Civil de Estados Unidos: 183, 184  
 Guerra de 1812 (Estados Unidos contra Canadá-Gran Bretaña): 183

## H

Hambruna irlandesa: 127, 132, 133  
 Hanover, Casa (Alemania-Gran Bretaña): 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 67, 108, 109  
 Harb, Mac (Canadá): 210  
 Harper, Stephen: 186, 187, 203, 208, 209, 212, 213, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 249, 250  
 Heath, Edward: 81, 82, 159  
 Henry Bolingbroke (Henry IV): 28, 29, 30, 31  
 Henry II Plantagenet: 19, 20, 21, 29, 39, 60, 119  
 Henry III: 23, 26, 29  
 Henry IV: 28, 31  
 Henry VI: 93  
 Henry VII: 29, 32, 34, 104  
 Henry VIII: 29, 32, 121  
 Hungerford, Thomas: 27

## I

Iglesia anglicana (galesa): 174  
 Iglesia anglicana (inglesa): 33, 40, 48, 75  
 Iglesia anglicana (irlandesa): 126, 134

Iglesia episcopal (escocesa): 46  
 Iglesia metodista (galesa): 172, 173, 174  
 Iglesia presbiteriana (escocesa): 108  
 Iglesia presbiteriana (galesa): 173  
 Ignatieff, Michael: 237, 238, 239  
*Impeachment*: 28  
 Inocencio X, Papa: 123  
*Interregnum*: 37, 101  
 IRA (Irish Republican Army o Ejército Republicano Irlandés): 90, 135, 136, 144, 161  
*Irish Volunteers*: 135, 152  
 Irlanda: 15, 29, 30, 32, 35, 36, 48, 49, 91, 99, 105, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 162, 163, 167, 170, 172, 189, 247  
 Irlanda, Estado Libre de: 63, 74, 119, 136, 137, 138, 142  
 Irlanda del Norte: 17, 59, 63, 78, 82, 89, 90, 91, 92, 93, 137, 140, 147, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 177, 189, 190, 215, 247, 248

## J

Jacobista (movimiento militar escocés): 46, 47  
 James I (de Inglaterra y VI de Escocia): 34, 40, 41, 44, 103, 104, 150  
 James II: 37, 38, 39, 46, 103  
 James VI (de Escocia): 34, 104  
 James VII de Escocia y I de Inglaterra: 106  
 Jean, Michaëlle: 223, 231, 233, 235, 236  
 John I: 20, 21, 23, 29, 169  
 Johnston, David: 241  
 Jones, Carwyn: 178

**K**

Kilkenny, Asamblea de: 123, 124, 126  
 King, William Lyon Mackenzie: 193

**L**

Lancaster, Casa (Inglaterra): 28, 29, 30, 31  
 Layton, Jack: 229, 234  
 Ley de la Unión de 1536 (Inglaterra y Gales): 171  
 Ley de la Unión de 1707 (Inglaterra y Escocia): 172  
 Ley de la Unión de 1801: 48  
 Ley Poyning: 120, 124, 127, 128  
 Lloyd George, David: 67, 68, 136  
*Lords Protectors*: 37

**M**

MacBride, Sean: 148  
 Macdonald, John A.: 15  
 Macmillan, Harold: 80, 81  
 Major, John: 85, 86, 175  
 Manifiesto de Regina (Canadá): 193  
 Manning, Preston: 227  
 Martin, Paul: 225, 228, 229, 230  
 Mary I: 33  
 Mary II: 38, 39  
*Merciless Parliament* (Parlamento despiadado): 29  
 Metodista, Iglesia (galesa): 172, 174  
 Michael, Alun: 176  
 Morgan, Rhodri: 176, 177, 178  
 Mortimer, Roger (consorte de Isabel de Francia): 26  
 Mulcair, Thomas (Canadá): 241, 242  
 Mulrone, Brian: 203

**N**

Nueva Zelanda: 15, 16, 19, 59, 63, 74, 79, 137, 138, 190, 215, 224, 247, 248, 249  
 Nugent, Sir Oliver: 154

**O**

O'Connell, Daniel: 130, 131, 132  
 O'Neill, Terrence: 150, 158  
*Orange Order*: 155, 156, 157, 191

**P**

Papa Inocencio x: 123  
 Parlamento corto (1640): 35  
 Parlamento despiadado (*Merciless Parliament*): 29  
 Parlamento de Grupa (sin cabeza de Estado durante el periodo de 1649 a 1653): 37  
 Parlamento largo: 35  
 Peel, Sir Robert: 52, 131  
*People's Budget*: 68, 69, 75  
 Pitt, William: 48, 49, 129, 130  
 Plantagenet, Henry II: 19, 20, 21, 29, 39, 60  
 Poynings, Sir Edward: 120  
 Presbiteriana, Iglesia (escocesa): 108  
 Presbiteriana, Iglesia (galesa): 173  
 Presbiterianos: 129, 131, 133  
 Primera guerra mundial: 73, 74, 76, 135, 136, 152, 154, 155

**Q**

Quebec, Conferencia de: 184

**R**

Reagan, Ronald: 85, 203  
 Reporte Durham (Canadá): 184  
 Richard I: 20  
 Richard II: 28, 29, 30, 31, 170  
 Rinuccini, Gianbattista: 123  
 Rhuddlan, Estatuto de (Inglaterra-Gales, 1284): 169, 170

**S**

*Sergeant-at-Arms*: 217, 218

Segunda guerra mundial: 69, 75, 76, 77, 78, 83, 86, 146, 147, 174  
 Segunda vuelta instantánea o voto único transferible (*Single Transferable Vote*): 70, 115, 162, 189, 190  
*Single Transferable Vote* (Voto único transferible o segunda vuelta instantánea): 70, 115, 162, 189, 190  
*Speaker*: 27, 28, 55, 56, 58, 59, 74, 83, 110, 157, 163, 186, 206, 207, 217, 218, 221  
 Stewart Parnell, Charles: 133  
 Stuart, Charles Edward: 109  
 Sudáfrica: 15, 63, 74, 80, 247

## T

Temple, Henry John: 53  
 Thatcher, Margaret: 83, 84, 85, 86, 90, 92, 174, 175, 203  
 Tratado de París (1763): 181  
 Trudeau, Justin: 203, 204, 209, 210, 211, 213, 214, 243  
 Trudeau, Pierre Elliot: 202  
 Trump, Donald: 203  
 Tudor, Casa (Inglaterra): 29, 32, 34, 104

## U

*Ulster Volunteer Force*: 135, 152, 155  
 Unión Soviética: 78, 85, 86

## V

Victoria, reina: 15, 53, 54, 67, 184  
 Voto alternativo (*Alternative Vote*): 70, 95  
 Voto de representación proporcional (*Additional Member System*): 89, 110, 176  
 Voto único transferible o segunda vuelta instantánea (*Single Transferable Vote*): 70, 115, 189, 248  
 Voto uninominal (*First Past the Post*): 51, 89, 95, 110, 115, 156, 160, 176, 177, 185, 186, 189, 190, 195, 197, 199, 203, 223, 248

## W

Wallin, Pamela: 208, 209, 210  
 Walpole, Sir Robert: 45, 46  
 Westminster, Estatuto de (1931): 63, 74  
 William III: 38, 39, 40  
 William IV: 53  
 Wilson, Harold: 81, 82, 190  
 Windsor, Casa (Saxe-Coburg y Gotha): 73, 75  
*Wonderfull Parliament*: 28

## Y

York, Casa: 31

*Origen y desarrollo del parlamentarismo británico y sus dinámicas en Canadá*, de Oliver Santín Peña, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, se terminó de imprimir en la Ciudad de México en diciembre de 2018, en Acrom Impresores, S. A. de C. V., Juan José Eguiara y Eguren núm. 127, Col. Viaducto Piedad, Cd. Mx., C.P. 09850. En su composición se usaron tipos Fairfield LH Light y Formata Light y Medium de 8, 11, 12, 14 y 18 puntos. Se tiraron 300 ejemplares sobre papel cultural de 90 grs. Impreso en digital. La formación la realizó María Elena Álvarez Sotelo. La corrección de estilo y el cuidado de la edición estuvieron a cargo de Diego Ignacio Bugada Bernal y María Cristina Hernández Escobar.